

Sahara Occidental

Del abandono colonial a la construcción de un estado

Bahia Mahmud Awah - Ana Camacho

Carmelo Faleh - Javier A. González Vega

Pablo Jiménez - Pepe Revert - Ana Sebastián

Leonardo Urrutia Segura - Carlos Villán Durán



PREGUNTA

Sahara Occidental

Del abandono colonial a la
construcción de un estado

PREGUNTA ediciones

Primera edición: febrero 2019

© *de los textos:* sus autores

© *de la fotografía de cubierta:* Irene Alconchel

© *de la presente edición:* Pregunta Ediciones, Zaragoza, 2019

preguntaediciones@gmail.com

preguntaediciones.blogspot.com

Coordinación del proyecto: Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental

Corrección: Manuel Martínez-Forega

Diseño y maquetación: Pregunta Ediciones

Los textos de este libro recogen exclusivamente la opinión de sus autores, como manifestación de su derecho a la libertad de expresión. La editorial no se hace responsable de los contenidos, opiniones, comentarios o declaraciones expuestas por los autores en la presente obra.

Edición no venal

I.S.B.N.: 978-84-17532-15-4

Depósito legal: Z-343-2019

Printed in Spain. Impreso en España por Estilo Estugraf Impresores

Sahara Occidental

Del abandono colonial a la
construcción de un estado

PREGUNTA

Índice

9	Relación de autores
13	Prólogo
19	Bujari Uld Ahmed Uld Barical-la, el ilustre saharauí del s. XX Bahia Mahmud Awah
27	La denuncia de «los acuerdos de Madrid» entre 1976-1982: logros y errores de una gran batalla solidaria de la transición Ana Camacho
57	<i>La España imposible: una aproximación crítica a nuestra política exterior en relación con el Sahara Occidental</i> Javier A. González Vega
91	Observación jurídica en procesos penales contra saharauíes defensores de los DDHH. Ejercicio jurisdiccional como extensión del aparato represivo de seguridad del estado Ana Sebastián y Pablo Jiménez
125	La tortura en el territorio ocupado del Sahara Occidental Pepe Revert Calabuig
197	El factor D Leonardo Urrutia Segura
207	Un relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado Carlos Villán Durán y Carmelo Faleh Pérez

Relación de autores

Bahia Mahmud Awah

Escritor, antropólogo, poeta natural del Sahara Occidental. Autor de varias obras, ensayos académicos; profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Centro de Estudios Afro-hispánicos, CEAH, de la UNED.

Ana Camacho

Periodista e investigadora experta en conflictos de África, gran conocedora de Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental. Ha trabajado en diarios nacionales y en la actualidad colabora en diferentes medios digitales y radio. Autora del blog www.enarenasmovedizas.com.

Carmelo Faleh Pérez

Profesor de Derecho Internacional Público en el Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asesor jurídico de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Ha actuado como litigante y/o co-autor de informes y *amicus curiae* ante algunas instancias nacionales e internacionales (procedimientos convencionales y extraconvencionales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de protección de los derechos humanos. Direcciones electrónicas: carmelo.faleh@ulpgc.es y cfaleh@aedidh.org.

Javier A. González Vega

Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Oviedo. Es asimismo presidente del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental (OAPSO). Entre 2009 y 2012 fue Consejero en la Representación permanente de España ante la Unión Europea.

Pablo Jiménez

Abogado de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrante del equipo jurídico director de la querrela criminal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en Zaragoza, miembro del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Pepe Revert Calabuig

Abogado, pertenece a la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS). Master en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Asiste regularmente como observador internacional en nombre del Consejo General de la Abogacía Española a juicios contra saharauis, tanto en Marruecos como en el Sahara Occidental. Ha participado en la IV comisión sobre descolonización en Naciones Unidas Asimismo ha denunciado la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Ana Sebastián

Abogada y miembro del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Miembro también de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, habiendo participado recientemente en el grupo jurídico que ha preparado la querrela criminal por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en Zaragoza

Leonardo Urrutia Segura

Escritor, periodista y editor. Es autor del libro *Sahara, diez años de guerra*, publicado en 1983. Fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Catalana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) a principios de los ochenta. Por esos años pasó varias semanas conviviendo con los combatientes saharauis para documentarse, llegando a recorrer con ellos la mayor parte del Sahara Occidental.

Carlos Villán Durán

Profesor de Derecho internacional de los derechos humanos. Codirector del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá. Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Antiguo miembro de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ginebra). Dirección electrónica: cvillan@aedidh.org.

En memoria de Bujari Ahmed, fallecido el 3 de abril de 2018

Aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán.

Bujari Ahmed

Dedicado a los presos políticos saharauis

No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.

Angela Davis

Prólogo

Este nuevo libro constituye la tercera entrega que desde el Observatorio tenemos el honor de editar gracias a la colaboración de diferentes autores que generosamente se brindan a ello. En 2013 vio la luz nuestra primera publicación, *El derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. Del ius cogens al ius abutendi*. En 2016, *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia*. Y ahora, en 2019, este título, *Sahara Occidental. Del abandono colonial a la construcción de un estado*. En la introducción de la publicación anterior se hacía referencia a que la historia del Sahara Occidental se truncó hace cuarenta años, como un reloj de arena atascado. Y, en el subtítulo del primer libro, se hacía referencia a la contraposición del *ius cogens* frente al *ius abutendi*. La primera locución referente a normas de derecho imperativo que no admiten alteración y el *ius abutendi* como el objeto (el Sahara Occidental y el pueblo saharauí) sobre el que se dispone con poder de hecho y voluntad posesoria. Se hacía referencia a la paradoja en la que el pueblo saharauí quedaría a resultas de su contrario aforístico, bajo sinergias de servidumbres económicas, interdictos posesorios transnacionales e inercias jurídicas de convalidación (*ius abutendi*).

Esto es, precisamente, lo que en estos tres años, desde la anterior publicación, hemos comprobado: el saqueo de los recursos naturales se ha sofisticado y, el expolio, disfrazado de tratado internacional. La Unión Europea contradice las sentencias de sus más altos tribunales de justicia y, para blindar el despojo, renueva los acuerdos declarados ilegales basándose en interpretaciones sofisticadas de juristas al dictado de políticos sin escrúpulos. De nuevo el intento de prescindir del Derecho Internacional que avala las pretensiones del Frente Polisario, único y legítimo representante del pueblo saharauí. Su diplomacia centra hoy la resistencia en la lucha en los tribunales e instituciones internacionales, sabedores de que el derecho internacional siempre ha estado de su lado. Los guerrilleros de antaño hoy son diplomáticos que comparecen ante los jueces europeos esperando que sean mas respetuosos con la legalidad que los políticos occidentales.

En estos años el Frente Polisario ha obtenido victorias sin precedentes como que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anule tratados con Marruecos de la propia Unión Europea y como respuesta nos encontramos con renovadas burlas a una legislación internacional y doctrina que es clara y unívoca. Pero el camino iniciado en el que los juristas saharauis compiten contra empresas multinacionales, estados y organismos internacionales es prometedor y anuncia nuevas victorias. Cada acto de transformación de un recurso procedente del Sahara Occidental permite trazar un reguero de irregularidades y lleva el conocimiento del sufrimiento del pueblo saharauí desde los caladeros de sus costas hasta las estanterías de los supermercados de todo el mundo. Además, el Frente Polisario ha obtenido con estos pronunciamientos judiciales una centralidad y reconocimiento legal que lo aproxima al lugar que le corresponde internacionalmente como único y legítimo representante del pueblo saharauí, lo que le acerca a la posición que tiene en otros ámbitos y foros internacionales, como la Unión Africana o en países de Latinoamérica que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como estado.

En otros aspectos, el reloj de arena parece efectivamente averiado. El referéndum para la autodeterminación del pueblo saharauí sigue estancado. Perplejos contemplamos cómo parte de la Comunidad Internacional exige que se organicen elecciones en otros países como Venezuela por la mera voluntad de gobernantes que no coinciden con la política de este país sudamericano y, sin embargo, obvia las determinaciones exigidas por Naciones Unidas para que el referéndum en el Sahara Occidental se organice. La geopolítica e intereses económicos, más o menos confesables, hacen que nadie de nuestro entorno próximo europeo reproche al reino marroquí las vulneraciones de los derechos humanos que de manera reiterada se siguen cometiendo hoy en día, sin testigos, en la última colonia de África.

De nuevo, para tratar cuestiones clásicas y tradicionales del conflicto, recurrimos a colaboradores como juristas, periodistas, profesores de derecho internacional... actualizando temas conocidos y que constituyen la esencia del conflicto e introduciendo, además, nuevas perspectivas y enfoques.

Si el libro anterior se iniciaba con un artículo de Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas en Nueva York, *El Estado saharauí. Viabilidad y Seguridad*, la presente publicación arranca con Bujari Uld Ahmed Uld Barical-la, el ilustre saharauí del s. XX, capítulo del escritor

Bahia Mahmud Awah que rinde homenaje y constituye una semblanza del diplomático saharauí que nos abandonó el 3 abril de 2018. «Un intelectual que producía pensamiento político y estadístico con el que retaba a los frentes de lucha que llevaba por su causa, como Frantz Fanon o Kwame Nkrumah». En sus palabras: «Lo fundamental es, en toda aproximación a un conflicto o problema, sobre qué principios lo debemos abordar para encarar su solución. Yo dije que la solución fue encontrada y está y estará ahí, y el Polisario no renuncia ni hoy ni en cien años ni en doscientos años a ese derecho a la independencia, y debe quedar claro».

La periodista e historiadora Ana Camacho, en *La denuncia de los acuerdos de Madrid entre 1976-1982: logros y errores de una gran batalla solidaria de la transición*, analiza de manera muy documentada un periodo de la historia de España inmediatamente posterior al abandono del Sahara Occidental en el que el Partido Socialista liderado por Felipe González ejerció un liderazgo clave en el movimiento de solidaridad español con el pueblo saharauí, centrado en la denuncia de los llamados acuerdos de Madrid y de sus consecuencias en relación a las responsabilidades españolas. El cambio de las posiciones socialistas a favor del anexionismo marroquí tuvo como primer efecto el abandono de esta campaña que ha favorecido la tendencia de las autoridades españolas a eludir las responsabilidades internacionales y sustituir la obligación legal de descolonización del Sahara Occidental por un tratamiento del conflicto desde perspectivas meramente humanitarias o «diplomáticas» que pasa por la tradicional cantinela de lograr una solución «mutuamente aceptable» que pone en el mismo plano a agresor y agredido.

En *La España impasible: una aproximación crítica a nuestra política exterior en relación con el Sahara Occidental*, el Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales Javier González analiza la posición de España ante el abandono del Sahara Occidental, concretado en la declaración de 26 de febrero de 1976 seguida por todos los gobiernos hasta la fecha, revela la persistente voluntad de España de no asumir las obligaciones que el Derecho internacional le impone en relación con la libre determinación del territorio. Sin embargo, esa impasibilidad no ha conseguido mantener a nuestro Estado al margen de la conflictiva situación creada con su actitud. De hecho, la política española, tildada en algún momento de «neutralidad constructiva», ha revelado sinnúmero de contradicciones, re-

suestras lamentablemente a través de una silenciosa aproximación a las tesis marroquíes, siquiera sea por la pasividad que ha mostrado en el seno del Grupo de Amigos del Sahara Occidental, por su mutismo en relación con las repetidas violaciones de los derechos humanos en el territorio o por su inequívoca intención de proseguir la explotación de los recursos pesqueros del banco sahariano a través de una relación convencional con Marruecos sucesivamente renovada, pese a los pronunciamientos dictados por el Tribunal de Luxemburgo.

El artículo de Ana Sebastián y Pablo Jiménez, *Observación jurídica en procesos penales contra saharauis defensores de los DDHH. Ejercicio jurisdiccional como extensión del aparato represivo de seguridad del estado*, es fruto de la experiencia en la labor de Observación Internacional en procesos penales contra saharauis defensores de los Derechos Humanos. En los dos primeros apartados del capítulo hacen un repaso al marco normativo de la observación internacional, un relato de la observación en dos procesos penales relevantes celebrados en el año 2018, en concreto contra el grupo de estudiantes El Uali y otro llevado a cabo contra el periodista saharauí Laaroussi Ndour; mencionando tanto cuestiones procesales como extra-procesales, ya que en cada viaje la labor de observación no se limita a la presencia en el acto del juicio oral sino que se intenta ampliar la información para comprender la realidad de forma amplia, así narran las entrevistas mantenidas con los familiares de los detenidos o con saharauis que pertenecen a distintos colectivos en defensa de los derechos humanos. En el tercer apartado del capítulo inciden en los principales impedimentos que encontraron para que se pueda garantizar un proceso justo y que vulneran los derechos de las personas enjuiciadas: derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a una audiencia pública, detenciones arbitrarias... Por último, terminan el capítulo apuntando las reflexiones producto de la experiencia, con la intención global de reflejar algunas herramientas jurídicas internacionales para legitimar nuestra actuación en defensa, siempre, de los Derechos Humanos.

El capítulo de José Revert, *La tortura en el territorio ocupado del Sahatra Occidental*, viene dado ante las numerosas denuncias formuladas en presencia del autor con ocasión de su asistencia como observador internacional a juicios contra activistas saharauis en el Sahara Occidental, Rabat, Marrakech, Casablanca y Agadir. Unas denuncias formuladas en presencia judicial y

que no se investigan en Marruecos. El análisis se realiza desde el punto de vista del Derecho Internacional de los derechos humanos así como el Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, se estudia la respuesta de la comunidad internacional: una reacción débil a pesar de que en informes de diferentes órganos de las Naciones Unidas queda acreditada la comisión de este grave crimen. La Corte Penal Internacional, entidad idónea para pronunciarse, no lo hace al no haber sido ratificado el Estatuto de Roma por parte del Reino de Marruecos. La potencia ocupante del Sahara Occidental, Marruecos, no ha enjuiciado a un solo funcionario por la comisión de torturas, posición que queda acreditada en el informe del Relator contra la Tortura. Sí lo ha hecho la Audiencia Nacional, que inicialmente procesó a los militares marroquíes mediante la jurisdicción universal, y con posterioridad a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha continuado con el procedimiento pero por competencia territorial al considerar que España es la potencia administradora del Sahara Occidental.

Con el artículo *El factor D*, de Leonardo Urrutia, se pretende demostrar la desidia, incapacidad, irresponsabilidad... (o algo peor) de las fuerzas políticas españolas en lo que respecta al conflicto creado en los territorios de la que fue provincia española en África, mejor dicho: colonia española en África. Con la anécdota, aparentemente pueril, de entrevistar y así desenmascarar a un connotado agente marroquí, enemigo declarado de la RASD y diputado del parlamento catalán que, curiosamente hoy, es diputado del parlamento español. El autor se refiere al malestar, a la tristeza e impotencia que los amigos del Sahara sienten cuando las fuerzas políticas españolas llevan más de cuatro décadas manteniendo, con su actitud muchas veces cómplice, la cruel y demasiado dañina ignominia cometida con el pueblo del Sahara Occidental. Solo palabras de respaldo en algunos casos, pero ninguna acción positiva, significativa y trascendente, han recibido, por parte de las fuerzas políticas españolas, los saharauis.

Carlos Villán y Carmelo Faleh, en *Un relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado*, hacen una evaluación de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado desde hace cuarenta y tres años por Marruecos. Para los autores, es urgente, que el pueblo saharaui pueda decidir sobre su destino político en condiciones de libertad y de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Esta cuestión colonial deberá

ser dirimida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entretanto, es necesario ofrecer al pueblo saharauí la protección internacional de sus derechos humanos. Puesto que el Consejo de Seguridad no concede a la MINURSO competencia para incorporar la cuestión de los derechos humanos en su mandato, corresponde al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desarrollar sus competencias en esta materia. En particular, los autores repasan las características esenciales de los procedimientos especiales y concluyen en la urgencia de que el Consejo de Derechos Humanos establezca el mandato de un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado. En virtud de su mandato, el relator especial (una persona experta independiente) podrá solicitar a Marruecos que investigue y depure responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos que ocurran en los territorios ocupados. También podrá visitar los territorios ocupados, entrevistar a las víctimas y sus familiares, enviar acciones urgentes a Marruecos a favor de las víctimas, e informar a la comunidad internacional sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en los territorios saharauíes ocupados, incluido el derecho del pueblo saharauí a su libre determinación.

Este nuevo compendio pretende lograr su objetivo de servir de refuerzo teórico, académico, legal y periodístico con el que contribuir humildemente a que se resuelva un conflicto que lleva perpetuándose en el tiempo decenas de años. Para que en lugar de un escenario de refugiados en Tinduf y represión en los territorios ocupados que desequilibre e impida la integración de la región podamos hablar de un territorio que, definitivamente, haya podido pronunciarse libremente sobre su destino y que la última colonia de África pase a ser un espacio político en el que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. En definitiva, un Sahara libre y en paz.

Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental

Bujari Uld Ahmed Uld Barical-la, el ilustre saharai del s. XX

BAHIA MAHMUD AWAH

En la filosofía saharai se dice que Tiris, región sur del Sahara Occidental, es la cuna de los eruditos, sabios y poetas anticoloniales. La evidencia de este planteamiento son las tumbas y antiguos lugares de moradas, como cuevas y pozos, aún hoy visibles, puntos de referencia en la memoria y en la geografía y las obras de pensamiento que en ella se produjeron. El intelectual y diplomático Bujari Uld Ahmed Uld Barical-la, vino al mundo según el calendario pastoril saharai en *Am Neym Um Shaua*¹ [el año de la estrella de rabo], en Tiris, concretamente en la península de Dajla, Villa Cisneros, antigua capital del territorio. Tal vez aquella estrella fue una señal cósmica que anunciaba el nacimiento de una principal figura saharai que nos dejó un decálogo de mandamientos nacionalistas y revolucionarios.

Reflexionar sobre la envergadura de Bujari, que ha trascendido más allá de lo que sabemos como dirigente e intelectual del pasado siglo, no se puede entender sino como una parte indivisible de la historia del continente africano, sobrevenida en el Sahara Occidental. Escribir sobre él es recordar el rápido e intenso paso de los forjados hombres que se dieron en la historia de África entre los siglos XIX y XX. Esos que formaron parte de la columna principal de la historia, comenzando como subalternos durante un convulso periodo caracterizado por las políticas de dominio colonial y las luchas revolucionarias nacionalistas y progresistas por la descolonización en todos los continentes, pero en especial en África.

1 «Año de la estrella de rabo» según el calendario pastoril saharai aparece citado en la obra del antropólogo Julio Caro Baroja *Estudios Saharianos*. Corresponde a 1952 en el calendario gregoriano. Fue un acontecimiento astrológico registrado en la memoria colectiva saharai por el avistamiento de una estrella que arrastraba una cola en su recorrido.

En este contexto se me ocurre citar a Kwame Nkrumah, un ejemplo a escala africana e internacional a comparar con la talla de Bujari Ahmed; los dos se formaron en universidades de sus respectivas metrópolis. Nkrumah, líder ghanés, fue el promotor intelectual y líder carismático de la primera independencia de un país africano, en 1957. Y no solamente fue el precursor de la lucha por la independencia de África, sino un referente para todo el movimiento de liberación nacional africano, como se puede observar en su pensamiento situado en el debate de los estudios postcoloniales y descolonizadores. «Es nuestro deber, puesto que somos la vanguardia, dar toda la ayuda posible a esos que libran actualmente los combates que nosotros hemos llevado por el buen camino; nuestra tarea no será concluida ni nuestra seguridad afianzada hasta que los últimos vestigios del colonialismo sean borrados del continente africano». El mismo ideal y acción por el que Bujari Ahmed luchó hasta los últimos días de su vida. El Sahara Occidental, territorio tipificado por el Comité de Descolonización de la ONU como unos de los diecisiete territorios no autónomas que faltan por ejercer su derecho a la autodeterminación, aún sigue siendo una lacra que se arrastra como lastre, lejano ya el tiempo de las descolonizaciones.

Un artículo de Bujari Ahmed del año 1972 ya le colocaba a la altura de los jóvenes ilustrados e inquietos de su tiempo inspirado en los padres de las luchas africanas como Nkrumah, Lumumba o Mandela. Esta reflexión, que yo calificaría de prematura para su época, la escribió cuando estudiaba tercer año de derecho en la Universidad de La Laguna (Tenerife). Se trataba de un extenso ensayo que apareció publicado en la revista *Irifi* que editaba el Instituto General Alonso en la ciudad de El Aaiun, entonces aún bajo dominio español. Afirmaba Bujari que «Dos clases de hombres, dos clases de personalidades se reflejan en el acontecer histórico del Sahara Occidental; el hombre tradicional de ayer y el hombre que quiere ser hijo del siglo XX, el hombre de hoy»². Y matizaba al respecto que son «Encarnaciones de dos mundos distintos y por naturaleza antagónicos». Es evidente que él era ese hombre del siglo XX que quiso romper con los estigmas del pasado para irrumpir en ese presente que clamaba su generación de líderes

2 «Cambio de vida en el Sahara». Revista *Irifi*, n.º 11. Curso 1971-72. Instituto General Alonso de El Aaiun.

africanos alzados contra el colonizador en el sentido de Lumumba cuando decía «Sabemos cuáles son los objetivos de Occidente. Ayer nos dividieron en tribus, clanes y aldeas». Bujari presentía y reivindicaba el nuevo hombre saharauí y su papel retando el fin de la descolonización a través de ese nuevo «hombre del siglo XX», a quien apelaba el rol que inequívocamente protagonizó su generación, la del «73 Saharauí», de la que me habló en varias ocasiones cuando la investigaba para mi libro *El sueño de volver*.

Bujari era un intelectual que producía pensamiento político y estadístico con el que retaba a los frentes de lucha que llevaba por su causa, como Frantz Fanon o Kwame Nkrumah. «Lo fundamental es, en toda aproximación a un conflicto o problema, sobre qué principios lo debemos abordar para encarar su solución. Yo dije que la solución fue encontrada y está y estará ahí, y el Polisario no renuncia ni hoy ni en cien años ni en doscientos años a ese derecho a la independencia, y debe quedar claro»³.

Sus argumentos para defender y exponer el alegato saharauí son claros, recogiendo pasajes de la historia y de la literatura para esquematizar sus evidencias, como en este planteamiento: «Seremos como el Guadiana, aparecemos y desaparecemos, la lucha armada puede volver y puede no volver, pero nuestra convicción está ahí y nadie debe llevarse a engaño, y esto debe quedar claro»⁴. El término «realpolitik» que los «entendidos» *think thank* en órbita con el *lobby* marroquí comenzaron a usar como estrategia para tergiversar la naturaleza del proceso de descolonización del Sahara Occidental, lo desenmascaraba Bujari calificándolo de ineficaz ante la determinación del pueblo saharauí. «Para aquellos que creen en el desgaste, se desgasta un material químico, un material hecho de hierro bajo la oxigenación del tiempo, pero un pueblo en busca de su libertad no es consumible y lo vuelvo a decir, las tropas españolas entraron en Granada después de setecientos ochenta años de resistencia, y no tenemos absolutamente ninguna carrera contra el tiempo y estaremos ahí y nuestros hijos estarán ahí»⁵. Frantz Fanon, en su obra *Los condenados de la tierra*, reafirmaba lo anteriormente reiterado por Bujari: «Cuando la nación se impulsa

3 Intervención de Bujari Ahmed en «Diálogo a dos bandas: ¿qué soluciones para Sahara Occidental?». IV Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas. 26 de mayo de 2010. Recogido en el libro *Memoria y tiempo presente del Sahara Occidental*, p. 138.

4 *Ibid.*, p.138.

5 *Ibid.*, p.138.

definitivamente, el hombre nuevo no es un producto *a posteriori* de esa nación, sino que coexiste con ella, se desarrolla con ella, triunfa con ella».

Como dirigente africano, aparecido y curtido desde los años setenta en la escena internacional, de sus discursos se desprende un dirigente, un intelectual, un académico, un estadista y un sabio en la doctrina de las aspiraciones de su pueblo de la misma intensidad y fuerza similar a la que predicaron y esparcieron Nelson Mandela, Julius Nyrere, Kenneth Kaunda, Eduardo Mandlane, Amilcar Cabral, Agosthino Neto, Oliver Tombo, Patricio Lumumba, Hauari Boumediene, entre otros.

Bujari era una extensa enciclopedia en la lengua española y hasania, su temprana desaparición no nos dio tiempo a empaparnos de su caudal humano, rica sabiduría y erudición. Un hombre que se cultivó para estar y aportar mucho y saldar su deuda como intelectual en el marco académico-político nacional, regional e internacional. África del siglo XXI en su actual auge necesita de hombres de su talla, de liderazgo y sabia producción. Su capacidad, coeficiente intelectual, diplomacia y convicción en sus principios eran insuperables, como encontramos reflejado en muchas citas suyas, «Aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán»⁶. Estas palabras me llevan a mi poema «Tengo fe en el tiempo»: «Voy huyendo a la infinidad del tiempo. / Voy huyendo de los principios frustrados. / Voy huyendo de los que no levantan / polvo al caminar. / Voy huyendo de los que no creen / en el día que nacerá mañana. / Porque yo sí creo en ti, / hoy, mañana y los próximos siglos / y por eso / mi evasión a la infinidad del tiempo».

Fue un ilustrado líder africano encarnado en sus antecesores, de visión universalista muy adelantada a su tiempo. Poseía y predicaba el pensamiento revolucionario y nacionalista de aquellos líderes africanos que fueron perseguidos o asesinados por el colonialismo francés, el español o el belga. Cuando se leen sus escritos y se escuchan sus conferencias encontramos una dialéctica de discurso convincente, atractivo, embriagador, brillante, suculento en matices y metáforas y elocuentes alusiones como lo hacían

6 Intervención de Bujari Ahmed en el debate «El escenario internacional: Naciones Unidas y el Sahara Occidental». III Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas. 26 de mayo de 2009. Recogido en el libro *Memoria y tiempo presente del Sahara Occidental*, p. 72.

Mandela, Nkrumah o Lumumba, autor de este pensamiento: «Sin dignidad no hay libertad, sin justicia no hay dignidad, y sin independencia no hay hombres libres», que converge en estas palabras de Bujari: «Solamente la juventud que va a las escuelas, a los institutos o a las universidades, puede tener conciencia de su misión»⁷. Y alegaba que el primordial rol que deberían sostener los pueblos africanos era derrocar en todas sus manifestaciones el yugo colonial que aún persiste en algunos países del continente. Un contexto en el que Bujari apelaba a los pueblos a contribuir para romper las cadenas del yugo, ya sean de los regímenes de corte neocolonial, reaccionarios, expansionistas, y sin dejar de citar el desfasado patriarcado transferido a través del tribalismo estratificador.

En este ordenamiento de pensamiento y lucha primaba para Bujari erradicar el atraso y el sometimiento, como anotaba en estas líneas: «Se necesita una juventud que tenga las manos desatadas, pues no se puede trabajar en una obra de arte con una “camisa de fuerza”»⁸. Porque tenía claro su papel en la emancipación de los pueblos africanos en su lucha por librarse de las garras del explotador que se manifestaba en sus mil formas. La revolución, lo nuevo en progreso en derechos y libertades, es lo contrario al atraso, al estancamiento, y es la negación del pasado que ha consistido en el dominio y explotación del hombre por el hombre. El tribalismo fue y sigue siendo una lacra del pasado colonial que ha enfrentado ideales de progreso en muchos rincones de África, un nefasto obstáculo que Bujari ya advirtió a inicios de los años setenta: «Este ideal está limpiamente enfocado con la juventud; una juventud que se desvincula de todos los prejuicios del pasado que no son útiles, y es más, son un freno para ese ideal»⁹. El líder zambiano Kenneth Kaunda, cuando se decidió a desempeñar un papel de activista político, reflexionaba: «(...) Toda nuestra vida aquí estaba dividida en secciones raciales bien delimitadas: los blancos allá, los indios o las personas de origen asiático por su lado, los mestizos, los de sangre mezclada y la mayoría negra que era el último eslabón. Por lo tanto en toda la nación éramos un pueblo dividido según la tribu, según el color.

7 «Cambio de vida en el Sahara». Revista *Irifi*. *Op. cit.*

8 «Cambio de vida en el Sahara». Revista *Irifi*. *Op. cit.*

9 «Cambio de vida en el Sahara». Revista *Irifi*. *Op. cit.*

(...) algunos jóvenes de aquellos días no podíamos aceptar esto»¹⁰. Y Bujari Ahmed reflejó en su ideario que los saharauis vivieran libres y sin ningún tipo de segregación racial o tribal, tras esa «camisa de fuerza» que lo impedía y que él entrecomillaba advirtiéndolo su letal expansión. En eso también consistió el proyecto revolucionario del Frente Polisario y su proyección en la República Saharaui, que aquella «Generación del 73 Saharaui» había asumido con un alto nivel y entrega.

El diplomático saharauí lideró una lucha desigual con el adversario; es decir, con el ocupante marroquí durante más de tres décadas en los estrados, tribunas y pasillos de la sede de las Naciones Unidas. Una lucha casi bíblica, de un David contra Goliath, y en ella venció a pesar del asedio del poderoso *lobby* promarroquí en los Estados Unidos, la despiadada postura colonial de Francia y la reaccionaria órbita del petrodólar saudita. Pero nadie pudo vencerle. Su mirada seductora, sus justicieros vocablos en inglés, hasania y español, sus sentenciadoras pausas y el uso de poderosas metáforas eran sus más temibles armas, porque su convicción de lucha era inamovible, lo que siempre hacía sentir muy pequeño a su adversario. «En África ha habido una época colonial durísima y los pueblos africanos han pagado el tremendo precio de un baño de sangre. Yo no creo que haya intelectuales y gobiernos en este siglo XXI que nos obliguen a decir que nunca tuvo lugar esa noche o ese precio que resultó ser una lección histórica, cuál es el derecho de los pueblos a tener la oportunidad de decidir su destino. Y ese es el centro de gravedad y no Rabat, Madrid, París, o Washington»¹¹.

En el año 2007, mientras yo escribía el libro que consagré a su generación —*El sueño de volver*—, intercambié varios correos con Bujari recabando su testimonio. Cuando concluí los trabajos del libro nos vimos en Madrid en una conferencia sobre la actualidad del proceso en Naciones Unidas que él impartía. Aproveché entonces la ocasión, tomando con él un café, para pedirle que, como destacado miembro de su generación, me hiciera el pró-

10 Oramas, Óscar, *La descolonización de África y sus líderes*. Editora Política, La Habana, 1990, p. 103.

11 Intervención de Bujari Ahmed en la mesa redonda «Un proyecto político para el Sáhara Occidental: referéndum y autodeterminación vs. autonomía». I Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas. 8 de mayo de 2007. Recogido en el libro *Universidad y Sahara Occidental. Reflexiones para la solución de un conflicto*, p. 85.

logo del libro. Se ofreció amablemente y me escribió en su tarjeta la dirección de su apartamento en Nueva York para enviarle el borrador. Pero más tarde pensé que Bujari no tendría tiempo para leer casi trescientas páginas y prologarlo. Rectifiqué mi abusiva petición y le escribí un correo para no quitarle el mínimo de su necesario tiempo que consagraba diariamente a la difícil misión en las Naciones Unidas. Cuando salió el libro le pedí a la editora que le regalara un ejemplar. Estábamos en una conferencia en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Yo le recordé que era el libro que quería que me prologara, a lo que me contestó sonriente: «Bahia, seguro que no habría tenido tiempo para ello». Fue entonces cuando le dije que era justo lo que yo había pensado y por eso no llegué a enviarle el borrador. Sin embargo, sus testimonios me sirvieron para documentar y argumentar sobre su irrepetible generación, que escribió el primer verso en español cantando a la patria saharauí llamándola a despertarse contra el yugo extranjero, e inició el proceso de descolonización del territorio y proclamó la República Saharaui.

Ahora que Bujari se ha ido, los saharauís saben que el vacío que ha dejado es irrecuperable. Sin embargo, partiendo del clamor de su generación, estoy seguro que su referencia seguirá siendo el punto de convergencia para todas las generaciones saharauís como lo pregonó el histórico poeta y dirigente Biga Uld Baali¹² en estos versos: «Nuestra historia ha hecho / en su andar leyendas, / la nueva generación / ya sabe escribir más allá / de sus dedos, / y el militante desde su convicción / sabrá acotar con determinación / expectativas e incertidumbres».

Estos versos de Biga parten de la misma ilusión que tuvo este gran intelectual en el proceso de liberación que unió a los saharauís y les está conduciendo hacia el buen puerto que él preconizó con determinación y esperanza cuando señalaba que «La coyuntura internacional es como lo que decía Bismarck: “el manto de Dios pasa una vez delante de tu puerta cada mil años”». Y Bujari zanjaba el planteamiento: «Nosotros estaremos preparados para el paso del manto de Dios»¹³. En 2014 tuve la suerte de es-

12 Dirigente y poeta integrante de la «Generación del 73 Saharaui», caído en combate en los años ochenta contra la invasión marroquí.

13 Intervención de Bujari Ahmed en «Diálogo a dos bandas: ¿qué soluciones para Sahara Occidental?». *Op. cit.*, p. 143.

cuchar de cerca al histórico dirigente sudafricano, compañero de celda de Nelson Mandela, Andrew Mlangeni dirigiéndose a los saharauis desde la misma filosofía y liderazgo de la generación de Bujari: «Si los saharauis que están aquí en los campamentos no la consiguen, la conseguirán sus hijos». Y matizaba esperanzando a los saharauis en su lucha: «Nosotros en 1952 decíamos que queríamos ser libres ya, y lo decíamos en serio, y tuvimos que esperar hasta 1994. El pueblo saharauí está preparado para lo mismo».

Ojalá que este recuerdo de Bujari Uld Ahmed Uld Barical-la les sea útil a las nuevas generaciones saharauis y a aquellos amigos de la causa que no tuvieron la ocasión de conocerle en persona. Espero que sea un provechoso acercamiento a esa irreplicable figura de la contienda nacional del Sahara Occidental y de África que dieron en unas circunstancias en que se necesitaba y quitaron cuando menos se esperaba. Pero «vendrán otros» de su talla, tal y como él decía.

La denuncia de «los acuerdos de Madrid» entre 1976-1982: logros y errores de una gran batalla solidaria de la transición

ANA CAMACHO

Con motivo del reciente fallecimiento del brillante diplomático saharauí Ahmed Buhari, el coronel Javier Perote, veterana y prestigiosa figura del movimiento de solidaridad con el pueblo saharauí, evocó con varios amigos los difíciles años en que el representante del Frente Polisario ejerció como *embajador* de su pueblo en Madrid. Hubo en especial una anécdota que varios compartíamos relativa a la decepcionante andadura adoptada por el primer Gobierno socialista de Felipe González tras su abrumadora victoria electoral en 1982, en la que Bujari demostró un fino olfato frente a la mayoritaria tendencia del movimiento de solidaridad español a no querer ver.

El episodio tuvo lugar tras un acto informativo sobre la situación del conflicto en Madrid. Por aquel entonces Felipe González mantenía intacta la aureola que se había ganado, desde 1976, como el principal valedor del derecho a la autodeterminación del pueblo saharauí. Pero en un arrebato de sinceridad con los que habíamos formado un corrillo a su alrededor, Bujari nos lanzó una queja que causó gran incredulidad: pese a las muchas expectativas que el pueblo saharauí tenía con el Gobierno del PSOE, su actuación era preocupante. «Felipe», añadió sin medias tintas, no sólo no estaba realizando ningún cambio significativo en la política española con el Sahara Occidental, sino que había emprendido un rumbo que marcaba un retroceso respecto a los anteriores Gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD) presididos por Adolfo Suárez.

Sus contertulios reaccionaron con vehementes exclamaciones de rechazo, reprochándole, con cariño, su falta de paciencia. Las afirmaciones de Bujari les habían resultado especialmente hirientes ya que presuponían la existencia de una contribución de los Gobiernos de Suárez a la que los saharauis pudiesen estar agradecidos, una hipótesis que en el esquema del entorno prosaharauí español estaba alejada de toda lógica.

Mientras había gobernado la UCD habían sido frecuentes las acusaciones hechas desde el propio Frente Polisario, y el Gobierno de Argelia, su gran aliada, acusando al presidente Suárez de llevar a cabo una «política de doble juego» que, manteniendo una concienzuda distancia entre las palabras y los hechos, había favorecido la ocupación ilegal marroquí de la antigua provincia española número 53¹.

La propaganda del PSOE y del resto de las fuerzas políticas españolas simpatizantes con el Frente Polisario habían alentado esta percepción. A menudo, se había acusado a los Gobiernos de Suárez de haber sido dignos continuadores de la política franquista, al no rectificar esa actuación del último Gobierno de la dictadura de Franco que había traicionado al pueblo saharaui entregándolo a las tropas invasoras de Marruecos y Mauritania, tras firmar con los Gobiernos de ambos países la Declaración de Principios del 14 de febrero de 1975, más conocida como los acuerdos de Madrid o, también, el acuerdo tripartito.

La gran prueba de esta supuesta deriva franquista de Suárez era para la oposición prosaharaui la estrategia con la que el presidente centrista se había opuesto sistemáticamente a denunciar los acuerdos de Madrid como exigía el amplio movimiento asociativo, sindical y político que en España se había conformado para pedir justicia para los saharauis. Desde el PSOE se ponía un gran énfasis en que la determinación con la que el Gobierno de UCD se había negado a dar el paso, pese a reconocer la falta de validez jurídica de la Declaración de Principios, sólo podía explicarse por los fuertes vínculos que muchos de los políticos de UCD mantenían con el legado de la dictadura.

Tras acceder al poder, Felipe González no había denunciado los acuerdos de Madrid, pero había logrado mantener la confianza del movimiento prosaharaui con dos novedosos gestos que parecían marcar una ruptura con la actuación franquista: en diciembre de 1984, bajo la batuta del ministro de Exteriores socialista Fernando Morán, España había votado favorablemente en la ONU al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui recogido en las resoluciones de la Asamblea General, acabando con la actitud equívoca de los gobiernos anteriores que habían votado a este tipo

1 «Argelia condena el ‘silencio’ español en el conflicto del Sahara», *Abc*, 25 de noviembre de 1979, 13.

de resoluciones con la abstención. Un mes después, el entonces *número dos* del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed, había mantenido en Madrid un encuentro *oficioso* con diversos miembros del Gobierno, incluido el ministro Morán.

No hubo ocasión de retomar la conversación para que el diplomático saharauí explicase a qué se debía su pesimismo con la política socialista. A ello contribuyó que, pocas semanas después (octubre de 1985), Bujari fuese expulsado por el Gobierno español tras el trágico y confuso incidente que costó la vida a dos españoles que se encontraban a bordo del pesquero *Junquito* y la patrullera *Tagomago*, ametrallados en aguas del Sahara por el Frente Polisario.

En la actualidad no existen dudas de que el diplomático saharauí estaba en lo cierto en relación a la falta de sinceridad de la retórica prosaharauí de Felipe González, que resultó ser sólo un anticipo de una posición claramente favorable al anexionismo marroquí del PSOE que se hizo pública en 2004 con los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

En cambio, respecto a la actuación de Adolfo Suárez con el Sahara Occidental, todavía existen muchas preguntas sin respuesta. Uno de los motivos es el escaso interés que ha suscitado entre los historiadores especializados en la fallida descolonización del Sahara Occidental el análisis de la etapa relativa a los Gobiernos de UCD entre 1977 y 1982. Se trata de un olvido que merece ser remediado, ya que estos años fueron determinantes para la consolidación y reconocimiento internacional del Frente Polisario como actor indispensable en la solución del conflicto.

Para la sociedad civil movilizada a favor de la causa saharauí, la acción de UCD en el tablero magrebí cumple ese conocido adagio que lamenta que, hasta ahora, ninguno de los Gobiernos que se sucedieron tras la primera traición de 1975, haya llevado a cabo una acción decidida y clara frente a la agresión marroquí. Queda así en la sombra que, especialmente a partir de 1978, el Gobierno de Suárez operó un giro a favor de las posiciones que entonces mantenía el PSOE sobre cuál debía de ser la acción española en relación a la cuestión saharauí que se materializó en declaraciones explícitas a favor del derecho de la autodeterminación del pueblo saharauí y la necesidad de que esta libre elección se dirimiese en un referéndum libre y transparente. Así lo reconocieron el Frente Polisario, el Gobierno de Argelia, los dirigentes socialistas y hasta el anexionismo marroquí.

La dinámica política que desembocó en este cambio ofrece interesantes lecciones para el presente. En ella hay que destacar la presión positiva que ejerció en los Gobiernos de UCD la insistente campaña por la denuncia de la Declaración de Principios llevada a cabo por el Frente Polisario y sus aliados fuera y dentro de España.

Los motivos a favor y en contra de esta campaña marcaron las grandes diferencias entre las posiciones sobre el Sahara de UCD y PSOE. Una diferencia que se evaporó cuando, tras la llegada al poder de Felipe González, el PSOE hizo desaparecer la denuncia del acuerdo tripartito de su discurso político. La renuncia a esta reivindicación fue el primer síntoma de lo que los saharauis han llamado la «segunda traición española». Los hechos indican que este «giro» socialista no tuvo que ver con un desconocimiento de los argumentos jurídicos que explican que la Declaración de Principios no fue más que una farsa cuyos nefastos efectos perduran hasta hoy.

La relación entre la «victoria final» y la denuncia de los acuerdos

La denuncia de los acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 vertebró el apasionado compromiso de apoyo a la causa saharauí que el PSOE mantuvo en su discurso público fuera y dentro del Parlamento. Esta línea de acción fue la que también mantuvo el resto de las fuerzas políticas que convergieron en la campaña que exigía el cumplimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharauí, entre las que destacó por su determinación el Partido Comunista de España (PCE).

La importancia que se daba entonces a la denuncia de los acuerdos de Madrid como la base de toda iniciativa dirigida a defender el derecho inalienable del pueblo saharauí a decidir su futuro, quedó plasmada con la primera frase de la intervención que Felipe González hizo en los campamentos del Frente Polisario el 14 de noviembre de 1976, prometiendo que nunca abandonaría al pueblo saharauí. Era el primer aniversario de la firma del escandaloso acuerdo y en el vídeo que recoge esta solemne iniciativa el dirigente socialista afirma: «Hemos querido estar aquí para demostraros, con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975...».

Generalmente es mucho más conocida la frase que puso broche a esta declaración en la que, por cierto, el secretario general del PSOE tenía sentado a su lado a Ahmed Bujari: «Por consiguiente, no [quiero] prometeros algo, sino comprometerme con la Historia: nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final». Pero la importancia que se le daba a la acción que requería el reconocimiento oficial de que el acuerdo tripartito había sido una farsa, como condición ineludible para lograr esa «victoria final», quedó destacada también en el comunicado conjunto que, ese mismo día, hicieron público el PSOE y el Frente Polisario. En este texto quedó subrayado que ese supuesto tratado que había sido el punto de arranque de «la guerra de conquista, rapiña y exterminio» llevada a cabo por Marruecos contra el pueblo saharaui, es nulo de pleno derecho.

Estos documentos reflejan la claridad con que el PSOE de Felipe González había desenmascarado la coartada jurídica con la que el primer Gobierno de la monarquía de Arias Navarro (firmante de la Declaración de Principios) había pretendido dar a este acuerdo con Marruecos y Mauritania la categoría de un tratado internacional reconocido como tal por las Naciones Unidas. Otros muchos textos e intervenciones de los dirigentes del PSOE, incluso en el ámbito de los debates del Congreso de Diputados, indican que nunca tuvieron la menor duda de que el Gobierno de Arias Navarro había mentido alevosamente a la opinión pública española y que los acuerdos eran un recurso para ocultar que se había entregado el pueblo saharaui a sus enemigos, contraviniendo la legalidad internacional.

La estrategia del PSOE y el resto de las formaciones políticas, sindicales y asociativas que apoyaron durante esos años la campaña para denunciar los acuerdos de Madrid buscaba, ante todo, una rectificación de los hechos. En su punto de mira estaba, sobre todo, la declaración del 26 de febrero de 1976 con la que el primer Gobierno de la monarquía había declarado la extinción de las responsabilidades de España «como potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara Español», invocando la Declaración de Principios (en especial su párrafo 2). Su lógica era aplastante: si el acuerdo de Madrid era nulo de pleno derecho, también era nula esa declaración que había desvinculado a España de sus responsabilidades.

La posición socialista tenía de su parte la legalidad internacional. De hecho, la Asamblea General de la ONU había confirmado en la resolución A/31/275 que España seguía siendo para la ONU la potencia administra-

dora del territorio, pese a su declaración del 26 de febrero de 1976². El PSOE hacía gala además de una potente motivación de cara a la solución del conflicto, ya que existía una clara percepción entre los dirigentes socialistas (y del resto de las fuerzas políticas prosaharauis) de que la política gubernamental de abandono de sus responsabilidades con los saharauis iba dirigida a favorecer a sus agresores, especialmente a Marruecos.

Esta convicción estuvo presente en la resolución que el XXVII Congreso del PSOE aprobó un mes después del *histórico* viaje de Felipe González a los campamentos del Frente Polisario. En el texto se hizo constar que la denuncia del acuerdo de Madrid era la condición previa para acabar con la situación muy perjudicial para la causa del Frente Polisario que había creado el abandono del régimen franquista de «las obligaciones que le correspondían como potencia administradora en el proceso de descolonización de este territorio»³.

El PSOE nunca asoció esta exigencia con una reimplantación efectiva de la administración colonial española, como pretendieron hacer creer desde el Gobierno alentando una descalificación de la propuesta del PSOE y sus aliados que tachaban como de poco realista. Era obvio que Marruecos no iba a abandonar el Sahara Occidental simplemente porque se declarasen nulos los acuerdos de Madrid. La patada que el régimen de Hassán II había dado al dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de 1975, que había confirmado el derecho del pueblo saharauí a optar por la independencia, se había convertido en un claro ejemplo de hasta qué punto el cumplimiento del derecho internacional exige un decidido apoyo de la comunidad internacional frente a los infractores. Una voluntad que no se había dado en 1975 y que, desgraciadamente, seguía sin asomar en el caso del Sahara Occidental.

La estrategia socialista se refería a la recuperación de las responsabilidades de las potencias administradoras que no requieren actuar sobre terreno y que están recogidas en el art.73 de la Carta de la ONU. Son las obligaciones que exigen, por ejemplo, «a los miembros de las Naciones Unidas que

2 Naciones Unidas, «Información sobre los Territorios No Autónomos Transmitida en virtud del inciso e del artículo 73 de la Carta de la ONU». A/31/275, Asamblea general de la ONU, 31 período de sesiones, 25 de octubre de 1976.

3 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, *El referéndum en el Sahara Occidental. Libro blanco 1975-1995*, Madrid: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, 1995.

tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio», aceptar como un «encargo sagrado» la obligación de promover el bienestar de los habitantes de los territorios que tutelan; «asegurar el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso» y, más importante aún, ayudarles a llevar a cabo su descolonización y el desarrollo de un «gobierno propio» que tenga en cuenta sus aspiraciones políticas⁴.

En la práctica, lo que reivindicaba Felipe González al Gobierno español era una rectificación de la Declaración del 26 de febrero de 1976 que llevase a España a seguir el ejemplo del Gobierno portugués en Timor Este, donde la potencia colonizadora había tenido que retirarse ante la invasión de las tropas de Indonesia que reclamaba la anexión del territorio: pese a no ejercer ya la ocupación efectiva de su colonia, los gobiernos portugueses habían seguido defendiendo la causa del derecho a la autodeterminación del pueblo timorense y llevado a cabo acciones para que la maquinaria de Naciones Unidas no olvidase ese otro problema de descolonización pendiente.

Los puntos clave del planteamiento del PSOE de González chocaban frontalmente con la poderosa campaña de desinformación con la que los responsables del acuerdo tripartito habían defendido la validez jurídica de la Declaración de Principios y la situación irreversible que se había derivado de su condición de «tratado». La posición oficial se aferraba a las responsabilidades que imponían a España los principios básicos del derecho internacional que obligan a los firmantes de acuerdos internacionales a respetar lo pactado.

El PSOE, por su parte, actuaba con un profundo conocimiento de los principios de derecho y la documentación de la ONU que sostenían sus argumentos gracias a los prestigiosos diplomáticos y juristas que participaron en la campaña prosaharaui. Como explicaba entonces el catedrático de derecho internacional Julio González Campos (que ocuparía cargo de juez del Tribunal Constitucional), conforme a lo que establece el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados en relación a un acuerdo nulo, todas las partes en el acuerdo (y ello incluía a España) debían ajustar su conducta

4 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI: Declaración relativa a territorios no autónomos. Art.73. <http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html>

en todo momento para asegurar el cumplimiento de la norma que había sido violada. En este caso, la norma violada con la firma de la Declaración de Principios es el derecho a la libre determinación de los pueblos que le había sido reconocido al pueblo saharaui desde los años sesenta. El Gobierno español, por lo tanto, no tenía ataduras legales con la Declaración de Principios, insistían los juristas de la campaña, pero sí con el respeto que el Gobierno de España debía mantener con los principios de derecho que prohíben a una potencia administradora renunciar unilateralmente a sus responsabilidades con el pueblo que debe seguir tutelando hasta que alcance la autodeterminación.

Este principio quedó subrayado en el comunicado conjunto que el 8 de septiembre de 1977 siguió a una reunión de Felipe González con el secretario General adjunto del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed, con estas palabras: «Ambas delegaciones consideran que España, como potencia administradora, no podrá extinguir sus responsabilidades mientras el pueblo saharaui no haya obtenido el efectivo ejercicio de su autodeterminación e independencia».

En otoño de 1977, el PSOE de Felipe González se dispuso a cumplir las solemnes promesas hechas al Frente Polisario de «poner en marcha iniciativas políticas encaminadas a la obtención de la denuncia del acuerdo tripartito de Madrid». En junio, las primeras elecciones democráticas habían dado la victoria a la UCD liderada por Adolfo Suárez, que contaba con 166 diputados en las Cortes constituyentes. Pero el PSOE, con 103 escaños, se había situado como la segunda fuerza política del país, lo que daba una cierta capacidad de maniobra para impulsar el debate público sobre el Sahara Occidental desde el Parlamento.

Su primera batalla por la causa saharaui en esta legislatura fue la presentación de una proposición no de ley en la que el PSOE pidió al Gobierno que presentase a las Cortes el texto completo del acuerdo tripartito así como «cualquier otro acuerdo complementario —contemporáneo o posterior, público o secreto— relacionado con este tema». En este texto se recordó la confusión que todavía existía en torno al contenido de los «llamados acuerdos de Madrid» y se exigió al Gobierno que «aclarase su posición acerca de la naturaleza, contenido y límites de los poderes traspasados a Marruecos y Mauritania entre el 14 de noviembre de 1975 y el 26 de febrero de 1976».

El diputado socialista Yáñez-Barnuevo explicó en febrero la decisión de retirar esta moción ante la resolución aprobada en las Cortes para citar ante la Comisión de Asuntos Exteriores a doce personalidades que habían tenido responsabilidad política en la descolonización del Sahara Español⁵. El acuerdo fue la base de las llamadas «sesiones históricas» que se celebraron en las Cortes en marzo de 1978 para aclarar las causas y repercusiones políticas y jurídicas del proceso que había conducido a la salida de la administración colonial del territorio.

En estos primeros debates en relación a la cuestión saharaui estuvo muy presente el temor a que el Gobierno español, precisamente porque seguía siendo la potencia legalmente reconocida por la ONU como responsable del pueblo saharaui, utilizase su posición de referente obligado del conflicto para dar otro golpe que zanjase definitivamente la cuestión a favor de Marruecos.

Oficialmente, desde el 26 de febrero de 1976, tanto el Gobierno de Arias Navarro como el de Adolfo Suárez (que le había sucedido tras la primera crisis política de la Transición), habían repetido en reiteradas ocasiones que el acuerdo tripartito no había supuesto un traspaso de soberanía al resto de los firmantes y que Madrid no iba a dar por concluido el proceso de descolonización hasta que no se hubiese consultado debidamente al pueblo saharaui. Sin embargo, el complejo trabajo de ingeniería pseudojurídica con que España había entregado al pueblo saharaui a sus enemigos pretendiendo tener la legalidad de su parte, dependía de la interpretación de una serie de «textos esenciales» que habían propiciado un gran desconcierto.

Había cundido la sospecha de que esa «interpretación» pudiese estar sujeta a nuevas sorpresas a favor del anexionismo marroquí. Para el movimiento prosaharaui no tenía otra explicación que, desde el Gobierno, no se hubiesen desmentido las falsedades con que la diplomacia marroquí intentaba convencer a la comunidad internacional de que España le había entregado a Marruecos y Mauritania la soberanía del territorio.

Esta desconfianza estuvo muy presente, por ejemplo, en la Comisión de Exteriores de marzo de 1978, donde en varias ocasiones se exigió una aclaración pública sobre los efectos de la firma del acuerdo en el estatuto

5 Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Exteriores, Sesión número 2, 1 de febrero de 1978. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Núm. 10, 314.

jurídico de la colonia española. Entre otras, fue muy clara la respuesta del ex ministro de la presidencia de Franco, Antonio Carro, jurista y *cerebro* de la redacción de la Declaración de Principios. España, aseguró Carro, aunque hubiese querido (y aseguró no era el caso), nunca hubiese podido entregar la soberanía del Sahara Occidental por el simple hecho de que nunca la había tenido, como ocurre con toda potencia administradora de un Territorio No Autónomo.

La vigilancia ante cualquier gesto español que pudiese servir a Marruecos de pretexto para dar credibilidad a su versión también estuvo muy presente en los agitados y largos debates en torno a la ratificación en la Cortes del acuerdo de pesca que había sido negociado con Marruecos en febrero de 1977 por el Gobierno predemocrático.

El PSOE anunció incluso antes del comienzo de los debates su decidido rechazo a este tratado que consideraba «inaceptable», entre otras cosas, por reconocer la «jurisdicción marroquí» sobre las aguas del Sahara⁶. El PSOE condenaba la complicidad con el expolio de las riquezas del pueblo saharauí por parte de sus invasores. Pero, sobre todo, al igual que otras formaciones de la izquierda, condenaba este acuerdo porque venía a dar la razón a la versión con la que, desde Rabat, se aseguraba que lo pactado con los acuerdos de Madrid había sido la entrega de la soberanía de la antigua provincia española y el Gobierno, con este trato pesquero, actuaba en consecuencia⁷.

En este decidido rechazo al acuerdo de pesca con Marruecos, el PSOE llegó incluso a justificar la amenaza con la que el Frente Polisario había advertido que, precisamente por el reconocimiento de la soberanía marroquí que entrañaba el trato, en caso de ratificarse, sería interpretado por los saharauis como una declaración de guerra. Y, como había declarado Bujari, a la guerra se respondería con guerra.

6 Congreso de los Diputados, Escrito del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso manteniendo su oposición a la ratificación del acuerdo de pesca marítima entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, 10 de febrero de 1978. Boletín Oficial de las Cortes, 13 de febrero de 1978, núm. 60, 1044.

7 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión Plenaria núm. 7 celebrada el miércoles 15 de febrero de 1978. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 15, 1978, 505.

El nuevo Gobierno de Suárez negó tajantemente esta interpretación. En repetidas ocasiones, el ministro de Exteriores Marcelino Oreja Aguirre aseguró que los acuerdos de pesca se atenían estrictamente a lo acordado en la Declaración de Principios con la que España no había transmitido ninguna soberanía del territorio, sino solamente la administración temporal. Reconocía que el acuerdo incluía la pesca en las aguas «adyacentes» del Sahara Occidental, pero ello, insistía, no suponía un reconocimiento de la soberanía marroquí. Para sostener su argumento el ministro puso énfasis en que el Gobierno no podía reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara porque ello iba en contra de la declaración realizada ante Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976 en la que España, además de dar por extinguida «toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio» declaraba que «la descolonización del Sahara Occidental culminará cuando la población se haya expresado válidamente». «El compromiso de España es que, al no estar cerrado el proceso de descolonización, aquellas aguas adyacentes del Sahara son aguas sobre las que Marruecos únicamente ejerce la jurisdicción, pero en ningún caso la soberanía», declaró Oreja.

El ministro había tranquilizado a los amigos del pueblo saharauí reconociendo que la posición marroquí era falsa en lo referente a su pretendida soberanía. Su relato, sin embargo, iba dirigido a consolidar el papel de Marruecos como potencia administradora del Sahara que, a fecha de hoy, sigue sin ser reconocida por las resoluciones de la ONU.

Pese a este gesto a favor del anexionismo marroquí, las declaraciones oficiales que reiteraban que el Sahara seguía siendo un territorio sin descolonizar habían causado un fuerte malestar en Rabat. La respuesta fue el lanzamiento de una campaña en la prensa alauita para reivindicar la «marroquinidad» de Ceuta y Melilla ante las instancias internacionales.

El papel de España en la lucha del Frente Polisario por el reconocimiento internacional

La mera renuncia española a ejercer su papel de potencia administradora había dado una gran ventaja a la diplomacia marroquí en los primeros dos años del conflicto. La inhibición española había privado al pueblo

saharaui de representación en los organismos internacionales donde corresponde a las potencias administradoras dar voz a los pueblos que no han alcanzado la independencia. La capacidad de maniobra que en cambio había tenido el estado marroquí como Estado miembro de la ONU y OUA, había congelado todo avance en la aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en estos foros internacionales.

En la ONU, España había dejado muy claro en 1976 que el conflicto del Sahara Occidental era un asunto de descolonización y no, como aseguraba Marruecos, un problema creado por la vecina Argelia, su eterna rival por la hegemonía regional. Los firmantes de la Declaración de Principios también habían dejada asentada la doctrina de que la condición para llevar a cabo la autodeterminación saharaui era una consulta que garantizase la libre expresión del pueblo saharaui. Pero, a continuación, los Gobiernos españoles se habían escudado en una pretendida «neutralidad» para no llevar adelante ninguna de las iniciativas necesarias para que la cuestión saharaui se mantuviese en la agenda de Naciones Unidas. La ONU acabó delegando el asunto a la Organización de la Unidad Africana (OUA).

La única opción que tenía la diplomacia saharaui de compensar el vacío creado por la «neutralidad» de España, la potencia referente en el conflicto, era lograr el reconocimiento internacional de legítimo representante del pueblo saharaui. Abrirse paso en la organización panafricana, a la que la Asamblea General de las Naciones Unidas había asignado un papel preponderante en los asuntos referentes al continente, especialmente en materia de descolonización, era clave para que otras instancias internacionales, incluyendo a la ONU, considerasen al Frente Polisario como interlocutor válido en la busca de la paz⁸.

Desde 1976, había una propuesta a favor del reconocimiento en el comité de liberación de la OUA, pero Marruecos había logrado que fuese siendo aplazada con varias artimañas. El Frente Polisario había contado en el organismo panafricano con el apoyo de Argelia y sus numerosos aliados. Pero no había bastado para contrarrestar el poderoso respaldo que Marruecos había recibido de Francia, su ex potencia colonizadora, gracias a la

8 Claude Bontems, *La guerre du Sahara occidental*, París: Presses Universitaires de France, 1984, 192.

enorme influencia que la diplomacia gala todavía conservaba en muchas de sus ex colonias africanas.

Desde la salida de España del territorio en febrero de 1976, el Frente Polisario había cosechado importantes victorias sobre el terreno. Pese a la escasez de sus medios, sus audaces operaciones habían hecho frente a los bombardeos de fósforo y napalm de la poderosa fuerza aérea marroquí. Sus ataques habían alcanzado en Mauritania el corazón de la capital y desafiado a la intervención militar francesa que había acudido a socorrer al Gobierno de Nuakchot.

Esta consolidación en el campo de batalla no se había visto reflejada por el número de reconocimientos logrados por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) proclamada en 1976: en otoño de 1977 apenas sumaban una decena de países africanos y asiáticos. Más preocupante aún era que, a esas alturas, el Frente Polisario seguía sin haber logrado en la OUA el reconocimiento de movimiento de liberación necesario para que en el escenario internacional una lucha armada tenga legitimidad y no sea condenada como una acción terrorista. Es más, oficialmente, la OUA todavía no tenía ni siquiera claro si el pueblo saharauí tenía pendiente ejercer su derecho a la autodeterminación o, como aseguraba el Gobierno de Marruecos, su derecho a decidir ya se había realizado a través de una votación de la Yemaa, la asamblea de notables saharauí que, aseguraban en Rabat, había refrendado el traspaso de soberanía acordado por España con el acuerdo tripartito.

Muchos de los estados africanos habían asumido esta versión y habían respaldado también la tesis marroquí que afirmaba que el Frente Polisario no existía porque no estaba integrado por auténticos saharauís sino por mercenarios a sueldo de Argelia y de sus aliados de la Unión Soviética, con el fin (según la versión del rey Hassán II) de desestabilizar al reino alauita, punto clave de la alianza occidental contra el comunismo.

La relación de fuerzas en la OUA comenzó a inclinarse a favor del Frente Polisario en el verano de 1978. La ruina económica provocada por el hostigamiento de la guerrilla saharauí desembocó en julio de 1978 en un golpe de estado que derrocó al presidente mauritano Mojtar Uld Daddah, uno de los tres firmantes de la Declaración de Principios. Las nuevas autoridades militares de Nuakchot se mostraron dispuestas a negociar la paz con el Frente Polisario que, de inmediato, respondió estableciendo el alto

el fuego. Este nuevo escenario dio el vuelco en la OUA a favor del Frente Polisario con la constitución de un comité especial (el comité de sabios) encargado de estudiar la cuestión saharauí.

En este contexto se disparó el valor estratégico de la interpretación española sobre el proceso de autodeterminación saharauí. Una de las estrategias de la diplomacia saharauí y de sus aliados españoles fue la de forzar al Gobierno español a que, cumpliendo sus obligaciones de potencia administradora, ratificase en los foros internacionales su versión de que los acuerdos de Madrid no le habían dado a Marruecos y Mauritania ningún título de soberanía. La otra prioridad de la diplomacia saharauí era que el Gobierno español compensase su política de inhibición con acciones que facilitasen el reconocimiento internacional del Frente Polisario y de la RASD.

El principal obstáculo de los representantes saharauíes y sus aliados para lograr estos objetivos era la tendencia del Gobierno español a evitar cualquier gesto de disgusto por parte de Marruecos. El rey Hassán II ya estaba bastante contrariado por no haber logrado un cambio en la posición española a favor de su interpretación del acuerdo tripartito. Frente a sus demandas, en Madrid se habían empeñado en defender que el acuerdo sólo afectaba a la administración del territorio. La diplomacia marroquí se había volcado entonces en una política de chantaje que buscaba asegurar, como mínimo, el silencio español que podía dar validez a sus argumentos por la vía del dicho que sostiene que «quien calla, otorga».

Desde Madrid, se intentó tranquilizar al rey Hassán II asegurando que España no iba a tomar ninguna iniciativa para la busca de una solución al problema. Pero la propia dinámica parlamentaria había obligado al Gobierno español a pronunciarse en el único sentido que cabía, el del reconocimiento de que el Sahara no había llevado a término su descolonización. Ello era motivo de represalias del Gobierno marroquí que solían afectar a los intereses pesqueros (dificultades en la negociación de los derechos de pesca, apresamiento de pesqueros españoles, etc.) y suscitar la amenaza de llevar ante las Naciones Unidas la reivindicación territorial sobre las ciudades de Ceuta y Melilla.

La importancia que tenía para cada una de las partes la opinión española quedó en evidencia con el contraataque de Argelia a la política de chantaje marroquí, aprovechando en 1977 la decisión del comité de liberación de la OUA de tomar en consideración la supuesta «africanidad» del archi-

piélago canario. El Gobierno de Argel puso entonces sobre la mesa la necesidad imperiosa para España de contar con su capacidad de influencia en la OUA para frenar la iniciativa que amenazaba con reconocer al MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), liderado por el abogado Antonio Cubillo, como único representante del pueblo canario en su lucha contra la *colonización* española.

Por su parte, el Frente Polisario también intentó forzar la posición española con algo más que peticiones verbales. Aprovechando el secuestro de nueve tripulantes del pesquero *Las Palomas* (ocho españoles y un mauritano) apresados por sus combatientes cuando faenaban en las proximidades del banco sahariano, exigió una negociación directa con el Gobierno español que suponía un reconocimiento implícito de la organización saharauí. La liberación de los pescadores en octubre de 1978 justificó la presencia en los campamentos del Frente Polisario del encargado de relaciones exteriores de UCD, Javier Rupérez, y sirvió de marco a la firma de una declaración conjunta que reconocía al movimiento saharauí como único y legítimo representante del pueblo saharauí. La iniciativa quedó desdibujada por las declaraciones con las que, seguidamente, se subrayó que el reconocimiento se hizo exclusivamente a nivel de partido de UCD pero no de Gobierno. También hubo voces que intentaron invalidar este gesto asegurando que había sido forzado por la prioridad de devolver a sus hogares a los pescadores en poder del Polisario.

Pese a ello, el Gobierno de Suárez dio un segundo golpe de escena en este delicado escenario con la visita oficial que inició en Argel el 30 de mayo de 1979. Allí se reunió con el máximo dirigente saharauí Mohamed Abdelaziz en un encuentro que no había sido anunciado previamente. Las crónicas periodísticas habían asegurado que el objetivo del viaje era reforzar las relaciones hispano-argelinas en el marco de una campaña diplomática que ese verano intentaba recabar apoyos para que la supuesta «africanidad» de las islas Canarias no volviese a estar en la cumbre anual de la OUA. Pero fue el encuentro entre Suárez y Abdelaziz lo que copó los titulares de la prensa española. El propio presidente español aseguró entonces que el objetivo central del viaje a Argel era «lograr la autodeterminación del pueblo saharauí»⁹.

9 «El Gobierno español se compromete con mayor claridad con la causa saharauí». *El País*, 1 de mayo, 1979. https://elpais.com/diario/1979/05/01/espana/294357603_850215.html.

La prensa entonces más afín al PSOE destacó que, pese a que Suárez había calificado esta conversación de *privada*, en la práctica el encuentro suponía un giro importante en la política exterior española al sellar un compromiso de «mayor claridad» con la causa saharaui y reconocer implícitamente la representatividad del Frente Polisario, por lo menos a nivel de partido¹⁰. La conclusión había sido: «España gira de manera importante en su actitud ante el Sahara y, una vez en movimiento, se sitúa frente a Marruecos y del lado argelino-saharaui».

Hay que destacar que en esta ocasión el presidente del Gobierno de España se desmarcó inequívocamente de los argumentos principales de la ofensiva diplomática marroquí para frenar el avance del Frente Polisario en la OUA. Suárez se mostró inequívocamente partidario y esperanzado con las negociaciones de paz entre saharauis y mauritanos que en Rabat habían condenado enérgicamente. Invocando la postura oficial española, recordó que España nunca le había entregado la soberanía del Sahara ni a Marruecos ni a Mauritania, porque no la tenía. El Gobierno español reconoció que la Yemaa, efectivamente, había celebrado una votación, pero aclaró que en Madrid nunca se le había dado el valor de una consulta de autodeterminación¹¹. En un comunicado hecho público al final de la reunión, Suárez también había hecho constar que la «descolonización» del Sahara estaba pendiente y que el arreglo de este problema requería una «solución política» acorde con las resoluciones de la ONU y la OUA en la materia, mediante el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación¹².

Desde la perspectiva marroquí, el comunicado conjunto hispano-argelino era de lo más inoportuno. Justo el 1 de mayo iniciaba su misión a Marruecos y Argelia para recoger información sobre el terreno que iba a ser crucial para la decisión que el organismo panafricano iba a tomar ese verano en la cumbre de jefes de estado africanos en Monrovia sobre el derecho a la autodeterminación saharaui y el reconocimiento del Frente Polisario.

10 «Suárez defiende la autodeterminación del pueblo saharaui», *El País*, 1 de mayo, 1979 https://elpais.com/diario/1979/05/01/espana/294357603_850215.html.

11 Suárez: «España apoya las negociaciones de paz mauritano-saharaui», *el país* 2 de mayo, https://elpais.com/diario/1979/05/02/espana/294444002_850215.html.

12 «La grave crisis saharaui requiere una solución urgente y pacífica. Comunicado conjunto hispano-argelino». *Abc*, 2 de mayo, 1979, 80.

La importancia de España como referente obligado para la solución del conflicto quedó patente cuando, además de visitar Marruecos y Argelia, el comité especial de la OUA para el Sahara envió una delegación a Madrid para consultar al Gobierno que fue recibida por presidente Suárez y su ministro de Exteriores, Marcelino Oreja.

El 26 de junio de 1979 el comité de liberación anunció el reconocimiento del derecho a la autodeterminación para el Sahara Occidental y recomendó una resolución de cara a la cumbre de Monrovia que reconocía al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharauí. El texto también exigía la colaboración de todas las partes de cara a la organización de un referéndum de autodeterminación. Marruecos reaccionó advirtiendo que el Sahara era y seguiría siendo marroquí.

El peso de la opinión española quedó reflejado en esas recomendaciones en las que se especificaba que «todas las partes interesadas, salvo Marruecos, estiman que el pueblo del Sahara Occidental no ejerció el derecho a la autodeterminación y que el acuerdo de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania se refería a transferencia de administración y no de soberanía». Había triunfado la versión española frente a la marroquí y, también, frente a la del Gobierno argelino y del propio Frente Polisario que, por entonces, seguían aprovechando cualquier oportunidad para exigir la nulidad de los acuerdos de Madrid.

La iniciativa parlamentaria del PSOE para anular los acuerdos de Madrid

El 16 de agosto de 1979, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exigió al Gobierno de Adolfo Suárez que llevase a cabo la denuncia formal del acuerdo de Madrid¹³. La iniciativa tuvo lugar en el punto álgido de una crisis que amenazaba con sumir al Magreb en una guerra generalizada. La tensión se había disparado el 5 de agosto, cuando el Frente Polisario y el Gobierno de Mauritania

13 Congreso de los Diputados, Últimos acontecimientos producidos en el Sahara Occidental. Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; Boletín Oficial de las Cortes Generales, (I Legislatura), Serie D: Interpelaciones, Mociones y Proposiciones No de Ley, Núm. 137-I, 13 de septiembre, 1979, 323.

habían firmado la paz, poniendo fin a cuatro años de conflicto. Mauritanos y saharauis habían llegado a un acuerdo tras varios meses de negociaciones en los que habían circulado noticias sobre los planes del nuevo gobierno mauritano de ceder al movimiento saharauí el territorio de Río de Oro que había ocupado en virtud del acuerdo de Madrid.

Marruecos había amenazado con una intervención armada si se llevaba a cabo lo que consideraba era a todas luces un «acuerdo ilegal e impropio» y que, aseguraba, comprometía la estabilidad de la región. La OUA no lo había visto así y había aplaudido las noticias que daban cuenta de la voluntad de los dos antiguos enemigos de acabar con una guerra «fratricida e injusta». Desafiando la intransigencia alauita, el acuerdo mauritano-saharauí quedó firmado en Argel ante cuatro ministros del Gobierno argelino. Pocos días después, las tropas marroquíes ocuparon el Sahara Occidental adjudicado a Mauritania en 1975 e izaron la bandera de su país en Dajla, la antigua Villa Cisneros.

Una de las consecuencias de la agresión marroquí fue la inmediata reacción con la que el Gobierno argelino señaló que el acuerdo saharauí-mauritano y la ocupación marroquí de Río de Oro suponían un incumplimiento por parte de dos de los tres firmantes del acuerdo tripartito de 1975. Si alguna vez había existido un «tratado» (y el Gobierno argelino siempre se había pronunciado por la nulidad del acuerdo de Madrid), en Argel consideraban que había quedado definitivamente quebrantado por el rumbo tomado por Mauritania al renunciar a Río de Oro y por Marruecos con su anexión del mismo.

La declaración oficial de la nulidad de los acuerdos de Madrid había surgido durante el viaje realizado por el presidente Suárez a Argelia ese año. Los dirigentes saharauis habían aprovechado entonces la publicidad lograda por el encuentro entre el presidente español y el saharauí para recordar que, desde su perspectiva, todavía se mantenía la idea de que «toda solución del problema del Sahara pasa por la anulación de los acuerdos de Madrid»¹⁴. Luego, tras los éxitos diplomáticos logrados ese verano en la OUA, las quejas saharauis habían puesto el foco en la ausencia de una reacción oficial española ante el acuerdo de paz con Mauritania.

14 Efe, «El problema del Sahara para el Frente Polisario pasa por la anulación de los acuerdos de Madrid». *Abc*, Argel, 2 de mayo de 1979, pag.80.

La ocupación de Tiris el Gharbia, como habían llamado los mauritanos al antiguo Río de Oro, había vuelto a poner en primera línea la cuestión del acuerdo tripartito, entre otras cosas porque el propio rey Hassán II había intentado dar un tinte de legalidad a su nueva anexión con una curiosa interpretación de la Declaración de Principios de 1975: había alegado que la renuncia mauritana a Río de Oro (como volvieron a llamar ese territorio saharauí tras la anexión a Marruecos) era inadmisibles e irresponsable porque violaba los acuerdos de Madrid.

«Mauritania es un país soberano que legisla como le parece dentro de su territorio nacional», había declarado el monarca marroquí. «Pero el derecho internacional dispone al respecto que los acuerdos multilaterales imponen a los signatarios que tienen prelación sobre el derecho interno. Ni Marruecos ni Mauritania pueden elaborar una legislación interna que ignore o finja ignorar acuerdos internacionales entre los dos países»¹⁵. Si Marruecos había intervenido, venía a decir, era para hacerse cargo de las responsabilidades que imponía el respeto al acuerdo tripartito.

En esta línea argumental que seguía insistiendo en que la firma de la Declaración de Principios había comprometido a Mauritania y Marruecos a asumir la soberanía de la antigua provincia española, Hassán II recordó que el Gobierno de Mauritania, durante esos cuatro años de ocupación, había incluido la zona de Tiris el Gharbia en la organización de elecciones locales y nacionales y que había concluido acuerdos que autorizaban a varios países a pescar a lo largo de las costas saharianas, entre los que destacaba España.

Fue en este contexto de alta tensión que el PSOE presentó la iniciativa parlamentaria con la que exigió que el Gobierno declarase oficialmente la nulidad de la Declaración de Principios de 1975. El Polisario acababa de reprochar al Gobierno no haber reaccionado todavía al acuerdo de paz con Mauritania que, en su opinión, cancelaba cualquier pretensión de validez jurídica que hubiese podido atribuirse al acuerdo de Madrid¹⁶.

La PNL llevaba la firma de Felipe González y en sus primeros párrafos reiteraba los argumentos tradicionales con los que el PSOE solía defender

15 «Hassan trata de romper el cerco», *Abc*, 8 de agosto, 1979, pág. 13.

16 «El conflicto del Sahara, expresión de la incapacidad resolutoria de la ONU». *Abc*, 18 agosto, 1979, 9.

que la Declaración de Principios era nula de pleno derecho, tanto en relación a la legislación española como al derecho internacional. Pero, además —se subrayaba en el texto— el Gobierno ya no tenía excusas para oficializar la defunción de los acuerdos de Madrid puesto que habían perdido definitivamente su «virtualidad» con la firma del acuerdo de paz del 5 de agosto en Argel.

El texto subrayó que dar este paso era el requisito fundamental para que el Gobierno de España reparase y asumiese «con toda responsabilidad la deuda histórica hacia su antiguo territorio, reconociendo una evidencia ya incontestable: la representación del Frente Polisario y los derechos nacionales del pueblo saharauí a la soberanía y a la independencia nacional».

Varios diputados socialistas presentaron la iniciativa en una rueda de prensa de la que se hicieron eco los principales diarios españoles. Su intervención puso énfasis en que España no podía desconocer el acuerdo mauritano-saharauí. Menos aún —dijeron— se podía ignorar que este acuerdo de paz alteraba el tripartito de Madrid. Incluso dando por buena la versión del Gobierno acerca de la legalidad de los acuerdos, su incumplimiento por parte de Mauritania y Marruecos legitimaba «más que nunca» al Gobierno español para darlos por anulados.

El Gobierno de Suárez accedió a las peticiones de la PNL que exigían un apoyo decidido a la autodeterminación y el reconocimiento del Frente Polisario, aunque no lo hizo en sede parlamentaria, sino a través de una entrevista concedida al diario francés *Le Monde* por el ministro de Exteriores Marcelino Oreja. El ministro expuso así la posición del Gobierno español corrigiendo las «malas interpretaciones» efectuadas por el rey Hassán II de los acuerdos de Madrid: Mauritania, al retirarse de Río de Oro, no había hecho más que «abandonar su papel de administrador del territorio» que tenía derecho a la autodeterminación. En cuanto a la posición del Gobierno español sobre la cuestión saharauí, el ministro aseguró con toda claridad: «Queremos que un referéndum permita a los saharauis autodeterminarse».

Lo más novedoso de la entrevista fue el reconocimiento rotundo y explícito que el ministro hizo del Frente Polisario «como único y legítimo representante del pueblo saharauí en lucha». A diferencia de los comunicados que habían seguido a la visita de Rupérez a los campamentos o al encuentro del presidente Suárez con Abdelaziz en Argelia, en esta ocasión

Oreja se pronunció destacando la importancia que tanto desde el partido de UCD, como desde el Gobierno liderado por Suárez, se daba al Frente Polisario.

Los aliados del movimiento saharaui en el Parlamento acogieron la medida favorablemente y lamentaron que Oreja se negase a hacer lo mismo con la RASD. El ministro alegó que el Gobierno no podía reconocer a la república saharaui por coherencia con la doctrina con la que defendía que la descolonización del pueblo saharaui todavía estaba sin acabar y que su autodeterminación seguiría pendiente mientras no se llevase a cabo la consulta del pueblo saharaui. «Si nosotros reconocemos la RASD es como si la libre determinación ya se hubiera producido, cuando es todo lo contrario: la libre determinación hay que llevarla a cabo mediante un referéndum, y este hecho ha sido reconocido por la OUA», subrayó¹⁷.

Las declaraciones de Oreja a *Le Monde* garantizando el apoyo del Gobierno a toda resolución de la ONU y de la OUA relativas a la organización de un referéndum, crearon ciertas expectativas ante la intervención española en la Asamblea General de la ONU. Resultó muy decepcionante que España se abstuviese en la votación que acabó aprobando por mayoría la resolución 34/37 que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras considera a Marruecos como una potencia ocupante.

Los bandazos de Suárez y la metamorfosis de González

El PSOE y demás partidos prosaharauis acusaron al Gobierno de UCD de llevar a cabo una política de bandazos, sin objetivos claros. También interpretaron el gesto como una claudicación ante Marruecos en un intento de suavizar la grave crisis hispano-marroquí que se desató con las declaraciones de Oreja.

El Gobierno marroquí amenazó a través de la prensa sometida a su férreo control con castigar al Gobierno español adoptando enérgicas represalias que incluían desde un reconocimiento de ETA como único y le-

17 «Oreja: “No reconocemos a la República Saharaui porque no ha habido un referéndum”», *Abc*, 24 de agosto, 1979, 46.

gítimo representante del pueblo vasco, a una amenaza de acciones contra los pesqueros españoles que la armada obligó a retirarse de las costas saharianas controladas por Marruecos.

El simple reconocimiento del Polisario (que el PSOE consideró todavía que no era suficientemente claro) ya había puesto en agosto la situación tan al rojo vivo que el presidente Suárez había estado a punto de interrumpir sus vacaciones y regresar a Madrid para seguir el curso de los acontecimientos desde su despacho oficial por si surgía algún «acontecimiento imprevisto»¹⁸.

A los aplazamientos de la ratificación de los acuerdos pesqueros se sumaron los continuos apresamientos de barcos de pesca españoles. Llegó a haber veintiún barcos retenidos a la vez por las autoridades marroquíes¹⁹. En medios políticos no era ningún secreto que la arbitrariedad con la que se ejecutaban las detenciones en alta mar era la respuesta por el viraje de Suárez en la cuestión del Sahara Occidental.

Pese a las duras críticas que suscitó la abstención española en la votación que aprobó por mayoría una resolución clave para el pueblo saharauí, el propio Frente Polisario y el Gobierno argelino calificaron de «giro histórico» los gestos con los que el presidente Suárez en la práctica había respaldado un reconocimiento internacional del Frente Polisario. Desde Marruecos también se habló (en este caso con gran disgusto) de «cambio de postura» del Gobierno de UCD, poniendo muy de relieve la «posición muy distinta» de Suárez con el Sahara frente a la que en Rabat se atribuía al rey Juan Carlos, supuestamente favorable a su anexión.

Hay que resaltar que, en este viraje, Suárez contó con una situación de gran vulnerabilidad política. El propio relato saharauí sobre el giro de Suárez suele reconocer que el líder de UCD tuvo que afrontar grandes desafíos ante la posición intransigente del reino de Marruecos. Suele poner como ejemplo de ello la aparición de un Frente Patriótico que se hizo responsable de la explosión de varias bombas en Ceuta y Melilla, justo tras el reconocimiento de partido ejecutado por Rupérez en su visita a los campamentos saharauis. El Frente Polisario también atribuyó el brutal asesi-

18 «Se mantiene la tensión entre Marruecos y España», *Abc*, 26 de agosto, 1979, 1.

19 «Aún no hay acusaciones de Marruecos contra los veintiún buques retenidos», *Abc*, 13 abril, 1980, 11.

nato en noviembre 1978 de siete miembros de la tripulación del pesquero *Cruz del Mar*, atacado cuando faenaba en aguas del Sahara Occidental, a un atentado de Marruecos para cortocircuitar el acercamiento hispano-saharaui puesto en marcha por el Gobierno de UCD. Es significativo que, frente a las muchas voces que en España exigieron la ruptura no sólo con el Polisario, sino también con Argelia, el Gobierno de Suárez nunca hizo públicos los resultados de la investigación sobre el caso. Los diputados de la derecha que en el Parlamento habían exigido explicaciones nada más ocurrir la matanza, acusando del ataque al Frente Polisario, inexplicablemente, no volvieron a reclamar.

La política de chantaje marroquí se complementó en la presidencia de Suárez con una situación poco boyante tanto en el plano internacional como en el nacional. El Gobierno de UCD no atravesaba por el mejor de sus momentos en las relaciones con Estados Unidos debido a la tozuda negativa del presidente Suárez a que España ingresase en la OTAN en unas condiciones que consideraba no eran las deseables. El Gobierno de Francia, el otro país con el que habría habido que contar en caso de un enfrentamiento con Marruecos, estaba desde 1975 decidida y activamente alineado con la estrategia anexionista de su ex colonia, en el marco de una política con la que buscaba incluir a la *Françafrique* tanto el Sahara hispanohablante como la otra ex colonia española en África de Guinea Ecuatorial.

En el plano interno, la postura de Suárez en la cuestión del Sahara suscitó fuertes críticas dentro de su partido y, sobre todo, en las fuerzas políticas situadas más a la derecha. Por ejemplo, Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular y luego líder de Coalición Democrática, fue especialmente duro con Suárez, al que señaló como el gran culpable de la crisis con Marruecos así como de los graves perjuicios económicos que ésta estaba causando. Le acusó de llevar adelante una política «tercermundista» que había sacrificado los intereses nacionales que, en su opinión, estaban con Marruecos.

Muy distinto, en cambio, fue el contexto en el que comenzó su andadura el Gobierno de Felipe González tras su aplastante victoria electoral en 1982 que le dio la mayoría absoluta en el Parlamento. Pese a esta situación envidiable en el Parlamento, el nuevo presidente adoptó de inmediato iniciativas para evitar nuevas crisis con el Gobierno marroquí. La primera fue la de realizar su primer viaje oficial fuera de España a Marruecos, donde

mantuvo una entrevista con Hassán II al término de la cual se anunció el comienzo de una nueva etapa en las relaciones hispano-marroquíes presidida por la «cooperación» y un «régimen de confianza» entre ambos países. La consecuencia inmediata fue el silencio del Gobierno socialista a las peticiones con las que el Frente Polisario le instó a cumplir sus promesas con el pueblo saharaui renunciando al acuerdo tripartito.

El PSOE justificó este cambio como la adopción de una posición más neutral en la cuestión del Sahara Occidental²⁰. Mantuvo su discurso público a favor de la autodeterminación saharaui, pero acompañó la renuncia a que España recuperase su papel de potencia administradora con otros movimientos que, en tiempos de Suárez, su partido hubiese condenado como política promarroquí. Resultó sorprendente la firma del acuerdo de pesca con Marruecos, sin ninguna polémica, pese a incluir la expresión de «aguas sujetas a la jurisdicción marroquí» que tanto habían reprochado los socialistas en 1977. Es más, de estar estos polémicos términos en el acuerdo de UCD en un anejo, ahora aparecían nada menos que en el artículo primero del tratado. La escalada en la venta de armas a Marruecos que, al menos oficialmente, había quedado suspendida desde noviembre de 1976, o la cesión a Marruecos del espacio aéreo sahariano que todavía quedaba bajo control canario, fueron algunos de los síntomas más preocupantes de la metamorfosis socialista con la cuestión saharaui.

Felipe González operó este cambio de rumbo sin recibir apenas críticas del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Esta tolerancia hizo pasar desapercibida la queja con que, en junio de 1983, el diputado Gregorio López Raimundo, del Grupo Parlamentario mixto, recordó al nuevo Gobierno del PSOE que, tras la llegada al poder del PSOE, no se había producido el esperado cambio de la política española en la cuestión del Sahara Occidental. «Han ido pasando los meses y la impresión que tiene la opinión pública española e internacional es que el actual Gobierno no está dispuesto a realizar ningún cambio en la política exterior del anterior

20 Rosa Pardo Sanz, «La política exterior de los Gobiernos de Felipe González. ¿Un nuevo papel para España en el escenario internacional?», Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2015. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc1c3v1>.

en lo que se refiere a la cuestión saharauí»²¹. El cambio al que se refería era el de una acción dirigida a denunciar los acuerdos de Madrid y «corregir las graves consecuencias que de aquel acto se han derivado para la normal culminación de la autodeterminación del pueblo saharauí». Su conclusión era tajante: «La España democrática no puede lavarse las manos ante esta cuestión con el argumento de que los Acuerdos de Madrid se firmaron antes de la democracia. España, como nación, como estado, tiene obligaciones ineludibles hacia el pueblo saharauí y su plena autodeterminación e independencia».

Lecciones del pasado aplicables al presente

Resultó sorprendente la reacción del entonces ministro de Exteriores Marcelino Oreja a las propuestas presentadas en 1979 en las Cortes por el PSOE y el PNL exigiendo la denuncia del acuerdo tripartito. Reconoció abiertamente que los acuerdos de Madrid habían quedado en gran medida «vacíos», confirmando la razón que tenían los diputados socialistas al denunciar que la Declaración de Principios había quedado invalidada definitivamente por la firma del acuerdo de Argel del 5 de agosto de 1979.

Oreja añadió incluso otro argumento que venía a dar la razón a la oposición prosaharauí: los acuerdos de Madrid habían quedado invalidados mucho antes de agosto de 1979 a través de esa mala interpretación de la Declaración de Principios que habían hecho los gobiernos de Mauritania y Marruecos en 1976 llevando a cabo un reparto del territorio que no podía hacerse a la luz del texto que habían firmado el 14 de noviembre de 1975.

Pese a estas evidencias, Oreja instó a las fuerzas parlamentarias a renunciar a la denuncia del acuerdo. Insistió en que no tenía sentido denunciarlo y hacerlo público. La razón, alegó, era que, aunque se llevase a cabo la extinción pública del acuerdo, España ya no podía volver a convertirse en potencia administradora como en vísperas del 14 de noviembre de 1975,

21 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados (II Legislatura), Serie E: Preguntas con respuesta oral, 21 de junio de 1983, Núm. 28-I, pág. 61-62.

dando a entender que el ejercicio de responsabilidades de una potencia administradora sólo se produce con una administración efectiva sobre el territorio tutelado.

No surgió ninguna voz desde la oposición que le sugiriese que la denuncia del acuerdo era lo coherente para un Gobierno que había hecho gala de plena adhesión al derecho internacional para justificar no reconocer a la RASD, pero se empeñaba en ignorar las resoluciones de la ONU que habían seguido afirmando (y siguen haciéndolo hasta hoy) que España sigue siendo para las Naciones Unidas la potencia administradora del pueblo saharaui.

El ministro volvió a reiterar esta posición coincidiendo con los debates en Naciones Unidas de la Asamblea General. Una vez más, declaró que España no podía volver jurídicamente a la situación anterior porque los organismos internacionales habían reconocido que España no tenía responsabilidades en el territorio²².

El PSOE acabó retirando la PNL que exigía la denuncia de los acuerdos de Madrid. No cabe deducir de ello que hubiesen dado por buenas las razones del Gobierno para no declarar la defunción oficial del acuerdo y la recuperación de las responsabilidades. De hecho, los dirigentes socialistas dieron su apoyo a otra PNL presentada con el mismo objetivo por el PCE. No contaron con los suficientes votos para que fuese aprobada.

Oreja volvió entonces a justificar el voto en contra de su partido: la postura de España no es reconocer ni movimientos ni Gobiernos, sino Estados, dijo. El Gobierno acababa de reconocer a la Organización para la Liberación Palestina (OLP) pero el ministro justificó este doble rasero alegando que la organización palestina constituía una excepción por tratarse de «un movimiento con status internacional»²³.

El PSOE volvió a reiterar la necesidad de que España ejerciese de nuevo las responsabilidades que la ONU le ha seguido reconociendo con nuevas iniciativas. Un comunicado emitido en 1980 por la Secretaría de Relaciones Internacionales resalta «la responsabilidad que, como antigua potencia colonizadora, cabe a España y, por ende, a sus poderes públicos y a sus

22 «Argelia condena el “silencio” español en el conflicto del Sahara», *Abc*, 25 de noviembre, 1979, 13.

23 «Rechazado el reconocimiento oficial del Frente Polisario», *Abc*, 11 de octubre, 1979, 80.

fuerzas sociales y políticas en la búsqueda de una solución justa y duradera para el Sahara Occidental».

Coincidiendo con la renuncia socialista a la denuncia de los acuerdos de Madrid, esta reivindicación también cayó de la agenda del movimiento solidario español. Se dio por hecho que el reconocimiento internacional logrado por el Frente Polisario ya no hacía necesaria la recuperación de las responsabilidades de España y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui se volcaron en la reclamación de ayudas humanitarias para los refugiados saharauis.

Se eliminó así un discurso que, pese a no haber logrado su objetivo, había sido un arma muy valiosa para cortocircuitar la tendencia que ha perdurado hasta hoy en todo Gobierno español, no importa de qué signo ideológico sea, a permanecer en la inacción, la «neutralidad» y el silencio para evitar «crisis» con Marruecos.

En el revuelto contexto de 1979, la recomendación de Oreja a los parlamentarios apelaba al sentido común con el claro objetivo de salvaguardar los intereses nacionales evitando echar más leña al fuego en un momento de alta tensión de consecuencias imprevisibles en la todavía frágil Transición Democrática. El ministro podía entonces alegar a su favor que, en la práctica, su Gobierno había demostrado que la renuncia formal de España a ejercer sus responsabilidades no era incompatible con una postura a favor del derecho a la autodeterminación saharaui que, en la práctica, era el discurso que correspondía llevar a la potencia administradora. Pero, ¿qué pasa cuando un Gobierno decide que, precisamente porque España ya no tiene oficialmente responsabilidades con el pueblo saharaui, puede incluso adoptar una posición contraria al derecho de autodeterminación y la defensa del referéndum?

Eso es lo que empezó a ocurrir cuando el silencio español sobre cuestiones clave como el rechazo marroquí al censo saharaui elaborado por la ONU (a partir del registro español de 1974) o la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos acabaron socavando la acción de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental que se desplegó en 1991 para organizar la consulta de autodeterminación. Para los Gobiernos españoles ha sido relativamente fácil señalar ante la opinión pública la falta de eficacia de la ONU como la sola culpable del aplazamiento del referéndum.

Queda, sin embargo, a la vista la responsabilidad española en este fracaso onusiano si tenemos en cuenta la visión con la que en 1979 el entonces senador socialista Fernando Morán asignaba a España un papel crucial para el éxito de la acción onusiana: «En la cuestión originaria, España es la clave. Tiene la llave, formalmente, para posibilitar el procedimiento que resuelva el conflicto... En el plano de las Naciones Unidas, la cooperación entre el Gobierno español y el secretario general se impone. Ni uno ni el otro pueden cumplir su función sin apoyo, contacto, información mutuos y decidida de antemano... la referencia del secretario general al organizar el referéndum, salvo que acepte la ocupación, es la antigua potencia administradora»²⁴.

En todo caso, el *fracaso* de la ONU propiciado por la inacción española sirvió de pretexto al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero para dar un nuevo giro de tuerca a favor de Marruecos. A partir de su elección en 2004, este Gobierno socialista comenzó a imponer un discurso que ponía énfasis en la necesidad de buscar otras fórmulas de solución al conflicto, alternativas a la organización del referéndum.

Desde entonces, hasta supone un alivio oír a los representantes del Gobierno español definir el compromiso oficial en esa cantinela que describe el objetivo de la estrategia con la cuestión del Sahara Occidental como la busca de «una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas».

La ambigüedad que introducen los términos «mutuamente aceptable» resulta muy decepcionante si lo comparamos con la claridad de las declaraciones con las que el Gobierno de Suárez acompañó su reconocimiento al Frente Polisario: «Queremos que un referéndum permita a la población saharauí autodeterminarse... Se trata de un problema de descolonización... Apoyaremos toda resolución de la ONU y de la OUA relativas a la organización de un referéndum... Nosotros somos partidarios del ejercicio de la libre determinación de la población saharauí», etc.

24 Fernando Morán, «La solución del Sáhara sin España, sería a costa suya», *Diario 16*, 18 de junio, 1979, 5.

La diferencia es brutal, ya que el discurso que exige una solución «mutuamente aceptable» pone en el mismo plano a agresor y agredido. También hace desaparecer el término «referéndum», convirtiendo la celebración de la consulta de la ONU en una exigencia del Frente Polisario y no un requisito fijado por las resoluciones de la ONU y OUA. El resultado marca un claro retroceso para la causa saharaui frente a la posición oficial establecida por los Gobiernos de Suárez, situando al referéndum como la fórmula ineludible para dirimir pacíficamente la cuestión.

Los motivos que han llevado a este vaciado de contenido de la posición española son los mismos que en 1977 defendían la inacción y la neutralidad: evitar una crispación en las relaciones hispano-marroquíes. Y, como entonces, sólo favorecen a una parte del conflicto: Marruecos. Pero mientras los Gobiernos de Suárez tuvieron que enfrentarse continuamente al discurso y los difíciles argumentos que señalan las responsabilidades jurídicas de España con el pueblo saharaui, los gobiernos que siguieron acabaron aprovechándose de la ignorancia que cundió sobre el manejo de los «textos esenciales» sobre esta cuestión tras el abandono de la campaña contra los acuerdos de Madrid.

Un reciente ejemplo de la apuesta de los políticos partidarios de la neutralidad promarroquí por los efectos del abandono de la campaña contra los acuerdos de Madrid es la respuesta que, a distancia de pocos meses, dieron tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez a las preguntas que el diputado de Ciudadanos Fernando Maura les dirigió instando a sus respectivos Gobiernos a llevar una política con el Sahara acorde con las responsabilidades que la ONU le sigue reconociendo: en ambos casos se contestó que España se desvinculó del pueblo saharaui el 26 de febrero de 1976 y que no hay ningún documento ni resolución de la ONU donde se reconozca que le queden responsabilidades de potencia administradora. Es evidente que, tanto los representantes del PP como los del PSOE, apuestan por el factor *ignorancia* dando por hecho que el contrincante ignora dónde buscar el documento que demuestra la falsedad de su respuesta.

El problema es que, como en los tiempos de Adolfo Suárez, España sigue teniendo la llave de la solución del conflicto. El propio Bujari decía que uno de los factores que había prolongado en el tiempo la tragedia del pueblo saharaui y el calvario que vivía era el abandono que, por primera

vez, había sufrido una colonia por parte de la potencia europea que la controlaba. No se refería sólo al abandono sobre terreno, sino a esa «ambigüedad calculada» en la que «dos tercios de los elementos provienen de una decisión deliberada de no molestar a Marruecos»²⁵.

25 Juan Luis Galiacho, «La ambigüedad de Zapatero es calculada. El delegado del Frente Polisario ante la ONU califica de errónea la estrategia de España sobre el Sahara y critica la “amistad” con Marruecos», *La Clave*.

***La España imposible: una aproximación crítica a nuestra política exterior en relación con el Sahara Occidental*¹**

JAVIER A. GONZÁLEZ VEGA

I never knew a man who had better motives for all the trouble he caused.

Graham Greene, *The Quiet American* (1955)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El punto de partida: los «Acuerdos» de Madrid de 1975 y la Declaración española de 26 de febrero de 1976. 3. La supuesta «neutralidad constructiva» de España en la solución del conflicto. 4. La actitud española ante las cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos en el territorio ocupado. 5. Imposible, pero no tanto: la defensa de los intereses pesqueros españoles en el Sahara Occidental. 6. La imposibilidad española puesta a prueba: los procesos relativos al Sahara Occidental ante el Tribunal de Justicia de la UE (2015-2018). 7. A modo de conclusion: la España imposible.

I. Introducción

Como destacáramos en otro lugar², el 40 aniversario del abandono del territorio del Sahara Occidental pasó en nuestro país sin pena ni gloria a no ser por los actos que desde el movimiento solidario con el Sahara se desarrollaron para «conmemorar» las cuatro largas décadas cumplidas desde aquella oprobiosa retirada. Sin embargo, por parte de nuestro Estado

1 Texto de la Conferencia impartida en Zaragoza en el marco de las VIII Jornadas de Formación de delegados y delegadas saharauis y de CEAS-Sahara, organizada por Um Draiga, el 20 de octubre de 2018. El trabajo se enmarca en el proyecto «Obstáculos a la movilidad de personas en los nuevos escenarios de la UE», DER2017-86017-R.

2 Al respecto, véase nuestra contribución «A Bridge over Troubled Waters (and Sands)? A Critical Sight on Spain's Role in Western Sahara Issue 40 years Later», *Spanish Yearbook of International Law*, vol. 20, 2016, pp. 255-277, escrita al calor de la efeméride y del que —en sustancia— este trabajo es una versión revisada y actualizada.

su característico mutismo se «intensificó» incluso en aquel periodo³, un momento en que los acontecimientos en el territorio experimentaban una aguda crisis a raíz de la visita realizada al área por el entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki Moon, y las críticas dirigidas por Marruecos al alto funcionario internacional con ocasión de aquella visita histórica.

¿Qué otra cosa cabía esperar de nuestro Estado? Sin duda, de disponer de una capacidad de acción exterior menos condicionada por las constricciones políticas y económicas que dictan nuestra relación con la potencia ocupante, Marruecos, hubiera permitido recordar al menos la que —según parece— sigue siendo la posición oficial española ante la situación. Pero ni tan siquiera eso fue posible.

Las líneas que siguen tratan de abordar las manifestaciones características de esta imposibilidad que aqueja a nuestra acción exterior cuando la cuestión del Sahara Occidental se plantea en los foros internacionales. Una imposibilidad, lo avanzamos, no exenta de contradicciones, especialmente cuando los intereses de algunos específicos sectores de nuestra economía —obvio es decirlo, hablamos particularmente del ámbito pesquero— aparecen puestos en juego.

2. El punto de partida: los acuerdos de Madrid de 1975 y la declaración española de 26 de febrero de 1976

El mutismo español ante la cuestión del Sahara Occidental no es reciente. Baste recordar que los infaustos «Acuerdos de Madrid» de noviembre de 1975 se rodearon de una evidente reserva en el curso de su negociación y de una parquedad informativa con ocasión de su anuncio pese a su indiscutible trascendencia para el devenir del conflicto. De hecho, fue Marruecos —y no España— quien procedió a su registro —cual si fuere un tratado⁴— ante la Oficina de Tratados de la Secretaría General de las

3 Aunque suene paradójico el «silencio se hizo atronador» porque en aquellos momentos los desplantes para con el ya cesante Secretario General de las Naciones Unidas por parte de Marruecos hubieran hecho necesaria —si se podía y se debía hablar sobre el conflicto— una toma de posición por parte de nuestro Estado.

4 La denominada *Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el*

Naciones Unidas⁵, aun cuando se mantuviera en secreto el resto de los compromisos acordados al respecto⁶. Habrá quien piense que se trataba de un silencio vergonzante ante la ominosa tropelía —la indiscutible ilegalidad desde la perspectiva jurídica internacional e incluso la interna va de suyo⁷— que se cometía con el pueblo saharauí.

Sahara Occidental de 14 de noviembre de 1975, firmada por C. Arias Navarro, A. Osman y H. Mouknass lo era —aunque podía no serlo— dado que la terminología adoptada (Declaración de principios) resulta irrelevante, desde una perspectiva jurídica, a los efectos de la calificación de un tratado, tal como precisa el art. 2.1 a) de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969 (UNTS, vol. 1155, n.º 331, 1980; BOE, núm. 142, de 13 de junio de 1980. Al respecto, véanse nuestras observaciones sobre la cuestión en nuestro comentario al art. 2 de la vigente Ley 24/2014, de 27 de noviembre de Tratados y otros acuerdos internacionales en ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.; DíEZ-HOCHLEITNER, J.; MARTÍN PÉREZ DE NANCLARES, J. (eds.), *Comentarios a la Ley de Tratados y otros Acuerdos internacionales*, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 101, n. 25).

5 UNTS, vol. 988, I, n.º 14450, 1975.

6 Los anexos secretos a la Declaración, no obstante, serían conocidos tras su divulgación por la prensa española en 1978. En ellos, tal como cabía imaginar, nuestro país se garantizaba la continuidad de su participación en la empresa Fosbucrâa, labores de cooperación técnica en el territorio y, sobre todo, el acceso al banco pesquero sahariano por parte de los buques españoles.

7 La ilegalidad —en sentido propio, ilicitud— internacional era incuestionable al conformar un supuesto de tratado violatorio de una norma imperativa de derecho internacional en los términos del art. 53 de la mencionada Convención de Viena (al respecto véase ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.; GONZÁLEZ VEGA, J.A. (col.), *Sistema de Derecho internacional público*, 5.ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2018, p. 186). Por otra parte, la irregularidad de la cesión del territorio quedaba clara por el hecho de que «nadie puede dar lo que no tiene» y una potencia administradora no puede ceder sus responsabilidades sobre un territorio no autónomo a terceros Estados sin contar con la autorización de la ONU. En cuanto al Derecho interno español, pese a la precaria legalidad franquista, su conculcación se desprendía del hecho de que la cesión territorial instrumentada a través del tratado de 14 de noviembre de 1975, no era objeto de examen —en puridad, un simple dictamen de su Comisión de tratados— por las Cortes españolas, en contrariedad con lo dispuesto en el art. 14 de su propia Ley constitutiva; sin que, además, la Declaración fuera en ningún momento publicada oficialmente en nuestro país. Frente a ello, recuérdese que aquéllas sí habían intervenido por tan angosto cauce cuando se acordó convencionalmente en 1969 la retrocesión a Marruecos del territorio de Ifni, cuyo texto fue además publicado en el BOE (Cfr. Instrumento de ratificación del tratado por el que el Estado español retrocede al Reino de Marruecos el territorio que éste le había previamente cedido en aplicación del artículo 8 del Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860, firmado en Fez el 4 de enero de 1969, BOE, núm. 134, de 5 de junio de 1969).

Claro que siempre cabe pensar que el silencio es mejor opción⁸ cuando las alternativas son o bien hablar con «lengua de madera» (*langue de bois*)⁹ –que dicen los franceses– o bien hacerlo con «lengua bífida». De lo primero es prueba el discurso pronunciado por el actual Presidente del Gobierno, Sr. P. Sánchez Castejón, quien en su intervención con ocasión de la inauguración del 73º periodo de sesiones de la AG el pasado septiembre, cuando en el «preceptivo» párrafo dedicado al Sahara Occidental recurría a los manidos argumentos de defender «la centralidad de Naciones Unidas», así como:

contribuir a los esfuerzos del secretario general y de su enviado especial para alcanzar una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas¹⁰.

De lo segundo era muestra el tratamiento que dispensaba la Asamblea General a su conocimiento del abandono del territorio por parte de España en el ya lejano diciembre de 1975, cuando en su Resolución 3458 (XXX) de 10 de diciembre de 1975 afirmaba una cosa y su contraria. En concreto, en su parte A decía la AG que:

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara Español a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

2. Reafirma su adhesión al principio de la libre determinación de los pueblos y su preocupación por ver aplicado este principio a los habitantes del

8 Como bien se ha dicho «nunca se debe dejar de contener la pluma, si no se tiene algo que decir más valioso que el silencio» (DINOUART, J.A.T., *El arte de callar* (trad. M. Armijo), Siruela, Madrid, 2001 (ed. or. 1771), p. 103).

9 Sobre el particular, véase ARIFON, O., «Langue diplomatique et langage formel: Un code à double entente», *Hermès*, núm. 58, 2010, pp. 71-78

10 Cfr. Intervención del presidente del Gobierno en el debate general del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, jueves 27 de septiembre de 2018; accesible en <<http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2018/prsp20180927.aspx>>.

Territorio del Sahara Español en un marco que les garantice y permita la libre y auténtica expresión de su voluntad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

3. Reafirma la responsabilidad de la Potencia administradora y de las Naciones Unidas con respecto a la descolonización del Territorio y a la garantía de la libre expresión de los deseos del pueblo del Sahara Español.

En tanto que en su parte B disponía que:

1. Toma nota del acuerdo tripartito firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, cuyo texto fue transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1975 (76).

2. Reafirma el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del Territorio a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

3. Pide a las partes en el acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 que velen por el respeto de las aspiraciones libremente expresadas de las poblaciones saharianas.

El diablo está en los matices y éstos son precisamente en los que ha de repararse para percibir los términos contradictorios de la Resolución¹¹.

11 Por otro lado, la misma AG ha contribuido a ensombrecer el panorama con una posición que cabe calificar de débil y discontinua: sólo 2 resoluciones en 40 años de conflicto han condenado la «persistente ocupación» marroquí urgiéndole a abandonar el territorio! Se trata de las resoluciones AG 34/37, de 21 de noviembre de 1979 y 35/19, de 11 de noviembre de 1980. Ello ha sido interpretado por las autoridades marroquíes y sus corifeos como ejemplo del declinante apoyo a la libre determinación del territorio (CARA, J.Y. de, «Souveraineté de Maroc sur le Sahara», en SAINT-PROT, CH., DE CARA, J.Y., BOUTIN, CH. (eds.), *Sahara Marocain. Le dossier d'un conflit artificiel*, Les Éditions du Cerf, Paris, 2016, p. 150). Aunque es cierto que para otro sector aquellas resoluciones confirmarían el reconocimiento —bien que tenue— de la comunidad internacional al proceso de libre determinación (DAWIDOWICZ, M., «Trading fish or human rights in Western Sahara? Self-determination, non-recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement», en FRENCH, D. (ed.), *Statehood and Self-determination. Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge UP, Cambridge, 2013, p. 272). De cualquier modo, en 1990 la AG reafirmó que la cuestión era un problema de descolonización que requería de la participación del pueblo del territorio. Si bien, como se ha destacado la cuestión se plan-

En todo caso, para España la forma de salir del embrollo creado no fue otra sino optar por una «solución salomónica»¹², plasmada en la Declaración de 26 de febrero de 1976, conforme a la cual:

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 de la Declaración de Principios de Madrid de 14 de noviembre de 1975, el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sahara y estima necesario dejar constancia de lo siguiente:

a) España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la Administración temporal que se estableció para el mismo.

b) La descolonización del Sahara occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente¹³.

El carácter contradictorio de esta posición estriba en que, de un lado, España asume la validez de la Declaración del año anterior, en virtud de la cual pretende resignar sus responsabilidades sobre el territorio; de otro, en la caracterización como inconcluso del proceso de descolonización del territorio hasta en tanto se realice un referéndum de libre determinación con arreglo al cual el pueblo saharaui exprese válidamente su opinión al respecto.

Tal como se ha destacado, la ambigüedad de la Declaración iba a propiciar que, durante el periodo de la transición, las fuerzas políticas de la oposición se sirvieran de ella para denunciar la —a su juicio— insostenible posición española, cuestionando la legitimidad y licitud de la actuación gubernamental¹⁴. No es menos cierto que, con posterioridad, los Gobiernos

tea ahora en puridad como un problema de ocupación militar al que se suma la irresuelta libre determinación del pueblo saharaui (HEBIÉ, M., «Was There Something Missing in the Decolonization Process in Africa?: The Territorial Dimension», *Leiden Journal of International Law*, vol. 28, 2016, p. 533).

12 De «vía intermedia» habla VILLAR, F., *La Transición exterior de España. Del aislamiento a la influencia (1976-1996)*, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 32.

13 Carta de fecha 26 de febrero de 1976 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, *Doc. NU, A/31/56-S/11997*.

14 HERNANDO DE LARRAMENDI, M., «La cuestión del Sahara Occidental en la política exterior española», en *Sahara Occidental. 40 años después*, en BARREÑADA, I., OJEDA, R. (eds.), *Libros de la Catarata*, Madrid, 2016, p. 265.

sucesivos van a asumir formalmente tal posición¹⁵. De hecho, aún bajo la Presidencia de M. Rajoy nuestro Gobierno insistía en que:

España no tiene responsabilidades en el Sahara Occidental desde el 26 de febrero de 1976, cuando el Embajador Representante de España ante Naciones Unidas dirigió una carta al Secretario General de la Organización informándole de que «España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad internacional con relación a la administración de dicho territorio». Esta posición se recoge de forma reiterada, año tras año, en la declaración anual de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre territorios no autónomos.

España no es por lo tanto potencia administradora del Sahara Occidental, al haber renunciado al ejercicio efectivo de esa administración.

Dado que España no tiene el control efectivo sobre el territorio del Sahara Occidental, no puede ejercer ninguna de las funciones y competencias propias de las potencias administradoras de conformidad con el régimen establecido en la Carta de NNU¹⁶.

Es más, en una continuidad que no ha de sorprender a los más avisados sobre el tema, de acuerdo con recientes manifestaciones de nuestro

15 Siempre quedará la duda de qué cambio hubiera podido experimentar la posición española en el tema que nos ocupa de haberse consolidado el inequívoco giro que bajo las sucesivas presidencias de J. M. Aznar experimentaron las relaciones con Marruecos a raíz de la reorientación multilateral (léase aproximación a Argelia) de la política española hacia el Magreb. Como es sabido, las crecientes tensiones con el vecino del sur —precedidas de una llamada a consultas del embajador marroquí en Madrid, A. Baraka, en octubre de 2001— culminaron con el incidente de Perejil de julio de 2002, frustrando la posible emergencia de un nuevo enfoque de la cuestión (al respecto, véase ARÁNGUEZ ARÁNGUEZ, J.C., «La acción exterior del Estado hacia el Magreb (1986-2002): El caso paradigmático de Marruecos», en PEREIRA CASTAÑARES, J.C., ALIJA GARABITO, A.M., LÓPEZ ZAPICO, M.A., *La política exterior de España. De la transición a la consolidación democrática (1986-2001)*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2018, pp. 170-171).

16 Contestación del Gobierno a la pregunta sometida por el diputado Gaspar Llamazares Trigo (Grupo parlamentario de La Izquierda Plural) sobre admisión por el Gobierno del hecho de que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el Sahara Occidental, BOCG, núm. 523, 25 de septiembre de 2014; reprod. en *Actividades, Textos y Documentos de la política exterior española*, 2014, p. 710. Sobre los motivos que impedirían mantener esta posición remitimos al estudio de RUIZ MIGUEL, C., «Las obligaciones legales de España como potencia administradora del Sahara Occidental», *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. 28, 2010, pp. 303-331.

flamante representante ante Naciones Unidas, el embajador A. Santos Maraver¹⁷, la declaración adoptada por el Gobierno Arias Navarro continúa constituyendo la doctrina oficial de nuestro Estado ante el conflicto¹⁸.

En este contexto se comprenderá que las relaciones con el Frente Polisario no hayan ido más allá de atribuirle un reconocimiento limitado a la Delegación establecida en Madrid en 1978 en tanto que «Movimiento de Liberación Nacional reconocido por las Naciones Unidas», mas sin atribuirle estatuto diplomático, ni conferirle la condición de «único y legítimo representante del pueblo saharauí»¹⁹; situación que se han mantenido inalterada desde entonces pese al acceso al poder en 1982 del Partido Socia-

17 Declaraciones del Sr. A. Santos Maraver al que esto escribe con ocasión de la entrevista mantenida en la sede de la Representación permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York el 11 de octubre de 2018. Sobre la posición oficial española tiene interés la pregunta escrita dirigida al Gobierno por parte del portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de AAEE, donde inquiriere acerca de la posibilidad de que nuestro Estado formalice su renuncia ante la AG de las Naciones Unidas «con el fin de hacerla efectiva bajo la legalidad internacional» (Cfr. *BOCG, Congreso de los Diputados*, Serie D, 17 de diciembre de 2018, p. 2).

18 Este compromiso *sui generis* de nuestro Estado con la libre determinación del territorio, no se ve empañado por el hecho de que algunos documentos con implicaciones sobre nuestra acción exterior puedan minimizar o eludir la cuestión. En tal sentido, aunque se ha llamado la atención sobre la ausencia de referencias al principio en la consideración de la cuestión del Sahara Occidental en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 (DÍEZ PERALTA, E., «La Seguridad Nacional de España y el Mediterráneo», en ROLDÁN BARBERO, J. (dir.), *La Seguridad Nacional de España: Un enfoque geoestratégico*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 175) no lo consideramos revelador si se piensa en que la mucho más relevante —y posterior— Estrategia de Acción Exterior sí lo contempla expresamente (Cfr. texto en <<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20ACCION%20EXTERIOR%20castellano.pdf>>). En cambio, sí convendrá reflexionar acerca de lo que supone el que la vigente Estrategia de Seguridad Nacional 2017 no haga la más leve alusión al Sahara Occidental en su descripción de nuestro entorno geopolítico (cfr. texto en <http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf>). ¿Acaso, el conflicto del Sahara y su irresolución no es relevante en términos de nuestra seguridad nacional? Piénsese, a modo de ejemplo, en la «crisis de Guerguerat» (2017-2018), que a punto estuvo de abocar a una confrontación armada entre Marruecos y el Frente Polisario con la consiguiente implicación argelina, y, todo ello, a nuestras puertas (Sobre el particular, véase LOUNNAS, D., MESSARI, N., «Algeria-Morocco Relations and their Impact on the Maghrebi Regional System», *MENARA Working Papers*, núm. 20, octubre 2018, p. 4; accesible en <https://www.academia.edu/37687035/Algeria_Morocco_Relations_and_their_Impact_on_the_Maghrebi_Regional_System?email_work_card=title>).

19 VILLAR, *La transición exterior...*, cit., p. 66.

lista, cuyas relaciones previas con el legítimo representante del pueblo saharaui podían hacer albergar un cambio significativo de orientación²⁰. No ha sido así, y, con la salvedad del cierre temporal de la oficina de representación (1985-1989) con ocasión de los incidentes que afectaron a pesqueros españoles y derivados de la que en otro lugar hemos denominado como *diplomacia de la Zodiac*²¹, la situación se ha mantenido pues invariada hasta nuestros días.

3. La supuesta «neutralidad constructiva» de España en la solución del conflicto

En abierta contradicción con su condición de potencia administradora²², España ha rehuído constantemente sus responsabilidades sobre el territorio, aunque —conviene advertirlo— sin que ello haya supuesto la más leve recriminación desde los órganos de Naciones Unidas. De hecho, la participación de nuestro Estado en las sesiones de la IV Comisión de la AG, competente en las materias de descolonización, se limita a la sola cuestión de Gibraltar, excluyendo cualquier intervención cuando en ese órgano se debate la cuestión del Sahara Occidental²³. Este comportamiento ha propiciado el alumbramiento de la espuria noción de «potencia administradora

20 Al respecto, MARQUINA BARRIO, A., «El conflicto del Sahara y la Cooperación Global del Gobierno español con Argelia y Marruecos», *Revista de Estudios Internacionales*, vol. 4, 1983, pp. 758-759.

21 Para referirnos —en remedo de la clásica expresión «diplomacia de la cañonera»— a las competencias represivas ejercidas por el Frente Polisario sobre los espacios marinos aledaños al Sahara en el curso de su enfrentamiento militar con Marruecos a través de tales embarcaciones. Sobre el particular véase nuestra contribución «La Guerra de los Mundos: Realidad vs. Formalismo jurídico o el poder de la interpretación (A propósito de la Sentencia TJUE de 27 de febrero de 2018, *Western Sahara Campaign UK*, C-266/16), *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 60, 2018, p. 533.

22 Caracterización que pese a describir los documentos de Naciones Unidas, nuestro Estado refuta, tal como reiteraba el Sr. A. Santos Maraver en la entrevista citada.

23 En ocasiones, la abstención de España en la correspondiente votación ha sido explicada (Comunicado del MAAEE, 20 de octubre de 2004, *Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española*, 2004, p. 941). Obviamente, las más de las veces, no ha ocurrido tal cosa.

de facto» atribuida a Marruecos en el controvertido «Informe Corell»²⁴; una noción sobre la cual conviene mantener evidentes reservas toda vez que, como se ha destacado certeramente:

las potencias administradoras «de facto» no existen, existen las potencias administradoras identificadas como tales por Naciones Unidas, en este caso España, y obligadas a cumplir con el artículo 73 de la Carta y con la libre determinación de los pueblos como norma de *jus cogens*. Esta relación jurídica, no es sinalagmática, no hay reciprocidad entre España y el pueblo saharauí, sino que sólo Naciones Unidas puede relevar a España de su función. Además, en la práctica de Naciones Unidas jamás se ha conocido esta categoría que no es asumida por los órganos de la Organización, simplemente porque no existe ni en la Carta ni en las resoluciones sobre descolonización, que se han basado en la existencia de un territorio no autónomo, una potencia colonial y administradora y el papel de Naciones Unidas. Ni siquiera la más que dudosa posición de las Instituciones de la Unión Europea, cuando tratan a Marruecos como potencia administradora de facto, son admisibles; se basan en un desiderátum de ese país para ocultar su verdadero rostro; es decir, la condición ilegítima en la que explota los recursos naturales del Sahara Occidental²⁵.

Que los partidarios de las tesis marroquíes transforman en una reintegración del territorio marroquí del que deriva luego la imposible libre determinación.

La posición española no deja de incurrir en una nueva contradicción cuando, afirmándose ajena al conflicto, se compromete en participar en

24 Doc. NU, S/2002/161. El informe, realizado por el diplomático sueco H. Corell —a la sazón Subsecretario General y Jefe del Departamento Jurídico de Naciones Unidas— contribuyó a la mistificación del papel de Marruecos en el conflicto, al dotar a sus funciones de un aura de legalidad de la que carece quien es descarnadamente un ilegal ocupante militar del territorio. No por casualidad, nuestro Estado se ha asido a esa caracterización para rechazar toda implicación en el conflicto (Véase Respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria sobre el tema, 15 de noviembre de 2005, *Actividades, Textos y Documentos...*, 2005, p. 1062).

25 RODRÍGUEZ MAGDALENO, R., «La explotación de los recursos del Sahara Occidental», en la obra colectiva *Sahara Occidental: Cuarenta años construyendo resistencia*, Zaragoza, Pregunta, 2016, pp. 245-246.

el «Grupo de Amigos para el Sahara Occidental»²⁶; siendo, de hecho, el único miembro no permanente del Consejo de Seguridad que ostenta tal condición. Ciertamente, no quiere ello decir que nuestro Estado desarrolle allí una posición proactiva en aras de solucionar el conflicto. Porque aunque nuestra diplomacia afirma contribuir «activa y directamente» en las negociaciones que regularmente conducen a las sucesivas prórrogas del mandato de la MINURSO²⁷, lo cierto es que esa supuesta implicación activa se limita siempre a compartir las opiniones expresadas por los actores principales: a juicio de España, Francia y, en menor medida, EEUU²⁸. De hecho, como se ha destacado, pese a su presencia en ese entorno

*throughout these years Spain has been totally unable to adequately remedy the weakness and abandonment that resulted from the Madrid Agreements*²⁹.

Por ello, no ha de sorprender que con ocasión de su acceso a la condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad —tanto en el bienio 2003-2004 como en el 2015-2016— la participación española en este órgano de Naciones Unidas al que se atribuye la responsabilidad primordial en orden al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales fuera meramente retórica en lo que respecta a la cuestión del Sahara Occidental. De hecho, en el año 2003, durante el primero de sus mandatos,

26 Como se verá, lleva razón J. SOROETA cuando, con sorna, afirma que esta formación debería revisar su denominación para calificarse como «Grupo de amigos del conflicto del Sahara Occidental» (Cfr. SOROETA LICERAS, J., «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental o el dogma de la inmaculada legalidad de la acción exterior de la Unión Europea y sus consecuencias», *Revista General de Derecho Europeo (Iustel)*, núm. 46, octubre 2018, p. 113).

27 Comparecencia del Ministro de AAEE, Sr. J. M. García-Margallo, ante el Pleno del Senado, 24 de abril de 2012, *BOCG*, núm. 14; reprod. en *Actividades, Textos y Documentos...*, 2012, p. 459.

28 Véase la comparecencia del Ministro de AAEE, Sr. M.A. Moratinos Cuyaubé, ante la Comisión de AAEE del Congreso, 9 de marzo de 2010; reprod. en *Actividades, Textos y Documentos...*, 2010, p. 353. De hecho, la actividad del «Grupo de Amigos del Sahara Occidental» ha recibido frecuentes críticas al no permitir habitualmente la participación de otros miembros del CS en la elaboración del texto de la Resolución a someter a aprobación del Consejo (SIEVERS, L., DAWS, S., *The procedure of the UN Security Council*, 4.^a ed., Oxford UP, Oxford, 2014, p. 149).

29 PONS RÀFOLS, X., «Spain in the United Nations: Sixtieth Anniversary», *Spanish Yearbook of International Law*, vol. 19, 2015, p.115.

al ejercer la presidencia mensual del órgano, el representante español, el Embajador I. Arias afirmaba que:

España, que siempre ha mantenido una política de neutralidad constructiva y de no imposición a las partes de una solución de arreglo determinada, no ha escatimado esfuerzos, tanto como parte interesada en este contencioso como en su condición de Presidente del Consejo, para aunar el mayor grado posible de consenso³⁰.

Una línea que mantenía aún más recientemente con motivo de su segundo mandato (2015-2016), en el cual nuestro Estado afirmaba su disposición a satisfacer el bienestar y las expectativas del pueblo saharauí y a favorecer, en el contexto de las relaciones de Buena vecindad con Marruecos y Argelia, una solución políticamente aceptable, justa y duradera que incluya la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad por lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad³¹. Fórmula

30 Intervención ante el CS del representante permanente de España, Sr. I. Arias, 31 de julio de 2003, *Doc. NU, S/PV.4801*, p. 5 (cursivas añadidas). Esta «neutralidad constructiva» mudó —aparentemente— en una «activa implicación en la solución del conflicto» con ocasión del acceso al poder del Partido Socialista en el año 2004 (HERNANDO DE LARRAMENDI, M., GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I., ATAOLA PIAZZA, B., «El Ministerio de Asuntos Exteriores y la política exterior hacia el Magreb», en HERNANDO DE LARRAMENDI, M., MAÑÉ ESTRADA, A. (eds.), *La Política Exterior Española hacia el Magreb. Actores e intereses*, Ariel-RI Elcano, Barcelona, 2009, p. 87). De hecho, las primeras gestiones del Gobierno socialista —incluido un viaje a Tinduf en junio de 2004 del Sr. B. León, a la sazón Secretario de Estado de AAEE— provocaron seria preocupación en el Gobierno marroquí (LARBI MESSARI, M., *Las relaciones difíciles. Marruecos y España*, Almuzara, Córdoba, 2009, p. 133). Sin embargo, «la sangre no llegó al río» y España pronto abandonó este enfoque.

31 <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CSNU2015-2016/Documents/PROGRAMA%20ESPANA%202015-2016%20ENG.pdf>. Programa. España 2015-2016 Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, MAAEEC, Enero de 2015, p. 12. Pese a este declarado propósito, la crónica de la actividad desarrollada en el curso del mandato no dedicaba la mínima mención a la cuestión (Véase SANABRIA VALDERRAMA, F.J., «Recuerdos de campaña y apuntes al natural de los quehaceres en el quinto mandato de España en el Consejo de Seguridad (2015-2016)», en PONS RÀFOLS, X. (ed.), *Las Naciones Unidas desde España. 70 Aniversario de las Naciones Unidas. 60 aniversario del ingreso de España en las Naciones Unidas*, ANUE, Barcelona, 2015, pp. 489-499. Tampoco el anexo documental que acompaña a esta obra dedica alusiones al tema pese a abordar los sesenta años de actividad española en la organización.

retórica —y nada más— que reiteraba al condensar nuestro Ministerio de AAEE los «resultados» de aquellos afanes³².

De hecho, el único resultado concreto de la «implicación española» en el proceso se limitaba a recoger una mención a la ayuda humanitaria a los campos de refugiados de Tinduf a través de la financiación de programas de ayuda alimentaria (punto 11 de la Resolución CS 2218 (2015), de 28 de abril)³³. Lo que ha de tenerse por un modesto resultado si se piensa que esta medida ha sido la única sostenida por nuestro país a lo largo del tiempo, pero obra, ante todo, de la presión de la opinión pública y fundamentalmente sostenida por las contribuciones de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y la sociedad civil³⁴.

De forma mucho más evidente las limitaciones en el actuar de España en el Consejo de Seguridad quedaron patentes cuando en la primavera de 2016, al hilo del «incidente de Bir Lehlu»³⁵, nuestro país declinó todo papel en la crisis generada por la reducción del contingente de MINURSO decretada por Marruecos, limitándose a deplorar la adopción de la resolución CS 2285 (2016), de 29 de abril, por una mayoría de votos —frente a la usual unanimidad— y recurriendo al manido ritornello de los «esfuerzos para ayudar a las partes a alcanzar una solución justa, políticamente duradera y mutuamente aceptable»³⁶.

32 Cfr. *Spain in the United Nations Security Council: Review of 2015 and Priorities for 2016*, MA-AEE, p. 14; texto accesible en <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Documents/2016_ENERO_BALANCE%20CSNNUU%20ENG.PDF>.

33 Véase intervención ante el CS del representante permanente de España, Sr. R. Oyarzun Marchesi, 28 de abril de 2015, *Doc. NU, S/PV.7435*, p. 4.

34 Al respecto, véase RUIZ SEISDEDOS, S., GRANDE GASCÓN, M.L., «La cooperación española con la población saharauí», en *Sahara Occidental. 40 Años después...*, cit., pp. 277-292. De hecho, no creemos que sea necesario recordar que la implicación estatal en la cooperación al desarrollo en general se ha visto significativamente reducida en los últimos años (véase nuestra contribución «¿Ordenar la acción exterior o desvirtuar una cooperación exangüe? Sobre el futuro de la cooperación al desarrollo a la luz de la nueva Ley de Acción Exterior», *Revista de Cooperación*, 2014, núm. 4, pp. 75-80) y eso por no mencionar las medidas acordadas específicamente en relación con el Sahara Occidental por parte de nuestro Estado (p.e., retirada de los cooperantes españoles en el verano de 2012 a raíz de los secuestros realizados por terroristas salafistas).

35 Sobre el particular remitimos a nuestro estudio «A bridge over troubled waters (and sands)?...», cit.

36 Véase intervención ante el CS del representante permanente de España, Sr. R. Oyar-

4. La actitud española ante las cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos en el territorio ocupado

A tenor de todo lo expuesto no ha de extrañar que nuestro país tampoco se haya mostrado atento ante lo que cabría calificar como sistemática violación de los derechos humanos en el territorio. De hecho, tal como se ha señalado:

*the territory's government is more concerned with policing than in the rest of the country, and the violation of human rights constitutes a persistent instrument of political control*³⁷

zun Marchesi, 29 de abril de 2016, *Doc. NU*, S/PV.7684, pp. 6-7. En franco contraste con la pusilánime actitud de nuestro representante, el representante permanente de Nueva Zelanda —que se abstuvo en la votación— no reparó en críticas a la situación planteada por Marruecos y acertaba en su diagnóstico de la situación cuando advertía que: «hemos visto, una vez más, la preparación de un texto en un Grupo de Amigos, cuya composición no refleja toda la serie de perspectivas que existen sobre el Sahara Occidental, ni entre los protagonistas en esta cuestión ni en el Consejo, y una falta de voluntad para aceptar enmiendas modestas sobre un texto en el que se aborda una cuestión de importancia para todo el Consejo y, sin duda, para todos los Miembros de las Naciones Unidas. A juicio de Nueva Zelandia (*sic*), la resolución aprobada hoy no está a la altura de lo que el Consejo debería hacer para desempeñar de manera apropiada sus responsabilidades sobre el Sahara Occidental. En una resolución que verdaderamente reflejara la gravedad de la crisis actual que afronta la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y la magnitud del desafío inherente en el pleno cumplimiento del mandato de la MINURSO debería haberse hecho lo siguiente. Primero, en la resolución debería haberse expuesto la realidad de que la expulsión del componente civil comprometió seriamente a la Misión y su capacidad para cumplir su mandato. La Secretaría ha señalado estos hechos de manera reiterada en sus exposiciones informativas formuladas ante el Consejo en el último mes. Segundo, en la resolución debería haberse solicitado el restablecimiento inmediato del pleno funcionamiento de la Misión y haberse contemplado la participación constante del Consejo a fin de garantizar el pleno funcionamiento en el futuro cercano... Por último, en nuestra opinión, todos los miembros del Consejo de Seguridad deben reflexionar sobre las consecuencias más amplias que el actual episodio tiene en el despliegue de la MINURSO para la dirección del Consejo de sus operaciones de mantenimiento de la paz en el plano mundial» (Intervención ante el CS del representante permanente de Nueva Zelanda, Sr. Van Bohemen, 29 de abril de 2016, *Doc. NU*, S/PV.7684, p. 3).

37 CAMPOS SERRANO, A., RODRÍGUEZ ESTEBAN, J.A., «Imagined territories and histories in conflict during the struggles for Western Sahara, 1956-1979», *Journal of Historical Geography*, vol. 55, 2017, p. 57.

Frente a este panorama, la actitud española —tal como han venido a confirmar significativos episodios producidos en los últimos años— se ha revelado de una imposibilidad sobrecogedora, diciendo muy poco bueno de una diplomacia que se dice inspirada en la promoción y respeto de los derechos humanos; sirva para demostrarlo la crisis acaecida a raíz de la huelga de hambre de la activista saharauí Aminetu Haidar. Fue un ejemplo revelador de lo que decimos; en ella, la actitud vacilante del Gobierno español contrastó abiertamente con las posiciones expresadas desde diferentes instancias internacionales³⁸.

Una nueva muestra de la imposibilidad de nuestras autoridades tuvo ocasión de hallar reflejo en el otoño de 2010 a propósito de los incidentes de Gdeim Izzik. Entonces, aunque nuestro Estado deploró los acontecimientos con motivo del desmantelamiento del campamento, mostró una actitud de escasa firmeza ante el Gobierno marroquí, aduciendo razones de «prudencia»³⁹. Incluso, cuando poco después llegaron a nuestro país activistas saharauis que huían de la represión desatada por Marruecos, las solicitudes cursadas por treinta de éstos con miras a obtener asilo en España fueron rechazadas por nuestras autoridades, siendo confirmadas tales decisiones denegatorias por la Audiencia Nacional. Con todo, es cierto que no llegó a consumarse su devolución a Marruecos, dado que los solicitantes presentaron su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo que, inicialmente, les otorgó medidas provisionales que imposibilitaron su entrega para luego fallar en contra de nuestro Estado

38 La posición española contrastaba abiertamente con la de la propia Unión Europea, que, por medio de la Presidencia sueca del Consejo, emitía una declaración sobre la cuestión el 11 de diciembre de 2009 e incluso de otros países de nuestro entorno. Italia, por ejemplo, donde el Gobierno del Sr. S. Berlusconi asumía la Resolución sobre el tema aprobada por la Camera dei Diputati (Risoluzione no. 7-00338, 20 de julio de 2010) donde —en clara alusión al asunto Haidar— se exigía el respeto de la libertad de expresión, así como el «derecho a entrar en el propio país de acuerdo con el artículo 12 apartado 4 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos» (Véase «Italian Practice related to International Law», *Italian Yearbook of International Law*, vol. 20, 2010, pp. 447-448).

39 Comparecencia de la Ministra de AAEE y Cooperación, Sra. T. Jiménez García, ante el Pleno del Senado para contestar a la pregunta parlamentaria del Senador, Sr. F. J. Tuñón San Martín (Grupo Mixto), sobre las medidas a adoptar por el Gobierno en relación con los graves ataques del ejército marroquí en los campamentos de El Aaiún, (BOCG, núm. 100, 16 de noviembre de 2010; reprod. en *Actividades, Textos y Documentos...*, 2010, p. 444).

por violación del artículo 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en relación con los arts. 2 y 3 del mismo (efectividad de los recursos interpuestos para prevenir una entrega que conduzca a posibles violaciones del derecho a la vida o a la integridad física)⁴⁰.

Por otra parte, cuando en marzo de 2013 el Consejo de Seguridad sopesaba la posibilidad de atribuir a la MINURSO un mandato específico en materia de derechos humanos —inexistente hasta ahora en abierto contraste con lo dispuesto en otras misiones desarrolladas por las Naciones Unidas⁴¹— fue España quien junto a Francia apoyó el rechazo de tal posibilidad⁴².

40 Sentencia TEDH de 24 de abril de 2014, *A.C. y otros c. España*, demanda núm. 6528/11 *et alii*, ECLI:CE:ECHR:2014:0422JUD000652811. El texto en castellano (no auténtico) puede consultarse en <file:///C:/Users/Powerot/Downloads/CASE%20OF%20A.C.%20AND%20OTHERS%20v.%20SPAIN%20-%20[Spanish%20Translation]%20summary%20by%20the%20Spanish%20Ministry%20of%20Justice.pdf>. En su anexo se contiene la relación de Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN en relación con los casos sometidos.

41 Al respecto, véase PEREA UNCETA, J., «Los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en materia de protección de los derechos humanos: inclusión y problemática», en LÓPEZ MARTÍN, A.G. (ed.), *Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 173-208.

42 Previamente, España parecía dispuesta a incorporar tal previsión. De hecho, en abril de 2012, a través de su participación en el «Grupo de Amigos para el Sahara Occidental», el Ministro de AAEE, Sr. J.M. García-Margallo y Marfil, se mostraba favorable a ello (Comparecencia ante el Pleno del Senado, 24 de abril de 2012, BOCG, núm. 14; reprod. en *Actividades, Textos y Documentos...*, 2012, p. 459). Sin embargo, la Resolución CS 2044 (2012), de 24 de abril, adoptada el mismo día por unanimidad, excluyó tal posibilidad, aparentemente en sintonía con la opinión sustentada por el representante permanente de Marruecos que rechazaba la posibilidad de ampliar «el mandato para que incluya cuestiones que son irrelevantes para las funciones y la naturaleza de la Misión» (Intervención del representante permanente de Marruecos, Sr. Loulichki, Doc. UN, S/PV. 6758, p. 4). En el caso español, el abandono de su proclividad anterior respondería al hecho —de acuerdo con la opinión expresada por el entonces representante permanente adjunto ante Naciones Unidas, Sr. J. M. González de Linares— de que «las cuestiones relativas a los derechos humanos no deberían abordarse en el Consejo de Seguridad, sino en el Consejo de Derechos Humanos, siendo un error de la «administración Obama» el llevar el asunto ante el CS!! (Declaraciones al autor en la sede de la Misión permanente de España ante Naciones Unidas, Nueva York, 9 de octubre de 2014).

Más aún, cuando en febrero de 2013 un Tribunal militar marroquí condenó a una serie de activistas saharauis a severas penas —muchas de ellas de reclusión a perpetuidad— por su supuesta implicación en los incidentes de Gdeim Izzik en el curso de los cuales habrían sido presuntamente asesinados ciudadanos marroquíes, no se produjo ninguna declaración por parte del Gobierno español, en contra de su conocida política en materia de respeto de los derechos humanos. De hecho, el ominoso silencio del Gobierno se reveló conscientemente calculado, toda vez que cuando apenas un año más tarde el Gobierno marroquí decidía suprimir en lo sucesivo el enjuiciamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar —lo que apuntaba directamente al juicio de Gdeim Izzik— entonces sí rompía España su mutismo para congratularse:

por la decisión tomada el pasado día 14 de marzo por el Gobierno de Marruecos de presentar al Parlamento un proyecto de ley para modificar la jurisdicción de los tribunales militares de forma que éstos no puedan juzgar a civiles.

La aprobación de una modificación legislativa para limitar el ámbito jurisdiccional militar y adaptarlo a la constitución de 2011 y a las normas internacionales sobre derechos humanos internacionalmente aceptadas, unida a las nuevas disposiciones sobre la competencia del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí para recibir y gestionar quejas individuales, supondría un avance positivo en la mejora del respeto de los derechos y libertades por Marruecos⁴³

Sin embargo, la impasibilidad de nuestro Estado se ha mantenido aún el pasado año cuando las severas condenas —dictadas ahora por un Tribunal ordinario— en el proceso de Gdeim Izzik en julio se encontraban con la callada como respuesta de nuestras autoridades⁴⁴.

43 MAAEEC, Comunicado núm. 073, 16 de marzo de 2014; accesible en <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2014_COMUNICADOS/20140316_COMU073.aspx>. ¿Influyó la posición de nuestro Gobierno —obrando entre bambalinas— para mover al Gobierno de Marruecos a modificar en tan breve lapso de tiempo su legislación? Unas enigmáticas declaraciones del Embajador A. Santos Maraver a este autor —en la entrevista ya citada— acerca de las «razones» para la presencia de los «observadores españoles» en los juicios a activistas saharauis nos hacen plantearnos, no sin muchas dudas, la cuestión.

44 Ningún comunicado fue emitido por el MAAEEC pese a la severidad de las condenas —sustancialmente similares a las dictadas por la jurisdicción militar, cuya decisión había

Incluso la rauda conclusión por parte de nuestro Estado del Tratado sobre comercio de armas, de 2 de abril de 2013, y la consiguiente asunción de los importantes compromisos allí establecidos en relación con el respeto de los derechos humanos, no han tenido ninguna incidencia en las significativas transacciones con el Reino de Marruecos⁴⁵. De hecho, las reclamaciones presentadas por diferentes ONGs ante las autoridades españolas con miras a paralizar las ventas con destino al país magrebí en razón de su posible uso con fines represivos sobre la población saharauí, no han deparado ningún resultado⁴⁶.

sido anulada en casación— y pese a la abrumadora falta de garantías durante el desarrollo del proceso, tal como tuvimos ocasión de comprobar durante nuestra asistencia a las vistas en marzo de aquel año como observador acreditado por el Consejo General de la Abogacía Española.

45 En apariencia, la emergencia de una regulación internacional sobre el tema —en la que jugaron un importante papel las ONGs Amnistía internacional y Oxfam, así como el apoyo brindado por la UE (GONZÁLEZ ALONSO, L.N., «El apoyo de la Unión Europea al tratado sobre el comercio de armas: una apuesta concreta por el ‘multilateralismo eficaz’», *Revista General de Derecho Europeo (Iustel)*, núm. 22, 2010)— contribuye a dotar de transparencia a un sector cuyo secretismo es proverbial —acertadamente se ha resumido en la frase «todo público pero todo secreto» (LÓPEZ ZAPICO, M.A., MARTÍNEZ LLISO, F., «La exportación española de armamento (1986-2001): posibilidades y limitaciones que presenta su estudio», en *La política exterior de España...*, cit., pp. 99-117, en p. 103)—. Y ha de reconocerse que la posición española resultaba aparentemente ejemplar: en nuestro país el tratado fue incluso objeto de aplicación provisional —antes, pues, de que su entrada en vigor le vinculara jurídicamente (de hecho, no lo hizo hasta el 24 de diciembre de 2014, Cfr. BOE, núm. 264, 31 de octubre de 2014)— en relación con sus disposiciones sobre limitaciones a la venta de armamento en casos de graves violaciones de los derechos humanos (art. 7.1.b) ii). Cfr. BOE, núm. 163, 9 de julio de 2013). En general, sobre el tratado, véase el pormenorizado estudio de SÁNCHEZ LEGIDO, A., «El tratado sobre comercio de armas», *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 2013, pp. 161-272). Sin embargo, pese a tales compromisos, la práctica española ulterior se ha revelado decepcionante en cuanto al cumplimiento de aquellas previsiones (al respecto, véase JANER TORRENS, J.D., «Política europea de control de las exportaciones de armas convencionales y seguridad humana: mecanismos para fomentar el respeto de los derechos humanos», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 68, 2016, núm.1, pp. 49-71).

46 Por lo que hace a las reclamaciones presentadas en relación con el específico supuesto del Sahara Occidental en un momento anterior a la entrada en vigor del tratado de 2013, véase MANGRANÉ CUEVAS, L., MELERO ALONSO, E., «Exportaciones de material de defensa español a Marruecos: Acciones legales de denuncia», en PALACIOS ROMEO, F. (ed.), *El derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. Del ius cogens al ius abutendi*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 291-335. Incluso, vigentes las

Pese a todo lo anterior, las violaciones de los derechos humanos producidas en el territorio del Sahara Occidental no han pasado desapercibidas a los tribunales españoles. De hecho, en el año 2014 tres relevantes resoluciones fueron dictadas por el Juzgado Central de instrucción núm. 5 y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en las que se afirmó la competencia de la jurisdicción española para conocer de tales hechos; particularmente ha de destacarse el Auto de 4 de julio de 2014 de la AN —a propósito de los acontecimientos de Gdeim Izzik— en el que el Tribunal estableció la vigente condición de nuestro Estado como potencia administradora de jure del territorio del Sahara Occidental, afirmando la consiguiente competencia para conocer de los hechos⁴⁷. Aunque no exenta de controversia, esta decisión ha tenido unas implicaciones inesperadas en otros procedimientos judiciales desarrollados allende nuestras fronteras⁴⁸.

5. *Impasible, pero no tanto*: la defensa de los intereses pesqueros españoles en el Sahara Occidental

La indiferencia mostrada en general por nuestro país respecto a la suerte del Sahara Occidental no se compadece con algunas cuestiones relativas al territorio —o, para ser más precisos, respecto a sus espacios marinos aledaños— en donde tradicionalmente siempre han estado presentes los intereses de nuestro país. De hecho, España nunca ha desatendido el Saha-

mencionadas obligaciones del tratado sobre comercio de armas, la reclamación presentada en julio de 2013 por CEAS-SAHARA, Justicia i Pau, AJASAHARA y el Observatorio Asturiano de Derechos humanos para el Sahara Occidental —en cuya elaboración participamos— deparó el mismo resultado negativo que aquéllas.

47 Para un análisis de estas decisiones véase BRIONES VIVES, F., «La situación legal del Sahara Occidental en la doctrina de la Audiencia Nacional», en *Sahara Occidental: Cuarenta años...*, cit., pp. 125-145; GARCÍA SANZ, N., OLLÉ SESÉ, M., RUIZ CALVO, S., «Comentario al Auto de Procesamiento del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional en el marco de la causa incoada por el genocidio contra el pueblo saharauí», *Ibid.*, pp. 103-123; TEIJO GARCÍA, C., Nota en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 67, 2015, núm. 1, pp. 193-197, así como nuestra aportación «Pasado, presente... ¿y futuro? del respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental: Apuntes desde España», *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, vol. 2, 2015, pp. 267-270.

48 Al respecto, véase más abajo, 6.

ra Occidental cuando de explotar los recursos pesqueros de sus aguas se trataba.

Este especial interés quedó claro cuando se acordó el abandono del territorio. De hecho, a raíz de los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 se acordaron disposiciones relativas al mantenimiento de las actividades pesqueras por buques españoles en el banco sahariano⁴⁹. Si bien estos compromisos suponían ya un reconocimiento de la jurisdicción marroquí sobre los espacios marinos del Sahara por parte de nuestro país, ha de advertirse la honda polémica que rodeará la conclusión del Acuerdo de cooperación sobre pesca marítima entre España y Marruecos, firmado el 1 de agosto de 1983, al estimarse por algunos entonces que conllevaba «el reconocimiento implícito por España de la soberanía marroquí sobre todo el Sahara Occidental... a cambio, entre otras cosas, de la explotación de los caladeros saharauis por los pesqueros españoles»⁵⁰. Por otra parte, la cuestión rebrotó nuevamente con ocasión del Protocolo provisional de pesca de 23 de diciembre de 2002 —concluido con motivo de la crisis del Prestige— y en virtud del cual se autorizaba temporalmente a un total de 64 buques españoles a faenar en aguas marroquíes, subsumiendo en ellas las aguas del Sahara Occidental⁵¹.

49 Conviene advertir que la declaración de Madrid de 1975 no contenía ninguna referencia al tema, aunque otros compromisos conexos abordaban la cuestión garantizando la pesca a la flota española de forma gratuita durante 5 años y con un trato equivalente al de Nación más favorecida en los 15 años siguientes (SOBRINO HEREDIA, J.M., «Les relations de pêche entre l'Union Européenne et le Maroc: La recherche d'un nouveau modèle d'accord de pêche», *Espaces et Ressources Maritimes*, núm. 13, 1999-2000, p. 238, n. 14).

50 Cfr. GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., (dir.), «Práctica española de Derecho internacional público», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 41, 1989, núm. 2, p. 569.

51 GARCÍA RICO, E.M., «Las preguntas formuladas al Gobierno por J. A., Labordeta sobre la autorización a barcos gallegos para pescar en aguas 'del antiguo Sahara español', comentarios a una respuesta incompleta», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 55, 2003, núm. 1, pp. 511-515. Conviene destacar la excepcionalidad de este Acuerdo —no existiendo relación convencional vigente a la sazón entre la UE y Marruecos en materia de pesca tras la extinción del precedente en 1999 y el fracaso de las negociaciones de cara a un nuevo acuerdo (Al respecto véase IHRAÏ, S., «Le Non-renouvellement en 2001 de l'accord de pêche Maroc/Union Européenne», *Annuaire de Droit de la Mer*, t. VI, 2003, pp. 135-150)— y fruto del dadivoso ofrecimiento del monarca Mohamed VI a la flota gallega ante la catástrofe marítima.

Con el ingreso de nuestro Estado en la actual Unión Europea (en lo sucesivo, UE) en 1986, la previa relación bilateral con Marruecos hubo de sustituirse por un marco convencional distinto en el que era ahora la UE —entonces Comunidad Económica Europea (en lo sucesivo, CEE)— la responsable de las negociaciones en materia pesquera. No obstante, era indudable que bajo el nuevo ropaje se trataba ante todo de preservar los intereses pesqueros españoles en el banco sahariano. De ahí la conclusión de los sucesivos Acuerdos de pesca con Marruecos y su implícita aplicación al Sahara Occidental. De hecho, el primer acuerdo fue firmado en Rabat el 26 de mayo de 1987, siendo aplicado provisionalmente desde el 1 de marzo de 1988 y siendo aprobado en nombre de la, entonces, CEE el 23 de junio de 1988⁵², aun cuando resultaba «mucho menos explícito sobre su ámbito de aplicación» que el precedente Acuerdo con España, al recurrir ambiguamente a las expresiones «aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción del Reino de Marruecos», denominadas en lo sucesivo «zonas de pesca de Marruecos», distinguiendo dos grandes zonas de pesca situadas respectivamente al norte y al sur del paralelo 30° 40' N, permitiendo en la última de ellas las actividades pesqueras en una distancia superior a las doce millas⁵³. Abundando en ello, el segundo Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la CEE y el Reino de Marruecos fue rubricado el 15 de mayo de 1992 y aprobado en nombre de la CEE el 19 de diciembre de 1992⁵⁴. En él, como en el precedente, el Protocolo al Acuerdo determinaba las posibilidades de ciertas modalidades de pesca (cerco, artesanal,

52 Reglamento (CEE) núm.2054/88, en virtud del cual quedó aprobado en nombre de la Comunidad dicho Acuerdo, DO n.º L 181, 12.7.1988, p. 1. Ya sobre el mismo se alertaba que el tratamiento de la cuestión del Sahara Occidental respondía a la «variante pesquera del síndrome del avestruz» (Cfr. JUSTE RUIZ, J., «El acuerdo pesquero CEE-Reino de Marruecos de 25 de febrero de 1988», *Revista de Instituciones Europeas*, 1988, pp.741-764). El acuerdo sucedía al Acuerdo hispano-marroquí de 1983, extinto en julio de 1987, aunque prorrogado hasta diciembre de ese mismo año.

53 Cfr. Art. 1 del Protocolo núm. 1 y apartado G) del Anexo I, DO núm. L 99, 16 de abril de 1988; cit. en GONZÁLEZ CAMPOS, *loc. cit.*, p. 569. Remitimos al análisis jurídico que allí se acompaña respecto de la inviabilidad de las pretensiones marroquíes.

54 Reglamento (CEE) n.º 3954/92 del Consejo de 19 de diciembre de 1992, relativo a la celebración del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la CEE y el Reino de Marruecos, y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación, DO núm. L 407, 31.12.1992, p. 1.

cefalópodos, etc.) en la denominada zona sur —situada al sur del paralelo 28°, 44' N, donde comienza precisamente el territorio del Sahara— incluyendo por consiguiente toda su franja costera hasta el límite con Mauritania. Aspecto que confirmaban sus previsiones en materia de inspección de los buques por parte del Estado ribereño, dado que se le brindaba la posibilidad de someterse a éstas en el puerto de Dajla (antigua Villa Cisneros)⁵⁵.

De nuevo, la Comunidad y el Reino de Marruecos firmaron el 13 de noviembre de 1995 un Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima, aprobado por la Comunidad el 12 de diciembre de 1996⁵⁶. En este, como en los precedentes, se fijan las posibilidades de pesca de la flota comunitaria en las aguas que depende de la soberanía o de la jurisdicción de Marruecos⁵⁷. Por otra parte, tras el apuntado fracaso de las negociaciones para sustituir al Acuerdo de 1995, el 28 de julio de 2005 se rubricaría en Bruselas un nuevo Acuerdo de pesca —el cuarto— que entraría en vigor el 1 de marzo de 2006, tras su aprobación por el PE y el Consejo⁵⁸. En él se desprende implícitamente su aplicabilidad a las aguas del Sahara Occidental, si bien para ello de nuevo entra en juego la conocida fórmula dicotómica de «las aguas sometidas a soberanía o a jurisdicción del Reino de Marruecos, denominadas en lo sucesivo zona de pesca de Marruecos». De esta manera, las instituciones europeas consideraban compatible su celebración al afirmar que ello no entrañaba un reconocimiento de las reivindicaciones de soberanía marroquí sobre el territorio⁵⁹. Por otra par-

55 OLESTI RAYO, A., «El Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos de 13 de noviembre de 1995», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 47, 1995, núm. 2, p. 455.

56 Reglamento (CE) núm. 150/97 del Consejo de 12 de diciembre de 1996 relativo a la celebración del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la CE y el Reino de Marruecos y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación, *DO*, núm. L 30, 31.1.1997, p. 1. Sobre éste *vid.* OLESTI RAYO, «El Acuerdo de cooperación...», *cit.*, pp. 453-462.

57 Art. 2. Por otra parte, su Protocolo reitera idéntica previsión que el precedente acuerdo de 1992 respecto a la pesca en la zona atlántica meridional al sur del paralelo 28° 44' N.

58 *DO* núm. L 141, 29 de mayo de 2006. Para un estudio global del acuerdo véase, por todos, GONZÁLEZ GARCÍA, I., «Los acuerdos comunitarios de pesca con Marruecos y el problema de las aguas del Sahara Occidental», *Revista Española de Derecho Europeo*, núm. 36, 2010, pp. 521-563.

59 Los diversos planteamientos esgrimidos por las partes a la hora de interpretar la fórmula eran, de un lado, la diversa condición —soberanía y jurisdicción, respectivamen-

te, como es sobradamente conocido, el ulterior Protocolo de 2013 asumía estos planteamientos⁶⁰.

Pese a todo lo anterior, lo cierto es que las instituciones de la UE —y nuestro país con ellas— desde hace muchos años vienen sosteniendo lo que podríamos calificar como tesis de la «incertidumbre» acerca de la aplicación especial de los sucesivos acuerdos. Así, ya respecto del primero de ellos concluido en 1987 la Comisión mantenía que se aplicaba a:

las aguas sujetas a la soberanía o la jurisdicción del Reino de Marruecos, a las que se refiere con la expresión «zona de pesca de Marruecos» sin ofrecer una definición geográfica más precisa. Por consiguiente, la Comisión no se halla en condiciones de adoptar una posición en cuanto a la delimitación geográfica de esta zona ni en lo que respecta concretamente a las aguas del Sahara Occidental⁶¹.

te— del Mar Territorial y la ZEE (Marruecos); de otro, la soberanía reconocida a Marruecos sobre sus espacios marítimos frente a la mera jurisdicción —como administrador de facto— de las aguas adyacentes al Sahara Occidental, respecto a las cuales el negociador jefe —en nombre de la UE— reconocería el *ius ad tractatum* en manos de Marruecos (Cfr. ATMANE, T., «El Acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos de 28 de julio de 2005», en SOBRINO HEREDIA, J.M. (coord.) *Mares y Océanos en un mundo en cambio: Tendencias jurídicas, actores y factores (XXI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales, A Coruña, 22-24 de septiembre de 2005)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 138).

60 Al respecto, véase más abajo 6 y referencias citadas allí. En todo caso, recordemos que entre medio el Parlamento Europeo «vetó» el previamente negociado Protocolo de Pesca de 2011 sobre la base del Informe Haglund, aunque en su rechazo confluían preocupaciones ecológicas y financieras de algunos grupos políticos e indiferencia ante un acuerdo de escasa importancia para el conjunto de los Estados miembros (al respecto, véase TORREJÓN RODRÍGUEZ, J.D., «El Parlamento Europeo, el Sahara Occidental y el Acuerdo de pesca de 2006 entre la Unión Europea y Marruecos», *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, vol. 12, 2013, pp. 127-141; accesible en <<http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/view/1579/1528>>), por lo que no ha de extrañar que la institución parlamentaria «volviera al redil» con ocasión del ulterior Protocolo de 2013, sobre la base del previo Informe Robles Fraga. De hecho, la introducción de «cambios puramente cosméticos» junto con una «declaración retórica» sobre la eventual suspensión del acuerdo en el caso de una supuesta violación de los derechos humanos y de los principios democráticos, bastó para que aprobara un texto que era en sustancia idéntico al rechazado en 2011, tal como atinadamente destacaba J. SOROETA LICERAS (Cfr. su aportación «The Conflict of Western Sahara after Forty years of Occupation: International Law versus Realpolitik», *German Yearbook of International Law*, vol. 59, 2016, p. 218).

Al considerar este conjunto de desarrollos, no deja de ser llamativo advertir la indiferencia de España ante la precisa definición de los límites de aplicación espacial de los sucesivos acuerdos; de hecho, nuestro Estado comparte con la Comisión Europea la «incertidumbre» acerca de las precisas áreas a las que se extiende su aplicación. ¡Cuán agudo contraste con la férrea defensa que nuestro Estado hace de las limitaciones espaciales que, a su juicio, restringen la proyección marítima del enclave de Gibraltar, pese a que tales límites nunca han sido concertados!

Ha de admitirse, sin embargo, que la posición de nuestro Estado sí se ha caracterizado por un enfoque muy distinto cuando hablamos de la explotación de otro tipo de recursos marinos —en el caso, los situados en la plataforma continental (hidrocarburos)—. En este punto, resulta de absoluta justicia reconocer que la política española se ha mantenido firme en lo que respecta a la delimitación con Marruecos de la plataforma continental de las islas Canarias. A tal efecto, debe recordarse que ya en 1988, en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada en el Congreso de los Diputados en relación con la delimitación de los espacios marinos del archipiélago canario, el Gobierno español había advertido que:

La delimitación de las aguas españolas a partir de la costa canaria afecta también al territorio del Sahara Occidental, por lo que no parece posible proceder a una delimitación estable y efectiva en tanto no se haya solucionado el conflicto que asola a esa zona y quede claro, una vez el pueblo saharaui haya ejercido su derecho a la autodeterminación, cuál es el status jurídico internacional del Sahara Occidental⁶².

De hecho, este planteamiento ha sido mantenido ininterrumpidamente por España y ha sido reiterado ante la Comisión de Límites de la Platafor-

61 Pregunta escrita no. 37/91 de la Sra. Barbara Simons (S) a la Comisión de las Comunidades Europeas (1 de febrero de 1991), Respuesta del Sr. M. Marín en nombre de la Comisión (18 de marzo de 1991), DO núm. C 210, 12 de agosto de 1991, p. 14; citado en ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., RIQUELME CORTADO, R., «El Sahara Occidental en las relaciones UE-Marruecos», en REMIRO BROTONS, A. (ed.), *Unión Europea-Marruecos ¿Una vecindad privilegiada?*, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 2012, p. 546.

62 BOCG, CD, III Legislatura, Serie D, núm. 315, pp. 14830-14831; cit. en González Campos, «Crónica...», cit., p. 545.

ma Continental —establecida en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982⁶³— con miras a preservar «los derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día», en una clara alusión al Sahara Occidental⁶⁴.

6. La imposibilidad española puesta a prueba: los procesos relativos al Sahara Occidental ante el Tribunal de Justicia de la UE (2015-2018)

La imposibilidad de nuestro Estado, sin embargo, se ha visto sometida a una dura prueba en los últimos años en razón de los diferentes asuntos sometidos a las jurisdicciones de la UE y en los cuales su denominador común ha sido la aplicabilidad de diferentes acuerdos concertados entre la UE y Marruecos al territorio del Sahara Occidental, así como eventualmente a sus espacios marinos contiguos. En el curso de los mismos ha aflorado la cuestión del status de nuestro Estado en relación con el Sahara Occidental para su natural incómodo.

En efecto, tal como hemos destacado en otro lugar⁶⁵, la cuestión del Sahara Occidental irrumpía en el foro de Luxemburgo a raíz de la interposición de un recurso por parte del Frente Polisario en 2013 que tenía por ob-

63 UNTS, vols. 1833, 1834 y 1835, p. 371.

64 Véase, entre otras, la nota verbal de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas, núm. 064 MPbcm, 7 de abril de 2015, accesible <http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/esp77_14/prt_re_esp77_spa.pdf>. (Al respecto, véase MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., «Plataforma continental ampliada al oeste de las Islas Canarias: presentación española ante la comisión de límites de la plataforma continental», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 68, 2016, núm. 1, pp. 219-226, así como JIMÉNEZ GARCÍA-CARRIAZO, A., «La plataforma continental de las islas Canarias: ampliación y cuestiones afines», *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 70, 2018, núm. 2, pp. 239-263). Conviene recordar igualmente, que la cuestión se hubiere resuelto de prosperar la propuesta de partición del territorio sugerida en 2002 por el entonces representante del Secretario General, K. Annan, dado que las costas enfrentadas hubieran sido sólo la española y la marroquí (CASADO RAIGÓN, R., GUTIÉRREZ CASTILLO, V.L., «Maroc et Espagne. La délimitation de leurs espaces maritimes», *Annuaire du Droit de la Mer*, vol. 6, 2001, p. 212).

65 Véase «El Sahara Occidental, de nuevo, en Luxemburgo: Las implicaciones de una Unión de Derecho, también internacional», *La Ley Unión Europea*, núm. 56, febrero 2018, pp. 1-12.

jeto la anulación de la Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, en la medida en que dicha Decisión aprobaba la aplicación del Acuerdo al Sahara Occidental.

Comenzaba así un periodo en el que las cuestiones relativas a los recursos del territorio se habrían de convertir en el centro de atención del debate judicial dadas las relaciones privilegiadas que en el orden económico la UE mantiene con Marruecos, susceptibles de incidir en los recursos naturales existentes en el Sahara. Detrás de esta estrategia latía el afán del Movimiento de Liberación Nacional saharauí por afianzar su papel en la escena internacional recurriendo a los resortes jurídicos de toda índole que permitieran visibilizar el olvidado conflicto que mantiene irresuelto el proceso de libre determinación del territorio tras más de cuarenta años de ocupación marroquí⁶⁶. En todo caso, es indudable que el acceso a la jurisdicción europea pretendía extraer las consecuencias derivadas de la jurisprudencia Brita —acogida por el TJUE a propósito de la cuestión palestina⁶⁷— para obtener un pronunciamiento semejante *mutatis mutandis* —así se esperaba— en relación con los acuerdos UE-Marruecos «supuestamente aplicables» al Sahara Occidental.

Como es conocido, la demanda del Frente Polisario dará pie a una primera decisión del Tribunal General, la Sentencia de 10 de diciembre de

66 De hecho, las iniciativas judiciales del Frente Polisario se despliegan también en otras latitudes y no sólo en los Estados que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Sobre estos procedimientos véase el pormenorizado examen que realiza SOROETA LICERAS, «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental...», *cit.*, pp. 96-101. https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=420714. En particular, sobre la importante decisión dictada por el Tribunal Supremo de la provincia de Cabo Oriental (Sudáfrica) en junio de 2018, *vid.* RUYTS, T., «The Role of State Immunity and Act in the NM Cherry Blossom Case and the Western Sahara Dispute», *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 69, 2019, pp. 67-90.

67 Sentencia TJUE de 25 de febrero de 2010, *Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, asunto C-386/08, EU:C:2010:91. Sobre este asunto véanse en la literatura española las contribuciones de CORTÉS MARÍN, J.M., Nota en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 36, 2010, pp. 626-631, así como DÍEZ PERALTA, E., «¿Made in Israel? Reflexiones en torno al etiquetado de mercancías fabricadas en los territorios palestinos ocupados: a propósito de la sentencia Brita del TJUE, de 25 de febrero de 2010», *Revista General de Derecho Europeo (Iustel)*, núm. 21, 2010. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3279114>.

2015⁶⁸, en la cual esta instancia realizaba dos interesantes apreciaciones, una relativa a la legitimación procesal del Frente Polisario para interponer un recurso de anulación —arrumbando las conocidas tesis restrictivas sobre el particular— ofreciendo una lectura que conducía a su segunda conclusión, la posibilidad de ejercer un control sobre los actos de las instituciones relativos a la conclusión del acuerdo que juzgaba inaplicables —y, por ende, el mismo acuerdo— a los productos procedentes del Sahara Occidental. La previsible reacción de las instituciones —Consejo y Comisión— y de los Estados miembros especialmente afectados —obviamente, en especial España— presionados además enérgicamente por el Reino de Marruecos⁶⁹, no se hizo esperar, procediendo casi inmediatamente a la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia que posibilitaba una nueva decisión, la Sentencia de 21 de diciembre de 2016⁷⁰, en la cual la suprema instancia jurisdiccional de la UE anulaba la previa decisión del Tribunal General, pero —contra lo esperado—, aunque afirmaba la plena validez del acuerdo en liza, estimaba que éste no resultaba aplicable al territorio del Sahara Occidental.

Sin embargo, la saga judicial del Sahara Occidental en Luxemburgo habría de proseguir, dado que tanto el Frente Polisario —de nuevo interponiendo en 2014 un recurso de anulación ante el Tribunal General— como la ONG británica Western Sahara Campaign UK —a través del desarrollo de un proceso ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido— pretendían cuestionar la validez del Acuerdo y el Protocolo UE-Marruecos en materia de pesca —respectivamente de 2006 y 2013— so pretexto de su supuesta aplicación a las aguas adyacentes al Sahara Occidental. En el marco de sus competencias de ordenación judicial, el TJUE ordenaba paralizar el procedimiento *sub iudice* ante el TG entretanto resolvía el segundo asunto⁷¹. Se trataba en el caso de un reenvío prejudicial promovido por

68 STG de 10 de diciembre de 2015, Frente Polisario/Consejo, asunto T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

69 Sobre estas presiones y su incidencia en nuestra diplomacia nos hemos extendido en nuestra aportación «A Bridge over troubled waters...», *cit.*

70 STJUE de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, asunto C104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

71 Finalmente, el TG lo declararía inadmisibile por «falta de legitimación del Frente Polisario», sobre la base de la inaplicabilidad de los acuerdos pesqueros a los espacios ma-

el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en respuesta al cual el Tribunal de Luxemburgo, fundado en gran medida en los argumentos previamente expuestos en su previa decisión del mismo año, sostendrá la vigencia de los Acuerdos cuestionados, aunque de nuevo va a excluir de su aplicación el territorio del Sahara Occidental —más concretamente sus espacios marinos contiguos— pese a que en ellos vienen desarrollándose tradicionalmente —y con supuesta base en los mismos— las actividades de explotación pesquera más significativas⁷².

No siendo este el lugar para analizar los pormenores de estas controvertidas decisiones⁷³, nos limitaremos a destacar en lo que ahora importa que

rinios del Sahara Occidental, de conformidad con la Sentencia dictada por el TJUE en el asunto *Western Sahara Campaign UK* (Cfr. Auto de 9 de julio de 2018, *Frente Polisario/Consejo*, asunto T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496).

72 Sentencia TJUE de 27 de febrero de 2018, *Western Sahara Campaign UK*, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118. Con posterioridad, el TG —en consonancia con las anteriores decisiones— afirmaba la inaplicabilidad del Acuerdo CE-Marruecos sobre servicios aéreos a los espacios marítimos y aéreos del Sahara Occidental respectivamente. Al respecto, *vid.* Auto TG de 30 de noviembre de 2018, *Frente Polisario/Consejo*, asunto T-275/18, ECLU:EU:T:2018:869.

73 Controvertidas porque sobre ellas planea —particularmente las dictadas por el TJUE— una afirmación dogmática difícilmente asumible que J. SOROETA, de nuevo con ironía, tilda de «inmaculada legalidad de la acción exterior de la UE» (SOROETA LICERAS, «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental...», https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=420714, *cit.*, pp. 78-79. En todo caso, para un análisis de las mismas, por ceñirnos a la literatura española, véanse las contribuciones de DÍEZ PERALTA, E., «El Sahara Occidental: una piedra en el camino de la asociación privilegiada entre la Unión Europea y Marruecos», *La Ley Unión Europea*, 46, 2017; FERRER LLORET, J., «El conflicto del Sahara Occidental ante los Tribunales de la Unión Europea», *Revista General de Derecho Europeo*, núm. 42, 2017, pp. 15-64; GOSALBO BONO, R., «El Frente Polisario, las normas del Derecho internacional y el derecho de la Unión Europea», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 53, 2016, pp. 21-77; SOROETA LICERAS, J., «La sentencia de 10 de diciembre de 2015 del Tribunal General de la UE (T-512/12), primer reconocimiento en vía judicial europea del estatuto del Sahara Occidental y de la subjetividad internacional del Frente Polisario», *Revista General de Derecho Europeo*, núm. 38, 2016, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=417010; *id.*, «La cuestión de la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., MARTÍNEZ PÉREZ, E.J. (eds.), *Retos para la acción exterior de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 73-9, <http://www.aepdir.org/index.php/actividades-aepdir/proximas-actividades-de>

en el curso de uno de los procedimientos el Abogado General M. Whatelet consideraba pertinente abundar en las supuestas responsabilidades de nuestro Estado sobre el territorio. En concreto, en sus conclusiones en el asunto o —animadas por la finalidad de promover la nulidad de la previa decisión dictada por el TG— el Sr. Whatelet afirmaba que el Frente Polisario no podía ser considerado como titular de un interés directo en el objeto del recurso toda vez que aún sería España la potencia administradora del territorio⁷⁴. Decía al respecto el Abogado General, contrariando de forma resuelta la posición oficialmente sustentada por nuestro país, que:

la-aepdiri/483-congreso-internacional-retos-de-la-accion-exterior-de-la-union-europea; así como la ya mencionada «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental...», https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=420714, *cit.* Igualmente, pueden consultarse nuestras aportaciones «El Tribunal de Justicia y la no aplicación de los acuerdos pesqueros UE-Marruecos al Sahara Occidental (Comentario a la Sentencia TJUE de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16)», *La Ley Unión Europea*, núm. 59, julio 2018, pp. 1-19 y «La Guerra de los Mundos...» *cit.*

74 En este caso, la cuestión se centraba en la controvertida personalidad jurídica del Frente Polisario. Frente a lo sostenido por algunos autores (p.e. abiertamente, SOROE-TA LICERAS, «La Sentencia de 10 de diciembre...», *cit.*, y, más matizadamente, RODRÍGUEZ MAGDALENO, «La explotación de los recursos del Sahara...», *cit.*, p. 247), el TG no llegaba al extremo de considerarlo un sujeto de Derecho internacional (Sentencia de 10 de diciembre de 2015, párr. 46), optando en cambio por caracterizarlo en términos de particular (párr. 52), afectado directa e individualmente por el acto del Consejo sobre la base del cual se aprobaba el acuerdo con Marruecos (apdos. 111-112). Ent al sentido, tal como se ha destacado «the sui generis character of Polisario was not really taken into account, naturally the Court did not want to go into the uncomfortable discussion on NLM and tried to fit Polisario into another box. It did so by using case law that was not particularly relevant and it wasn't because the situation of a trade union or agence de voyage is simply not comparable» (Cfr. MILANOV, M., «Comment. 11 December 2015» en «Trade Agreements, EU Law, and Occupied Territories (2): The General Court Judgment in Frente Polisario v Council and the Protection of Fundamental Rights Abroad», EJIL: Talk!; texto accesible en <<http://www.ejiltalk.org/13901-2/#comment-239597>> accessed 20 May 2016). Ciertamente, la capacidad del Frente Polisario puede discutirse toda vez que no posee todos los rasgos característicos de un Movimiento de Liberación Nacional (en lo sucesivo, MLN) de acuerdo con la práctica internacional más asentada (GOSALBO BONO, «El Frente Polisario, las normas del Derecho internacional...», *cit.*, pp. 36-40). Sin embargo, lo que también es indudable es que —contra lo que se ha sostenido (WECKEL, P. «Statut du Sahara occidental: les conclusions de l'avocat general devant la Cour euro-

Es cierto que el Reino de España se considera descargado de toda responsabilidad de carácter internacional relativa a su administración del Sahara Occidental desde el 26 de febrero de 1976. Sin embargo, no se puede excluir categóricamente que, a pesar de su renuncia, el Reino de España haya conservado conforme al Derecho internacional su condición de Potencia administradora y que, en tal condición, sea la única entidad que tiene la capacidad, incluso la obligación, de proteger, incluso a nivel jurídico, los derechos del pueblo del Sahara Occidental, en particular su derecho a la libre determinación y su soberanía sobre los recursos naturales de este territorio.

En efecto, y sin que sea necesario zanjar esta cuestión en el presente asunto, los términos de la obligación impuesta a las Potencias administradoras por el artículo 73, letras a) y b), de la Carta de las Naciones Unidas me hacen dudar de que éstas puedan liberarse de esa misión sin haberla completado teniendo en cuenta los intereses y las necesidades del pueblo del territorio no autónomo de que se trate.

Esta duda se ve reforzada por el hecho de que la ONU siga considerando que la obligación de transmitir al secretario general de las Naciones Unidas la información sobre el Sahara Occidental prevista en el artículo 73, letra e), de la Carta de las Naciones Unidas incumbe al Reino de España.

Además, el Ministerio Fiscal del Reino de España así como la Audiencia Nacional reconocen la condición del Reino de España de Potencia administra-

«péeenne de justice», *Sentinelles*, núm. 485, 17 de septiembre de 2016; texto accesible en <<http://www.sentinelles-droit-international.fr/?q=content/statut-du-sahara-occidental-les-conclusions-de-lavocat-g%C3%A9n%C3%A9ral-devant-la-cour-europ%C3%A9enne-de->>), su capacidad jurídica internacional es mayor que la que pudieran llegar a poseer otros movimientos opositores —en puridad, carentes de la condición de MLNs— activos en conflictos armados internos como las facciones que luchan en la Guerra de Siria, toda vez que el Frente Polisario, indudablemente está de continuo buscando su afianzamiento en los medios diplomáticos (BURRIEZ, D., «Chronique des faits internationaux», *Revue Générale de Droit International Public*, t. 120, 2016, p. 403. Para un análisis en profundidad de la cuestión remitimos a nuestra aportación «El derecho del pueblo saharauí a la libre determinación y el «derecho de resistencia» frente a la ocupación marroquí», en *Sahara Occidental: Cuarenta años...*, cit., pp. 323-366). De ahí, que resulte aceptable el convenir en reconocerle un *ius standi* en términos de subjetividad internacional (PEIFFERT, O., «La recevabilité d'un recours en annulation devant les juridictions européennes au prisme des règles coutumières d'interprétation des traités (Observations sous l'arrêt CJUE, 21 décembre 2016, Conseil c. Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973)», *Revue Générale de Droit International Public*, t. 121, 2017, pp. 326-327).

dora del Sahara Occidental, que «como tal, hasta que finalice el período de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso». Por este motivo, el Reino de España hizo extensiva su competencia internacional en materia penal a los crímenes cometidos en el Sahara Occidental⁷⁵.

Aunque el Tribunal de Justicia no siguió en este punto a su Abogado General, es indudable que la acogida de estos argumentos en el desarrollo del procedimiento ha supuesto un serio desafío a la posición sostenida incansablemente por nuestro Estado y a su imposible actitud frente a la cuestión.

7.A. modo de conclusión: *la España imposible*

Más de cuarenta años han transcurrido desde que nuestro Estado decidiera abandonar el territorio del Sahara Occidental y resignar sus responsabilidades sobre él. Su actitud frente a la cuestión, concretada en la mencionada declaración de 26 de febrero de 1976, a la que se han mantenido fieles todos los Gobiernos constituidos ya durante el periodo democrático, confirma, de un lado, la persistente voluntad de España de no asumir las obligaciones que el Derecho internacional le impone en relación con la libre determinación del territorio; de otro, la vacuidad de sus intentos por mantenerse al margen de la conflictiva situación creada con su actitud.

La política española, tildada en algún momento de «neutralidad constructiva», ha revelado sinnúmero de contradicciones, resueltas, lamentablemente, a través de una silenciosa aproximación a las tesis marroquíes, siquiera sea por la pasividad que ha mostrado en el seno del «Grupo de Amigos del Sahara Occidental», por su mutismo en relación con las repetidas violaciones de los derechos humanos en el territorio o por su in-

75 Conclusiones del Abogado General Sr. M. Whatelet presentadas el 13 de septiembre de 2016, asunto C104/16 P, ptos. 188-191. Por lo que respecta a la posición de los Tribunales españoles el Abogado aclaraba que «el Gobierno español se abstuvo de comentar sobre la postura de estos órganos jurisdiccionales españoles, limitándose a indicar que dicho Gobierno acataba las resoluciones de los órganos jurisdiccionales españoles» (*Ibid.*, pto. 192).

equívoca intención de proseguir la explotación de los recursos pesqueros del banco sahariano a través de una relación convencional con Marruecos sucesivamente renovada⁷⁶.

Abríamos estas páginas con el juicio con el que en la novela de Graham Greene *The Quiet Man* —traducida habitualmente en español como *El americano impasible*⁷⁷— el cínico y escéptico Fowler se refería al estadounidense Dr. Pyle, un ejemplo —aparente— de bonhomía del cual, pese a ello, desta-

76 Baste recordar que ya está rubricado —desde el 24 de julio pasado— el texto del futuro Protocolo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, para responder —suponemos— a los intereses del sector pesquero español: de hecho, el Ministro de Agricultura y Pesca —y antiguo Embajador en Marruecos (2004-2010)— se congratulaba del acuerdo dado que permitiría en el futuro faenar a pesqueros andaluces, canarios y gallegos, merced a la atribución a éstos de más de la mitad de las 138 licencias previstas (Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Planas Puchades), para que informe sobre el nuevo tratado pesquero acordado entre la Unión Europea y Marruecos y explique la posición del Gobierno sobre el contenido de dicho acuerdo y su protocolo de aplicación. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001102), 28 de agosto de 2018; reprod. en Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2018, XII Legislatura, núm. 578, Agricultura, pesca y alimentación, p. 3). Sin embargo, el embajador A. Santos Maraver sostenía en la entrevista del pasado octubre a la que hemos hecho constante alusión en este trabajo, que el futuro acuerdo no resultaba de específico interés para el sector pesquero español (¡!). En todo caso, el texto finalmente adoptado —en proceso de revisión jurídica por los Servicios de la Comisión— pretende aplicarse «a las aguas adyacentes al Sahara Occidental», pese a afirmar la necesidad de garantizar «la estricta observancia del Derecho internacional». De hecho, el mandato negociador insistía en los planteamientos sugeridos por la Comisión con anterioridad a la Sentencia y su supuesto respeto pretende colmarse ahora con que «la población afectada por el Acuerdo haya intervenido adecuadamente en él», introduciendo «los mecanismos adecuados para garantizar que la Comisión esté suficientemente informada e implicada en la distribución geográfica y social de los beneficios socioeconómicos establecidos por el Acuerdo y su Protocolo, de forma que la Comisión pueda asegurarse de que ambos benefician a la población afectada» e incluso contemplando la inclusión de una «cláusula de revisión que permita tener en cuenta una solución, aceptable para ambas partes, que contemple la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, en consonancia con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas» (Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a modificar el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con el Reino de Marruecos y celebrar un Protocolo, Bruselas, 21 de marzo de 2018, COM(2018) 151 final; texto accesible en <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML>

caba los problemas (y males) que había causado, «armado» como estaba de los mejores motivos.

Al abordar la política exterior española en relación con el Sahara Occidental, no dudamos de que nuestro Estado ha optado a lo largo de los

/?uri=CELEX:52018PC0151&from=EN>, cursivas añadidas). De hecho, el comunicado conjunto emitido por Marruecos y la Comisión europea el 24 de julio —con ocasión de la rúbrica del acuerdo— señala que «Las dos partes acordaron así las disposiciones y las mejoras aportadas a estos textos a fin de optimizar sus repercusiones y beneficios para la población local de las zonas concernidas, en el respeto de los principios de gestión sostenible de los recursos pesqueros y de equidad» (reprod. en <<http://www.maroc.ma/es/news/marruecos-y-la-ue-acuerdan-el-contenido-del-futuro-acuerdo-de-pesca>>). Pero restan algunas interrogantes: de un lado, ¿Es la población afectada el tercero afectado por los acuerdos o lo es el pueblo del Sahara Occidental? Por otra parte, dado que el Tribunal ha evocado en su Sentencia el *jus ad tractatum* del Sahara Occidental al recordar el principio del efecto relativo de los tratados (apdos. 88 a 93, 100, 103 a 107 y 123) ¿Se ve satisfecho con la «intervención» de la población afectada en los futuros acuerdos o ha de consentir en obligarse por ellos? Repárese que en este último caso se requiere un sujeto de derecho internacional (España o el Frente Polisario), pues es evidente que una población no lo es. En este orden, no parece que los meros contactos prospectivos desarrollados la pasada primavera por funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con diferentes interlocutores del territorio —no sólo el Frente Polisario, sino miembros de los consejos locales, actores socio-económicos, operadores económicos, agencias de desarrollo, e incluso ONGs en materia de derechos humanos— sea de por sí suficiente, haciéndose necesario un cauce que permita de forma transparente expresar un acuerdo (VAN DER LOO, G., «The Dilemma of the EU's Future Trade Relations with Western Sahara Caught between strategic interests and international law?», CEPS Commentary, 20 de abril de 2018, pp. 3 y 5; accesible en <https://www.ceps.eu/system/files/GVdL_WesternSahara.pdf>). En su reciente trabajo, citado a lo largo de estas páginas, J. SOROETA se extiende sobre la cuestión (Al respecto, véase SOROETA LICERAS, «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental...», *cit.*, pp.101-110, https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=420714). Por su parte, el ministro Planas afirmaba en su comparecencia del pasado agosto que «la sentencia queda reflejada en los nuevos textos en su totalidad» (*loc. cit.*, p. 9). Sin embargo, durante el examen del tema en la Comisión de pesca del Parlamento Europeo en su sesión del pasado 9 de octubre; allí, el representante para Europa del Frente Polisario, Sr. M. Sidati, acompañado del Letrado que le asesora, el abogado francés, G. Devers, rechazó que las consultas desarrolladas —en las que declinaron participar— garanticen la legalidad del futuro acuerdo, en tanto que el SEAE afirmaba haber realizado el pasado septiembre las consultas adecuadas, abrumadoramente favorables al acuerdo en El Aaiún y Rabat (Cfr. <<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181009-1430-COMMITTEE-PECH>>). Pese a lo anterior, la

últimos cuarenta y tres años por una línea de acción animada por poderosas razones, claramente perceptibles en los beneficios que ha reportado ya no sólo en nuestra relación con el vecino del sur —siempre compleja—, sino incluso para significativos ámbitos y sectores de nuestro país. Pero, siendo comprensible esta apuesta por una impasibilidad que indefectible y paulatinamente conduce a perpetuar la injusta situación que pesa sobre el pueblo del Sahara Occidental, nos preguntamos —al modo que Fowler sostenía en la obra de Greene— ¿incluso aunque fueran buenas? ¿Justifican pasar por encima de lo que el Derecho internacional impone a nuestro Estado?

Comisión de pesca del Parlamento Europeo no dudaba en aprobar la celebración del nuevo acuerdo, por una abrumadora mayoría —los grupos popular, socialista y liberal votando conjuntamente a favor— el pasado enero, augurando su futura aprobación por el pleno —prevista para febrero— dado que la inclusión del Sahara Occidental en el acuerdo comercial con Marruecos era aprobada también entonces por el pleno con el apoyo de los mismos grupos políticos.

77 *El americano impasible* (trad. de J.R. Wilcock), Emecé Editores, Buenos Aires, 1956.

Observación jurídica en procesos penales contra saharauis defensores de los DDHH. Ejercicio jurisdiccional como extensión del aparato represivo de seguridad del estado

ANA SEBASTIÁN Y PABLO JIMÉNEZ

Índice:

1. Marco normativo de la observación internacional en el enjuiciamiento por los tribunales marroquíes de saharauis defensores/as de los derechos humanos.
2. Dos ejemplos prácticos de procesos penales contra saharauis defensores/as de los derechos humanos.
 - 2.1. Procedimiento penal en segunda instancia contra el grupo estudiantes «El Uali».
 - 2.2. Procedimiento penal contra el periodista saharauí Laaraousi Ndour.
3. Breve resumen de los principales impedimentos en la garantía a un proceso justo conforme a los estándares internacionales.
 - 3.1 Derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni declararse culpable; el problema de la tortura.
 - 3.2. Publicidad de la audiencia.
 - 3.3. Presunción de inocencia.
 - 3.4. Otras afecciones a derechos y principios de referencia. Derecho a disponer de los medios adecuados para la defensa; igualdad de armas; imparcialidad e independencia del tribunal; empleo abusivo de la prisión provisional.
4. Conclusiones.

I. Marco normativo de la observación internacional en el enjuiciamiento por los tribunales marroquíes de saharauis defensores/as de los derechos humanos

A modo de consideración preliminar al objeto de estudio, en lo que tiene que ver con los procedimientos penales por hechos sucedidos, o imputados, en el territorio no autónomo del Sahara Occidental, se impone llamar la atención —mencionando tan solo, dado que es objeto de análisis detallado en otros artículos de esta misma publicación— sobre la evidencia de que las autoridades marroquíes no tienen competencia en el territorio

del Sahara Occidental, siendo Marruecos una potencia ocupante y España la administradora de derecho del territorio pendiente de descolonización, por lo que en un plano previo al de las garantías procesales penales existe en enjuiciamientos de este tipo una nulidad radical de cualquier actuación de la autoridad marroquí.

En un segundo plano, más genérico, relativo a la supervisión del respeto a los derechos fundamentales ligados al proceso penal, uno de los pilares en que se asienta la labor de la observación jurídica es la *Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos* conocida como *Declaración sobre defensores de derechos humanos*, Resolución 53/144 de 9 de diciembre de 1998 —Asamblea General de las Naciones Unidas—.

El derecho a la observación jurídica internacional se concibe y garantiza como una expresión del derecho general de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Asamblea General de la ONU reconoce de manera expresa el derecho de los observadores «a asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables», Artículo 9 (3) (b) de la *Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos*.

En desarrollo de esta *Declaración* surge el mandato del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos (Resolución 25/18 del Consejo de Derechos Humanos, de 11/04/2014), organismo de referencia en este ámbito para la supervisión de quejas particulares.

Asimismo el ejercicio efectivo de la observación de procesos penales está relacionado con el derecho fundamental a un juicio justo y público, tal como está consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos, entre otros, en el artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Marruecos) —el PIDCP es considerado como la herramienta jurídica básica de referencia de cara a la evaluación del derecho a un juicio justo—.

Se entiende, en consecuencia, que ha de garantizarse el acceso de quienes ejercen la labor de supervisión del respeto a los derechos fundamenta-

les a las instalaciones de los tribunales y a las salas de audiencia con el fin de observar los procesos, toda vez que el principio jurídico establece que los enjuiciamientos penales, con unas pocas excepciones, han de ser celebrados de manera pública.

Las excepciones que se contemplan (párrafo 29, observación general 32 de 23/08/2007 del Comité de Derechos Humanos de la ONU) tienen que ver con la posibilidad de que por el Tribunal se decreten restricciones en casos de seguridad, orden público... Nada que ver con restricciones anticipadas sin motivación por las FSE, tal y como viene sucediendo en las ocasiones en que las autoridades marroquíes de manera arbitraria así lo deciden.

2. Dos ejemplos prácticos de procesos penales contra saharauis defensores de los derechos humanos

2.1. Procedimiento penal en segunda instancia contra el grupo de estudiantes conocido como «El Uali» – Tribunal de Apelación de Marrakech

La misión de observación jurídica tuvo lugar respecto de las vistas de apelación celebradas en los días 16/01, 13/02, 13/03 y 10/04 de 2018 en el Tribunal Penal de Apelación de Marrakech; en segunda instancia por haber sido recurrida la Sentencia de primera instancia. En fecha 6 de julio de 2017 el Tribunal Penal de Primera Instancia de Marrakech condenó, dentro de un procedimiento penal contra un total de diecisiete imputados, a penas de tres años de prisión para trece de ellos y diez años de prisión para los otros cuatro.

Los hechos de referencia son: en fecha 23 de enero de 2016, en el contexto de una protesta protagonizada por varios estudiantes saharauis en reclamación de sus derechos en el campus de la universidad de Marrakech, se habrían producido enfrentamientos con varios grupos de estudiantes marroquíes como consecuencia de los cuales habría fallecido una persona.

Transcurridos varios días desde tales acontecimientos, fueron detenidos doce estudiantes y activistas saharauis, produciéndose más detenciones en el primer trimestre de 2016 y los meses siguientes.

Los estudiantes denunciaron durante el procedimiento en primera instancia que su detención se debió principalmente a sus creencias políticas con respecto a la causa del Sahara Occidental, y denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos por parte de las autoridades marroquíes.

A la celebración de la vista de apelación, todos los acusados se encuentran en prisión provisional. La defensa es ejercida en principio por un grupo de varios letrados de nacionalidad marroquí entre los que se encuentran miembros de Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH); tras la segunda vista, se incorporan a la defensa dos abogados saharauis.

Además de quienes redactan este artículo, asistieron como observadoras a las vistas orales: el día 16 de enero de 2018, dos observadoras internacionales de Portugal (Por un Sahara Libre) y dos de Francia (Association des Amis de la République Arab Saharaui Democratic «AARASD»); el día 13 de marzo asistieron, asimismo, observadoras acreditadas por el CGAE provenientes de las Islas Canarias, Extremadura, Madrid, Euskadi y Asturias; el día 10 de abril asistieron dos observadoras acreditadas por el CGAE, de Zaragoza e Islas Canarias, y un miembro del parlamento autonómico de Islas Baleares.

Circunstancias «extraprocesales»

La presencia de agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto fuera del Tribunal como dentro de la propia sala, fue muy abundante, incrementándose incluso a medida que se sucedieron los señalamientos.

Se denegó de manera generalizada a los/as familiares y allegados/as de los acusados asistir a las vistas. En la vista de 13 de febrero se denegó asimismo la entrada a una de las personas de referencia para realizar las labores de traducción para nuestra misión de observación. Se informó por el Presidente de la ASVDH (Asociación de Saharauis Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos) que no le fue permitida la entrada a la sala de vistas.

Se informó por las defensas —en entrevista mantenida en fecha 13 de marzo— de que se solicitó al Tribunal que efectuase designación a uno de sus miembros con objeto de salir a la puerta del edificio al comienzo de las vistas y comprobar de manera directa, presencial, si se permite o no la entrada a las personas que quieren asistir al juicio.

Estas restricciones injustificadas se entienden contrarias al artículo 14 PIDCP, en concreto, en lo que tiene que ver con el derecho a la condición de audiencia pública de la vista (observación general 32º, I – 3, Comité ddhh ONU).

A los/as observadores/as se nos requirió la entrega de pasaporte en la entrada del edificio, siendo fotografiados reiteradamente los observadores por agentes de paisano. En la vista celebrada en marzo, la demora en devolver los documentos por parte del personal de seguridad fue de alrededor de 30 minutos (notablemente superior a los anteriores señalamientos), lapso de tiempo durante el que se fue permitiendo por los miembros de las FSE la entrada de diferentes personas a la sala de vistas (ni familiares ni allegados de los acusados, aparentemente sin relación con el proceso), de manera que, al tratar de acceder, encontramos un impedimento físico por el bloqueo ejercido por éstas. Transcurridos unos minutos, como consecuencia de lograr abrirse paso la compañera María Dolores Travieso entre la aludida barrera humana a base de empujones, asomarse a la sala de vistas y llamar la atención sobre nuestra situación, a un gesto del Procurador se responde por los agentes de las FSE presentes en la sala facilitándonos finalmente el acceso a las observadoras y habilitando dos bancos para que nos sentemos.

Los acusados de origen saharauí comparecieron a las vistas con el atuendo tradicional Saharauí y en español profirieron cánticos de reivindicación al entrar a la sala en cada una de las sesiones: «Viva la Lucha del Pueblo Saharauí». Se les ubicó en la sala esposados por parejas y acompañados de numerosos Agentes de Seguridad del Estado, quienes se distribuyeron a lo largo de la sala.

Tras cada una de las sesiones se produjeron concentraciones a las afueras del Tribunal. Alrededor de cuarenta personas (principalmente familiares de los presos y militantes de colectivos de defensa de los derechos humanos) expresaron reivindicaciones, primero en forma de cánticos y posteriormente con la toma de la palabra individualmente por diversas personas, en defensa de los derechos del pueblo saharauí.

Según se nos hizo saber por parte de un portavoz de un colectivo de defensa de los ddhh, se aprovechó la presencia de observadores internacionales para poder ejercitar sus derechos a la libertad de reunión y expresión, para difundir sus reivindicaciones ante la población marroquí en el espacio

público, dado que, en caso de no contarse con la presencia de la observación internacional, muy probablemente la reunión se habría visto disuelta por los miembros de las FSE, presentes en gran número.

A partir de la segunda de las sesiones, junto a este grupo de personas, con un cordón de las FSE interpuesto, se concentró otro grupo de personas —a modo de «contramanifestación»— proclamando consignas a favor de la soberanía marroquí del Sahara Occidental y exhibiendo simbología amazigh.

Entrevistas mantenidas con defensores de derechos humanos, representantes de colectivos de estudiantes saharauis y familiares de personas presas en el procedimiento de referencia

Se aprovechó la ocasión de los desplazamientos para mantener reuniones con diferentes personas pertenecientes a asociaciones de defensa de los derechos humanos, de estudiantes universitarios militantes en la defensa de los derechos de la población saharauí, con familiares de algunas (cuatro) de las personas encarceladas como consecuencia del procedimiento penal de referencia, así como con abogados de la defensa, de cara a ampliar informaciones de interés para completar la labor de observación jurídica.

Se recibieron informaciones que apuntan a la incidencia de la militancia en la defensa de los derechos humanos por parte de los estudiantes que enfrentan los cargos penales en este procedimiento en las acusaciones de que han sido objeto (y que les había mantenido en prisión provisional a casi todos ellos durante alrededor de dos años), así como informaciones que denuncian la práctica de tortura durante las detenciones que derivó en autoinculpaciones por parte de los investigados.

Los estudiantes presos han protagonizado protestas en forma de huelga de hambre para denunciar maltrato, asistencia médica deficiente, obstáculos para comunicar con sus familias y dispersión, mejorando al parecer estos dos últimos extremos como consecuencia de las medidas de protesta, todo ello de acuerdo con las informaciones facilitadas por sus familias.

Se mantiene asimismo reunión con dos miembros de la Liga de Protección de los Derechos de los Prisioneros Saharauis en Marruecos (LPPS) en la que se informa de las principales actividades y reivindicaciones desarrolladas por el colectivo.

Se mantuvo también reunión con algunos familiares de los estudiantes presos en el procedimiento, quienes relataron episodios de malos tratos y torturas sufridas por sus familiares durante la detención, conducción como detenidos en transporte público y que los interrogatorios a que fueron sometidos tenían que ver con sus actividades asociativas y políticas, no con los hechos concretos que se enjuician en el procedimiento. Uno de ellos afirmó que su familiar preso —hermano— no se encontraba en Marrakech en la fecha de los hechos y, que si bien se solicitó un informe médico acreditativo de su estado de salud durante el procedimiento en primera instancia, no se dio satisfacción a tal solicitud. Se informó de que en algunos espacios de la prisión en que se encuentran hay veintidós personas en una misma celda, y que hay personas presas que duermen en el baño.

Se informó de la visita del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí (organismo que ha asumido en Marruecos las funciones de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura previsto por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, artículo 3) a ocho personas presas de entre las que mantenían una protesta en forma de huelga de hambre, sin que, según refieren los familiares, haya mejorado la situación de los presos como consecuencia de la visita.

Respecto de la entrevista mantenida por la delegación del CNDH con los presos, se informó por los familiares que el Sr. Director de la prisión estuvo presente en tales entrevistas, lo que resultaría contrario al principio de privacidad en las visitas establecido por el artículo 20.d) del Protocolo Facultativo que regula el funcionamiento de los MNPT.

Asimismo, se informó por los familiares de las personas presas de que el Director General de Prisiones en Marruecos visitó la prisión en que se encontraban los presos que llevaban a cabo la huelga de hambre sin que, al parecer, mantuviera entrevista con los mismos. Se informa de que, como represalia por la protesta, se mantuvo a algunos de ellos cinco días en régimen de aislamiento.

Refieren quejas asimismo sobre la asistencia sanitaria que reciben sus familiares en prisión.

Informaciones obtenidas por medio de observación presencial directa en las vistas orales respecto de la vigencia de los derechos y garantías procesales de los acusados

Ya en relación con las garantías jurídicas básicas que conforman el derecho a un juicio justo y sus diferentes manifestaciones en los derechos afectados, se pudo comprobar de manera directa durante el proceso de observación presencial en las vistas el debate jurídico en torno a las cuestiones que a continuación se exponen.

En primer lugar, por parte de las defensas se efectuó al inicio de la vista celebrada en fecha 13 de marzo una serie de alegaciones —a modo de cuestiones previas—, entregadas igualmente por escrito al Tribunal, en las que se plantearon entre otras cuestiones:

—La existencia en el inicio del procedimiento de períodos de detención no registrados y que no contaron con la habilitación legal debida por exceder de los plazos previstos en la normativa aplicable.

—El incumplimiento de la obligación de avisar a las familias de los detenidos conforme a la legislación aplicable.

—La inexistencia de firma en algunas actas y las deficiencias en las firmas obrantes en las mismas; se alega en particular, respecto de un detenido, que no habría firmado el acta policial libremente como muestra de consentimiento, sino que un agente de las FSE le habría cogido la mano y forzado a dejar estampada una rúbrica; la defensa solicitó respecto de ese caso en concreto la práctica de una prueba pericial caligráfica.

—La realización de registros domiciliarios sin autorización judicial.

—La práctica de conducciones a detenidos en transporte público —lo que, según se alegó, habría lesionado su dignidad y honor—.

—La desproporción en los períodos de detención registrados (2 días + 1 día por concesión de prórroga) a la vista de las diligencias policiales practicadas, que no habrían de tomar más de unas cuatro horas.

Las alegaciones expuestas sustentaron la pretensión de la defensa, que trató de hacerlas valer respecto de la eliminación del proceso —de los autos, del expediente— de los informes policiales que se tuvieran por nulos y no desplegasen efectos a la vista de las infracciones señaladas.

Se añadió a lo anterior por otros/as letrado/as de la defensa:

—Queja genérica en el sentido de que las pretensiones de la defensa no habían sido tenidas en consideración en el curso del procedimiento en la primera instancia.

—Alegación respecto de la discrecionalidad con la que —según se refirió— es habitual que actúen los miembros de las FSE y la permisividad de los juzgados y tribunales al respecto.

—Queja relativa a la circunstancia de que en la sala de vistas hubiese más miembros de las FSE que observadores y familiares de los presos.

—Habiéndose efectuado detenciones en fecha de 24/01/2018 a las 7 de la mañana, no había quedado registrada la práctica de ninguna diligencia hasta el día siguiente, planteando la duda del motivo por el que se había mantenido bajo custodia durante todas las horas de referencia.

—Denuncia respecto de la ausencia de justificación y proporcionalidad de tal medida restrictiva de libertad derivada de lo antes expuesto.

—Denuncia concerniente a las amenazas que habría recibido un acusado durante su detención en el sentido de que iba a ser violado en caso de que no firmara el acta policial —su autoinculpación— y que, en consecuencia, el atestado policial había de tenerse por ilegal.

—Queja por no haberse permitido la entrada en la sala de vistas de las personas saharauis que se encontraban en el exterior del edificio, afirmando que tal medida supone una discriminación; en ese momento el Sr. Presidente del Tribunal le retira la palabra aludiendo a que la alegación de la letrada no es objeto de la discusión de referencia en esa vista.

Las alegaciones del Procurador del Rey —representante del Ministerio Fiscal— se encaminaron a destacar la importancia mediática que había alcanzado el procedimiento (por las observadoras se pudo comprobar cómo se informaba de la celebración del juicio por los medios de comunicación), describiendo el fondo del asunto como un conflicto entre estudiantes por motivo de su origen —saharauis/amazighs— para sostener que la realidad que subyace es que todos ellos son marroquíes; alude asimismo a otros casos en que, según refiere, habría habido perjudicados estudiantes amazighs por estudiantes saharauis.

La permisividad del Tribunal ante un alegato tan marcadamente político, carente de pertinencia alguna respecto de los hechos objeto de enjuiciamiento, contrasta con lo sucedido tan sólo unos instantes antes (por el Presidente del Tribunal se ha retirado la palabra a la letrada de la defensa al alegar, en el sentido de un derecho fundamental, principio de publicidad de la audiencia) y compromete el debido respeto a los principios de igualdad de medios procesales y de imparcialidad del Tribunal (artículo 14 PICDP —observación general 32 comité ddhh—).

Por el fiscal-procurador del Rey se defendió la legalidad de la actuación de los agentes intervinientes; se negó que los detenidos firmasen sus autoinculpaciones bajo coacción, afirmándose que las firmas se corresponden con las de los detenidos; rechazó que exista un imperativo legal respecto a avisar a las familias de los detenidos; y alegó que las conducciones que tuvieron lugar en transporte público vienen justificadas por motivos de seguridad para los propios detenidos. Añade que la restricción de acceso a las personas saharauis a la sala de vistas no viene de su persona (en respuesta a la abogada de la defensa, que en su intervención ha señalado al procurador como responsable de tal decisión). Esta alegación, por lo que tiene de asunción de que la restricción denunciada existe, resulta asimismo comprometedora del principio de publicidad de la audiencia. Concluye formulando una oposición genérica a las alegaciones y peticiones de las defensas.

Por las defensas se tuvo ocasión de efectuar contrarréplica a las alegaciones del procurador para manifestar que el alegato del fiscal había resultado marcadamente político, lo que está fuera del objeto del procedimiento, y se replica entre otras cuestiones a:

—Si por el procurador se ha indicado que la duración de los tiempos de la detención —denunciada por la defensa como desproporcionada— obedece a que primero se les detuvo y luego se practicaron las indagaciones, se indique en función de qué hallazgos o pesquisas se encontraron indicios como para encontrarles sospechosos del delito —y proceder a su detención— si se practicaron todas las investigaciones después.

—Se insiste en que, frente a lo alegado por el fiscal, el aviso a las familias sí es un imperativo legal, lo que se deduce de la redacción del propio texto legal. El fiscal ha argumentado que el precepto de referencia no está

redactado en modo imperativo; la defensa replica que no cabe razonablemente entender otra cosa de la redacción del precepto y ofrece al Tribunal ejemplos análogos en la normativa procesal (ej., el precepto dedicado a regular la confección de «actas» o atestados por los miembros de las FSE no establece que el agente «está obligado a redactar un atestado...», sino simplemente viene expresado como «el agente redacta un acta...», o «el agente redactará un acta...»), de lo que —afirma la defensa— se deduce idéntica obligación y, como refuerzo de su alegato, le pregunta al Tribunal si acaso en alguna ocasión los miembros de las FSE han presentado a un detenido ante un Juzgado o Tribunal sin atestado, acta o informe.

—Se solicita que, dado que por el fiscal se defiende la legalidad de los registros domiciliarios, que señale en qué lugar de los autos se encuentra la autorización judicial habilitante.

—Se solicita que por el fiscal se indique de dónde procede la orden de restricción de entrada a la sala de vistas de las personas saharauis.

Tras todo ello, por el Tribunal se decide la continuación de la vista en fecha 10/04/2018 y se anuncia a las defensas que durante el transcurso del día (13/03, día de la vista de referencia) se resolverá respecto de las alegaciones efectuadas en la sesión y se comunicará a las partes.

Se nos comunica al día siguiente por los letrados de la defensa que se ha rechazado la totalidad de las alegaciones, peticiones y proposiciones de prueba.

Se reinicia la celebración del juicio el 10 de abril con las declaraciones de los imputados, quienes manifiestan:

Niegan todos ellos haber participado en los hechos violentos que se enjuician y manifiestan la convicción de estar siendo acusados en el procedimiento por motivo de su actividad política, ideológica. Algunos de ellos aseguran no encontrarse en el lugar de los hechos en el momento de la presunta comisión del delito, habiéndose denegado la prueba propuesta al respecto (ej., uno de ellos, testifical de un amigo en cuya casa afirmó encontrarse uno de los acusados; en otro caso, prueba con objeto de acreditar que 2 días antes de los hechos había marchado a El Aaiún). Aseguran haber firmado las declaraciones autoinculpaciones bajo tortura, violencia, coacción (uno de ellos, haber sido amenazado con ser violado si no firmaba la declaración, y que las preguntas durante los interrogatorios tenían

que ver con su eventual relación con el Frente Polisario, no con los hechos investigados. Se protesta asimismo por haber denegado prueba consistente en la comparecencia del Sr. Director de la Universidad por no haber comunicado el paradero a la familia durante la detención, así como por deficiente asistencia sanitaria en prisión.

Resulta especialmente significativo que ante las reiteradas denuncias de torturas el Tribunal no promovió actividad indagatoria alguna con la finalidad de esclarecer las denuncias formuladas ante él —ni en la primera instancia se llevó a cabo investigación alguna en tal sentido—.

Llamó la atención de las observadoras la actitud mantenida por los miembros del Tribunal durante las declaraciones, actitud totalmente pasiva sin aparentemente prestar atención en absoluto, ejemplo de ello es el hecho de que ninguno de ellos tomase notas o que alguno de sus miembros pareciera quedarse dormido durante los alegatos.

El Procurador del Rey (Ministerio Fiscal) finalmente alegó en el sentido de solicitar que no se otorgase consideración alguna a las manifestaciones de los acusados saharauis con respecto al conflicto político, ya que el territorio del Sahara Occidental se encuentra —según él refiere— bajo soberanía de Marruecos, y afirma no entender el motivo por el que el Tribunal les ha permitido hablar de ello.

Muestra su disgusto con respecto a que se hable de «saharauis», ya que su nacionalidad es la marroquí y estaban estudiando en una Universidad marroquí.

Resultan patentes las contradicciones internas en el argumentario esgrimido por el procurador, dado que se mueve entre el rechazo a que la persecución de los acusados obedezca a sus actividades políticas o ideología, solicitando del Tribunal la expulsión del procedimiento de tal tipo de consideraciones, para no dejar de reiterar asimismo la pertenencia del territorio del Sahara Occidental a Marruecos.

Sobre los hechos en cuestión, entendió que el resultado causó cuatro víctimas, tres heridos y una persona fallecida, y describió cómo se había producido el supuesto ataque sin individualizar las acciones con respecto a los acusados.

Asimismo consideró que, a pesar de no tener más pruebas objetivas que corroborasen sus acusaciones, existían las actas autoinculpatorias y ellas eran suficiente prueba para demostrar la culpabilidad.

En contestación intervinieron todos los abogados de la defensa, los cuales apelaron a la aplicación del derecho internacional y a los derechos humanos sin importar la condición política de las personas.

Insistieron en la falta de pruebas sobre las acusaciones y en las denuncias sobre las torturas que habían sufrido sus defendidos, siendo las únicas pruebas —pretendidamente— de cargo contra ellos las actas auto inculporias firmadas bajo tortura. Reprocharon al Tribunal no haber oído las denuncias sobre torturas y no haberlas investigado. Recordaron el procedimiento de Gdeim Izik haciendo símiles con el mismo. Aportaron el Informe de Human Rights Watch sobre violaciones de ddhh en el Reino de Marruecos (https://www.hrw.org/sites/default/files/morocco_sp.pdf).

El Tribunal, por último, concedió la palabra a los acusados, y uno de ellos hizo uso de ella para afirmar: «No seremos el último grupo en ser condenado», agradecer la presencia de las y los observadores internacionales y de los familiares.

Sobre las 20 horas el Tribunal notifica a los abogados que se confirma en su totalidad la sentencia apelada.

Entrevista mantenida con dos abogados de la defensa en fecha 13 de marzo

Durante uno de los desplazamientos a la observación de las vistas se tiene ocasión de mantener reunión con dos abogados que ejercen la defensa en el procedimiento. Por los mismos se agradece la presencia de observadores internacionales en los juicios, llegando a expresar que puede tener repercusiones positivas en términos de mayores garantías en algunos puntos concretos del desarrollo de la vista.

Se hace un resumen de los aspectos más relevantes del procedimiento de referencia y se informa de que un mes antes tuvo lugar otra pelea, cuyo resultado fue el ingreso hospitalario de un estudiante saharauí por heridas graves, sin que se abriera ninguna investigación judicial.

A la vista de las personas detenidas y las indagaciones policiales efectuadas, se valora por las defensas que la investigación ha ido encaminada a perseguir a los cabecillas del movimiento estudiantil, no a las personas que se encontraran en el lugar de los hechos y que pudieran haber estado implicadas en el incidente acaecido; según se informa, algunos de los presos

se encontraban en otro lugar en el momento en que ocurrieron los hechos y han sido condenados en calidad de «instigadores». Los interrogatorios durante el procedimiento han tenido que ver con sus actividades políticas, su eventual relación con el Frente Polisario. Les presentaron las actas ya redactadas y les obligaron a firmarlas. Las condenas en primera instancia fueron a tres años de prisión para once de ellos, y a diez años para cuatro de ellos —un delito tiene que ver con organizar una pelea que ocasionó la muerte de una persona sin tener la intención de producir ese resultado; el otro delito, con participar en la misma—. No se ha condenado a nadie como autor material del hecho; las condenas son por colaboración o instigación, lo que produce perplejidad en los letrados de la defensa.

En relación con el ordenamiento jurídico procesal penal, se comenta que en la vista de 2.^a instancia —apelación— se practica de nuevo prueba sin restricción.

Respecto del procedimiento en la primera instancia, se informa de que los únicos indicios inculpativos aportados son las actas policiales. Aparecen mencionados en los informes policiales tres testigos, si bien no fueron llamados a testificar durante el procedimiento.

Todos los detenidos—presos alegaron haber sufrido torturas sin que se dejase constancia de informe médico al respecto; por las defensas se ha solicitado durante la vista que se les practique a los presos exámenes médicos en relación con los malos tratos denunciados sin que se haya accedido a tales medios de prueba.

En este sentido, se consulta a las defensas sobre la disponibilidad de profesionales (en medicina, psicología...) formados en el Protocolo de Estambul —Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes— Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas— a los efectos de poder contar con herramientas eficaces en la persecución de prácticas de tortura, especialmente en situaciones como la presente, en que transcurridos más de dos años desde la detención es previsible que, si no todas las secuelas físicas, la mayor parte de ellas hayan desaparecido; se comenta por las defensas que en principio no se cuenta con profesionales de referencia con tal formación y que de todas formas consideran que ante una proposición de prueba de ese tipo el Tribunal procedería designando médicos forenses para la realización de las periciales sobre la eventual existencia de malos

tratos o torturas, como así ha sucedido en alguna ocasión previa, habiéndose producido al parecer serias deficiencias en las evaluaciones médicas practicadas —que, según se informa, no se ajustaron a los estándares mínimos del Protocolo aludido—.

2.2. Procedimiento penal contra el periodista saharauí Laaroussi Ndour. Observación presente en primera y segunda instancia

Laaroussi Ndour es un joven periodista saharauí que trabaja como fotógrafo y editor en distintos medios de comunicación, entre ellos en el Benti-li Media Center. Durante el procedimiento de Gdeim Izik fue un periodista muy activo. El día 2 de mayo de 2018 fue detenido por la policía marroquí en El Aaiún durante la noche. Durante su detención fue trasladado a la prisión «Negra» del El Aaiún, donde permaneció hasta su puesta en libertad el cinco de julio de 2018.

El primer juicio contra Laaroussi se celebró en tres vistas, señalándose en diferentes días, ya que las dos primeras se suspendieron (por solicitud de la defensa) y finalmente se celebró el juicio el 21 de mayo de 2018. El juicio de segunda instancia se celebró el 5 de julio de 2018.

Las vistas a las que asistimos se celebraron el 14 de mayo y el 5 de julio de 2018. Se celebraron en el Tribunal de Primera Instancia y Segunda Instancia de El Aaiún, antigua capital del Sahara Occidental, ocupada por el Reino de Marruecos desde hace más de 40 años bajo un régimen militar y colonialista.

Desde el año 2015 se ha agravado la limitación de la entrada en el territorio a los diferentes activistas que trabajaban en ONGs cooperando con el pueblo saharauí que resiste residiendo en su antigua capital, así como a periodistas o cualquiera que quiera entrar con el fin de solidarizarse con el pueblo saharauí o informar sobre la realidad de El Aaiún, lo que provoca un bloqueo a todos los niveles y deja aislada a la población saharauí que ahí reside.

Durante las misiones de observación realizadas por quienes redactan este artículo para la vista del 14 de mayo y del 5 de julio de 2018, fuimos perseguidos y vigilados por agentes de los Cuerpos de Seguridad del Reino de Marruecos. Siempre vestidos de civiles, yendo en moto detrás de noso-

tros desde que pisamos por primera vez El Aaiún hasta que lo abandonamos. Entendemos que son medidas coercitivas para limitar nuestra labor como observadoras jurídicas internacionales.

El día de la vista, tras la misma, fuimos interceptados en la vía pública por un agente de la autoridad ocupante marroquí que nos efectuó una serie de apercibimientos y nos trasladó verbalmente una orden de restricción de comunicaciones con la población saharauí en unos términos bastante ambiguos, circunstancia que se comunicó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Hechos de referencia

Los hechos objeto de acusación ocurrieron el día 2 de mayo de 2018, al parecer sobre las 23 horas, cuando un grupo de unos quince jóvenes empezó a tirar piedras a un agente de la policía que se encontraba regulando el tráfico. Una de las piedras habría alcanzado al agente de tráfico, golpeándole por la espalda a la altura del hombro sin poder ver, en principio, a la persona que la lanzó.

Laarousi fue detenido tras ser reconocido en una batida que se realizó con posterioridad mientras se encontraba recargando su teléfono móvil en una tienda alejada del lugar de los hechos, negando Laroussi haber participado en ese ataque al agente y haber lanzado la piedra que le golpeó.

A pesar de ello fue detenido y acusado; durante su detención perdió el audífono que llevaba porque sufre de sordera en uno de sus oídos —ello tiene especial relevancia, como veremos más adelante en cuanto a la prueba que sostuvo su acusación—.

Entrevista con abogado de la defensa, Mohamed Boukhaled

El 14 de mayo nos entrevistamos con el abogado de la defensa en su despacho profesional. Boukhaled destacó la arbitrariedad en la motivación en cuanto a la prisión preventiva, así como diferentes elementos del procedimiento que contravienen las garantías de un juicio justo. A Laaroussi se le acusó de haber cometido cinco delitos recogidos en el Código Penal marroquí (artículos 303, 303bis, 263, 267 y 129); entre ellos, usar armas sin permiso y humillación a un funcionario público.

Su abogado puso de manifiesto diferentes contradicciones que aparecían en el atestado, así como la falta de documentos probatorios que deberían haberse aportado para sustentar la acusación —especialmente relevante, el parte médico del agente supuestamente lesionado—. Para Boukhaled el hecho de que Laaroussi padezca una discapacidad auditiva es fundamental para declarar nula la declaración autoinculpatoria, ya que en el momento del interrogatorio no llevaba el audífono.

Entrevistas con miembros de asociaciones de defensa de los derechos humanos

En ambos desplazamientos pudimos entrevistarnos con miembros de la ASVDH y de la Liga para la protección de los Presos Saharauis en las cárceles marroquíes.

En el mes de julio nos relatan los hechos sucedidos la semana anterior: cerca de un centenar de personas saharauis resultaron heridas en El Aaiún, Smara y Bojador el jueves, 28 de junio de 2018, cuando protestaban en la calle aprovechando la visita del enviado especial de Naciones Unidas, Horst Köhler, a El Aaiún. Los manifestantes reclamaban la libre determinación para el Sahara Occidental, urgiendo a la ONU una actuación al respecto, produciéndose, según se manifestó, un ataque violento por parte de la autoridad marroquí hacia el grupo de manifestantes que de forma pacífica reivindicaban sus derechos fundamentales.

En la entrevista también se muestra la preocupación por las medidas de control y seguridad que las autoridades marroquíes toman contra los/las observadores/as internacionales, así como por la prohibición de entrada decretadas de manera arbitraria y que se habrían incrementado en los últimos tiempos. Al respecto, cabe destacar las siguientes conclusiones del Informe sobre Marruecos/Sahara Occidental de Human Rights Watch de 2018 sobre eventos de 2017:

El gobierno ha seguido imponiendo una prohibición de facto a las misiones de investigación por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch desde 2015, a pesar del acceso relativamente sin restricciones de las dos organizaciones durante los casi veinticinco años previos.

Como en años anteriores, las autoridades expulsaron a varios visitantes extranjeros que habían venido a investigar las condiciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental o para asistir a eventos de derechos humanos. El 4 de julio, las ciudadanas españolas Laura Moreno y Andrea Sáez, que se habían reunido con activistas saharauis de derechos humanos, no pudieron desembarcar del avión en El Aaiún y fueron enviadas de regreso.

Informaciones obtenidas por medio de observación presencial directa en las vistas orales relativas a la vigencia de los derechos y garantías procesales del acusado

Sobre la Vista Oral del día 14 de mayo:

La vista se celebró en el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún, Sahara Occidental. Se nos requiere por miembros de las FSE a las puertas del edificio del Tribunal los pasaportes a los observadores y documento de identificación a los traductores.

La vista está señalada a las 13:00 horas, entramos en el Tribunal sobre las 12:45 y nos informan de que la Presidenta del Tribunal nos espera en su despacho para recibirnos. En el despacho nos recibe la Presidenta del Tribunal y un traductor de español. La entrevista duró escasos minutos; en ella ambas partes nos presentamos, nos dio la bienvenida y le trasladamos la inquietud de este caso particular por el riesgo de afección a los derechos a la libertad de información y expresión al tratarse de un periodista la persona procesada.

La vista comienza con puntualidad, a las 13:00 horas, con la entrada del Presidente, el Procurador del Rey y el Secretario. En esta ocasión nos segregan por género, sentándose a la derecha los hombres y a la izquierda las mujeres. Les comunicamos a los agentes de la autoridad que era necesario sentarnos juntos por la traducción, a lo que no accedieron, de modo que, al ser varón la persona encargada de la traducción, únicamente Pablo pudo ser asistido por intérprete durante la vista.

El detenido entra en el Tribunal cantando consignas —reivindicando el derecho a la autodeterminación para el territorio del Sahara Occidental— y acto seguido su padre le acerca un audífono (hasta el momento había permanecido sin poder escuchar).

La acusación solicita la suspensión de la vista oral alegando no haber dispuesto de tiempo suficiente para estudiar el asunto; la defensa se opone afirmando que sí se ha dispuesto del tiempo necesario y alega, asimismo, la improcedencia de la suspensión dado que no existe acreditación documental de las presuntas lesiones objeto de investigación. Por el Tribunal se decide suspender el Acto del Juicio hasta el próximo lunes 21 de mayo de 2018. La vista dura unos diez minutos.

Vista Oral del día 5 de julio celebrada en la Corte Penal de Apelación de El Aaiún, Sahara Occidental:

La vista estaba señalada a las 9:15; nos permiten la entrada en la Corte a las 9:15. Se me requiere por miembros de las FSE el pasaporte. Entramos tras esperar a que los familiares entren en la Sala; se admite la entrada de todos ellos. La vista comienza a las 9:35 con la entrada del Presidente, el Procurador del Rey y el Secretario.

De nuevo nos segregan por género, sentándose a la derecha los hombres y a la izquierda las mujeres. En esta ocasión sólo era una mujer observadora junto al traductor hombre, por lo que se sienta en la bancada derecha con los hombres junto al traductor —tras producirse una conversación entre los miembros de los Cuerpos de Seguridad, permitieron que se sentasen juntos para hacer posible la traducción simultánea—.

Se celebraron diferentes vistas de diferentes imputados en procedimientos sin relación con el proceso de referencia, todas ellas de Apelación. En primer y segundo lugar se celebran dos vistas por temas de salud pública (sin asistencia letrada) y, en tercer lugar, se celebra la vista de Laaroussi. Es necesario estar presente desde el primer momento, ya que no es público el orden de las Vistas. El detenido entró en el Tribunal a las 09:50, se colocó en el atril situado enfrente del presidente y se acerca su abogado Bazel Lahmad y un nuevo abogado defensor que se persona en ese momento: Mohamed Abu Jaled.

El Presidente del Tribunal narró los hechos probados en primera instancia y cita los cargos por los que ha sido condenado: atentado a la autoridad y lesiones leves contra Agente de Autoridad (no utilizan micrófono, lo que dificulta la escucha). El Presidente del Tribunal preguntó a Laaroussi si reconoce la autoría de los hechos probados y de los delitos por los que ha sido condenado; el acusado niega su participación en los mismos.

A continuación se da la palabra a la defensa —parte recurrente en apelación—; presenta un dossier con las alegaciones del recurso y se verbalizan las mismas.

Entre las alegaciones de la defensa se denunció que el imputado fue torturado durante su detención en sede policial y que firmó la declaración autoinculpatoria sin conocer el contenido de la misma. Asimismo fue sometido a interrogatorios sin su audífono, ya que lo perdió durante la detención. Se ponen de manifiesto las múltiples contradicciones obrantes en el atestado, que ponen en cuestión la declaración del agente de policía lesionado. Se apela, por ello, al principio de *in dubio pro reo*.

Un ejemplo de las contradicciones señaladas es que la condena se basa en una lesión causada por un golpe con un palo y sin embargo en el atestado se consigna que la policía fue atacada por lanzamientos de piedras.

Sostiene asimismo la defensa la inexistencia de nexo causal entre la lesión del agente y la conducta que se le imputa al acusado. Alegó la defensa que la causa real de la detención es el hecho de que Laaroussi es un periodista activo en la defensa de los derechos humanos, que se trata de nuevo de un juicio político contra un activista saharauí. Recordó que no existía prueba alguna que acreditase la autoría y apeló al artículo 287 del Código Penal Marroquí (entre otros) donde se establece la obligatoriedad de acusar bajo pruebas objetivas de cargo suficiente y bajo las garantías procesales que se establecen en el propio Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Constitución Marroquí. La defensa solicita por todo ello la nulidad de la Sentencia de Primera Instancia, entendiendo que se dio fuera de la legalidad.

De nuevo aparece la declaración autoinculpatoria recogida en los informes policiales como única prueba —pretendidamente, de cargo— de la acusación; se considera incompatible con los estándares del derecho a un juicio imparcial que las pruebas obtenidas bajo violencia o coacción desplieguen efecto alguno y que puedan considerarse como prueba de cargo suficiente que desvirtúe el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

A continuación se concede la palabra al Procurador del Rey (Ministerio Fiscal) el cual niega las torturas afirmando que no existe marca alguna sobre el cuerpo del detenido.

La vista terminó a las 10:15; los abogados de la defensa agradecieron nuestra labor y nos transmiten la importancia que tiene la observación

internacional, afirmando que se comprueba que cuando acudimos a los procedimientos se cumplen mayores garantías por parte del Tribunal.

A las 15:30 nos informan los abogados defensores que se les ha notificado ya la Sentencia por la cual se estima parcialmente el Recurso de Apelación y se rebaja a dos meses la condena impuesta. Sobre las 18 horas Laaroussi es liberado puesto que ya había cumplido la condena de dos meses en prisión preventiva.

Se considera muy relevante el hecho de que los juicios duren escasos diez minutos y la Sentencia sea notificada en apenas unas horas, lo que hace presumir que la decisión condenatoria pueda estar preconcebida con anterioridad a la celebración del juicio.

3. Breve resumen de los principales impedimentos en la garantía en un proceso justo conforme a los estándares internacionales.

3.1. Derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni declararse culpable —artículo 14.3 g) del PIDCP—. El problema de la tortura.

Por parte de las integrantes de la misión de observación se comprobó cómo los acusados —y sus representantes— denunciaron ante los Tribunales haber sufrido torturas por parte de los agentes de las FSE marroquíes, motivo que, según afirmaron, explica las autoinculpaciones presentadas como elemento de cargo contra ellos. Ninguna actividad indagatoria se desplegó como consecuencia de tales denuncias, ni por los juzgadores, ni por quienes instruyeron los procedimientos. Las proposiciones de prueba a este respecto —y a los demás— resultaron denegadas sin aportar motivación.

Esta circunstancia se considera incompatible con el derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable —artículo 14.3 g) del PIDCP, al que se añade el artículo 293 del CP marroquí, que prohíbe admitir como prueba declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo violencia o coacción—, derecho que se interpreta por el Comité de Derechos Humanos de la ONU del modo que sigue:

«Esta salvaguarda debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen culpa-

bles. Con mayor razón es inaceptable tratar a un acusado de forma contraria al artículo 7 del Pacto a fin de obligarlo a confesar (Comunicaciones núms. 1208/2003, Kurbonov c. Tayikistán; 1044/2002, Shukurova c. Tayikistán; 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka; 912/2000, Deolall c. Guyana; 253/1987, Kelly c. Jamaica). El derecho interno debe establecer que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad».

Párrafo 41 de la Observación General núm. 32 del Comité de DDHH de la ONU, julio de 2007.

La propia tipificación del artículo 290 CP marroquí, que determina la presunción de veracidad de los informes policiales (lugar en que quedan recogidas las declaraciones policiales de las personas investigadas) en supuestos de penas de prisión de hasta cinco años, supone un obstáculo importantísimo en el ámbito de la prevención de la tortura. Los estándares internacionales discurren por los antípodas de tal previsión, a la vista de la recomendación efectuada a Marruecos por el Relator especial de la ONU contra la Tortura (informe de 28/02/2013), en que determinaba que, en casos de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente se alegue haber efectuado bajo tortura, recaerá sobre el Estado la carga de probar que la declaración se prestó en condiciones de libre determinación de la voluntad y que fue obtenida por medios lícitos.

La comprobada omisión del deber de investigar las denuncias de tortura quebranta las obligaciones establecidas en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en particular los artículos 12 a 15:

Artículo 12.- Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.

Artículo 13.- Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga

derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Artículo 14.- 1. Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.

Artículo 15.- Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

El problema de la tortura forma parte de lo que se ha constatado en este ámbito como un problema estructural a la vista de los dictámenes de los organismos internacionales de referencia: Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU; Juan Méndez, Informe de 30/04/2013, A/HRC/22/53/Add.2; Comité Contra la Tortura de la ONU, CAT/C/MAR/CO/4; Observaciones finales sobre Marruecos en informe de 21/12/2011; Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU; informe de 4/08/2014, misión a Marruecos; A/HRC/27/48/Add.5; e informes de Amnistía Internacional o Human Rights Watch —ya reseñado, aportado por las defensas al Tribunal en el procedimiento de referencia—, análisis de seis procedimientos como ejemplos paradigmáticos del modo de arrancar autoinculpaciones bajo tortura para validarlas posteriormente como prueba en un escenario de vulneración flagrante de los estándares internacionales —y nacionales— de referencia.

La condición endémica del problema que venimos mencionando se pone de manifiesto asimismo por el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí en su informe sobre la situación general de las prisiones marroquíes: «La crisis de las cárceles: una responsabilidad compartida»,

publicado en diciembre de 2012, en el que se consigna en el apartado quinto —conclusiones y observaciones—:

El CNDH ha destacado las siguientes observaciones:

Persistencia de una serie de abusos dentro de las prisiones objeto de las visitas, abusos cometidos por el personal penitenciario contra los reclusos, lo que constituye una clara violación de las normativas que regulan el sistema penitenciario y una violación de las convenciones internacionales en la materia, siendo definidas como tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Destacamos principalmente las siguientes:

Los porrazos utilizando palos o trozos de mangueras, la suspensión en las puertas de las celdas mediante el uso de esposas, golpes en las plantías de los pies inmovilizados (Falaqa), pinchazos con agujas, bofetadas, quemaduras, las patadas, el desnudo forzado de los reclusos ante la mirada del resto de los prisioneros, además de los insultos y de agresiones verbales contra la dignidad humana de los presos. Estos abusos han sido constatados en la mayoría de las cárceles visitadas, aunque en proporciones y en intensidades que varían de una prisión a otra, y a excepción de las cárceles de Inzeguan y Dakhla donde han sido registrados casos aislados de abusos.

Como obstáculo práctico añadido a lo ya expuesto, el deber de las autoridades del Estado de investigar las denuncias de torturas se ve —se vería, en caso de asumirse—, además, decisivamente entorpecido por la imposibilidad en la práctica de contar con un examen médico forense eficaz desde el punto de vista de la indagación judicial conforme a los principios internacionales de referencia —Protocolo de Estambul, «Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—; nuevamente nos remitimos al CNDH para llamar la atención en este punto sobre su informe *La patología forense en Marruecos: la necesidad de una reforma global* —julio de 2013—, en el que se ofrecen los datos referidos a la existencia de un único servicio hospitalario universitario especializado en esta disciplina, a que Marruecos cuenta tan solo con trece especialistas en medicina forense y que no existen estándares o protocolos respecto a la realización de las valoraciones, lo que en la práctica redundaría en la imposibi-

lidad de acreditar —presentar prueba de cargo suficiente— ante un Tribunal la existencia de torturas. Resulta bien ilustrativo a este respecto el informe forense adjunto como documento 5 al informe «Just sign here», de HRW, relativo al único de los seis casos analizados en que se solicitó por parte del Procurador del Rey la realización de examen médico y valoración médica de las lesiones, con un resultado absolutamente ineficaz en términos forenses.

Torturas y detención arbitraria a la población saharauí defensora de los derechos humanos como práctica represiva sistemática en la actualidad

Especialmente significativas en el ámbito que estamos tratando resultan las últimas resoluciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Conforme a sus criterios, las confesiones extraídas mediante violencia son la ilustración perfecta de la prohibición contenida en el artículo 14.3 g) del PIDCP.

Se considera por el Grupo de Trabajo como arbitraria la privación de libertad «Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario» (categoría III).

Tal es el caso en supuestos como los aquí presentados, en que la condena se basa únicamente en la autoinculpación presuntamente arrancada bajo tortura, sin que se proceda a una mínima investigación de las denuncias al respecto, habiéndose, en consecuencia, vulnerado el derecho de los investigados a no ser obligados a declarar contra sí mismos.

El Grupo de Trabajo ha tenido ocasión de pronunciarse en los últimos meses calificando como detenciones arbitrarias las dos condenas privativas de libertad padecidas por personas saharauis que tuvo ocasión de examinar: Opinión núm. 11/2017 (de 27/07/2017), relativa a Salah Eddine Bassir, y Opinión núm. 31/2018 (de 27/09/2018), relativa a Mohamed Al-Bambary, ambos ciudadanos saharauis condenados por el estado marroquí a penas de prisión basadas en autoinculpaciones que posteriormente denunciaron haberse producido bajo tortura.

Se ha comprobado tal grado de sistematización en el patrón represivo procesal penal descrito que por el Grupo de Detenciones se han categorizado estas privaciones de libertad examinadas como detención arbitraria, además de por la gravedad de la inobservancia de las normas que configuran el derecho a un juicio justo, también por los motivos previstos para la categoría V: «Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos».

Así, se comprueba en el párrafo 53 correspondiente a la opinión de 27/07/2017:

Por otra parte, el Grupo de Trabajo observa que existe una práctica generalizada de malos tratos contra las personas que, como el Sr. Bassir, defienden la libre determinación del pueblo saharauí. Esta práctica supone una discriminación de conformidad con el derecho internacional y, en particular, de los artículos 1, 2 y 27 del Pacto. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Bassir también es arbitraria de conformidad con la categoría V.

En el mismo sentido, en el informe del citado Grupo de Trabajo de la ONU de 4/08/2014, resultante de la visita efectuada a Marruecos y el territorio del Sahara Occidental, se llama la atención sobre el patrón de torturas contra la población saharauí defensora de los ddhh:

In cases related to State security, such as those involving terrorism, membership in Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the Working Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment by police officers, in particular by agents of the National Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced into making a confession and sentenced to prison on the sole basis of that confession.

(...) Regarding Laâyoune, Western Sahara, the Working Group received numerous complaints of arbitrary detention, complaints that torture and ill-treatment were used to extract confessions and complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations and arresting

demonstrators calling for self-determination for the Sahrawi population. (A/HRC/27/48/Add.5).

El extremadamente alarmante diagnóstico que resulta tiene que ver, en consecuencia, con la violación de derechos del PIDCP cometidos como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra población civil (en este caso detenciones arbitrarias y torturas contra la población saharauí); tales conductas están previstas como crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los cuales se estarían cometiendo en territorio sometido a la jurisdicción penal española, sin que el Estado en cuestión se sienta interpelado por tal clamorosa situación. Las consecuencias que de ello debieran extraerse exceden del objeto de este artículo.

3.2. Derecho a una audiencia pública

El derecho a la publicidad del proceso se prevé, entre otros, en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos: «Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Y tan sólo la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores». (Artículo 14.2 del mismo cuerpo legal).

El Comité de ddhh considera que «La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjunto.

Los tribunales deben facilitar al público información acerca de la fecha y el lugar de la vista oral y disponer de medios adecuados para la asistencia de los miembros interesados del público, dentro de los límites razonables, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el posible interés público por el caso y duración de la vista oral» —párrafo 28, observación general 32 del artículo 14 PIDCP—.

En los procesos observados se han podido comprobar diversas restricciones injustificadas de acceso a la vista incompatibles con el derecho en cuestión; en el juicio contra los jóvenes estudiantes se intentó limitar físicamente la entrada en el acto del juicio, siendo habitual también utilizar medidas coercitivas para limitar o impedir la entrada en la sala.

3.3. Derecho a la presunción de inocencia

El derecho a la presunción de inocencia aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo incluye en su artículo 11.1: «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa»; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.2: «Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley»; en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6.2: «Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida»; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad»; y en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 7.b): «Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica: (...) el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por una corte o tribunal competente».

Las reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal también recogen el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 84.2): «El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia».

Ambos derechos aparecen recogidos en el Principio 33 del Conjunto de Principios de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión: «Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa».

Por otro lado, el derecho a la presunción de inocencia tiene una doble dimensión: por un lado, opera como una regla de juicio, pero constituye a su vez una regla de tratamiento en virtud de la cual el imputado tiene derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo.

Por eso se considera que algunos preceptos del código penal marroquí son por sí mismos contrarios a este principio y derecho fundamental, pues el ya mencionado artículo 290 del Código de Procedimiento Penal otorga presunción de veracidad a los informes policiales, a menos que se demuestre lo contrario. Así lo criticó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en 2014. Esta ley se aplica a infracciones penadas con menos de 5 años de prisión, infracciones por las que suelen ser acusados los presos políticos saharauis.

La presunción de inocencia impone que la carga probatoria deba recaer sobre la acusación, y que conforme al principio de legalidad las pruebas sean obtenidas por medios lícitos, lo que en buen número de ocasiones está ausente en las pruebas que presenta el ministerio fiscal en este tipo de procedimientos.

Por ello se considera que en ambos procedimientos de referencia se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.

En el acto del juicio oral, momento en el que se desarrolla la prueba, el Tribunal, como norma general, se limita a escuchar a las partes, no teniendo en consideración las peticiones de las defensas sobre las solicitudes de pruebas, negando la práctica de las mismas y no admitiendo las presentadas por la defensa.

Las condenas se basaron únicamente en las declaraciones autoinculpatórias, obtenidas bajo coacciones y torturas, y en los informes policiales. No se desplegó en el Acto del Juicio ninguna prueba de cargo garantizada por el ministerio fiscal (Procurador del Rey), se limitó en todo momento a desplegar hipótesis acusatorias sin mayor sustento que los informes

policiales. Ello limita más allá de lo admisible la actuación de la defensa y deja sin valor la apariencia garantista que ofrece el Tribunal escuchando a la defensa y, sin embargo, no teniéndola en consideración en ningún momento.

3.4. Otras afecciones a derechos y principios de referencia. Derecho a disponer de los medios adecuados para la defensa; igualdad de armas; imparcialidad e independencia del tribunal; empleo abusivo de la prisión provisional

El artículo 14.3.b) del PIDCP estipula que los acusados deben disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y deben poder comunicarse con un defensor de su elección.

Se denegó la totalidad de las pruebas propuestas por las defensas, algunas de ellas tan relevantes como la pericial caligráfica de la firma en el informe policial que constituía el único indicio incriminatorio —y en que se acabó sustentando la condena—, o testificales que habrían acreditado no encontrarse en el lugar de los hechos en el momento de comisión de los mismos, sin aportar motivación suficiente. A este respecto, atendiendo al lugar común en la jurisprudencia relativa a la consideración al derecho al empleo de los medios de prueba no como un derecho absoluto (y que, en consecuencia, no habría de entenderse vulnerado el derecho a la defensa en tanto no afecte a pruebas que reúnan determinados requisitos de pertinencia y necesidad), ante la apabullante denegación de pruebas comprobada (la totalidad de las mismas), se produce en la práctica un vaciado del derecho en cuestión del todo incompatible con las previsiones contenidas en el PIDCP.

En ambos procesos penales los señalamientos fueron anunciados con apenas 10 días como máximo de antelación, lo que dificulta la labor de la defensa, limitando el tiempo necesario para el estudio y preparación, afectando asimismo a la garantía de audiencia pública y la labor de la observación internacional al carecer del tiempo de antelación necesario para una misión de éstas características.

Se pudo comprobar cómo por el presidente del Tribunal, en el procedimiento de los estudiantes, se quitaba la palabra a las defensas cuando se encontraban alegando respecto de idénticos extremos a los que aludía

libremente la acusación, sin que el Tribunal considerase entonces fuera del objeto de la discusión la materia de referencia.

Todo ello en el contexto de sospechas fundadas sobre carencias estructurales en el principio de independencia de la magistratura en el Reino de Marruecos, tal y como se refleja en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos en su informe de 3/11/2004.

Se comprueba asimismo un empleo abusivo de la prisión provisional. Siendo sistemáticas las entradas en prisión de todas las personas saharauis detenidas, muy pocas veces los saharauis detenidos son puestos en libertad tras su detención. En los procedimientos de referencia del presente artículo ninguno de los detenidos estuvo en libertad condicional, todos fueron llevados a prisión provisional tras ser detenidos. Es una práctica habitual la aplicación innecesaria de la prisión preventiva; en nuestro caso, los detenidos carecían de antecedentes penales, tenían domicilio conocido, arraigo social, o carecían de medios para poder eludir o evitar la justicia.

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas privativas de libertad —Protocolo de Tokio— establecen que los estados miembros de las NNUU deben «asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente las penas».

El Protocolo de Tokio establece en su apartado 6 la prisión preventiva como último recurso:

6.1. En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima.

6.2. Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 y deberá ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano.

6.3. El delincuente tendrá derecho a apelar ante una autoridad judicial u otra autoridad independiente y competente en los casos en que se imponga prisión preventiva.

Además es habitual que los Tribunales marroquíes no admitan las pruebas necesarias para acreditar la situación personal de los detenidos lo que se impone como una práctica habitual, abusiva y arbitraria.

4. Conclusiones

En los dos procedimientos de referencia se ha apreciado una gravedad severa en la inobservancia de las normas aplicables relativas al derecho a un juicio imparcial, en particular en el derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni declararse culpable —artículo 14.3 g) del PIDCP— así como las restantes garantías exigibles en materia de prevención de la tortura, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de audiencia pública.

Conforme a los criterios del Grupo de Trabajo de la ONU en esta materia, las privaciones de libertad en ambos procedimientos habrían de ser calificadas como detenciones arbitrarias por la gravedad en la quiebra de los derechos y las garantías procesales penales exigibles.

Ambos casos supondrían como añadido detención arbitraria por la particular condición de saharauis defensores de los derechos humanos de las personas condenadas, la comprobada y generalizada persecución por parte de las autoridades marroquíes contra los mismos, y la deducción de que el procesamiento se debe a ese motivo: «Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos» (categoría V – GTDA).

«(...) el Grupo de Trabajo observa que existe una práctica generalizada de malos tratos contra las personas que, como el Sr. Bassir, defienden la libre determinación del pueblo saharauí». Opinión núm. 11/2017 (de 27/07/2017) relativa a Salah Eddine Bassir.

El ejercicio de la jurisdicción en estos términos por parte de los Tribunales marroquíes no puede entenderse más que como una extensión del aparato represivo de la seguridad del Estado.

La situación resultante cabría definirse como violación grave de los derechos humanos, de derechos contenidos PIDCP, cometida como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra población civil (en este caso detenciones arbitrarias y torturas contra la población saharauí), conductas que estarían previstas como crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del estatuto de la Corte Penal Internacional, los cuales se estarían cometiendo en la actualidad en territorio sometido a la jurisdicción penal española, potencia administradora de derecho del territorio, sin que el Estado en cuestión se sienta interpelado por tan clamorosa situación.

Se valora como consecuencia de lo expuesto que los procedimientos penales son usados como una medida de represión, tratando de infundir temor y desmovilizar a quienes apoyan y se solidarizan con los presos políticos saharauis y a quienes defienden la autodeterminación y respeto de los derechos humanos. No puede ser casualidad que haya sido procesado y condenado el joven periodista Laarosui Ndour, quien destacó como uno de los periodistas más activos en el apoyo a los procesados en el juicio de Gdeim Izik. En el proceso penal de los jóvenes estudiantes, autodenominados «El grupo de estudiantes El Wali» (joven revolucionario y líder nacionalista saharauí), destaca también el hecho de que fuesen detenidos y procesados en primera instancia mientras en Rabat se estaba celebrando el juicio civil de Gdeim Izik, donde recaían en aquel momento todas las atenciones, incluyendo las de los observadores y observadoras internacionales.

Por otro lado, la experiencia en la observación internacional nos lleva también a afirmar que la presencia de los y las observadoras en los procedimientos penales contra presos políticos saharauis sí tiene injerencia en algunas de las decisiones que los Tribunales puedan tomar. La reducción de condena en segunda instancia en el procedimiento de Laaroussi fue un aliento, un resultado positivo dentro de la labor de la observación jurídica.

La tortura en el territorio ocupado del Sahara Occidental

PEPE REVERT CALABUIG

Sumario:

Introducción

1. Regulación del crimen de torturas en el Derecho Internacional
 - 1.1. Tortura crimen internacional de primer grado
 - 1.2. Derecho Internacional Humanitario
 - 1.2.1. IV Convenio de Ginebra
 - 1.2.2. Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra
 - 1.3. Derecho Internacional de los Derechos Humanos
 - 1.3.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 - 1.3.1 a) Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
 - 1.3.2. Convención Contra la Tortura
 - 1.3.2 a) Comité Contra la Tortura
 - 1.3.3. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
 - 1.3.4. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional
 - 1.3.5. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
 - 1.3.5. a) Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
 - 1.4. Jurisdicción Universal
 - 1.4.1. Jurisdicción Universal Española
2. Práctica generalizada de torturas contra la población saharauí
 - 2.1. Práctica sistemática de la tortura
 - 2.1.1. Casuística de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
 - 2.1.2. Informes Consejo General de la Abogacía Española sobre juicios a Saharauis
 - 2.1.2.a) Primer informe del CGAE sobre juicios celebrados entre los años 2002-03
 - 2.1.2.b) Segundo informe del CGAE sobre juicios celebrados en el año 2005
 - 2.1.2.c) Informes individuales CGAE sobre juicios contra Saharauis
 - 2.1.3. Informes de Amnistía Internacional
 - 2.1.4. Comunicaciones ante el Comité Contra la Tortura
 - 2.1.5. Relator especial sobre la Tortura

2.1.6. Auto Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional Española

3. Respuesta de la comunidad internacional ante la comisión del delito de torturas en el Sahara occidental

3.1. Convenios de Ginebra

3.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3.2.1 Comité de Derechos Humanos

3.3. Convención contra la Tortura

3.3.1 Comité Contra la Tortura (CAT)

3.3.2 Comunicaciones Comité Contra la Tortura

3.4 Informe del Relator Especial sobre la tortura

3.5 Consejo de Derechos Humanos

3.5.1 Examen Periódico Universal Marruecos

3.6 Unión Africana

3.7 Corte Penal Internacional

3.8 Jurisdicción Universal

4. Respuesta de la potencia administradora, principio de territorialidad

4.1 Jurisdicción Universal

Conclusiones

Introducción

El crimen de torturas es uno de los crímenes más graves que se cometen contra la dignidad humana.

Con el objeto de erradicar tan execrable práctica, la comunidad internacional, a lo largo de los años, ha ido articulando una respuesta frente a la comisión de este crimen mediante la elaboración de diferentes instrumentos internacionales contra la tortura, teniendo todos ellos como objetivo prevenir que se cometan estos graves crímenes; y, en el caso de que se cometan, buscar una respuesta como la que se recoge en el Estatuto de Roma en su Preámbulo, que determina que este tipo de violencia no deben quedar sin castigo.

Recurrentemente, nos llegan noticias de la comisión de torturas por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes contra activistas saharauis; ante este reiterado comportamiento, cualquier jurista deberá plantearse y analizar la respuesta que se da a este comportamiento tan abominable, tanto por parte de los tribunales marroquíes como por parte de la comunidad internacional.

Inexplicablemente, al indagar sobre esta cuestión, la respuesta que hemos obtenido es la confirmación de que en Marruecos se tortura sistemáticamente a activistas saharauis, comportamiento por el que nunca nadie ha sido condenado.

Ante la constatación de este comportamiento, estimamos que deberíamos proceder a realizar una investigación con el objeto de determinar, en primer lugar, si estos hechos son ciertos o no; y en el caso de que sean ciertos, concretar el motivo por el cual este comportamiento no ha sido erradicado de la actuación cotidiana de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Para poder llegar a unas conclusiones sobre la práctica de la tortura contra saharauis, tanto en el territorio de Marruecos como en el Sahara Occidental, vamos a analizar la mayoría de los instrumentos legales que existen contra la tortura, en especial los elaborados por la comunidad internacional, así como los que se regulan en la propia legislación interna marroquí.

En primer lugar, realizaremos un análisis del tratamiento que se hace de la tortura en los más importantes instrumentos internacionales que regulan este crimen, para así poder determinar las obligaciones internacionales contraídas por Marruecos y por el resto de Estados.

En segundo lugar, vamos a relatar una pequeña muestra de diferentes crímenes de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos contra la población saharauí.

En tercer lugar, detallaremos la respuesta que ha dado la comunidad internacional mediante los diferentes instrumentos contra la tortura ante la comisión de este grave delito cometido contra saharauis; y, por último, finalizaremos el trabajo con una serie de conclusiones que nos puedan servir para determinar si la comunidad internacional responde de forma adecuada o no ante la perpetración del crimen de torturas que se produce sistemáticamente en el territorio ocupado del Sahara Occidental.

No obstante, y con carácter previo, debemos recordar de forma muy concisa y breve que el statu del territorio del Sahara Occidental es el de un Territorio No Autónomo sujeto a descolonización, ocupado militarmente por el Reino de Marruecos y que, según la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, reunida en pleno, dictó Auto n.º 40/2014¹, de fecha

1 <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=AN&reference=7197131&links=sahara%20occidental&optimize=20141028&publicinterface=true>.

cuatro de julio de 2014, en el que se mantiene que España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio; y, más recientemente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se afirma que el territorio del Sahara Occidental no pertenece a Marruecos.

I. Regulación del crimen de torturas en el derecho internacional

I.1. Tortura crimen internacional de primer grado

En primer lugar, y con anterioridad a todo análisis sobre la tortura, deberemos mantener que el derecho internacional prohíbe de forma absoluta la comisión de la tortura al atentar la comisión de la misma contra la dignidad humana. Este crimen ha sido recogido en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, siendo consideradas la mayoría de sus normas como derecho consuetudinario, es decir, derecho obligatorio para todos los Estados (*ius cogens*). Entre las normas de derecho consuetudinario va a encontrarse la prohibición de la práctica de la tortura al mantener la doctrina de que los crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio son considerados por la comunidad internacional como normas de *ius cogens*.

El profesor Milton César Jiménez, en su trabajo «La Tortura en el marco del Derecho Internacional Humanitario»² afirma, respecto al artículo 5 de la Declaración de Derechos Humanos, que

Una amplia mayoría considera que este artículo es la expresión del derecho internacional consuetudinario.

Esta posición fue recogida y, por tanto, reforzada en el Preámbulo del Estatuto de Roma, que dispone:

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin,

2 Jiménez Ramírez, M. (2015). *La Tortura en el Marco del Derecho Internacional Humanitario*. Summa Iuris, (pág. 309-329).

hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

Por ello mantendremos que los Estados pueden determinar la competencia de sus tribunales en función del principio de justicia universal con el objeto de poder enjuiciar el crimen de torturas, e igualmente estos pueden obligarse mediante la firma de tratados y convenios; postura que mantiene el profesor Antonio Remiro³, que afirma:

[...] los Convenios de Ginebra (1949) como sus Protocolos Adicionales (1977) implican la obligación de los Estados partes de juzgar a los presuntos criminales arrestados en un territorio bajo su jurisdicción, con independencia del lugar de comisión de los hechos, de las circunstancias personales de los implicados y de la existencia o no de una demanda de extradición (I, arts. 49/50; I, 50/51; III, 129/130; IV, 146/147; Protocolo I, art. 85).

Este crimen, además de estar regulado por el Derecho Internacional Humanitario, ha sido asimismo objeto de regulación por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en concreto, ha sido regulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de forma más específica en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que desarrollaremos con detalle más adelante.

1.2. Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario está en vigor solamente durante los conflictos armados, por eso no debería aplicarse el mismo en el presente caso, ya que el 6 de septiembre de 1991 se firmó el acuerdo de paz entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, pero el presente caso tiene una particularidad, y es que el territorio del Sahara Occidental es un territorio ocupado, tal y como hemos mantenido supra. En estas circunstancias, el IV Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las

3 Remiro Brotons, A (2007). *Derecho Internacional*. Valencia: Tirant lo Blanch.

personas civiles⁴ en tiempo de guerra, en su artículo 6 párrafo 3, dispone que para el caso de ser un territorio ocupado, se aplicará parcialmente el Convenio hasta un año después del cese de la ocupación del mismo, disponiendo que:

En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante estará obligada mientras dure la ocupación —si esta Potencia ejerce las funciones de gobierno en el territorio de que se trata—, por las disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143.

La ocupación del Sahara Occidental cumple con estas características, ya que Marruecos está ejerciendo las funciones de gobierno en el territorio que ocupa al oeste de la Berma (muro militar construido por Marruecos). Todo ello va a tener una serie de consecuencias para Marruecos consistentes en la obligación de hacer cumplir y respetar el Derecho Internacional Humanitario.

1.2.1. IV Convenio de Ginebra

El IV Convenio de Ginebra, tal y como hemos manifestado anteriormente, se va a aplicar en parte y no en su totalidad al no haber finalizado la ocupación que sufre el Sahara Occidental, tal y como hemos acreditado en el capítulo I, por lo cual van a estar en vigor todos los artículos que determina el artículo 6.3 del IV Convenio de Ginebra. Entre todos estos artículos mencionaremos únicamente el artículo 32 del IV Convenio ginebrino por el que se prohíben los castigos corporales y la tortura, y en el que se dispone que:

Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los

4 <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm>.

experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares.

Este comportamiento, recogido en el artículo 32 del Convenio, va a ser calificado como infracción grave, tal y como se regula en el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra, por el que se dispone que:

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos [...].

Por consiguiente, el crimen de tortura va a ser considerado por el IV Convenio de Ginebra como infracción grave. Este artículo se va a complementar con el artículo 85.5 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra⁵ de 1977, en donde se afirma que las infracciones graves de los Convenios, así como del Protocolo Adicional I, van a ser consideradas como crímenes de guerra. Por tanto, analizada la obligatoriedad de aplicación del IV Convenio de Ginebra, y en especial la prohibición de cometer crimen de torturas, deberemos determinar qué tribunales de justicia van a ser los competentes para conocer de estos hechos y, por lo tanto, proceder al enjuiciamiento de las personas que hayan cometido el crimen de torturas. En primer lugar deberemos citar el artículo 146 el IV Convenio, en donde se determina la obligación de enjuiciar y castigar por la comisión del crimen de torturas, a la que se han obligado las partes disponiendo que:

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado

5 <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>.

cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si esta ha formulado contra ella cargos suficientes.

Por ello nos encontramos ante la obligación que van a tener los tribunales del Reino de Marruecos de enjuiciar las conductas de tortura cometidas en el Sahara Occidental, obligación que emana del IV Convenio de Ginebra al ser Marruecos Estado Parte del mismo al haberlo ratificado el 26 de julio de 1956. Por consiguiente, Marruecos asumió las siguientes obligaciones al adherirse a los Convenios de Ginebra; en primer lugar, la de abstenerse de utilizar cualquier recurso susceptible de causar sufrimiento físico, abarcando con ello la tortura, debiendo prohibir expresamente este comportamiento (art.32 IV CG); en segundo lugar, se obliga a tratar a las personas protegidas por el IV Convenio con humanidad, en especial contra cualquier acto de violencia o intimidación, tal y como dispone el artículo 27 IVCG; y, por último, podremos considerar la que va a ser la obligación más importante a la hora de prevenir la tortura, que es la de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves, entre ellas la tortura, obligándolas a comparecer ante los propios tribunales, tal y como dispone el artículo 146 IV CG.

1.2.2. Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra

El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra reitera la interdicción de la tortura, efectuada por el IV Convenio de Ginebra, y así en su artículo 4 dispone que:

[...] quedarán prohibidos los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones [...].

Asimismo, el artículo 75.2 del mismo Protocolo dispone que:

Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes,

ya sean realizado por agentes civiles o militares: ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental.

No obstante, el Protocolo Adicional I va a clarificar el tipo penal, ya que en su artículo 85.5 fija y determina que las infracciones graves de ambos instrumentos (Convenios y Protocolo) se considerarán como crímenes de guerra. Marruecos firmó el Protocolo Adicional I el 12 de diciembre de 1977 y lo ratificó el 3 de junio de 2011 sin manifestar reservas o declaraciones, por tanto, este Protocolo también va a generar obligaciones internacionales al Reino de Marruecos. Además de la prohibición genérica de la tortura, el artículo 87 PAI dispone la obligación que tienen las Altas Partes contratantes en exigir que los jefes militares y demás personas que se encuentren bajo su autoridad impidan las infracciones de los Convenios y sus Protocolos, y para el caso de que esto no se cumpliera las deben reprimir o denunciar para que se tomen medidas disciplinarias o penales contra las personas que han cometido el delito de torturas.

Respecto al territorio controlado por el Frente Polisario, consistente en una franja de terreno situado al este de la Berma, este Movimiento de Liberación Nacional manifestó su adhesión a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Esta adhesión se realizó mediante una Declaración Unilateral⁶ por el que este se comprometía a aplicar los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I, en el conflicto con Marruecos cuya declaración dispone lo siguiente:

PROTOCOLE ADDITIONNEL I I. Déclaration unilatérale selon l'article 96, paragraphe 3 Le 23 juin 2015, le Front POLISARIO a déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration unilatérale suivante (version originale française): «Conformément à l'article 96.3 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977, le Front POLISARIO, en tant qu'autorité représentant le peuple du Sahara Occidental luttant pour son droit à disposer de lui-même, déclare s'engager à appliquer les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I dans le conflit l'opposant au Royaume du Maroc.» Cette déclaration a, dès le 23 juin 2015, les effets mentionnés à l'article 96, paragraphe 3, du Protocole I.

6 http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Geneve-Conventions_Declaration-Front-Polisario_260615_fr.pdf.

1.3. Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Junto con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos va a ser plenamente aplicable en el territorio ocupado del Sahara Occidental, pudiendo concurrir con el Derecho Internacional Humanitario. Encontraremos en este diversos textos que regulan la tortura, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 5 dispone que nadie puede ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. Este artículo, pese a ser una mera Declaración, se ha convertido en norma de *ius cogens*, siendo por tanto derecho obligatorio para todos los Estados tal y como hemos comentado más arriba.

1.3.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionaremos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁷, que en su artículo 7 ratifica la prohibición que efectuó la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el que:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Marruecos es Estado Parte en este Pacto al firmar el 19 de enero de 1976, y adherirse al mismo, el 3 de mayo de 1979. Por consiguiente, al ser Estado Parte en el Pacto, Marruecos va a aceptar los órganos de control que se recogen en el mismo, es decir, el Comité de Derechos Humanos, así como la obligación genérica que dimana del Preámbulo del Pacto por el que los Estados declaran la obligación de «promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos». En cambio, al no ser parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁸, el Comité no está facultado para recibir comunica-

7 <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>.

8 <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>.

ciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de Marruecos por la violación de cualquiera de los derechos enunciados en el mismo. Por ello, Marruecos solamente va a aceptar la competencia del Comité de Derechos Humanos, órgano de control del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que va a supervisar la aplicación del mismo por los Estados Partes, por lo que el Reino de Marruecos solamente va a aceptar el control mediante informes periódicos, obligación que van a tener que cumplir todos los Estados Parte.

Por ello, para cumplir con las obligaciones que dimanen del Pacto, los Estados deben presentar un informe aproximadamente cada cuatro años, y el Comité procederá a examinar a cada Estado; en cada examen periódico se van a relatar las preocupaciones y recomendaciones que efectúa el Comité al Estado Parte en forma de «observaciones finales». Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del Pacto establece que el Comité debe examinar las denuncias entre los Estados, procedimiento del que los propios Estados Parte no hacen uso.

1.3.1. a) Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Relator Especial sobre la tortura fue nombrado por primera vez por Resolución 1985/33 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examinara las cuestiones relativas a la tortura en todo el mundo. Este mandato se ha ido prorrogando hasta el presente. El mandato del Relator Especial sobre la tortura abarca a todos los países con independencia de si han ratificado o no la Convención Contra la Tortura; por tanto, el Relator va a poder actuar dentro de sus competencias en el Reino de Marruecos; eso sí, siempre que este le permita, entre otras cuestiones, la visita a los territorios bajo su jurisdicción.

Las principales actividades del mandato son, tal y como consta en la Web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)⁹, las siguientes:

9 <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx>.

- 1) Transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos.
- 2) Realizar misiones de investigación (visitas) a los países.
- 3) Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo.

Estos trabajos han sido llevados a cabo por el Relator Especial contra la Tortura en el Reino de Marruecos, que ha emitido su correspondiente informe que analizaremos con detalle más adelante.

1.3.2. Convención contra la Tortura

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes¹⁰ entró en vigor, de conformidad con el artículo 27 de la misma, el día 26 de junio de 1987, siendo firmada por el Reino de Marruecos el 8 de enero de 1986 y ratificada el día 21 de junio de 1993. Asimismo, Marruecos aceptó el mismo día someterse a los procedimientos de investigación recogidos en el artículo 20 de la misma, aceptando con ello que por parte del Comité contra la Tortura se pueda proceder a investigar la comisión del crimen de torturas, de los que este haya tenido conocimiento; asimismo, ha aceptado la competencia del Comité para recibir comunicaciones realizadas por personas sometidas a su jurisdicción, tal y como contempla el artículo 22, competencia que fue aceptada por Marruecos el 19 de octubre de 2006. Por tanto, al ser Estado Parte en la Convención contra la Tortura, el Reino de Marruecos, ha contraído nuevamente obligaciones internacionales que emanan de la misma, por lo que vamos a proceder a un análisis más pormenorizado de esta. En primer lugar vamos a transcribir la definición de Tortura que establece la Convención, definición que con posterioridad se ampliará por el Estatuto de Roma, disponiendo el artículo 1 de la Convención la definición del término «tortura» como:

[...] todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener

10 <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx>.

de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.

De esta definición de la Convención vamos a extraer que el comportamiento solamente puede ser realizado por funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, mientras que en el Estatuto de Roma el actor no deberá tener como requisito necesario ser funcionario público, sino que solamente será necesario que el acusado tenga bajo su custodia o control a la víctima.

En segundo lugar vamos a determinar las obligaciones que Marruecos se ha comprometido a cumplir, entre otras, la que establece el artículo 2, por el que este deberá tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales para que se impida que se cometan actos de tortura en su jurisdicción. El artículo 4.2 dispone la obligación de que Marruecos deberá castigar estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Además de estas, el Artículo 11 dispone que todo Estado Parte examinará las normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de arresto con el fin de evitar todo caso de tortura. Seguidamente, el artículo 12 obliga a los Estados Parte a que siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial; a estas obligaciones deberemos añadir la que emana del artículo 15, consistente en que Marruecos se asegurará de que ninguna declaración obtenida mediante tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento judicial.

Todas estas obligaciones que comportan la ratificación de la Convención contra la Tortura a las que se ha comprometido el Reino de Marruecos, van a ser incumplidas reiteradamente por el mismo. Por un lado y de cara a la Comunidad internacional, Marruecos se obliga mediante la adhe-

sión a la Convención Contra la Tortura, a satisfacer los mínimos requisitos que exige esta, y, por otro lado, de forma persistente y reiterada, utiliza la tortura contra los activistas saharauis que reclaman el derecho a la libre determinación del Sahara Occidental.

1.3.3. a) Comité contra la Tortura

El artículo 17 de la Convención Contra la Tortura dispone que se creará un Comité contra la Tortura, que va a ser el órgano de supervisión de la misma y tendrá como cometido más importante el proceder a examinar los informes que presentan los diferentes Estados Parte.

Todos los Estados Parte están obligados a presentar un informe de conformidad con el artículo 20; durante el primer año siguiente a la entrada en vigor de la Convención para el Estado Parte, y, con posterioridad, cada cuatro años. En estos informes se expondrán las medidas que cada Estado Parte haya adoptado para dar efectividad a los compromisos procedentes de la Convención. El Comité, si lo estima oportuno, puede a su discreción incluir un comentario en su informe anual, todo ello de conformidad con el artículo 19 de la Convención. Del análisis de estos informes podremos obtener información que nos permitirá valorar la adecuación del Reino de Marruecos a la Convención contra la Tortura, informes que con posterioridad analizaremos más detalladamente. No obstante, el Comité va a tener una competencia importante que dimana del artículo 20 de la Convención, siempre y cuando el Estado Parte haya aceptado esta competencia de investigación; tal y como hemos comentado con anterioridad, el Reino de Marruecos aceptó someterse a este procedimiento de investigación el 21 de junio de 1993. Este procedimiento de investigación va a consistir, tal y como dispone este artículo, en que si el Comité recibe información fiable de que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, este invitará al Estado Parte a que presente observaciones. El Comité, tras las observaciones o la obtención de información, si está suficientemente justificado, puede designar a uno o varios miembros para que procedan a su investigación, que puede incluso concluir con una visita al Estado Parte. El Comité, tras celebrar consultas, puede tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que elabora el mismo.

Una segunda competencia importante que va a asumir el Comité es la que se regula en el artículo 22 de la Convención; en este artículo se permite que este tenga competencias para aceptar, recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a la jurisdicción del Estado Parte y que estas aleguen ser víctimas de una violación de las disposiciones de la Convención. Este consentimiento se otorgó por el Reino de Marruecos el 19 de octubre de 2006. El Comité examinará las comunicaciones efectuadas directamente por personas sin la mediación de ningún Estado u Organización, debiendo cumplir estas con dos requisitos que dispone este artículo: por un lado, que la cuestión no esté siendo conocida por otro procedimiento de investigación o solución internacional y, como segundo requisito, la persona debe haber agotado toda la jurisdicción interna de que pueda disponer, requisito que estimamos que se puede convertir en un obstáculo a la hora de agotar la vía interna, ya que se obliga a las víctimas a presentar denuncia ante los órganos del propio Estado que practica la tortura, obligando en muchos casos a las víctimas a tener un comportamiento prácticamente heroico, ya que en muchas ocasiones la presentación de estas va a tener que realizarse ante las comisarías en donde las propias víctimas han sido torturadas. El Comité, una vez finalizada su labor, comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.

1.3.3. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

El Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura¹¹, está orientado a la creación de un sistema preventivo contra la tortura. Disponiendo en su artículo 1 que el objetivo del Protocolo Facultativo es la creación de un sistema de visitas periódicas de organismos internacionales independientes a los lugares donde se priva a las personas de su libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes. Este Protocolo fue ratificado por el Reino de Marruecos el 24 de noviembre de 2014, lo que conlleva que ha aceptado este régimen de visitas, por lo que el Subcomité puede llevar a cabo visitas en los lugares de detención

11 <https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/protocolofacultativo.htm>.

marroquíes. Estas se realizarán de conformidad con el artículo 4 del Protocolo Facultativo. En su artículo 2, y como novedad, se constituye el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura. Este Subcomité, según el mandato del artículo 11, deberá visitar los lugares de detención, así como formular recomendaciones a los Estados Parte sobre protección de las personas privadas de libertad, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los Estados Parte se obligan a otorgar autorización al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para que este tenga acceso a toda la información relativa al número de personas privadas de libertad, a todos los lugares de detención y sus instalaciones, así como la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos y, para ello, además, va a tener la libertad de elegir los lugares que quiere visitar. Con toda la información obtenida, el Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones de manera confidencial al Estado Parte, tal y como dispone el artículo 16 del Protocolo Facultativo; además de lo anterior, presentará un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura. Si el Estado Parte se niega a cooperar, el Comité podrá elaborar una declaración pública sobre el asunto. En el presente caso, el Subcomité realizó visita oficial a Marruecos de conformidad con su mandato del 22 al 28 de octubre de 2017.

I.3.4. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional¹², adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, tiene como objeto principal la creación de la Corte Penal Internacional, que va a ser un tribunal independiente, permanente y con personalidad jurídica internacional que ejercerá su jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de transcendencia internacional (crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión), siempre con carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales. En el mismo Preámbulo del Estatuto

12 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/RomeStatute-SPA.pdf.

se recogen los objetivos por los que se creó la Corte Penal Internacional, entre otros para:

[...] que los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo [...]

El Estatuto de Roma fue firmado por Marruecos el 8 de septiembre de 2000, pero no ha sido ratificado hasta el día de hoy. Esta cuestión no será baladí, ya que al no ser Estado Parte, la Competencia de la Corte para enjuiciar el crimen de tortura en el territorio ocupado del Sahara Occidental quedará limitada, ya que esta no va a tener competencia para juzgar a los presuntos criminales de nacionalidad marroquí o los crímenes que se hayan cometido en el territorio de Marruecos. No obstante, va a quedar un pequeño resquicio, tal y como recoge el artículo 13 del Estatuto de Roma, por el que:

[...] el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de estos crímenes.

Seguimos la posición de la Dra. Elizabeth Salmón Gárate¹³, en la que afirma que:

[...] es importante precisar que el único supuesto en que la Corte podrá ejercer jurisdicción universal se da cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien remite el caso a la Corte. En este último supuesto, la Corte tendrá jurisdicción no sólo para juzgar los crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte o en el Estado del cual sea nacional el acusado, sino que también podrá tramitar —de manera excepcional— un caso presentado en cualquier Estado que no sea parte del Estatuto de Roma.

Esta situación será harto difícil que se dé por varios motivos; en primer lugar, debido a que hasta el presente la cuestión del Sahara Occidental se ha tratado de conformidad con el Capítulo VI de la Carta; y, en segundo

13 <http://www.iccnw.org/documents/Salmon.pdf>.

lugar, debido a los grandes aliados que tiene Marruecos en el Consejo de Seguridad, en especial Francia, que reiteradamente le ha dado apoyo a lo largo de los años; por todo ello dudamos de que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para que se remita una situación en la que se hayan cometido crímenes competencia de la Corte al Fiscal de la misma; en tercer lugar, podría darse el caso de que Marruecos, ante una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la CPI, aceptase la competencia de la misma respecto del crimen que se tratase mediante declaración depositada ante el Secretario del Tribunal, situación que, asimismo, consideramos improbable por los antecedentes que presenta Marruecos en la lucha contra la tortura.

A continuación vamos a exponer la regulación que realiza el Estatuto de Roma sobre la tortura. La vamos a encontrar en diferentes artículos; así, el crimen de torturas va a estar recogido como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra, aunque ambos tipos penales van a mantener diferencias. Para cometer el delito de torturas contemplado en el crimen de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, en su artículo 7, dispone que:

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Por tanto, para que la conducta cumpla con el tipo penal, esta debe estar encuadrada dentro de un ataque generalizado y con conocimiento del autor del mismo. Entre las conductas que regula el artículo 7, encontramos el punto f) Tortura. Por tanto, se cometerá el crimen de lesa humanidad de tortura al realizar esta conducta siempre que se realice dentro de un ataque generalizado contra la población saharaui y con conocimiento del autor. Este artículo aporta como novedad que no se precisa que el comportamiento sea realizado por un funcionario público. En segundo lugar, el Estatuto de Roma regula el crimen de tortura como crimen de guerra, cuyo comportamiento es tipificado en el artículo 8 del Estatuto; en este artículo la conducta tipificada debe cumplir con los requisitos que regula este artículo, es decir, la conducta debe estar inserta dentro de un plan o como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. Se entiende a

los efectos del Estatuto de Roma por crímenes de guerra, 8.2.ii) la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. En este caso, para la comisión del delito de torturas será necesario que se cometa durante un conflicto armado internacional y que se cometa como parte de un plan o a gran escala, no siendo necesaria tampoco la comisión por parte de un funcionario público, distinguiéndose, en tal caso, de la tipificación que se recoge en la Convención contra la Tortura.

1.3.5. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos

La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como Carta de Banjul, fue aprobada el 27 de julio de 1981 durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana reunida en Nairobi, Kenia. Respecto a esta Carta, debemos recordar que en el presente caso presenta unas características especiales, consistentes en que para la Unión Africana la República Árabe Saharaui Democrática es uno de los Estados Fundadores de la misma y, por tanto, ha sido reconocida como Estado; por tanto, deberemos tener en cuenta que una parte del territorio está ocupado por el Reino de Marruecos y la franja de territorio al este de la Berma (muro construido por Marruecos) está controlada por el Frente Polisario, lo que conduce a que puedan existir diferencias al aplicarse la misma en un lado u otro del muro. La Carta Africana fue firmada por la República Árabe Saharaui Democrática el 10 de abril de 1986 y ratificada el 2 de mayo de 1986, mientras que al día de hoy Marruecos no ha ratificado la misma; por tanto, será de aplicación a la totalidad del territorio, pero en la parte ocupada por Marruecos no se podrá aplicar por la «persistente ocupación» que padece el territorio.

La Carta Africana¹⁴, para el presente caso que nos ocupa, recoge obligaciones para los Estados miembros de la Organización, entre otros el reconocer «los derechos, deberes y libertades contempladas en la Carta» por los que «se comprometerán a adoptar medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlos a efecto», en especial la Carta, respecto a la tortura, dispone en su artículo 5 que:

14 <http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/ratification/>.

Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, estarán prohibidos.

Por tanto, la Carta va a establecer una prohibición absoluta de la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante. El órgano de supervisión que se establece en la Carta es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que comenzó a ejercer sus funciones en 1987 y, fundamentalmente, ejerce su labor de dos formas: por un lado, mediante informes que los Estados deben presentar cada dos años sobre las medidas legislativas o de otra índole tomadas con el fin de hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la CADHP (artículo 62); por otro, las comunicaciones, que pueden ser de dos tipos: las que regula el artículo 47, que establece que los Estados podrán presentar comunicaciones escritas si estima que un Estado firmante de la Carta ha violado las disposiciones de la misma, y las comunicaciones reguladas en el artículo 55 y 56 de la CADHP; estas comunicaciones van a consistir en denuncias que pueden ser realizadas tanto por personas individuales como por asociaciones u ONGs. Estas comunicaciones tienen que cumplir, entre otros, con los requisitos de haber agotado todos los recursos de la vía interna del Estado Parte, así como que sus autores estén identificados y que estas sean presentadas dentro de un tiempo razonable desde que finalizaron los recursos locales.

Por tanto, toda persona que haya sufrido torturas podrá de forma individual presentar una comunicación ante la Comisión Africana. Una vez recibida la comunicación, por parte de la Comisión se transmitirá esta al Estado Parte, todo ello de conformidad con artículo 57; la Comisión, tras deliberación y de conformidad con el artículo 58, si estima que una o más comunicaciones revelan la existencia de violaciones graves o masivas de los derechos humanos, entonces esta llamará la atención de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno sobre estos casos. La Asamblea, ante esta información, puede solicitar de la Comisión que se realice un estudio a fondo sobre los casos y elabore un informe que vaya acompañado de una conclusión y recomendaciones.

Todas las medidas que se hayan tomado serán confidenciales hasta que la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno decida lo contrario.

1.3.5. a) Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (con sede en Arusha, Tanzania) que fue creada mediante el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, tiene atribuida, junto a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, competencias en materia de aplicación e interpretación de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH). La Corte Africana es un tribunal que va a complementar y reforzar las funciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecida por los países africanos. Hasta febrero de 2018, treinta Estados son Parte del Protocolo, del que no forma parte Marruecos. De estos treinta Estados Parte solamente ocho habían hecho la declaración reconociendo la competencia de la Corte para recibir casos de ONG y particulares, tal y como se recoge en la Web de la Corte Africana¹⁵; de estos ocho ninguno es ni el Reino de Marruecos ni la República Árabe Saharaui Democrática. La Corte tiene jurisdicción sobre los casos y controversias que se le presenten, sobre la interpretación y aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como del Protocolo. En concreto tiene jurisdicción contenciosa y consultiva y puede conocer de casos presentados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por los Estados Parte en el Protocolo o bien por las organizaciones ONG con estatus de observador ante la Comisión Africana; así mismo, de las personas individuales, siempre que el Estado contra el que se presentan haya depositado la declaración del Artículo 34 por el que se reconoce que la Corte pueda aceptar casos de personas individuales u ONGs.

15 <http://www.african-court.org/en/index.php/12-homepage1/1-welcome-to-the-african-court?4ea03332baad719f3a6b2ef8c979f25c=b20d39b8af1f050109d043f994634481>.

1.4. Jurisdicción Universal

La jurisdicción universal surge por la necesidad de que determinados crímenes internacionales no queden sin castigo, en especial los más graves para la comunidad internacional, y, para ello, todos los Estados van a tener la competencia para juzgar a las personas que hayan cometido estos crímenes, todo ello independientemente de la nacionalidad del autor, del lugar donde hayan sido cometidos, no siendo necesario un vínculo con el Estado que va a juzgar estos crímenes. Para determinar cuáles son estos crímenes contra la humanidad, podemos tomar como referencia aquellos que se citan en «los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal»¹⁶ que se presentaron mediante Nota verbal de fecha 27 de noviembre de 2001 dirigida al Secretario General por las Misiones Permanentes del Canadá y de los Países Bajos ante las Naciones Unidas. De estos principios estimamos que el Principio 2 es suficientemente clarificador para determinar cuáles son estos crímenes:

A los fines de los presentes Principios, los delitos graves de derecho internacional comprenderán: 1) la piratería; 2) la esclavitud; 3) los crímenes de guerra; 4) los crímenes contra la paz; 5) los crímenes de lesa humanidad; 6) el genocidio; y 7) la tortura.

Para el caso que nos ocupa, el crimen de tortura va a estar sujeto al principio de justicia universal, ya que la prohibición de la tortura es absoluta, siendo un comportamiento prohibido bajo cualquier circunstancia. De hecho, la prohibición de esta práctica se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario. Para mantener esta posición vamos a citar al Profesor Manuel Ollé Sesé¹⁷, que manifiesta:

El denominado núcleo duro de los DDHH fundamentales (como por ejemplo la vida, la libertad o la integridad física) contiene bienes jurídicos definidos

16 <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/princeton.html#Nota%20verbal>.

17 Ollé Sese, M. (2013), «Violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y jurisdicción universal», en F. P. Romeo, *El Derecho a la Libre Determinación del Pueblo del Sahara Occidental* (pág. 247).

en el DI. Los graves atentados contra estos derechos se convierten, entonces, en la base para la tipificación de los elementos de los crímenes internacionales de primer grado. De ahí que este núcleo duro o fundamental de los DDHH, con carácter de *ius cogens* genera obligaciones *erga omnes*.

Por todo ello, los Estados tienen la obligación de perseguir la comisión de estos crímenes, posición que mantiene el Profesor Ollé al afirmar que:

Se puede concluir que el principio de persecución universal por crímenes internacionales de primer grado protege bienes jurídicos que pertenecen y afectan a toda la comunidad internacional y que, por tanto, obligan a todos los Estados a la persecución de quienes los violan mediante la comisión de esos crímenes de primer grado.

Siguiendo, por ello, el texto de la Convención contra la tortura, el artículo 7.1 dispone que:

El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

Por lo que todos los Estados Parte van a tener que cumplir con la obligación que dimana del principio *aut dedere aut iudicare* (obligación de juzgar o extraditar).

1.4.1. Jurisdicción Universal española

Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial relativa a la justicia universal, se va a reducir enormemente la posibilidad de aplicar la Justicia Universal en España, ya que va a limitar la posibilidad de perseguir a los responsables penales de estos hechos. Por un lado, será necesaria que la comisión de los mismos haya sido realizada por un español o extranjero con residencia en España; o que la víctima sea española. Esta

reforma ha tenido como consecuencia que se hayan archivado las causas del Tíbet, Falun Gong, Ruanda y Congo, Guatemala, Couso, Guantánamo, Palestina. Solamente siguen abiertos los casos de los jesuitas de El Salvador, Boko Haram y el del diplomático Carmelo Soria en Chile. Mientras que el caso del Sahara Occidental, tras la reforma, ha pasado de ser tratado por justicia universal a tratarse como un procedimiento mediante el principio de territorialidad, que se adoptó mediante Auto 40/2014¹⁸ de fecha cuatro de julio de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por consiguiente, para los casos que se presenten de torturas respecto al Sahara Occidental no se deberá acudir a esta vía, sino a la competencia de los tribunales españoles por el principio de territorialidad, tal y como emana del Auto mencionado en su Fundamento Jurídico Primero que dispone lo siguiente:

Conviene esta Sala, pues, con el Ministerio Fiscal, que el juzgado de instrucción remitente de las actuaciones tiene jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de querella en atención al criterio de territorialidad del art 23. 1 de la LOPJ y no del de jurisdicción universal del art 23.4 de la LOPJ, por lo que no se ve afectado por la reciente reforma de dicho artículo, como consecuentemente tampoco resulta aplicable la disposición transitoria única de la LO 1/2014.

2. Práctica generalizada de torturas contra la población saharauí

2.1. Práctica sistemática de la tortura

En el presente capítulo vamos relatar las torturas que se cometen, tanto en el Sahara Occidental como en Marruecos; tortura que se practica de forma reiterada y sistemática contra la población saharauí que defiende el derecho a la libre determinación del Sahara Occidental; relación de torturas que no pretendemos que sea exhaustiva y que hemos extraído de dife-

18 <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197131&links=sahara%20occidental&optimize=20141028&publicinterface=true>.

rentes organizaciones con el objeto de ofrecer fuentes diversas e independientes. Las torturas cometidas en el Sahara Occidental, han sido denunciadas de forma reiterada por numerosas organizaciones u organismos independientes, dando por ello credibilidad a la afirmación de que el Reino de Marruecos ha torturado y tortura, de forma reiterada y sistemática, a los activistas saharauis. Asimismo, llegaremos a la conclusión de que la utilización sistemática de la tortura está inserta dentro de una política de represión generalizada contra el pueblo saharauí, política que tiene como objeto doblegar a esta población para que desista de reivindicar su derecho a la libre determinación, derecho que, no olvidemos, tiene reconocido por la legalidad internacional.

2.1.1. Casuística de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis

Esta Asociación ha sido una de las pioneras en denunciar en los foros internacionales la comisión de torturas en el Sahara Occidental y, por ello, estimamos que es necesario que dentro del análisis de la tortura hagamos referencia a los trabajos elaborados por la misma, que, desde su creación en 1989, ha documentado numerosos casos de desapariciones y torturas a las que han sido y son sometidos los activistas saharauis. En concreto debemos citar la obra *Sahara Occidental ¿Hasta cuándo?*¹⁹, en la que se detallan los diferentes métodos utilizados para la comisión de torturas, muchos de estos métodos utilizados los vamos a poder encontrar en diferentes informes que se citarán a lo largo del presente trabajo, corroborándose así la veracidad de la utilización de estos métodos. Entre otros métodos de tortura utilizados por las autoridades marroquíes, cabe señalar las siguientes:

—Se les arranca con fuerza las uñas.

—Se les quema «con colillas de cigarrillos» en todo su cuerpo: sobre todo, en las zonas más sensibles, como los testículos en el caso de los hombres y los senos en el caso de las mujeres.

—Exposición a la corriente eléctrica de los órganos genitales.

19 AFAPREDESA (2014), *Sáhara Occidental ¿Hasta cuándo?*, Donostia-San Sebastián, Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L.

—Puñetazos y bofetadas: sobre todo, en la cabeza, la cara y los órganos genitales.

—Se les produce asfixia parcial obligándoles a meter la cabeza en un saco de tela sucio.

—Se les suspende en posición de «pollo asado» durante largas horas.

—Se les amenaza de muerte con pistola.

—Aislamiento prolongado dentro de una celda estrecha.

—Violación y abusos sexuales contra las mujeres y niños.

Del análisis de este trabajo cabe destacar que consigue transmitir el clima de terror al que se somete a la población saharauí, sobre todo en el día a día de su vida cotidiana; esto hace que en determinados momentos podamos calificar al territorio del Sahara Occidental como una cárcel abierta en la que están presos los propios saharauís; este ambiente de presión y asfixia lo percibe fácilmente cualquier observador que visite el territorio del Sahara Occidental, percibiendo la presencia permanente de las fuerzas de seguridad y del ejército marroquí en sus calles, especialmente en los alrededores de los barrios con población saharauí. Para mostrar este clima de terror relataremos un pasaje del mencionado libro que describe las vivencias de Fatma Salek y Mamia Salek, que manifestaron lo siguiente:

Cuando salimos de prisión, éramos dos cadáveres andantes. Posteriormente pasamos nueve años en el territorio ocupado, sin posibilidad de trabajar, sin recibir ninguna ayuda material o moral que pudiera subsanar las secuelas de dieciséis años de prisión.

Durante este periodo no se puede decir que fuéramos libres. Estábamos permanentemente vigiladas por la policía secreta, convocadas de manera regular, abofeteadas y amenazadas constantemente con volver a la prisión o desaparecer.

Después de estos nueve años de «libertad dentro de una cárcel mayor», siendo constantemente perseguidas y acosadas, y ante la amenaza hacia nuestra integridad física, decidimos abandonar el territorio y llegamos a las Islas Canarias el 25 de octubre de 1999, donde solicitamos refugio y asilo político, que nos ha sido concedido el día 21 de diciembre de 2000.

Una vez expuestos los métodos de tortura y el clímax de terror a la que es sometida diariamente la población saharauí, mencionaremos que, en numerosas ocasiones, la gravedad de estas torturas ha llegado a producir la muerte, recogiendo del mencionado informe que:

Decenas de personas han fallecido bajo tortura en la Cárcel Negra de El Aaiún. Entre ellos, citamos a Youssef Boumlih, Rmdan Ali, Mustafa Charkaoui, Laaroussi Mouchii, Jamal El aoud, Mohamed Najar, El Houssein Rifi, Mohamed Bouseta, Hassan Heddi, Ramdan Laiti, Lahsen Bouba [...]

2.1.2. Informes Consejo General de la Abogacía Española sobre juicios contra Saharauis

Las letradas que iniciaron la observación internacional por parte del Consejo General de la Abogacía Española en el Sahara Occidental, fueron doña Inés Miranda Navarro, doña Dolores Travieso y doña Nieves Cubas, entre otras; estas nos han manifestado que la presencia en los juicios surgió ante las noticias preocupantes que llegaban desde el Sahara Occidental respecto a la falta de las más mínimas garantías procesales que se estaban llevando a cabo en los juicios que se estaban celebrando contra los activistas saharauis; irregularidades entre las que se incluían malos tratos a los detenidos en las propias salas de los tribunales; violencia que incluso en alguna ocasión han sufrido los propios abogados de la defensa. Todo esto hizo que este grupo de juristas canarias, con el amparo del Consejo General de la Abogacía Española, iniciasen en el año 2002 la presencia permanente de juristas en los tribunales en los que se juzgaba a saharauis, presencia que ha llegado hasta nuestros días. A lo largo de los años, el Consejo General de la Abogacía ha comisionado a numerosas Delegaciones de Juristas para que asistieran a los juicios que se celebraban contra defensores de la libre determinación del pueblo saharauí y emitiesen el correspondiente informe de las sesiones a las que se asistía. Del trabajo de estas delegaciones se han emitido por parte del Consejo General de la Abogacía Española dos informes extensos que contienen una numerosa casuística, así como numerosos informes sobre juicios individualizados. Los dos informes más voluminosos abarcan, el primero, la Observación Jurídica realizada por las diferentes delegaciones desde abril del 2002 hasta junio de 2003, y, el se-

gundo, se centra exclusivamente en los Juicios celebrados contra saharauis el 13 de diciembre de 2005. El resto de informes son informes realizados por diferentes Delegaciones de Juristas que elaboraron informes individuales de cada juicio y cuyo periodo abarca desde el año 2005 hasta la actualidad.

La presencia de observadores internacionales en los juicios contra saharauis era soportada por el Reino de Marruecos, pero permitía la presencia de estas comisiones de juristas, actitud que ha cambiado en los últimos meses al proceder a expulsar a diferentes juristas y a no permitir la entrada a otros; así, procedió a la expulsión de una delegación de juristas el día 7 de abril de 2016, entre los que se encontraba un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias²⁰, o la prohibición de entrada en el aeropuerto de El Aaiun²¹, que personalmente sufrí junto con la compañera Nieves Cubas el 20 de diciembre de 2016, o la prohibición de entrada que han sufrido los letrados Ana Sebastián y Pablo Jiménez²² el pasado día 30 de agosto de 2018. De todos estos informes que realizan los juristas vamos a poder deducir que Marruecos utiliza de forma reiterada la tortura, ya que estas comisiones de juristas han podido presenciar numerosas denuncias por torturas que han sido efectuadas en sede judicial, y estas no han tenido consecuencias al no iniciarse diligencias de investigación por parte de los diferentes tribunales marroquíes. Es, por tanto, generalizada la postura de los tribunales marroquíes a que no se investigue estas denuncias por los hechos cometidos presuntamente por las fuerzas de seguridad marroquíes, postura que podremos acreditar asimismo mediante el informe del Relator contra la Tortura o mediante los Informes de Amnistía Internacional que citaremos más adelante.

20 https://elpais.com/politica/2016/04/07/actualidad/1460027853_304324.html.

21 https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Marruecos-expulsa-abogados-espanoles-Aaiun_0_592841842.html.

22 <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/08/31/abogados-aaiun-denuncian-actuacion-ilegitima-1264588-300.html>.

2.1.2. a) Primer informe del CGAE sobre juicios celebrados entre el año 2002-03²³

Con la lectura del primer informe del CGAE sobre los juicios celebrados entre el año 2002-03 contra saharauis, al analizar los testimonios de los Abogados presentes en los juicios, podemos afirmar que la práctica de tortura por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes es recurrente, sobre todo debido a que recogen un alto porcentaje de denuncias por torturas llevadas a cabo por los diferentes activistas saharauis ante los tribunales. Para llegar a esa conclusión vamos a relatar los hechos ocurridos en los diferentes juicios y con la presencia de diferentes comisiones de juristas.

El primer caso al que vamos a referirnos va a analizar el juicio oral celebrado el 17 de noviembre de 2002 en Smara contra diecisiete saharauis, del que podemos extraer la siguiente información:

p) Los detenidos han sido torturados, las evidencias de las mismas son las señales corporales que presentaban los detenidos, vulnerándose el Derecho Procesal Penal y la Constitución marroquíes, siendo rechazadas estas evidencias por el Tribunal, así como la solicitud de informes periciales médicos sobre los detenidos.

En el mismo acto del juicio oral la delegación de juristas constató que don Maoulainine Boussat:

Le muestra al Presidente del Tribunal las cicatrices de las torturas, pero el Presidente dice que parecen antiguas. Entonces las Defensas señalan al Presidente que, el día 14 de enero de 2002, pidieron al Juez de Instrucción que se analizaran las señales de torturas de los detenidos mediante informe médico, diligencia que fue denegada por el Juez instructor.

Que el detenido Ahmad Badda:

Muestra al Tribunal señales en su torso de las torturas recibidas durante la detención.

²³ http://iajuws.org/observacion/INFORME_CGAE_JUICIOS_2003.pdf.

Asimismo, a lo largo de la vista oral, Moulay Elouali el Idrisi, manifestó:

[...] que le torturaron e insultaron, Lakhdar Lakhlifi afirmó «Que le torturaron colgándole de las manos y de las piernas, le tiraban de la barba y le insultaban.» Ali Sallouki manifestó que «Lo llevaron a la Comisaría y lo torturaron, poniéndole una banda en los ojos y golpeándole.» Naafii Elmoussaoui manifestó «que fue detenido cuando salía de su casa, y que lo llevaron a la Comisaría de Policía y allí fue torturado, siendo golpeado [...]»; Sidi Ahmad Bahaha: «[...] después de pasar varios controles, y en uno de ellos le pararon y le detuvieron, le pegaron en la boca y le llevaron desde Smara a El Aaiún sangrando.» Manifiesta «que le torturaron y maltrataron, comenzando a decir el nombre de los torturadores.» El Fatmi El Khaldi, afirmó en sede judicial que «[...] entró en el mercado a comprar y que lo detuvieron; fue torturado.»

De la crónica del juicio oral elaborada por los Abogados mandatados por el CGA, podemos afirmar que, de los diecisiete saharauis que fueron juzgados, siete manifestaron haber sido sometidos a tortura, uno de ellos incluso denunciando en la propia sala del tribunal a sus propios torturadores, a los que citaba con sus nombres; ante esta denuncia de las torturas relatadas, el Presidente del Tribunal no procedió, como era obligación de cualquier tribunal de justicia, a que, al menos, se abriesen diligencias de investigación de los hechos denunciados, quedando, por tanto, impunes dichas conductas.

2.1.2. b) Segundo informe del CGAE sobre juicios celebrados en el año 2005²⁴

El segundo informe del CGAE sobre juicios celebrados en el año 2005 fue elaborado por la Comisión de Juristas comisionada por el CGAE, que, tras asistir a lo largo de 2005 a diversos juicios contra activistas saharauis, se recoge en este los actos de los juicios orales celebrados entre el 22 de noviembre y el 13 de diciembre de 2005. De este informe sobre juicios extraeremos valiosa información sobre el delito de torturas cometido contra saharauis. En primer lugar, nuevamente vamos a encontrarnos con que la

24 <https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/Informe-Sahara1.pdf>.

mayor parte de los acusados denuncia en sede judicial haber sido sometida a torturas para obtener así la autoinculpación de los detenidos y, con ello, las fuerzas de seguridad puedan elaborar la correspondiente Acta Policial, que va a ser el documento básico de la acusación; documento ante el que no cabe prueba en contrario y que va a servir de base para condenar a largas penas de prisión a los activistas saharauis. En segundo lugar, y de forma reiterada, encontraremos que, de todas las denuncias de tortura efectuadas en sede judicial, los jueces y magistrados nuevamente no procedieron a abrir una sola investigación por los hechos denunciados. Con el objeto de apoyar estas afirmaciones que realizamos, vamos a relatar los hechos que han sido denunciados en sede judicial ante la presencia de los observadores del CGAE, en especial nos vamos a centrar en los procesos celebrados el 13 de diciembre de 2005.

En primer lugar analizaremos las cuestiones procesales previas y comunes a la mayoría de los juicios. En el informe se determina lo siguiente:

Ausencia de Firma de los Acusados en las Actas Policiales. Las Actas Policiales carecen de la firma de los acusados, y sólo en alguna de ellas consta la huella dactilar de los presos, a pesar que los detenidos sabían leer y escribir, que fue obtenida mediante torturas y malos tratos después de estar varios días detenidos (secuestrados sin que se supiese nada de ellos por sus familiares).

En el punto 5 del informe se detalla el empleo de torturas contra los acusados, afirmando que:

Los detenidos han sido torturados, unos para obtener sus declaraciones causándoles miedos y desesperanza por el horror que estaban sufriendo (Amaidan Elwali, Mousaoui Sidahmed...), otros en el proceso de la detención (Aminetu Haidar, Hmad Hammad...), y otros en cumplimiento de las amenazas que les habían efectuado a los ahora detenidos, activistas de derechos humanos los miembros de las fuerzas policiales (Brahim Noumria, Lidri Hossein...) En las torturas se emplearon diferentes métodos como: el denominado «pollo asado», «quema de las palmas de las manos», «maniatar al detenido a la espalda y suspenderlo en al aire durante horas», «propinarles palos en las plantas de los pies», «sumergir la cabeza en aguas con pis y excrementos».

Entrando más detenidamente en el análisis de cada juicio, y mostrando como características comunes las siguientes: Dossier 185/05, Moutawakil Mohamed, Brahim Noumria, Lidri Hossein, Larbi Mesoud. Denuncias de torturas por parte de Husein Lydri en el acto del juicio:

Poco después, fui sorprendido por tres miembros de la policía judicial, a las 11:00h., quienes me taparon los ojos, me ataron las manos con esposas a la espalda y me sacaron por la puerta posterior de la Comisaría para, después, meterme violentamente en un coche que se puso en marcha sin comunicarme el lugar al que me pretendían llevar. Pasada una hora se paró el coche, me bajaron y me metieron en un Centro de Detención Secreto, el PCCMI15, donde fui interrogado por parte de varios individuos. Uno de ellos me dijo: «Bienvenido Polisario, bienvenido corresponsal de Aljazeera». Inmediatamente empezaron a torturarme usando diferentes métodos, como «El avión», «la gallina asada», «la falqa» así como quemarme con fuego por todo el cuerpo, y echar una sustancia química sobre mi cuerpo, desde arriba hacia abajo. A preguntas del Presidente que insiste en que se ciña al contenido del Acta Policial, contesta el acusado: «Sr. Presidente, yo no he visto el Acta de la policía judicial ni la firmé y el tiempo de la detención provisional lo pasé en el Centro Secreto del PCCMI, bajo tortura e interrogatorios continuos».

Denuncias de torturas realizadas por parte de Ibrahim Numría:

Fui secuestrado desde la Comisaría de la Policía por parte de los aparatos de seguridad, encabezados por el Jefe de Seguridad en El Aaiún, trasladado inmediatamente al centro secreto de detención PCCMI y objeto de distintas formas de tortura por parte de los verdugos que ha mencionado y denunciado el compañero Husein Lydri, verdugos como IBRAHIM BIN SAMI.

Dossier número 186/05, Aminatou Haidar. Denuncias en sede judicial realizadas por Aminatou Haidar:

Por mis ideas, el pasado 17 de junio 2005, me torturaron en la calle, antes de secuestrarme en el Servicio de Urgencias del hospital Bin Medí, en EL Aaiún. Fue una tortura ejercida con brutalidad y barbarie que me causó heridas a nivel de la cabeza, donde tengo diez puntos, y ello a pesar de que soy

activista de derechos humanos, supuestamente protegida internacionalmente, conforme a las leyes y convenios internacionales y la noble naturaleza de mi trabajo.

Dossier número 181/05, Elwali Amidan. Denuncias presentadas por Elwali Amidan durante el interrogatorio:

Me torturaron en la Comisaría de la Policía Judicial, con los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás después de quitarme toda la ropa y amenazar-me con ser violado y asesinado, de la misma manera que se trató los civiles saharauis desde el año 1975.

Dossier 183/05, Sidi Ahmed Elmusai. Denuncias presentadas por Sidi Ahmed Elmusai:

Me sometieron a distintas formas de tortura, fui amenazado con ser violado y me obligaron a firmar con huellas dactilares, a pesar de que sé leer y escribir. Lo que pasó es que ni siquiera supe el contenido del acta, obligándome bajo torturas a poner el dedo en un papel cuyo contenido desconocía y desconozco por completo.

Dossier 184/05, Hmad Hammad, Chteoui Mahyoub, Bal-La Sidi Mohamed. Denuncias presentadas por Bal-La Sidi Mohamed:

[...] manifestó que había sido torturado psicológica y físicamente en la Comisaría por la Policía Judicial, con el objeto de obligarle a abandonar sus convicciones políticas, y que acusara a determinados activistas saharauis defensores de Derechos Humanos, entre ellos a H'mad Hadmad, Aminatou Haidar [...]

Denuncias presentadas por Chteui Mahyub:

Al ser preguntado por el Presidente del Tribunal sobre el Acta Policial, negó rotundamente su contenido, manifestó que no lo había leído, y que firmó bajo torturas, y por temor a las amenazas de violación de los policías, para que parasen de torturarlo.

Manifestaciones que realizan los Observadores mandatados por el Consejo General de la Abogacía Española:

Hamad Hadmad apenas puede hablar, presenta un estado de salud muy deteriorado, camina con mucha dificultad y presenta heridas sangrantes en su pie, que según refiere son consecuencia de las torturas sufridas en la Cárcel Negra en la que se encuentra preso desde Agosto de 2005.

Es decir, los propios juristas que realizan las labores de observación fueron testigos de los resultados que produce la tortura en algunos de los acusados, afirmando que incluso en sede judicial y con la presencia de observadores internacionales algunos presos presentan heridas sangrantes; y, pese a ello, tampoco se abrieron por parte del tribunal diligencias de investigación por estos hechos.

2.1.2. c) Informes individuales CGAE sobre juicios contra Saharais

A partir de la elaboración de estos dos informes extensos, los informes que se han realizado por los observadores del CGAE, se han realizado juicio a juicio, siendo elaborados diferentes informes desde el año 2005 hasta la actualidad y de los cuales citaremos los que pueden ser más interesantes para comprender la situación de la tortura en el Sahara Occidental; entre ellos vamos a relatar parte del informe del juicio seguido ante la Corte de Apelación El Aaiún, celebrada el lunes 12 de octubre de 2009, contra Dadi Hmada y Boubakar Aliyen, a la que asistieron como observadores internacionales doña Ana Pérez Nordelo y doña Gemma Arbesu Sancho, mandatadas por el Consejo General de la Abogacía Española, juristas que elaboraron un informe en el que se afirma que en el desarrollo del juicio, en su fase de interrogatorio, «manifestaron los imputados»:

...que habían sido torturados por la policía marroquí en Smara, y por los agentes de la prisión que les obligaban a «firmar papeles» cuyo contenidos desconocían.

Nuevamente se refleja en el informe que se realizó con motivo del juicio celebrado ante la Corte de Apelación de El Aaiún, el 26 de enero de

2010, contra Cheik Ameidan, durante el interrogatorio efectuado por el Presidente del Tribunal, Cheik Ameidan:

[...] negó rotundamente su participación en los hechos que se le imputaban y reiteró que fue obligado bajo torturas a firmar una declaración que no había leído y cuyo contenido desconocía. Aclaró el acusado que alguna de las torturas a las que fue sometido por la policía marroquí durante cinco días seguidos, consistió en: «atarle de pies y manos a un palo, manteniendo el cuerpo en posición fetal y suspendido en el aire, en la figura de tortura conocida como el pollo asado».

2.1.3 Informes Amnistía Internacional

Entre los numerosos informes de Amnistía Internacional, haremos referencia solamente a tres de ellos, siendo todos ellos de reciente elaboración; en primer lugar, mencionaremos el informe de fecha 19 de mayo de 2015 titulado «La Tortura en Marruecos y el Sahara Occidental»²⁵, en este informe se determina por la ONG, que:

[...] son pocos los funcionarios que han sido llevados a juicio por tortura; en cambio las víctimas que la denuncien pueden ser encarcelados en aplicación de leyes que penen la «denuncia falsa» y la «calumnia».

Manifiesta asimismo la ONG de forma contundente, sobre las cifras de la tortura en Marruecos, que es «0 el número de funcionarios marroquíes declarados culpables de tortura durante los “años de plomo” (1956-1999).»

Seguidamente mencionaremos que este informe va a coincidir, al describir los métodos de tortura que documenta, con los métodos que AFA-PREDESA ha mencionado en su estudio y que han sido enumerados más arriba; estos métodos de tortura acreditados por Amnistía Internacional son:

—Colgar a la víctima en la postura de tensión conocida como el «pollo asado».

25 <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/morocco-endemic-torture/>.

- Aplicación de descargas eléctricas.
- Dejar a la víctima desnuda y someterla a otros abusos y a humillación sexual.
- Hacerle quemaduras con cigarrillo.
- Violarla con objetos como botellas de cristal o porras etc.

De este trabajo debemos destacar el caso de tortura al que fueron sometidos dos estudiantes saharauis detenidos el 9 de mayo de 2013, Mohamed Garnit y Mohamed Ali Saidi, en los que el informe relata:

El abogado de estos dos jóvenes explicó a Amnistía Internacional que ambos habían dicho al juez de instrucción que los habían torturado, especificando que había sido con objeto de hacerles «confesar». Mohamed Ali Saidi contó que había mostrado al juez las marcas que tenía en la cara, y éste había hecho caso omiso de ellas. Mohamed Garnit explicó así lo ocurrido al mostrarle sus lesiones al juez: «Nos llevaron a ver al juez de instrucción el domingo temprano, cuando el juzgado estaba vacío. Al enseñarle mis heridas y decirle que los agentes de policía me habían torturado, alzó las manos al aire y dijo: “¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres, que vaya contigo a pegarles?”». En ambos casos el tribunal no ordenó realizar ninguna investigación sobre la tortura ni tampoco hizo nada cuando las familias de los jóvenes presentaros denuncias de tortura.

Informe de Amnistía Internacional 2016-17 cuyo título es «REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA»²⁶, en el que se afirma respecto a los Activistas Saharauis lo siguiente:

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia pacífica en el Sáhara Occidental, dispersando protestas pacíficas y enjuiciando e imponiendo restricciones a activistas saharauis que propugnaban la autodeterminación o denunciaban violaciones de derechos humanos. Interrogaron a algunos defensores y defensoras de los derechos humanos a su regreso del extranjero y siguieron bloqueando el registro legal del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y de otros grupos saharauis de dere-

26 <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/morocco-endemic-torture/>.

chos humanos. En julio, el Tribunal de Casación decidió que 23 manifestantes y activistas saharauis encarcelados por unos enfrentamientos mortales que habían tenido lugar en 2010 en Gdeim Izik debían ser juzgados de nuevo por un tribunal civil. Un tribunal militar había impuesto a la mayoría de ellos largas penas de prisión en un juicio injusto en 2013, basándose en «confesiones» que, según afirmaban, habían sido obtenidas mediante tortura. El nuevo juicio civil comenzó a finales de diciembre, pero se aplazó hasta enero de 2017. Al concluir el año continuaban en prisión 21 de los 23 acusados. Las autoridades siguieron expulsando del Sáhara Occidental o prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y activistas extranjeros, así como a activistas de derechos humanos. En abril expulsaron a un juez español y otros juristas españoles, belgas y franceses que habían viajado a Rabat para hacer gestiones en favor de los presos de Gdeim Izik.

En el mencionado informe se relata específicamente la situación sobre la tortura y malos tratos, en el cual recoge:

En abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Brahim Saika, activista del grupo Coordinadora de Saharauis sin Empleo, en Guelmim, cuando salía de su casa para asistir a una protesta pacífica convocada para reclamar más puestos de trabajo. Fue acusado de insultar y agredir a funcionarios públicos y de insultar a una institución pública, y comenzó una huelga de hambre tras acusar a la policía de haberlo sometido a malos tratos en detención. Murió en un hospital poco después, bajo custodia policial. Según los medios de comunicación, una autopsia oficial concluyó que había fallecido a causa de un virus, pero las autoridades no realizaron una investigación independiente, como había solicitado la familia, y enterraron sus restos en contra de los deseos de esta.

Informe de Amnistía Internacional 2017-18²⁷. En este informe en el apartado de Marruecos y el Sahara Occidental, se manifiesta en el mismo que:

Los tribunales siguieron basándose en declaraciones hechas bajo custodia y en ausencia de un abogado para dictar sentencias condenatorias, sin investigar debidamente las denuncias de uso de tortura y otros malos tratos para obligar a hacerlas.

27 <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF>.

Asimismo, se relata en el informe que en el juicio celebrado contra veintitrés activistas saharauis en relación al desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, instalado a las afueras de El Aaiún, el tribunal impuso penas muy elevadas incluyendo varias cadenas perpetuas, afirmando en el mismo que:

El tribunal civil no investigó debidamente las denuncias de que habían sido torturados bajo custodia ni excluyó como prueba la información obtenida presuntamente mediante tortura. A partir de septiembre, al menos 10 de los 19 activistas saharauis que seguían encarcelados emprendieron una huelga de hambre contra las condiciones de reclusión tras ser separados en diferentes cárceles de Marruecos. Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental. Las autoridades judiciales no las investigaron debidamente ni exigieron cuentas a los responsables. Las autoridades mantuvieron a varias personas detenidas en régimen de aislamiento durante periodos prolongados, lo que constituía tortura y otros malos tratos.

2.1.4. Comunicaciones de torturas ante el Comité Contra la Tortura

El 4 de marzo de 2014, Ennaama Asfari, representado por ACAT-Francia, presentó comunicación ante el Comité Contra la Tortura por

Tortura durante la reclusión, y sobre el fondo, Tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; obligación del Estado parte de realizar una investigación imparcial; prohibición de utilizar como prueba declaraciones obtenidas mediante tortura; protección contra toda intimidación por haber denunciado actos de tortura.

De esta queja, el Comité, tras la correspondiente investigación y procedimiento llevado a cabo de conformidad con la Convención Contra la Tortura, en su Decisión (CAT/C(59/D/606/2014²⁸) adoptó el texto en el que se describen las torturas soportadas por el denunciante, que relata de la siguiente forma:

28 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/093/45/PDF/G1709-345.pdf>.

Esa misma tarde, mientras el autor visitaba a una familia de amigos, las fuerzas del orden irrumpieron en la casa y golpearon a varios miembros de esa familia. A continuación procedieron a detener al autor de forma violenta pese a que no oponía resistencia alguna, el autor fue violentamente arrojado contra el suelo y esposado, se le vendaron los ojos y fue golpeado hasta perder el conocimiento [...]

[...] Durante las horas en que permaneció privado de libertad en la comisaría de El Aaiún, el autor fue obligado a mantenerse inmóvil en la misma postura mientras estaba esposado y tenía los ojos vendados. Le asestaban golpes cada vez que se movía o cambiaba de postura [...]

[...] Durante el interrogatorio recibió bofetadas y puñetazos en la cara, fue sometido al suplicio de la «falaqa» con una porra (recibió golpes en la planta de los pies y también golpeado con la porra en las nalgas. Al cabo de unos 40 minutos, le quitaron el pantalón y la camiseta y le obligaron a permanecer de rodillas sin moverse, so pena de ser golpeado.

Parte de los hechos de esta queja de haber sufrido torturas y malos tratos la pudimos escuchar personalmente en el interrogatorio al que fue sometido en el Juicio el Sr. Asfari, ya que asistimos, como juristas acreditados por el Consejo General de la Abogacía Española, al juicio militar celebrado en Rabat contra 24 activistas saharauis que fueron enjuiciados por los hechos acontecidos en el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik en el año 2010. El mencionado juicio se celebró entre los días 1 y 17 de febrero de 2013; en el mismo acto del juicio oral, la práctica totalidad de activistas, entre los que se encontraba el Sr. Asfari, denunciaron ante el Tribunal que habían sido torturados, concretamente varios de los activistas mostraron sus manos, denunciando que les habían sido arrancadas las uñas; pese a la presencia de observadores internacionales de diversas nacionalidades, incluidos Eurodiputados, el Tribunal militar, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no abrió diligencias de investigación por estos hechos, información que coincide con la que se recoge en el informe del Relator Especial contra la Tortura, en el que manifiesta que en los tribunales marroquíes no se persiguen las denuncias por tortura.

2.1.5. Relator especial sobre la Tortura

El mandato del Relator Especial se extiende a todos los países que han firmado la Carta de Naciones Unidas, independientemente de que se haya ratificado o no la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En este caso, el Relator Especial de la ONU va a ser uno de los «Procedimientos especiales» del Consejo de Derechos Humanos que va a tener competencia para investigar la situación de la tortura en cualquier país, en este caso, Marruecos. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visitó Marruecos los días 15 al 22 de septiembre de 2012, y El Aaiún, en el Sahara Occidental, los días 17 y 18 de septiembre de 2012. Como consecuencia de dicha visita, el Relator Especial Juan E. Méndez elaboró Informe sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HCR/22/53/Add.2²⁹. De este el informe extraeremos la información que tenga relación con el delito de torturas. Para ello vamos a citar la afirmación del Relator, en la que:

Observa que siguen existiendo casos de tortura y malos tratos. Considera que persiste la práctica de los tratos crueles en las causas penales ordinarias [...]. Asimismo señala [...] que al parecer no se realizan investigaciones rápidas y exhaustivas de todos los casos de tortura y malos tratos, no se enjuicia a los autores [...]

Entrando a analizar directamente el informe, el Relator afirmó que los testimonios que recibió estimaba que eran creíbles, así como

[...] de la presión física y mental sobre los detenidos durante el interrogatorio en casos de derecho común y más particularmente, en asuntos que afectan a la seguridad del estado. Estos testimonios son ampliamente corroborados por informes médico-legales que los malos tratos infringidos durante esta fase de detención eran normalmente de corta duración, consistiendo principal-

29 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session-22/A-HRC-22-53-Add-2_fr.pdf.

mente en lesiones causadas por puñetazos, patadas, bofetadas y, a veces golpes variados con diferentes objetos, así como y amenazas verbales.

En algunos casos, los detenidos denunciaron torturas y abusos físicos más graves, alegando, en particular, haber sufrido falaqa (palizas en las plantas de los pies), descargas eléctricas en los genitales, ahogamiento simulado, torturas que han sufrido en especial los sospechosos de casos de terrorismo o amenaza a la seguridad nacional, situación en donde vamos a encuadrar a los activistas saharauis. En este caso, los actos de tortura y malos tratos son sistemáticos durante la detención y arresto, situación que puede ser utilizada por las fuerzas de seguridad para obtener las declaraciones de los detenidos; en la presente situación, el Relator mostró su preocupación por los hechos manifestados. Esta conducta se va a agravar con la afirmación del Relator de:

[...] que los jueces parecen dispuestos a aceptar confesiones obtenidas de este modo sin tratar de confirmarlos con otras evidencias, incluso si la persona se retracta ante la corte, afirmando que su declaración ha sido obtenida mediante torturas. Afirma asimismo que la evidencia recibida indica que muchos casos ante los tribunales se basan completamente en las confesiones del acusado obtenidas de este modo, en ausencia de evidencia material. Esto crea condiciones que fomentan la tortura y el maltrato de los sospechosos.

El informe dispone de un apartado que trata expresamente del Sahara Occidental, y en él se manifiesta que llegó a la conclusión que en El Aaiún «se habían infligido torturas o malos tratos en los arrestos practicados en las comisarias de policía y en la prisión de El Aaiún».

2.1.6. Torturas Auto de Procesamiento Juzgado Central de Instrucción n.º 5 Audiencia Nacional³⁰

Un documento necesario e independiente, para demostrar que en el Sahara Occidental se comete el crimen de torturas contra activistas saha-

30 <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/noticia/37c008565d943d77468c0f275052d37b25ca7bcb.pdf>.

rauis, es el Auto de Procesamiento del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, sumario 1/2015, de nueve de abril de 2015. Este Auto es fruto de la querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui.

Tal y como manifiestan el profesor Manuel Ollé Sesé, doña Nuria García Sanz y doña Sara Ruiz Calvo en su «Comentario al auto de procesamiento del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de la causa incoada por el genocidio contra el pueblo saharauí³¹»:

Esta resolución judicial reviste especial transcendencia, puesto que, por primera vez, se reconoce por un tribunal de justicia, después de una rigurosa investigación, la existencia de indicios racionales de que personas alauitas cometieron presumiblemente un genocidio contra el pueblo saharauí [...]

Esta querella fue presentada por la comisión de diferentes tipos delictivos; no obstante, para el caso que nos ocupa, solamente vamos a tratar el tipo penal de torturas, prescindiendo del resto de presuntos delitos cometidos. De las numerosas torturas reflejadas en el auto de procesamiento solamente vamos a citar algunas de ellas, ya que este trabajo lo que pretende es conseguir demostrar que a lo largo de más de cuatro décadas de ocupación el recurso a esta deplorable práctica ha sido utilizado de forma generalizada, tanto por las fuerzas de seguridad como por el ejército marroquí.

Así, entre otros hechos denunciados, y tal y como se determina en el auto, el punto 4 del apartado de Antecedentes relata los hechos concretos investigados en el sumario con autor conocido. En este punto se afirma que

Del conjunto de las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas han resultado indiciariamente acreditados los siguientes hechos informados por el Ministerio Fiscal [...].

31 García Sanz, N. Ollé Sesé, M., & Ruiz Calvo, S. (2016), «Comentario al auto de procesamiento del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de la causa incoada por el genocidio contra el pueblo saharauí», en *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia* (pág. 123) Zaragoza, Pregunta Ediciones.

Por orden de antigüedad vamos a citar determinados hechos que indiciariamente son constitutivos de delito de torturas. Así, en primer lugar vamos a transcribir literalmente los hechos que se relatan en el auto. Dentro de los Hechos con autor conocido, en su punto 2.1, se expone el caso de SIDI MOHAMED DADACH, actos que se cometen contra un combatiente del Frente Polisario, por tanto, protegido por la Convención de Ginebra por su condición de combatiente.

A finales de febrero de 1976, SIDI MOHAMED DADACH, con documento de identidad español n.º A1752743, fue apresado por el Ejército marroquí junto con ALI MOHAMED MAHMUD EL KANTAURI durante la batalla de Amgala (Sahara Occidental) entre Marruecos y el Frente Polisario, del que formaban parte. Fueron trasladados a una prisión de la localidad de Smara (Sahara Occidental) donde fueron interrogados y torturados por miembros de la Gendarmería marroquí preguntándoles cuestiones relativas al Frente Polisario. En concreto a SIDI MOHAMED DADACH le golpearon fuertemente y le quemaron la cara y la barba con mecheros, no siendo curado en ningún momento de las heridas que tenía desde que había sido detenido. Allí estuvieron reclusos junto con otros 8 saharauis. Siete días después fueron nuevamente interrogados sobre el Frente Polisario. Después les llevaron a Agadir y a SIDI MOHAMED DADACH a una base militar en Marrakech donde estuvo en un hospital, siendo finalmente tratado de las heridas que tenía. Poco después fue encarcelado en una base militar hasta febrero de 1978 en que fue llevado de nuevo a la prisión de El Aaiún. Estando allí fue visitado por el Gobernador de El Aaiún SAID OUASSOU, y por HASSAN UYCHE que le dijeron que «si alguien no quiere a Marruecos estamos dispuestos a llevarlo y tirarlo fuera del Sahara». El 10 de agosto de 1978 se intentó fugar, siendo capturado y trasladado a El Aaiún donde fue torturado, siendo golpeado y atado a una silla aplicándole electricidad hasta que perdió el conocimiento. Allí estuvo 17 días sin que le dieran comida alguna, salvo agua salada, hasta que le trasladaron a Kenitra (Marruecos) para ser juzgado. El juicio tuvo lugar el 7 de abril de 1980 y fue condenado a pena de muerte y trasladado a la prisión de Kenitra en la que estuvo recluso 14 años. En 1994 le fue conmutada la pena de muerte por cadena perpetua. Finalmente fue liberado el 7 de noviembre de 2001 después de 25 años y 6 meses detenido.

En segundo lugar, dentro de los Hechos con autor conocido, en su punto 2.2, se expone el caso de MOHAMED-BUIA HOSEIN:

[...] que el 4 de noviembre de 1979 fue detenido nuevamente por la policía marroquí siendo acusado de pertenecer a una célula secreta del Frente Polisario, siendo trasladado desde su casa, donde fue detenido a la 1 de la madrugada hasta el puesto de Mando de las Compañías Móviles de Intervención (PCCMI) de El Aaiún. Allí fue torturado durante 11 días: le colocaban atado sobre una tabla con la cabeza suelta hacia arriba y le ponían en la boca un trapo mojado con lejía y sal, hasta que le provocaba la asfixia. También le ataron, con el cuerpo boca arriba, sobre una tabla con los pies atados fuertes con un alambre (para que la sangre se concentrara en dicha parte y los golpes dolieran más), golpeándole las plantas de los pies con la pieza de metal («falaka»). Igualmente le ataron las manos y los pies juntos por detrás de la espada levantándole con un palo, provocándole dolores intensos en la espalda y la columna vertebral «pollo asado»). También le aplicaron descargas eléctricas en los oídos y le introdujeron una botella por el ano. Las torturas se practicaban de noche y de manera individual.

En tercer lugar, y por hechos cometidos más recientemente, en su punto 3.1, se expone el caso de AMINATOU HAIDAR.

EL 21 de noviembre de 1987 a las 3.30 horas fue detenida en su casa de El Aaiún AMINATOU HAIDAR, estudiante, nacida en 1967, de veinte años de edad. La detención la practicaron personalmente el Comisario BRAHIM BENSAMI y el oficial HARIZ EL ARBI, inspectores de la policía marroquí, quienes tras sacarla de su casa la introdujeron en un vehículo y la llevaron al Puesto de Mando de las Compañías Móviles de Intervención (PCCMI) de El Aaiún. Una vez allí la introdujeron en una sala grande dónde le preguntaron por la mujer saharaui EL GHALIA DJMI. AMINATOU HAIDAR negó conocerla para no involucrarla, pero la Policía marroquí ya la había detenido ese mismo día y la llevaron a presencia de Aminatou para que la reconociera, no pudiendo ésta hacerlo debido a que EL GHALIA DJIMI había sido torturada hasta tal punto que tenía el rostro desfigurado, los pelos enmarañados y la ropa arrancada y sin sandalias. Sólo cuando EL GHALIA DJIMI habló AMINATOU HAIDAR la pudo reconocer. A continuación se llevaron a AMI-

NATOU HAIDAR a otra sala donde se encontraba otra persona conocida de Aminatou, SIDTI SALAMI, a quien estaban torturando y estaba sangrando, al tiempo que le decían que iban a acabar con todos los saharauis y que la iban a torturar así. En ese momento, el oficial BEL LAARABI ordenó que se pusiera a AMINATOU HAIDAR sobre una mesa estrecha, atándola de manos y pies, dejando la cabeza colgando hacia atrás fuera de la mesa. Comenzaron entonces a golpearle con cuerdas y uno de los sujetos le puso en la cara trapos empapados de orina y lejía hasta que perdía la conciencia, golpeándole entonces en la cara para que se recuperara y así sucesivamente. Le preguntaron por familiares, amigos y manifestantes a favor del Sahara Occidental. En un momento determinado trajeron un cordel eléctrico y se lo aplicaron a los dedos de los pies. En el interrogatorio se encontraba presente HARIZ EL ARBI, quien la golpeaba directamente y BRAHIM BENSAMI. Sobre las 9.30 horas de la mañana llegó al lugar de la detención ABDELHAFID BEN HACHEM, máximo dirigente de la seguridad del Ministerio.

3. Respuesta de la comunidad internacional ante la comisión del delito de torturas en el Sahara Occidental

En primer lugar vamos a aludir a las palabras del profesor Javier González Vega³², que hace mención de los resultados de los mecanismos de control de los Derechos Humanos afirmando:

El aspecto crítico en relación con el respeto de los derechos humanos se cifra en la existencia de mecanismos de control que garanticen efectivamente su observancia. En efecto, la general aceptación de aquellos por parte de los Estados no garantiza en absoluto su efectivo cumplimiento.

Por ello analizaremos la respuesta que ha dado la comunidad internacional a través de los diferentes mecanismos de control citados con anterioridad ante la comisión del delito de torturas en el Sahara Occidental, corroborando así la posición del profesor González Vega al comprobar

32 <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/noticia/37c008565d943d77468c0f275052d37b25ca7bcb.pdf>.

que las respuestas dadas por la comunidad internacional mayoritariamente van a ser «débiles», con la notable excepción que ha dado la Audiencia Nacional Española.

3.1. Convenios de Ginebra

El artículo 146 del IV Convenio de Ginebra va a ser el primer obstáculo que encontraremos para que los presuntos criminales por la comisión del crimen de torturas sean enjuiciados, ya que este artículo, tal y como explicamos con anterioridad, va a otorgar la competencia para enjuiciar estas conductas a los tribunales de la potencia ocupante. Por ello tendremos que analizar si estos tribunales gozan de la suficiente independencia del poder político establecido para que, dado el caso, pudiesen enjuiciar con la suficiente independencia a las personas que ocupan altos cargos de responsabilidad tanto en las fuerzas armadas y en las fuerzas de seguridad como en el gobierno marroquí.

Para llegar a una conclusión sobre si estos tribunales van a actuar o no de forma independiente, nos referiremos al análisis que realiza el Profesor Carlos Ruíz Miguel en su libro sobre la Constitución Marroquí³³ de 2011, en el que afirma:

El hecho es que, ya desde esta «Constitución» es el rey quien posee todo el poder ejecutivo, quien tiene el poder legislativo o el supra legislativo (mediante «dahir» o decreto real) y quien controla al poder judicial. El rey preside el consejo de ministros, nombra al primer ministro y a los ministros (arts. 24 y 25). El rey se reserva el veto sobre las leyes y puede disolver el parlamento (arts. 26 y 27). Y el rey nombra a los jueces y preside el consejo de la magistratura.

Por todo ello, y estimando que la Monarquía Alauita ha vinculado la estabilidad del reino y la de la propia monarquía a la permanencia del Sahara bajo la soberanía de Marruecos, transmitiendo que la suerte de la misma va a estar vinculada a la posible libre determinación del territorio,

33 <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/noticia/37c008565d943d77468c0f275052d37b25ca7bcb.pdf>.

las palabras de Ángel Pérez González³⁴ traducen idéntica impresión sobre la estabilidad de Marruecos al afirmar que:

El Sahara supuso la definitiva consolidación de Hassan II como rey de Marruecos y desde entonces su pérdida se ha considerado un anatema, por cuanto pondría en entredicho esa legitimidad.

Por lo cual, y debido a las características del régimen marroquí, afirmaremos que difícilmente los tribunales de justicia marroquíes van a enjuiciar y, en su caso, condenar, a cualquier miembro que pertenezca a las fuerzas de seguridad, el ejército o la administración por la comisión del crimen de torturas contra activistas saharauis. Esta posición se confirma mediante los informes de Amnistía Internacional y del Relator contra la tortura, en los que se relata que en Marruecos no se condena a funcionarios por el delito de torturas. En el informe de Amnistía Internacional de fecha 19 de mayo de 2015, cuyo título es «Tortura en Marruecos y en el Sahara Occidental»³⁵, se aportan los siguientes datos:

La tortura en cifras:

173 – número de casos de tortura y otros malos tratos documentados en el nuevo informe de Amnistía Internacional.

21 – número de años transcurridos desde que Marruecos ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

8 – número de personas procesadas por cargos como «denuncia difamatoria», «denuncia falsa» «insultos públicos» y «difamación» tras haber denunciado o informado de tortura en Marruecos desde mayo de 2014.

5 – número de años de prisión a que puede ser condenada una persona por «denuncia difamatoria» de tortura.

34 Pérez Gonzalez, A (2002), Real Instituto El Cano. Obtenido de: http://realinstituto-elcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMn-Mz0vMAfGjzOKNQ1zcA73dDQ38_YKNDRwtfN1cnf2cDf1DjfULsh0VAepxmvs!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2098-2002.

35 <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/noticia/37c008565d943d77468c0f275052d37b25ca7bcb.pdf>

1 – número de veces que un tribunal ha anulado una sentencia condenatoria tras reconocer que estaba basada en una confesión empañada por torturas y ha ordenado la excarcelación de la víctima de tortura, en los casos documentados por Amnistía Internacional.

1 – número de víctimas de tortura cuyo examen médico incluyó una evaluación del trauma o los daños psicológicos producidos por la tortura, en los casos documentados por Amnistía Internacional.

0 – número de funcionarios marroquíes declarados culpables de tortura durante los «años de plomo» (1956-1999).

No solamente denuncia la impunidad Amnistía Internacional, sino que el Relator Especial sobre la Tortura, en su informe³⁶ de abril de 2013, en su párrafo 29, afirma:

El Relator Especial observa que aparentemente no hay condenas bajo Artículo 231-1 del Código Penal. Concluye que dado que no hay una medida real se impuso una medida disciplinaria y se iniciaron pocas acciones legales contra funcionarios acusados de tortura, parece prevalecer un clima de impunidad con respecto a los acontecimientos de los últimos años, así como las graves violaciones de los derechos humanos comprometido a gran escala entre 1956 y 1999.

Asimismo hemos investigado sobre la existencia de sentencias condenatorias de algún funcionario marroquí por la comisión de torturas contra ciudadanos saharauis y no hemos conseguido constatar la existencia de, al menos, una sola condena al día de la fecha por la comisión de torturas contra saharauis. Por todo ello concluiremos que los presuntos criminales que cometan crimen de tortura regulado por los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I no van a responder de sus crímenes ante los tribunales marroquíes, siendo, por tanto, impunes estas conductas en Marruecos. Quedando como último recurso la posibilidad de que otros Estados Parte puedan enjuiciar a estos presuntos criminales.

36 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/134/71/PDF/G1413-471.pdf>.

3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

La respuesta más importante que se ofrece por parte de los órganos de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos va a ser la que ofrece el Comité de Derechos Humanos que vamos a analizar seguidamente.

3.2.1. Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos, tal y como hemos comentado con anterioridad, es el órgano de vigilancia y control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En sus «Observaciones finales» sobre el sexto informe periódico sobre Marruecos³⁷, realizado los días 24 y 25 de octubre de 2016, este ha aprobado, entre otras, las siguientes observaciones respecto a la comisión de torturas en Marruecos, manifestando en su párrafo 23:

El Comité celebra los esfuerzos desplegados por las autoridades para combatir la tortura y los malos tratos y toma nota del retroceso evidente de estas prácticas desde que se presentaron las últimas observaciones finales (CCPR/CO/82/MAR). No obstante, sigue preocupándole la persistencia de denuncias de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios públicos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, en particular contra personas sospechosas de terrorismo o de amenaza contra la seguridad o la integridad territorial del Estado. En particular, el Comité observa con preocupación que: a) en la práctica, las confesiones obtenidas bajo coacción se utilizan como prueba ante los tribunales en algunas ocasiones, aunque esté prohibido por la ley; b) los jueces y los fiscales no siempre ordenan la realización de exámenes médicos o de investigaciones en casos de denuncias de torturas o de confesiones obtenidas por la fuerza; c) algunas veces las personas que denuncian torturas son objeto de intimidaciones, amenazas y procesos judiciales; y d) el número de procesos incoados y de condenas pronunciadas parece reducido en comparación con el número de denuncias efectuadas y la extensión de la práctica de la tortura y los malos tratos en el pasado (arts. 2, 7 y 14).

37 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/MAR/CO/6&Lang=Sp.

En su párrafo 24 afirma que:

El Estado parte debe: a) tomar medidas enérgicas para erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y para investigar eficazmente, enjuiciar y castigar esos actos; b) llevar a cabo sin demora exámenes médicos respecto de todas las denuncias de torturas y malos tratos; c) velar por que, en la práctica, se apliquen de manera efectiva la prohibición de las confesiones obtenidas por la fuerza y la inadmisibilidad de los elementos probatorios conseguidos bajo tortura; d) ofrecer recursos útiles y garantizar una reparación a las víctimas; y e) agilizar la aprobación de la ley que establece el mecanismo nacional de prevención de la tortura.

Por todo ello, de las «Observaciones finales» sobre el sexto informe periódico del Comité de Derechos Humanos, nuevamente extraeremos la conclusión de que en Marruecos se sigue torturando, que las pruebas obtenidas mediante torturas se siguen utilizando para condenar a los activistas saharauis, pese a estar prohibido por la propia ley marroquí, y, para finalizar, no hay condenas para las personas que cometen el crimen de torturas contra saharauis.

3.3. Convención contra la Tortura

Tal y como hemos mencionado el capítulo II, Marruecos ha ratificado la Convención Contra la Tortura, pero este hecho no va a suponer que Marruecos cumpla con las obligaciones que proceden de la misma, incumpléndolas sistemáticamente al no castigar con penas adecuadas las obligaciones que ha contraído; asimismo, no ha procedido al cambio de métodos y prácticas en los interrogatorios que se practican contra la población saharauí, siendo esta sometida de forma sistemática a la práctica de torturas. Asimismo, incumple con la Convención al no permitir investigar de forma pronta e imparcial cuando se trata de denuncias que se presentan sobre torturas por los ciudadanos saharauis; de igual manera, se sigue condenando a los activistas saharauis a largas penas por las declaraciones obtenidas a los mismos mediante torturas cometidas por las fuerzas de seguridad, debiendo, por tanto, impedir que estas declaraciones puedan ser invocadas como prueba en ningún procedimiento judicial, tal y como se recoge

en la legislación interna marroquí. Por todo lo cual podemos afirmar que la firma de la Convención ha servido para que en los foros internacionales Marruecos pueda mostrar la imagen de país comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, en el que se avanza contra la comisión de la tortura, mientras en el quehacer diario se procede a todo lo contrario.

3.3.1. Comité Contra la Tortura

El Comité Contra la Tortura es el órgano de control establecido por la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, regulado en los artículos 17 y siguientes de la misma, teniendo la competencia para recibir comunicaciones de personas individuales.

3.3.2. a) Comunicaciones Comité Contra la Tortura

Ante la Comunicación presentada por el sr. Asfari, cuyo caso hemos relatado en el capítulo II sobre «tortura durante la reclusión contra Marruecos, Estado Parte en la Convención», el Comité Contra la Tortura tomó una Decisión³⁸, adoptada el pasado 18 de abril de 2017, en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura. Esta Decisión ha sido la única adoptada por el Comité Contra la Tortura respecto a los numerosos casos de tortura que se han dado a lo largo de los años en el Sahara Occidental. Por tanto, en este apartado solamente vamos a analizar la respuesta que ofrece el Comité Contra la Tortura por la presentación de esta Comunicación, y, para ello, vamos a analizar las Deliberaciones del Comité, así como la resolución de la Comunicación.

El Comité estimó que Marruecos había violado la Convención y dictaminó que se habían violado los artículos 1 y 12 de la Convención. Y por ello, de conformidad con el artículo 118, el Comité instó al Estado Parte a que:

- a) indemnice al autor de manera justa y adecuada, con inclusión de los medios para su rehabilitación lo más completa posible; b) lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos en cuestión, en plena con-

38 http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/CAT_C59_D_606_2014_121216_Asfari_fr.pdf.

formidad con las directrices del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), con el objeto de emprender acciones judiciales contra las personas responsables del trato infligido a la víctima; c) se abstenga de todo acto de presión, intimidación o represalia que pueda atentar contra la integridad física y moral del autor y de su familia, lo que por otra parte constituiría una violación de las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de la Convención a efectos de cooperar de buena fe con el Comité en la aplicación de las disposiciones de la Convención y de permitir que el autor reciba visitas de su familia en la cárcel; y d) lo informe dentro de un plazo de 180 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión sobre las medidas que haya adoptado para dar curso a la presente decisión.

Ante las obligaciones que se imponen a Marruecos, podemos afirmar que este ha incumplido deliberadamente esta decisión, debiendo manifestar que, de las noticias que disponemos de personas cercanas al Sr. Asfari, se nos ha manifestado que no se ha indemnizado al mismo de ninguna manera; asimismo, no se le ha sometido a rehabilitación por las secuelas de la tortura, así como tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos con el objeto de que se emprendiesen acciones judiciales contra los autores del trato al que fue sometido el sr. Asfari; antes al contrario, el sr. Asfari fue sometido a aislamiento en la prisión de Salé, motivo por el cual este inició el veinticuatro de febrero 2018 una huelga de hambre por los siguientes motivos:

Después de la reacción irresponsable del director de la institución penitenciaria transfiriéndome a una celda de aislamiento y privándome de todos los derechos fundamentales, con argumentos falsos y absurdos que muestran la presión y el chantaje ejercidos contra mí desde el primer día por el director de esta prisión [...] ³⁹

Tampoco ha cumplido con la decisión respecto a la presión o actos contra la integridad física del autor o su familia, ya que estos no han cesado

39 <https://porunsaharalibre.org/2018/02/24/naama-asfari-aislamiento-anuncia-huelga-hambre-ilimitada/>

de producirse, impidiendo que la esposa del sr. Asfari le pueda visitar en la prisión de Kenitra; la sra. Claude Magin, de nacionalidad francesa, ha sido rechazada en la frontera marroquí en cuatro ocasiones, siendo la última vez que se le rechazó el pasado 16 de abril de 2018 y por ese motivo esta inició una huelga de hambre que duró treinta días; aun así, no consiguió que las autoridades marroquíes le permitieran poder visitar a su esposo. Por tanto, pese a que Marruecos ha ratificado la Convención Contra la Tortura, carece de toda voluntad de cumplir con las obligaciones contraídas, no importándole que sus fuerzas armadas y de seguridad sigan torturando a saharauis y que con su comportamiento se viole el Derecho Internacional haciendo caso omiso de las recomendaciones efectuadas por el Comité Contra la Tortura.

3.4. Informe del Relator Especial sobre la tortura

En el siguiente punto vamos a analizar la respuesta que ofrece el Relator Especial Juan E. Méndez sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes respecto a la tortura que se comete en el Sahara Occidental. El Relator visitó Marruecos e incluyó el Sahara Occidental entre los días 15 y 22 de septiembre de 2012. Del informe del Relator⁴⁰ resaltaremos varias afirmaciones. En primer lugar, que la conducta de las fuerzas de seguridad y ejército de Marruecos gozan de una gran impunidad al no ser puestos nunca frente a la autoridad judicial para que les juzgue por la comisión de torturas, recogándose en el informe del Relator lo siguiente:

Los oficiales que fueron procesados fueron acusados de asalto pero no de tortura. La mayoría de los 220 agentes mencionados anteriormente todavía están bajo investigación o han sido encontrados inocentes. Los pocos policías que han sido los condenados fueron condenados a penas leves, como una multa o suspensión.

Asimismo, en su párrafo 29 afirma que:

40 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/134/97/PDF/G131-3497.pdf>.

El Relator Especial observa que aparentemente no hay condenas bajo Artículo 231-1 del Código Penal. Llega a la conclusión de que, dado que no se han impuesto medidas disciplinarias genuinas ni se han presentado casos importantes de funcionarios estatales acusados de torturas, parece existir una atmósfera de impunidad con respecto a los acontecimientos de los últimos años, así como las graves violaciones de los derechos humanos hombre comprometido a gran escala entre 1956 y 1999.

Específicamente sobre el caso saharauí, el Relator hizo especial referencia al Juicio Militar contra Saharauis por los hechos acontecidos en el desmantelamiento en el año 2010 del campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, afirmando lo siguiente:

El 17 de febrero de 2013, el tribunal militar emitió su veredicto rechazando todas las solicitudes para investigar denuncias de tortura así como ordenar exámenes médicos con respecto a las denuncias de violación planteadas por muchos de los acusados. El tribunal militar no emitió un fallo por escrito. El ponente muestra especial preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos durante el período de casi dos años anterior a los juicios, y que no fueron objeto de ninguna investigación. El hecho de que el caso se presente ante un tribunal militar en lugar de civil contribuye a la falta de transparencia y negativa a investigar las denuncias de malos tratos.

Para finalizar, el Relator mantiene la poca efectividad de los procedimientos para que las personas que han sido sometidas a torturas tengan una respuesta inmediata y efectiva; estos están recogidos en la ley interna marroquí, pero no se aplican, afirmando, por todo ello, que:

El procedimiento de quejas sobre las denuncias de tortura y enfermedad investigación, enjuiciamiento y condena de los autores tales actos aparecen, excepto en unos pocos casos excepcionales, previstos por la ley pero no son aplicadas. El Relator Especial concluye que los mecanismos de denuncia en su lugar no son efectivos ni independientes.

Por tanto, tras la visita, el Relator Especial efectuó una serie de recomendaciones a Marruecos; entre otras solicitaba que se modificara el Có-

digo Procesal Penal con el objeto de que no se obtuviesen confesiones por medios ilícitos, y, dentro de las recomendaciones, efectuó varias de forma específica sobre el Sahara Occidental, para lo cual el Relator recomendó al gobierno:

a) Investigar rápidamente todas las acusaciones de actos de tortura y malos tratos durante y después de las manifestaciones y en la prisión de El Aaiún; responsabilizar a los perpetradores de estos actos y compensación a las víctimas; b) Reconsiderar la jurisdicción del tribunal militar para saber sobre civiles en el caso de los 23 saharauis detenidos en prisión 1 Salé y garantizar que, en principio, los civiles no sean condenados por tribunales militares; abrir investigaciones serias e imparciales para establecer hechos precisos en este caso y determinar cuál es la responsabilidad de los miembros de policía o fuerzas de seguridad; e investigar todas las denuncias de tortura y abuso.

Estas recomendaciones que realizó el Relator en el año 2012, al día de hoy la mayoría no se han cumplido, ya que a lo largo del trabajo hemos presentado hechos posteriores que determinan que la situación no ha cambiado en el territorio.

3.5. Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Entre sus competencias está la de poder tratar todas las cuestiones relativas a los derechos humanos formulando recomendaciones relativas a los mismos. Entre las labores más importantes del Consejo, está la de supervisar a todos los países mediante el Examen Periódico Universal que se estableció, simultáneamente a la creación del Consejo de Derechos Humanos, el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 60/251. El EPU tiene como objetivo mejorar la situación de los derechos humanos en los todos los países, ofreciendo la oportunidad a todos los Estados de declarar qué acciones han emprendido para mejorar el respeto de los derechos humanos, y, en este caso, la lucha contra la tortura.

3.5.1. Examen Periódico Universal Marruecos

Centrándonos en Marruecos, analizaremos el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Marruecos⁴¹ en sesión de 2 de mayo de 2017, informe que fue aprobado el 5 de mayo de 2017.

En primer lugar indagaremos la información aportada por las partes interesadas en el informe, concretamente, la aportada por ONGs. De toda esta información vamos a destacar el párrafo 28, en el que, por parte de Amnistía Internacional, se lamentaba de recibir denuncias por torturas y malos tratos y en la que afirma:

Amnistía Internacional indicó que si bien celebraba la decisión adoptada en 2014 por el Ministro de Justicia y Libertades de alentar a los fiscales y los jueces a que ordenaran la realización de exámenes médicos en relación con las denuncias de torturas o malos tratos, lamentaba seguir recibiendo denuncias a ese respecto. Los casos documentados por Amnistía Internacional después del segundo ciclo del EPU revelaron que no se realizaban las debidas investigaciones. La comunicación conjunta 4 (JS4), la LPPS, la ASVDH y Amnistía Internacional recomendaron que se velara por que todas las denuncias de torturas y malos tratos fueran efectivamente investigadas y que se exigiera a los responsables que rindieran cuentas de sus actos.

Asimismo, afirma Amnistía Internacional sobre la celebración de juicios en que las confesiones son obtenidas mediante tortura:

Sin embargo, Amnistía Internacional había seguido documentando juicios sin las debidas garantías, con condenas basadas en supuestas «confesiones» obtenidas mediante torturas. La AF recomendó que se previera un mecanismo de revisión de las condenas definitivas dictadas tras juicios celebrados sin las debidas garantías.

Asimismo, respecto a las consecuencias de la práctica de la tortura, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis manifestó lo siguiente:

41 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/036/38/PDF/G1703-638.pdf>.

La LPPS indicó que desde 2013 había registrado 55 casos de presos políticos. Nueve de ellos habían muerto a consecuencia de torturas y la falta de atención médica.

En segundo lugar, nos centraremos en el análisis de la Recopilación sobre Marruecos elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el EPU⁴². En este informe La Oficina del Alto Comisionado va a recoger parte de las informaciones recopiladas por el Relator Especial sobre la tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria relacionadas con el crimen de tortura.

Respecto a la información aportada por el Relator Especial sobre la tortura, deberemos referirnos a determinadas manifestaciones que se realizan, ya que a este:

Le preocupaba que, en algunos casos relacionados con la seguridad del Estado, existiera un cuadro de torturas durante el proceso de detención y durante la privación de libertad, en particular, por parte de agentes de la Dirección Nacional de Vigilancia.

Asimismo, en su informe el Relator recomendó a Marruecos que:

[...] pusiera fin a la práctica de la detención secreta y en régimen de incomunicación; que agilizara la investigación de todas las denuncias de tortura y malos tratos; que instituyera procedimientos de investigación de oficio y que instituyera mecanismos de denuncia eficaces y accesibles. También recomendó que las fuerzas del orden cobraran mayor conciencia de la prohibición de la tortura.

Del mismo informe podemos extraer la información aportada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en el que se manifiesta que las condenas dependían en gran medida de la confesión obtenida mediante torturas afirmando lo siguiente:

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria expresó su preocupación por las denuncias de detención en régimen de incomunicación. También

42 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/036/92/PDF/G1702-692.pdf>.

le preocupaba que el sistema de justicia penal se basara en gran medida en la confesión como prueba principal de cargo y que las denuncias recibidas denotaran que funcionarios del Estado recurrían a la tortura para obtener pruebas o confesiones. El Grupo de Trabajo recomendó a Marruecos que tomara todas las medidas necesarias para que las condenas penales se basaran en pruebas distintas de la confesión del acusado.

En tercer lugar analizaremos la información aportada por Marruecos al EPU; la delegación de Marruecos fue presidida por el Ministro de Derechos Humanos, manifestando los diferentes avances que ha realizado Marruecos para prevenir la comisión de la tortura, para lo cual:

Se había redactado un proyecto de ley para conceder al Consejo Nacional las atribuciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura [...]

[...] Esas garantías se refieren, en particular, a la detención policial; la racionalización de la detención preventiva, a la que considera medida excepcional; la promoción de los mecanismos de lucha contra la tortura, al exigir al oficial de la policía judicial que, previa notificación al Ministerio Público, haga someter a reconocimiento médico a quienes son objeto de detención policial en caso de que observe una enfermedad o cualquier otra señal que haga necesario ese reconocimiento y, por último, al fortalecimiento de la supervisión por los tribunales del desempeño de la policía judicial.

Asimismo, la delegación marroquí afirmó que:

El proyecto de Código Penal y el proyecto de Código de Procedimiento Penal han introducido varias disposiciones que refuerzan la labor de prevenir y combatir todas las formas de tortura y malos tratos, especialmente en cuanto a la supervisión de las condiciones de la detención policial. A este respecto, el proyecto de Código de Procedimiento Penal hace obligatorio el registro audiovisual de todas las audiencias de los acusados sometidos a detención policial y dispone que esos acusados deben ser sometidos a un reconocimiento médico cuando se constaten una enfermedad o señales que hagan necesario ese reconocimiento y que el abogado del acusado esté presente en las audiencias.

Y, por último, vamos a analizar el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Marruecos⁴³ el año 2017. Respecto al dialogo interactivo que se produce entre Marruecos y el resto de países a lo largo del examen, deberemos afirmar que, pese a la situación persistente de una práctica reiterada de la tortura en Marruecos, en el informe se percibe una actitud condescendiente con Marruecos, recibiendo así felicitaciones de Yemen, Australia, Austria, Chile, Indonesia, Italia, Sudán y Suiza por la ratificación de La Convención Contra la Tortura. Actitudes que pueden chocar con las aportaciones realizadas por el resto de órganos de Naciones Unidas y por las organizaciones interesadas en el informe, que aportan documentación preocupante sobre el respeto de los Derechos Humanos en Marruecos, especialmente sobre la práctica de torturas. Para finalizar citaremos las conclusiones y/o recomendaciones del informe. En lo que respecta a la tortura, no fueron muchas las que recibió Marruecos, en especial tuvo cinco recomendaciones, consistentes, la primera, en solicitar que Marruecos tome medidas para que la definición de la tortura se ajuste a los requisitos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la segunda, relativa a la solicitud de:

establecer un mecanismo nacional de prevención efectivo, independiente y dotado de recursos suficientes que se ajuste a los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Las dos siguientes consistieron en solicitar a Marruecos que agilizase el proceso para el establecimiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura; y, por último, se le solicitó que intensifique:

los esfuerzos dirigidos a luchar contra los casos de tortura y otros malos tratos por parte de agentes estatales, estableciendo para ello un mecanismo nacional de prevención de la tortura independiente y eficaz.

43 <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/MAindex.aspx>.

3.6. Unión Africana

Respecto al crimen de tortura, la Unión Africana, en enero de 2012, tomó la decisión de solicitar a la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos que realizara una visita a los territorios ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática con el objeto de investigar las violaciones de derechos humanos que se han cometido.

Este informe⁴⁴ se elaboró el 24-28 de septiembre de 2012, aunque a esta delegación Marruecos le impidió la entrada al Sahara Occidental bajo ocupación, por lo que solamente pudo realizar su labor en el territorio del Sahara Occidental que se encuentra bajo control del Frente Polisario. De este informe tenemos que destacar lo siguiente:

La delegación también recibió informes de arrestos y detenciones arbitrarias. También escuchó muchos testimonios de víctimas saharauis de tortura y trato humillante en las cárceles marroquíes, principalmente activistas por la independencia. Según estas víctimas, la tortura de Saharauis en las cárceles marroquíes y en los centros de detención policial, los perpetradores disfrutan de total impunidad.

Asimismo, recoge la violencia que sufren las mujeres saharauis:

Durante las reuniones, se informó a la delegación de la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad marroquíes contra las mujeres saharauis en territorio ocupado son frecuentes. Según los testimonios de los activistas saharauis, la delegación ha encontrado, que las mujeres en el territorio ocupado a menudo son víctimas de actos de violencia durante manifestaciones pacíficas violentamente dispersas por Seguridad marroquí. Se han informado muchos casos de uso excesivo de la fuerza, alegando que los oficiales los estaban golpeando con el bastón, brazos, piernas, espalda y rodillas.

A su vez, la delegación pudo acreditar los resultados que produjeron las torturas en diferentes activistas saharauis, afirmando que:

44 http://www.achpr.org/files/sessions/12th-eo/mission-reports/promotion_mission-2012/mission_report_sahrawi_cpta_fr.pdf.

La delegación observó cicatrices en los cuerpos de varios defensores y activistas de derechos humanos que conoció y que supuestamente fueron infligidos por el Fuerzas de seguridad marroquíes durante las manifestaciones o bajo tortura.

Por tanto, la delegación, tras la visita, hizo una serie de recomendaciones que se estima de gran calado, ya que, entre otras, se solicitó la intervención del Consejo de Seguridad recomendando las siguientes:

La UA debería apelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y exhortarlo a la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos en el territorio ocupado incluyendo esta en el mandato de la MINURSO, que se ha prorrogado una vez más Abril de 2013 y no dice nada sobre el seguimiento de la situación de los derechos humanos en territorio ocupado.

3.7. Corte Penal Internacional

La Corte Penal podrá ejercer su competencia mediante diferentes causas. En primer lugar, para que la Corte pueda tener competencia para enjuiciar por la comisión del crimen de torturas que se produce contra la población saharauí, Marruecos debería haber ratificado el Estatuto de Roma. Por consiguiente, al no haber ratificado el mismo, la respuesta de este Tribunal Internacional respecto a la comisión del crimen de torturas finalizará rápidamente al declarar el Fiscal la incompetencia de la Corte, por lo que no va a poder iniciar una investigación. Por tanto, la Corte no podrá conocer de los crímenes cometidos por personas de nacionalidad marroquí o por los crímenes de tortura cometidos en territorio marroquí; incluso si el Fiscal de la CPI hubiese recibido información acerca de un crimen competencia de la Corte e iniciase de oficio una investigación, debería solicitar una petición de investigación a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional y esta, obligatoriamente, debería denegar la misma por carecer de competencia al no ser Marruecos Estado Parte del Estatuto de Roma.

En segundo lugar, y de conformidad con el artículo 12.3 del Estatuto de Roma, la CPI solamente podría ser competente si Marruecos aceptase, mediante declaración depositada en poder del Secretario, el consentir que

la Corte ejerza su competencia respecto del crimen que se trate, cuestión que estimaremos que será poco probable.

Y en tercer lugar, si el Consejo de Seguridad actuase de conformidad con lo que dispone el artículo 13.b) del Estatuto de Roma⁴⁵:

El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes.

Por tanto, solamente a través de este mecanismo la Corte Penal Internacional podría ser competente para juzgar casos de tortura en el Sahara Occidental. Además de las limitaciones que tiene la Corte Penal respecto a los crímenes de tortura cometidos contra saharauis, vamos a referirnos a la existencia de una limitación temporal de la competencia de la Corte; es decir, esta no tendrá competencia para conocer de los delitos de tortura cometidos antes del 1 de julio de 2002, pese a que este crimen es imprescriptible, tal y como se establece en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad⁴⁶, que, en su artículo 1, establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Esta limitación a la competencia temporal podría permitir que muchos de los crímenes de tortura cometidos contra saharauis queden impunes al no poder ser conocidos por la CPI. Una limitación que van a encontrar los ciudadanos saharauis para el hipotético caso de que Marruecos ratificase el Estatuto de Roma sería el de la «gravedad de los hechos», gravedad necesaria para que la Corte pueda enjuiciar los mismos. Esta gravedad va a depender del número de personas afectadas; en el presente caso, va a ser difícil cumplir con el mencionado requisito, ya que, al ser el pueblo saharauí una población muy poco numerosa, la Sala de Cuestiones Preliminares podría no considerar la suficiente gravedad al no ser un gran número de afectados.

Estimamos, en cambio, que la Corte debería valorar la gravedad también en función del porcentaje de personas afectadas, y en el presente caso

45 [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf).

46 <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm>.

es muy elevado. Esta proporción elevada de población afectada se recoge por Carlos Martín Beristain, que en su obra *El oasis de la memoria*⁴⁷ afirma:

Las cifras de personas asesinadas o desaparecidas por el régimen marroquí superan de forma porcentual respecto al conjunto de la población, a países como Argentina o Chile, cercanas a las de la guerra de El Salvador o a las de países que han sufrido la violencia masiva o el genocidio, como Guatemala o Timor Oriental [...]

3.8. Jurisdicción Universal

La jurisdicción Universal permite juzgar a cualquier ciudadano que haya cometido el crimen de torturas independientemente de su nacionalidad y lugar de comisión del delito. En el presente caso, deberemos manifestar que solamente se ha procedido a juzgar a ciudadanos marroquíes por la comisión del crimen de torturas en España. Esta respuesta de la jurisdicción de los tribunales españoles va a ser tratada en el capítulo V. Respecto al resto de jurisdicciones nacionales, no tenemos conocimiento de que ninguna jurisdicción de ningún Estado haya enjuiciado a ninguna persona por la comisión del crimen de torturas cometido en el Sahara Occidental o Marruecos contra ciudadanos saharauis.

4. Respuesta de la potencia administradora, principio de territorialidad

De todas las respuestas que por parte de la comunidad internacional se han dado por la comisión del crimen de torturas en el Sahara Occidental, la más contundente la han dado los tribunales españoles, y, en concreto, la Audiencia Nacional española, que ha sido el único tribunal que ha procedido a enjuiciar a los presuntos autores por crímenes de tortura.

Este tribunal ha sido el único que ha cumplido con las obligaciones internacionales contraídas por España de perseguir los crímenes más graves contra la humanidad. Desde la salida de España del territorio el lejano 26

47 Martín Beristain, C. y González Hidalgo, E. (2012), *El oasis de la memoria*. Donosti-San Sebastián, UPV/EHU.

de febrero de 1976, esta actuación ha sido la única respuesta digna realizada por parte del Estado español, que hasta el momento había hecho dejación de funciones, ya que había incumplido con las obligaciones internacionales, históricas y morales que tenía y tiene con el territorio.

En especial vamos a referirnos a los dos procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional contra personas que han cometido, entre otros, delito de tortura contra ciudadanos saharauis; en primer lugar, la querella presentada el 14 de septiembre de 2006 por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) por la que incoaron Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 362/2007, que, mediante auto de 29 de octubre de 2007, acordó la asunción de competencia para la instrucción de los hechos denunciados por presuntos delitos de genocidio y torturas. Y el segundo asunto, el del ciudadano español de origen saharauí Baby Hamday Buyema, que, mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional⁴⁸ admitió a trámite la querella presentada por La Liga Española Pro Derechos Humanos.

4.1. Jurisdicción Universal Española

En primer lugar, vamos a analizar la respuesta de la Audiencia Nacional ante la querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA). Ante esta querella, el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Sumario 1/2015, dictó AUTO de Procesamiento⁴⁹ contra once de los acusados, de fecha nueve de abril de dos mil quince. Auto que, en su fundamento jurídico PRIMERO, acuerda tomar:

[...] la decisión de procesar a quienes hasta ahora figuraban como querellados o encartados en las actuaciones se adopta porque en las mismas aparecen motivos bastantes para afirmar con fundamento: a) se está en presencia de hechos tipificados en el Código Penal; b) concurren indicios racionales de cri-

48 http://www.ligaproderechoshumanos.org/documentos/20140925_admitida_querella.pdf.

49 <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/noticia/37c008565d943d77468c-0f275052d37b25ca7bcb.pdf>

minalidad contra las personas que se citan en el presente apartado [...]

En el fundamento jurídico SEGUNDO se dispone que los hechos son constitutivos de

[...] un delito de genocidio previsto en el art. 137 bis del C. Pen. de 1944, introducido por Ley 44/1971 y que mantuvo la misma redacción en el T.R. de 1973, modificado por la L.O. 8/1983 (actualmente penado en el art. 607 del C. Pen. de 1995, en concurso real con:

a) 50 delitos de asesinato del Artículo 406 del Código Penal de 1973 (art. 139 del C. Pen. de 1995);

b) 76 delitos de asesinato en grado de tentativa del artículo 406 del Código Penal de 1973 (art. 139 del C. Pen. De 1995)

c) 6 delitos de detención ilegal del art. 483 del Código Penal de 1973 (art. 166 del C. Pen. de 1995), por no dar razón del paradero del detenido;

d) 202 delitos de detención ilegal el art. 483 del Código Penal de 1973 (art. 163 del C. Pen. de 1995)

e) Un delito contra la libertad sexual del art. 429 del Código Penal de 1973 (arts. 178 y 179 del C. Pen. De 1995); y

f) 23 delitos de lesiones del art. 421.3º del C. Pen. De 1973 o torturas del art. 204 bis del C. Pen. De 1973.

En tercer lugar, en su fundamento jurídico TERCERO, respecto a los indicios de responsabilidad criminal en su punto 1 e), dispone el Auto que se deducen indicios racionales de criminalidad para las personas cuyo procesamiento se acuerda:

1. Para ABDELHAFID BEN HACHEM, a) de la declaración judicial de MOHAMED-BUIA ABEIRI en cuya detención participó; y b) de la declaración judicial de AMINATOU HAIDAR en cuya detención ilegal y torturas participó directamente, así como en la detención ilegal de otras 16 personas.

2. Para ABDELHAK LEMDAOUR, a) por la declaración de HADRAM ABDERRAHMAN BADA, al ser responsable de su detención y torturas y de la detención de otras 18 mujeres; b) de la declaración judicial de BRAHIM MOHAMED SALEM OMAR en cuya detención y torturas participó directamente, así como de otras 72 personas, la desaparición de otras dos personas, el asesinato de un bebé y el de una persona quemada viva y por la detención

de OMAR BUZEID AHMED BAIBA; c) de la declaración judicial de HOURIA AHMED LEMADEL por participar en la detención de AHMED LEMAADAL MOHAMED EL MEDI, actualmente desaparecido y en la detención de otras tres personas posteriormente liberados; d) de la declaración judicial de ALI OMAR BOUZED por participar en la detención y torturas de OMAR BUZEID AHMED BAIBA, actualmente desaparecido, y en la detención de otras cuatro personas posteriormente liberados; e) de la declaración judicial de MOHAMED-BUIA ABEIRI en cuyas torturas participó directamente, siendo responsable de su detención; y f) de la declaración judicial de FATIMEOTU MOUSTAPHA SALEM por la detención y desaparición de su padre, MUSTAFA SALEH HNINI.

3. Para DRIS SBAI a) por la declaración de HADRAM ABDERRAHMAN BADA, al ser responsable de su detención y torturas y de la detención de otras 18 mujeres; b) de la declaración judicial de BRAHIM MOHAMED SALEM OMAR en cuya detención y torturas participó directamente, así como de otras 72 personas, la desaparición de otras dos personas, el asesinato de un bebe y el de una persona quemada viva y por la detención de OMAR BUZEID AHMED BAIBA; c) de la declaración judicial de HOURIA AHMED LEMADEL por participar en la detención de AHMED LEMAADAL MOHADED EL MEDI, actualmente desaparecido y en la detención de otras tres personas posteriormente liberados; y d) de la declaración judicial de ALI OMAR BOUZED por participar en la detención y torturas de OMAR BUZEID AHMED BAIBA, actualmente desaparecido, y en la detención de otras cuatro personas posteriormente liberados.

4. Para SAID OUASSOU, a) de la declaración judicial de SIDI MOHAMED DADACH en cuya detención y torturas participó directamente; y b) de la declaración judicial de MOHAMED BUIA ABEIRI en cuya detención y torturas participó directamente.

5. Para HASSAN UYCHEN, a) de la declaración judicial de SIDI MOHAMED DADACH en cuya detención y torturas participó directamente; y b) de la declaración judicial de SIDI MOHAMED ALI BRAHIM en cuya detención y torturas participó directamente.

6. Para BRAHIM BEN SAMI, de la declaración judicial de AMINATOU HAIDAR en cuya detención participó directamente. Así como en la detención y torturas de EL GHALIA DJMI y SADATI SALAMI.

7. Para HARIZ EL ARBI, a) de la declaración judicial de AMNINATOU

HAIDAR en cuya detención y torturas participó directamente, así como en la detención y torturas de EL G de GHALIA DJMI y SIDATI SALAMI y en la detención, torturas y el asesinato de MOHAMED JALIL AYACH; b) de la declaración judicial de ABDULAH HADER SUELEM en cuya detención y torturas participó directamente; y c) de la declaración judicial de OMAR HEIBA MAYARA por la detención y torturas de MOHAMED SALEM HEIBA MEYARA.

8. Para el coronel LAMARTI, a) de la declaración judicial de BRAHIM MOHAMED SALEM OMAR en cuya detención y torturas participó directamente; b) de la declaración judicial de HOURIA AHMED LEMADEL por participar en la detención de AHMED LEMAADAL MOHAMED EL MEDI, actualmente desaparecido.

9. Para MULEY AHMED ALBOURKADI, de la declaración judicial de BRAHIM MOHAMED SALEM OMAR, en cuya detención y torturas participó directamente.

10. Para BEL LAARABI, de la declaración judicial de AMINATOU HAIDAR en cuya detención y torturas participó directamente.

11. Para ABDELGHANI LOUDGHIRI, de la declaración judicial de OMAR HEIBA MAYARA por la detención y torturas de MOHAMED SALEM HEIBA MEYARA.

Y, para concluir, citaremos la PARTE DISPOSITIVA DEL AUTO, en sus puntos 1 y 2, por los que acuerda:

1.- Declarar procesados a los identificados como (1) BEN HACHEM, (2) ABDELHAK LEMDAOUR, (3) DRISS SABAI, (4) SAID OUASSOU, (5) HASSAN UYCHEN, (6) BRAHIM BENSAMI, (7) HARIZ EL ARBI, (8) LAMARTI, (9) MULEY AHMED ALBOURKADI, (10) BEL LAARABI y (11) ABDELGHANI LOUDGHIRI, por los hechos y presuntos delitos recogidos en la presente resolución.

2.- Se acuerda la busca, detención e ingreso en prisión de (1) BEN HACHEM, (2) ABDELHAK LEMDAOUR, (3) DRISS SBAL, (4) SAID OUASSOU, (5) HASSAN UYCHEN, (6) BRAHIM BENSAMI, (7) HARIZ EL ARBI, librándose las oportunas órdenes internacionales de detención contra los procesados, para su ulterior extradición [...]

En segundo lugar, la Liga Española Pro Derechos Humanos y la fami-

lia del ciudadano español Baby Handay Buyema presentan escrito de querrela contra el Titular del Ministerio de Defensa, el Titular del Ministerio del Interior y el Titular del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos y contra el Gobernador de la ciudad de El Aaiún. Los querellantes han calificado estos hechos como un delito de lesa humanidad, un delito de genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestros. Todos ellos procedimientos iniciados ante la Audiencia Nacional mediante la Jurisdicción Universal. Para finalizar, tenemos que manifestar que ambos procedimientos siguen abiertos en la Audiencia Nacional por el principio de territorialidad y no por el principio de justicia universal.

Conclusiones

PRIMERA.- El Sahara Occidental es un Territorio No Autónomo, sujeto a descolonización, cuya potencia administradora es España, aunque desde el año 1976 no ha cumplido con las obligaciones que dimanar de los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas. La situación actual del Sahara Occidental es la de ser un territorio ocupado militarmente por Marruecos, por este motivo se aplica el DIH en parte, así como el DIDH.

SEGUNDA.- Marruecos ha firmado o ratificado la mayoría de tratados o convenios, que regulan el crimen de tortura, como pueden ser los Convenios de Ginebra, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra; asimismo es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Contra la Tortura y en el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura; en cambio, ha firmado, pero no ratificado, el Estatuto de Roma y no es Estado Parte en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Pese a la adhesión o ratificación de estos instrumentos, no ha sido elemento suficiente para que este crimen deje de cometerse por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, especialmente cuando esta se perpetra contra la población saharauí. No obstante, Marruecos realiza grandes esfuerzos para que la comunidad internacional y, especialmente, las instituciones que tienen entre sus competencias la protección de los derechos humanos, recojan «con satisfacción» los avances que este Estado acomete respecto a la protección de estos, lo-

grando con ello incluso algunos resultados, como puede ser el Examen Periódico Universal al que se sometió, en el que al menos siete países lo felicitaron por haber ratificado el protocolo facultativo relativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pero una vez firmados estos Convenios o Declaraciones, los hechos van a ser incuestionables al encontrar reiteradamente casos graves de torturas que se practican contra los activistas saharauis.

TERCERA.- El Derecho Internacional Humanitario es violado por parte de Marruecos, especialmente el IV Convenio de Ginebra, así como el Protocolo Adicional I, al hacer caso omiso de las obligaciones que dimanarían de ellos, entre otras, la obligación que emana del artículo 32 del IV Convenio por el que se prohíbe la tortura; asimismo, incumple con la obligación que proviene del artículo 146 del mismo Convenio por el que se obliga a los Estados Partes a aplicar las sanciones penales oportunas a la personas que hayan cometido torturas, debiéndolas hacer comparecer ante los propios tribunales.

Al día de hoy, tal y como hemos acreditado, no ha habido ninguna sentencia contra oficiales de las fuerzas de seguridad marroquíes por cometer torturas contra saharauis.

CUARTA.- Marruecos tortura de forma sistemática a los ciudadanos que cuestionan la marroquinidad del Sahara Occidental, pudiendo constatar a lo largo de los informes aportados la coincidencia de los métodos de tortura utilizados; en concreto, se repite el método del «pollo asado», que es recogido por todos los informes que se han transcrito. En especial, se hace referencia a este método de tortura en los informes de AFAPRE-DESA, Amnistía Internacional, los del Consejo General de la Abogacía Española; figuran igualmente en el informe del Relator contra la Tortura y en el Auto de Procesamiento de altos cargos marroquíes por la Audiencia Nacional Española.

QUINTA.- A lo largo del trabajo hemos relatado diferentes casos de tortura cometidos contra la Población Saharaui; estas torturas han sido acreditadas por los informes de diferentes actores de reconocida independencia. Podemos afirmar que estas torturas no han recibido el correspon-

diente castigo, por tanto, hasta el día de la fecha estos crímenes han quedado impunes; a esta conclusión hemos llegado tras analizar los informes de Amnistía Internacional en los que se afirma que no ha habido condena alguna de ningún miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes por la comisión del crimen de torturas; asimismo, de los informes del Consejo General de la Abogacía Española, en los que se manifiesta que cuando las víctimas denuncian haber sido sometidos a torturas se constata que no se abren diligencias de investigación; asimismo, el Relator contra la Tortura afirma en su informe que no se ha procesado a ningún oficial marroquí por el crimen de torturas. Todo esto nos lleva a afirmar que en Marruecos y en el Sahara Occidental se tortura a la población saharauí con total impunidad, ya que, tal y como manifiesta el Relator contra la Tortura, existe «una atmosfera de impunidad» al no ser castigada ninguna persona por estos crímenes.

SEXTA.- El Poder Judicial marroquí, que es el encargado de hacer cumplir las leyes, en especial la legislación marroquí, en la que se prohíbe la comisión de torturas, ofrece graves carencias de independencia. Los tribunales de justicia, con su pasividad, permiten la existencia de la misma al no reprimir la comisión de la tortura; esta pasividad se produce por dos motivos: a) por un lado, los jueces y tribunales permiten a las fuerzas de seguridad que aporten pruebas obtenidas mediante tortura, esta aportación fundamentalmente se realiza mediante la elaboración del «Acta Policial», documento en el que constan las declaraciones del detenido y que en la mayoría de casos han sido obtenidas mediante tortura. Este documento no admite prueba en contrario y se elabora sin la presencia del abogado de la defensa; en función de estas declaraciones son condenados los activistas saharauis a largas penas de prisión; b) en segundo lugar, existe connivencia por parte de los juzgados y tribunales marroquíes con las fuerzas de seguridad respecto a la tortura al no investigar las denuncias realizadas por los acusados en sede judicial, incluso impidiendo que los forenses emitan sus correspondientes informes.

SÉPTIMA.- La comunidad internacional, ante la comisión grave y reiterada de los crímenes de lesa humanidad y crimen de guerra por la comisión de torturas, ha ofrecido una respuesta que podemos afirmar de

muy bajo nivel, ya que hasta el momento de la elaboración de este trabajo no hemos tenido constancia de que una sola persona haya sido condenada por ningún tribunal internacional por la comisión de ningún crimen de torturas cometido a lo largo más de cuatro décadas. Podemos afirmar, asimismo, que ningún torturador ha sido condenado por los tribunales nacionales marroquíes, obligación adquirida al ser parte del IV Convenio de Ginebra y su Protocolo Adicional I. Tampoco hemos encontrado ningún condenado por países terceros que podrían proceder al enjuiciamiento de estos torturadores de conformidad con el principio de justicia universal.

OCTAVA.- La única respuesta adecuada frente a la comisión de este grave crimen ha sido efectuada por la Audiencia Nacional española, que, mediante el principio de jurisdicción universal, ha procesado a un grupo de altos mandos marroquíes por el delito, entre otros, de torturas, pese a que no ha conseguido sentar a los acusados ante los tribunales españoles.

NOVENA.- Para finalizar, y debido a la debilidad de la respuesta de la comunidad internacional y ante la gravedad del delito de torturas cometidas en un territorio ocupado, así como de la impunidad de la que gozan las personas que lo han cometido, *De lege ferenda* se debería articular por la comunidad internacional un mecanismo para que la Corte Penal Internacional pudiese tener competencia universal y poder así someter a un juicio justo e independiente a los acusados de cometer estos crímenes.

El factor D

LEONARDO URRUTIA SEGURA

Por aquel entonces nuestro personaje era diputado del Parlamento catalán. Pero muchos sostenían que además era y sigue siendo un espía de Marruecos. Y que, por si eso fuera poco, también era integrante de una especie de Consejo del Reino de Mohamed VI. O sea que no se trataba de ningún diputado mindundi. Aparentemente.

Por eso lo que nosotros queríamos averiguar era si era cierto lo de que era un espía. Creíamos que eso era perjudicial para los saharauis, pero también para los españoles ligados de alguna forma a su causa. Tanto si fuese un simple y vulgar informador o un chivato. Como si fuese un agente encubierto de los servicios secretos de su país. Pues en un caso o en el otro su función principal seguramente sería, además de espiar para el gobierno de su país de forma especializada, recabar información sobre personas concretas y su relación, actividades u opinión con respecto a la cuestión saharauí, además de propagar información tóxica y desinformadora como principal modo de defender, en todos los foros e instituciones posibles, las tesis del gobierno y el reino de Marruecos en lo que concierne al conflicto del Sahara Occidental.

Nuestra pretensión tenía mucho de absurda, pues buscaba desenmascararlo públicamente, conseguir que fuese él mismo quien reconociese que era un espía y que, tras un interrogatorio periodístico sorpresivo, bien documentado, concienzudo y público, éste dejara perfecta constancia de su mendacidad en palabras e imágenes. Para ello buscábamos tenderle una especie de trampa. Una *emboscada* que suponíamos adecuada.

Y sabíamos, o, mejor dicho, creíamos que funcionaría perfectamente porque era tan simple la planeada manera de *emboscarlo* que no le permitiría escapatoria alguna.

Sin embargo, éramos conscientes de que asistíamos a una convención, a una especie de congreso de partido, al acto de una organización de éstas en

donde suelen destacar, generalmente, los dirigentes y afines como ejemplos claros de personas con factor D, como rasgo distintivo de su personalidad. Y eso podía traernos problemas.

Y es que en esas organizaciones las cúpulas dirigentes y sus aliados más firmes suelen cohesionarse férreamente, constituirse en piña, en sólida camarilla para mejor combatir a sus adversarios y para mejor defenderse no precisamente de la intimidación o peligro de agresión a cualquier integrante de dicha camarilla, sino de cualquier intento de desprestigio, escarnio público o cuestionamiento de la honradez, trayectoria personal, profesional o política que pudiera dañar el buen nombre de cualquiera de sus integrantes. Y esto es común a cualquier grupo humano, defender a cualquiera de sus integrantes, pues una agresión a cualquiera de ellos es una agresión a la totalidad del grupo, a la camarilla, al club, al partido o a lo que sea. Pero la reacción es mucho más contundente cuando el grupo, mayoritariamente, lo forma gente que muy probablemente padece del llamado factor. D.

Un informe de la *BBC News Mundo* de hace apenas diez días titulado «Qué es el factor D que define los “rasgos oscuros” de la personalidad como el egoísmo, el rencor o la psicopatía» dice:

El factor D es la tendencia general a maximizar la propia utilidad individual, sin tener en cuenta, aceptar o provocar de manera malintencionada la falta de utilidad para los demás, acompañada de creencias que sirven como justificaciones.

O dicho de otro modo, el factor D es el hábito de colocar nuestros propios objetivos e intereses antes que los de los demás, **provocándonos en ocasiones placer por el hecho de lastimar a los otros.**

Esta tendencia suele ir acompañada de excusas o justificaciones que sirven para evitarnos sentimientos de culpa o vergüenza.

Según los expertos, su investigación demuestra cómo este factor D está presente en nueve de los rasgos oscuros de personalidad más estudiados:

—Egoísmo: preocupación excesiva sobre la propia ventaja a expensas de la de los demás.

—Maquiavelismo: actitud manipuladora e insensible y la creencia de que los fines justifican los medios.

—Desconexión moral: estilo de procesamiento cognitivo que permite comportarse sin ética sin sentir angustia.

—Narcisismo: excesivo ensimismamiento, un sentido de superioridad y una extrema necesidad de recibir atención de los demás.

—Derecho psicológico: creencia recurrente de que uno es mejor que los demás y merece un mejor trato.

—Psicopatía: falta de empatía y autocontrol, combinada con un comportamiento impulsivo.

—Sadismo: deseo de causar daño mental o físico a otros para el propio placer o para beneficiarse a sí mismo.

—Interés propio: deseo de promover y resaltar el propio estado social y financiero.

—Rencor: disposición para causar daño o destruir a otros, incluso si uno mismo se daña en el proceso.

Bueno, pues si dicen investigadores como Ingo Zettler, profesor de psicología en la Universidad de Copenhague, que el factor D es «la tendencia general a maximizar la propia utilidad individual, sin tener en cuenta, aceptar o provocar de manera malintencionada la falta de utilidad para los demás», su equivalente sería lo que diría aquel: «Yo me muevo tan solo por mi propio beneficio e interés. De modo que las necesidades y los intereses de los demás (de esa gente que no considero mi gente y no me son “puntualmente” útiles) me importan más bien poco, por no decir que me importan un rábano».

Podría decirse también que ese factor D es preponderante en la psicología de las personas que acaparan las cúpulas de los partidos políticos y organizaciones jerarquizadas similares y que podemos detectarlos por su tendencia a escudarse en distorsiones cognitivas que les ayudan a justificar su conducta, generalmente poco edificante, y apaciguar de paso sus probables sentimientos de culpa o vergüenza. Y podríamos decir que ese tipo de gente es, por desgracia, muy numerosa también en los parlamentos y en los plenarios de los ayuntamientos de toda la geografía española, pues suelen compartir esos rasgos de personalidad antes descritos: el egoísmo, la actitud manipuladora, el narcisismo, la psicopatía... Por eso ese tipo de gente, los que se dedican a la política, aunque se llenen la boca afirmando «su natural vocación de servicio público, su desinteresada entrega a los

demás, *sin distinciones de ninguna clase* y su preocupación por las necesidades de la comunidad», lo acostumbrado suele ser que necesiten y busquen (con mayor o menor desespero) el reconocimiento y la atención de la sociedad porque creen que ellos (él y los suyos) son mejores que los otros y, por lo tanto, merecen el mejor tratamiento y la mayor consideración.

Pero lo triste es que entre esos personajes «tan desinteresados y vocacionales» suelen destacarse simples arribistas y oportunistas que lo único que parece interesarles es servir acrítica y dócilmente al sistema y medrar para ocupar un cargo público y así vivir del momio. Tal y como, en su día, consiguió el personaje constituido en nuestro objetivo investigador. Un individuo perfectamente instalado en uno de los muchos pesebres institucionales. De ahí que bastantes de aquellos militantes que nos rodeaban aquel día (en ese acto y lugar en el que teníamos dispuesta «la trampa») no eran sino gente ansiosa por mamar de esa ubre de la que tantos y tantos maman. Y por eso mismo temíamos que arroparan al interfecto, impidiendo así que lo sometiéramos a un duro y posiblemente escandaloso interrogatorio periodístico. Tal era nuestra intención y la utilidad de dicha trampa.

Temíamos la agresividad pandillera que poseen los militantes políticos de nuestro país a la hora de «defenderse de periodistas insidiosos». Y es que todas las formaciones políticas, cuando sus integrantes ven que se presiona (principalmente en una forzada entrevista) a alguno de los suyos, suelen actuar con bastante agresividad, moviéndose en derredor cual marabunta. Y esto ocurre, por desgracia, debido al demasiado mayoritario bajo nivel de todas las militancias políticas españolas.

Por eso y para eso muchas son las personas de escasa cultura o simple educación básica que se dedican a la política. Las cúpulas de los partidos suelen ser apoyadas por masas de gentes de similares capacidades y condición. Y esta característica se reparte casi por igual en todas las fuerzas políticas españolas. De ahí que también fuese el caso de «CpC» —Ciudadanos por el Cambio (Ciutadans pel Canvi)— aquella plataforma nacida para ayudar a Pascual Maragall a ser presidente del gobierno de Cataluña. Una plataforma integrada por una fauna muy variada, muy heterogénea ideológicamente, pero aparentemente unida por un anhelo común, un anhelo que se encontraba más allá del simple apoyo a Maragall para presidente de la Generalitat: la consecución del cargo público. De ahí que, por mucho

tiempo, se tildase a esa plataforma de «Ciudadanos por el Cargo», más que Ciudadanos por el Cambio.

Entre los integrantes de aquella plataforma o asociación política ligada de algún modo al Partido Socialista de Cataluña (ligado a su vez al PSOE) se encontraba un servidor, pero como simple y gris militante de base. Y sin aspiraciones a cargo alguno por la sencilla razón de que, por peculiaridades de mi personalidad, soy un individuo inadecuado para cargo político alguno. Principalmente cargo que conlleve (mejor dicho: que exija) mansedumbre acrítica. Y soy inadecuado para cargo político porque en su día ocupé, en los primeros años de la democracia, la responsabilidad de concejal del pueblo en el que vivo. Y esa experiencia me condujo a pedir la baja del partido en el que militaba por desavenencias profundas con los modos y maneras de su dirección y, en particular, con las formas y maneras de mis compañeros del equipo de gobierno de aquel ayuntamiento del que formaba parte.

Resulta triste comprobar de qué rápida forma la gente se metamorfosea cuando ocupa cualquier parcelita de poder. Cuanto más inculta e ignorante es la persona, más déspota se hace. De modo que la convivencia con personas así acaba por convertirse en agónica experiencia.

Toda aquella época acabó siendo sólo una penosa lección traumática de deprimente recuerdo. Y, de paso, un total y agrio desencuentro conmigo mismo.

Otra cuestión sería decir que aquella experiencia acabó por abocarme, definitivamente y para siempre, del marxismo tradicional al marxismo más extremo y revolucionario: el marxismo del gran Groucho Marx. Aquel que dejase dicho aquello de «Yo nunca pertenecería a un club que admitiera a gente como yo».

A mi juicio, ese principio marxista es una recomendación muy idónea para esas personas que suelen ser excesivamente cuestionadoras del poder y, consecuentemente, un tanto ácratas, tanto en sus ideas como en su comportamiento.

Pero hete aquí que ahora era un adherido más a aquella plataforma política que muchos denominaban «Ciudadanos por el Cargo». ¿Estaba contradiciéndome? ¿Traicionando mis principios? Para nada. Yo no aspiraba a cargo alguno y de ninguna índole. Por aquel entonces, mi simpatía por Maragall y el pensar que desde el interior de esa plataforma podía ayudar

a la causa saharauí, fue lo que me motivó, sobre todo cuando supe que en esa agrupación política militaba un marroquí muy significado y muy contrario a las resoluciones de las Naciones Unidas respecto al problema del Sahara Occidental. Tenía idea de aproximarme personalmente a aquel marroquí que tildaban de agente del gobierno de Marruecos. Intentaría conocer de sus propios labios las razones del odio y el desprecio que sentía (según ciertos medios de comunicación aseguraban) hacia el pueblo saharauí y su causa. Odio y desprecio que al parecer este hombre hacía extensible a todos los que se sentían y se sienten solidarios con esa causa y con los saharauis, especialmente con los saharauis represaliados en la zona ocupada del Sahara Occidental.

Pero lo curioso es que en todas las reuniones de CpC en que participé (que fueron muchas y variadas), en ninguna lo encontré.

Sí, para eso milité en CpC. Por la causa saharauí. Para, por ejemplo, a finales de Noviembre del 2009, persuadir (fue muy fácil hacerlo) a Carme Valls, diputada y presidenta de Ciutadans pel Canvi de que se entrevistara con el tristemente desaparecido Mohamed Abdelaziz, presidente que fue de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y que en aquellos días se encontraba en Barcelona con motivo de la 35ª Conferencia Europea de Coordinación de apoyo al Pueblo Saharaui.

Ni que decir tiene que Carme Valls aceptó encantada la posibilidad de esa entrevista. Entrevista que se realizó y de la cual Carme Valls dio un informe completo en una convención de CpC. Un informe que la gente integrante de aquella convención oyó como quien oye llover. A aquella gente la cuestión saharauí le importaba y le importa un comino. Y lo más triste es que si le preguntas ni siquiera sabe qué responder, ni exactamente qué es eso que llaman problema del Sahara Occidental. Pero, eso sí, todos quieren ser diputados o directores generales de lo que sea.

Recuerdo que cuando nos reunimos con el presidente de la RASD, al ofrecimiento de Carme Valls sobre de qué forma CpC podía contribuir solidariamente a la lucha del pueblo saharauí, Mohamed Abdelaziz contestó:

«En estos momentos la mejor contribución a nuestra causa es dar todo el apoyo posible a Aminatou Haidar. Eso es ahora lo urgente y necesario».

Aminetu, como muchos la conocemos, justo en aquellos días mantenía una heroica huelga de hambre. Una huelga de hambre que comenzó desde que fue detenida y expulsada a España tras aterrizar en Marruecos

a su regreso de un viaje a Nueva York, donde había recibido el premio por su defensa de los derechos humanos entregado por la misma institución —la Train Foundation— que también premiase a la periodista rusa Anna Politkóvskaya, asesinada por defender los derechos humanos en su patria.

Aminetu, ya en España, el sábado 14 de noviembre de 2009 en el aeropuerto de Lanzarote comenzó una huelga de hambre que duró treinta y dos días y que acabó con una victoria política y moral de imborrable recuerdo.

Pero si Aminetu es una mujer admirable, también lo es en otro nivel y en otras dedicaciones, pero con similares objetivos humanistas, Carme Valls Llobet, de la cual, gracias a Internet, cualquiera puede conocer que fue: «...una política y médica catalana, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Dirige el programa “Mujer, Salud y Calidad de Vida” en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) y es autora de una extensa bibliografía de divulgación médica... Entre 1999 y 2006 fue diputada en el Parlamento de Cataluña en la V y VI legislaturas por el Partido de los Socialistas de Cataluña —«Ciutadans pel Canvi»—, Presidenta de la Fundación Cataluña Siglo XXI y presidenta de CpC.

Pues sí, esa es una breve semblanza de Carme Valls. Una importante y reconocida doctora además de una gran persona. Pero, si bien Carme ha sido una dirigente política de primer orden, también es cierto que ella, al igual que muchas otras personas que se dedican o se han dedicado a ese «arte de lo posible» nunca perdió para nada su condición de persona digna, honesta y merecedora de todo reconocimiento por su gran valía personal. Lo cual le convierte en rara avis, pues entre las muchas personas que se dedican a la política en nuestro país ella es una de las pocas que han demostrado mantener una trayectoria y una dedicación verdaderamente íntegras.

Pero ¿por qué digo esto?

Digo esto porque soy simpatizante de la causa del pueblo saharaui. Pero por libre. Es decir, sin amos ni obediencias. Defiendo la causa representada legítimamente por el Frente Polisario desde los veinte años. Los años que tenía cuando España, a espaldas de las Naciones Unidas, vendió el territorio y la población que lo habitaba a Marruecos y a Mauritania. Pero ni obedezco al Frente Polisario, ni a nada. Ni a nadie. Y en los cuarenta

años que llevo en ese compromiso he tratado con muchos políticos de toda ideología y todo partido. ¿Y qué he aprendido de esa larga experiencia, aparte de que en mi país son muy, pero que muy poquitos, los políticos íntegros y bien formados ética e intelectualmente?

Pues he aprendido que a los pobres solo les ayudan de verdad otros pobres. Y que si bien es cierto que la causa del pueblo saharauí goza de un alto y significativo apoyo y solidaridad del pueblo español, no es menos cierto que aquella vil, repugnante, ignominiosa y vergonzosa traición, que en su día las autoridades y altos representantes del Estado español perpetraron con aquellos ciudadanos españoles, habitantes de una de las provincias de aquella España, hoy se sigue perpetrando y perpetuando por todas las fuerzas políticas de este nuestro país. Y digo todas porque ningún partido, ninguna fuerza política, aunque algunas expresen con palabras lo contrario, toman posiciones reales y proactivas en favor de la restitución de los derechos conculcados al pueblo saharauí. Y por eso siguen traicionándolo con su continuo respaldo, por acción o por omisión, al oprobioso régimen marroquí y su constante atropello de la legalidad internacional y su constante violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental.

Es decir, que desde 1975 hasta hoy, 2018, ninguna fuerza política de la península ibérica mantiene ningún atisbo de dignidad, responsabilidad, vergüenza, ni honor, en lo que respecta al problema del Sahara. Un problema que, no olvidemos, fue creado por España y por sus más altas instituciones.

Por eso no merece respeto ninguna de las fuerzas políticas que pululan por España, por su cobardía moral y su incompetencia política a la hora de atender el problema humano que atañe a los saharauíes. Y ya no digamos con todos los demás problemas; todos los que atañen a los españoles. Problemas serios en los que nuestra clase política demuestra cotidianamente su incompetencia. Además de su escasa, nula o débil disposición en la búsqueda de soluciones reales.

O sea, que por esas y otras muchas razones me encontraba allá, junto a Ramón Robert, fungiendo ambos como simples activistas catalanes (es decir, españoles) que luchan protestando pacíficamente junto a muchísimos más españoles contra la ocupación marroquí del Sahara Occidental y a favor de la libertad y el respeto por los derechos humanos y políticos del pueblo saharauí.

Y por ello, junto con mi entrañable compañero, teníamos perfectamente dispuesta aquel día la «trampa» al diputado. Era una *trampa* simple. Consistía en abordar sorpresivamente a esa persona y *dispararle* con breves, directas, pero bien documentadas preguntas sobre su condición y sus actividades como parlamentario y como lo que fuese.

Ramón, armado de una buena cámara de video, y yo, con un micrófono profesional, esto es, correctamente equipados como reporteros, aguardábamos apostados en la única puerta de entrada del recinto que indefectiblemente nuestro objetivo tendría que atravesar. Esperábamos «asaltar sorpresivamente» a aquel diputado catalán-marroquí que muchos consideraban un miserable espía.

Aquel plan fracasó. Acabamos sabiendo que, pese a ser un día señalado e importante para el CpC y, en especial, para sus diputados, el interfecto, advertido de la «celada», prefirió no asomar su nariz por aquel lugar.

Han pasado muchos años desde aquel plan un tanto ridículo, pero bien-intencionado. Hoy, esa persona, «de cuyo nombre no quiero acordarme», ya no es diputado del parlamento catalán: hoy es flamante diputado del parlamento español.

Y muchos dicen que también sigue siendo un espía de Marruecos.

Un relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado

CARLOS VILLÁN DURÁN Y CARMELO FALEH PÉREZ

SUMARIO: Introducción - 1. Derecho de libre determinación - 2. Derechos económicos, sociales y culturales - 3. Derechos civiles y políticos - 4. El relator especial del Consejo de Derechos Humanos - Conclusiones

Introducción

La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental permanece profundamente condicionada desde hace cuarenta y tres años por su situación de territorio no autónomo, sometido a dominación colonial por la potencia ocupante (Marruecos). El Derecho internacional es determinante al afirmar que el pueblo saharaui tiene el derecho a la libre determinación, el cual se deberá ejercer mediante referéndum libre y supervisado por las Naciones Unidas, en el que se pueda expresar sobre la forma de gobierno que desee otorgarse (independencia, asociación o integración en otro Estado). Ya en 1975 la Corte Internacional de Justicia había despejado toda duda en su dictamen consultivo, rechazando las pretensiones anexionistas de Marruecos¹.

La realización efectiva del referéndum de libre determinación del pueblo saharaui choca con la oposición de Marruecos que, a lo largo de estos

1 *Sahara Occidental, avis consultatif*, C.I.J. Recueil 1975, p. 12. Sobre el respaldo que el dictamen de la Corte supuso para la libre determinación del pueblo saharaui, *vid.* entre otros NAVARRO BATISTA, Nicolás, «El conflicto del Sahara Occidental: la libre determinación en retirada», en Villán Durán, C. y Faleh Pérez, C. (eds.), *Paz, migraciones y libre determinación de los pueblos*. Oviedo, AEDIDH, 2012, pp. 88-94.

decenios, ha desarrollado una política de integración *de facto* de gran parte del territorio del Sahara Occidental (el delimitado por la *berma* o muro defensivo que separa militarmente el territorio útil, donde se encuentran las mayores riquezas naturales de la región, de las zonas más desérticas (el llamado «Sahara libre»), que llega hasta las fronteras con Argelia (en cuyo territorio —Tinduf— se sitúan los campamentos de los refugiados saharauis) y Mauritania.

Después de un largo conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario (1975-1991), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció una operación de mantenimiento de la paz en la región («Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental», MINURSO), cuyo mandato acaba de ser renovado por seis meses (hasta el 30 de abril de 2019) en la resolución 2440 del Consejo de Seguridad, de 31 de octubre de 2018, para supervisar la efectividad del alto el fuego suscrito en 1991. Adicionalmente, la MINURSO debe favorecer las condiciones para un retorno seguro de los refugiados saharauis y establecer el censo electoral de la población saharauí que deberá ser consultada en el referéndum de libre determinación.

Desgraciadamente, Marruecos no ha honrado sus compromisos internacionales. Al contrario, es evidente su política de integración del Sahara Occidental como un departamento más de su territorio nacional. Primero, porque considera el territorio en disputa como sus «provincias del Sur», en términos políticos y jurídicos. Segundo, porque ha transformado drásticamente la composición demográfica del Sahara ocupado instalando en ese territorio a miles de colonos marroquíes, hasta el punto de que ya constituyen la mayoría de la población. Tercero, imponiendo tal integración *de facto* por la fuerza de las armas y la pura represión policial y militar de toda manifestación saharauí a favor de su derecho a la libre determinación, lo que es evidente no solo en el interior del Sahara ocupado, sino en todo el territorio nacional marroquí y trasciende a su política internacional.

En 2007, Marruecos se limitó a presentar una propuesta de autonomía limitada para la región en disputa, lo que fue rechazado por el Frente Polisario en nombre de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD²), insistiendo en el derecho del pueblo saharauí a ejercer su derecho de libre determinación.

2 Reconocida por ochenta y cinco estados, es estado miembro de la Unión Africana.

El impacto negativo de los cuarenta y tres años de ocupación marroquí continuada del Sahara Occidental en el disfrute de los derechos humanos del pueblo saharauí se ha agravado con el transcurso del tiempo, pues las violaciones a los derechos humanos son cada vez más graves y frecuentes, alentadas por la política de impunidad absoluta de los agentes de la potencia ocupante.

Desde hace años el Frente Polisario intenta infructuosamente que el Consejo de Seguridad amplíe la competencia de la MINURSO a fin de que incorpore una función de supervisión de la situación de los derechos humanos en el Sahara ocupado, lo que podría frenar la creciente impunidad de los agentes marroquíes por violación a los derechos humanos. Como era de esperar, Marruecos se ha opuesto a esta pretensión con éxito, recurriendo al amparo que le proporcionan al menos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos y Francia) y la anuencia tácita de los demás. España, cuando ha sido miembro no permanente, se alineó con las tesis marroquíes, a pesar de su condición de potencia administradora del Sahara Occidental y de la solidaridad mantenida por el pueblo español con el saharauí a lo largo de los años de ocupación.

En el presente trabajo hacemos un balance actualizado de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado, siguiendo las conclusiones y recomendaciones formuladas por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Concluimos que estamos ante una *situación* de violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos en el territorio saharauí ocupado por Marruecos, sostenida durante 43 años, ante la que las Naciones Unidas no pueden permanecer impasibles por más tiempo. En efecto, entendemos que es urgente que el Consejo de Derechos Humanos establezca el mandato de un relator especial para esa zona geográfica del mundo.

I. Derecho de libre determinación

El derecho de todos los pueblos a su libre determinación es un principio estructural de derecho internacional, generalmente reconocido como norma de *ius cogens* o imperativa en la Carta de las Naciones Unidas (Art. 1.2) y en la práctica de los Estados y de la Organización, que lo ha dotado

de contenidos precisos a través de diferentes resoluciones de desarrollo aprobadas por la Asamblea General, en particular, las resoluciones 1514 (XV)³, 1541(XV)⁴ y 2625 (XXV)⁵. Como tal, produce efectos *erga omnes* que alcanzan a todos los Estados miembros de la comunidad internacional, los que asumen la obligación de respetar el ejercicio de ese derecho en todo momento.

Por esta razón, el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación es objeto de atención preferente en todos los órganos políticos de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.

En el ámbito del Consejo de Seguridad, se estableció en 1991 la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) como operación de mantenimiento de la paz. Desde entonces, el secretario general de las Naciones Unidas informa regularmente al Consejo de Seguridad sobre las actividades realizadas por la MINURSO, así como las propias a través de su Enviado Personal en el ejercicio de la mediación entre las partes (Marruecos y Frente Polisario) para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El secretario general informó al Consejo de Seguridad el 5 de octubre de 2018 sobre la situación relativa al Sahara Occidental, las actividades realizadas por la MINURSO y la situación humanitaria de los saharauis refugiados en Tinduf. En materia de derechos humanos, la OACNUDH recibió denuncias de que, durante las protestas relacionadas con el derecho a la libre determinación, la explotación de la riqueza y los

3 Aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960, la Res. 1514 contiene, como es sabido, la *Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales*.

4 La Res. 1541 fue aprobada tan solo un día después de la anterior y contiene los llamados *Principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas*. Precisa el alcance de la Res. 1514 y enuncia más particularmente las opciones para que los territorios coloniales alcancen la plenitud del gobierno propio.

5 Aprobada el 24 de octubre de 1970, su Anexo incorpora la conocida *Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas*. Entre los principios que codifica y a los que da desarrollo progresivo figura el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

recursos naturales y los derechos de los detenidos, los manifestantes habían sido dispersados por la fuerza. También se denunciaron violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los saharauis, incluidos los malos tratos, las detenciones arbitrarias y la tortura y que no existía rendición de cuentas sobre tales denuncias. Tampoco se había establecido el mecanismo nacional de prevención de la tortura (MNPT), previsto en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Aunque Marruecos se adhirió a este Protocolo el 24 de noviembre de 2014, cuatro años después continúa sin contar con un MNPT, incumpliendo así el art. 17 del citado Protocolo, que obliga a los Estados a establecer un MNPT a más tardar un año después de su adhesión.

El secretario general también informa que continuaron las operaciones de vigilancia excesiva dirigidas a los defensores de los derechos humanos y periodistas, en particular los que se encuentran en el Sahara Occidental. Las autoridades marroquíes siguen restringiendo el acceso al Sahara Occidental a los visitantes extranjeros, incluidos periodistas y abogados de Marruecos⁶.

En sus observaciones finales de julio de 2018, al término del examen del cuarto informe periódico de Argelia, el Comité de Derechos Humanos, al examinar el cumplimiento por Argelia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por el «traspaso *de facto* de las competencias jurisdiccionales y de otra índole al Frente Polisario» en los campamentos de Tinduf y por los informes de que, debido a esa situación, las víctimas de violaciones del Pacto en los campamentos no dispusieran de un recurso efectivo ante los tribunales del Estado parte⁷.

En conclusión, el secretario general recomendó al Consejo de Seguridad prorrogar el mandato de la MINURSO por un año más, hasta el 31 de octubre de 2019, para dar a su Enviado Personal Horst Koehler (expresidente de Alemania) el espacio y el tiempo necesarios para que sus esfuer-

6 NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD, *La situación relativa al Sahara Occidental. Informe del Secretario General*, doc. S/2018/889, de 3 de octubre de 2018, párrs. 64-66.

7 Aprobadas por el Comité el 20 de julio de 2018. NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argelia*, doc. CCPR/C/DZA/CO/4, párr. 9.

zos puedan contribuir a sentar las condiciones necesarias para el avance del proceso político⁸.

También instó a las partes a respetar y promover los derechos humanos, entre otras cosas abordando los problemas pendientes en materia de derechos humanos e intensificando su cooperación con el ACNUDH y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y a que faciliten las misiones de seguimiento.

Por último, el secretario general afirmó que es necesario mantener una vigilancia independiente, imparcial, amplia y sostenida de la situación de los derechos humanos a fin de garantizar la protección de todos los habitantes del Sahara Occidental⁹.

Por su parte, el Consejo de Seguridad, a propuesta de Estados Unidos, decidió prorrogar el mandato de la MINURSO, pero solamente por seis meses, hasta el 30 de abril de 2019¹⁰, reafirmando su compromiso de ayudar a las partes (Marruecos y Frente Polisario) a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental¹¹.

Además, destacó la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de Tinduf, alentando a las partes a que colaboren con la comunidad internacional para formular y aplicar medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos, teniendo presentes las obligaciones que les incumben al respecto en virtud del derecho internacional¹². En particular, alentó a las partes a que prosigan sus esfuerzos respectivos por mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf, entre ellos la libertad de expresión y la de asociación¹³.

8 Doc. S/2018/889, cit., párr. 86.

9 *Ibidem*, párr. 89.

10 Párr. dispositivo 1 de la resolución 2444 (2018) del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2018 por 12 votos a favor y tres abstenciones (Bolivia, Etiopía y Federación de Rusia).

11 Párr. preambular 6 de la res. 2440.

12 *Ibidem*, párr. preambular 18.

13 *Ibidem*, párr. preambular 19.

El Consejo de Seguridad también acogió la interacción que mantiene Marruecos con los *procedimientos especiales* del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas¹⁴. Y alentó a aumentar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); en particular, mediante la facilitación de visitas a la región¹⁵.

Igualmente, el Consejo de Seguridad observó las dificultades a que se enfrentan los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia humanitaria externa, agravada por la insuficiencia de la financiación para quienes viven en los campamentos de refugiados de Tinduf y los riesgos asociados con la reducción de la asistencia alimentaria¹⁶.

También expresó su pleno apoyo a la intención del secretario general y de su enviado personal Köhler de iniciar un nuevo proceso de negociaciones, cuya primera etapa cristalizará en una mesa redonda inicial que se celebrará en Ginebra los días 5 y 6 de diciembre de 2018, a la que asistirán Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania¹⁷ (por primera vez desde 2012).

Además, exhortó a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del secretario general, sin condiciones y de buena fe, con miras a lograr una solución política justa, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas¹⁸.

Por último, el Consejo de Seguridad instó a los Estados a financiar los programas de alimentos en Tinduf con miras a garantizar que se satisfagan las necesidades humanitarias de los refugiados y evitar la reducción de las raciones alimentarias¹⁹.

Desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los pueblos a la libre determinación está consagrado

14 *Ibidem id.*, párr. preambular 20.

15 *Ibidem id.*, párr. preambular 21.

16 *Ibidem id.*, párr. preambular 22.

17 *Ibidem*, párr. dispositivo 3.

18 *Ibidem id.*, párr. dispositivo 4.

19 *Ibidem id.*, párr. dispositivo 15.

en lugar preferente en el Art. 1 común a los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ambos suscritos por Marruecos. En virtud de este derecho, todos los pueblos «establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural» (Art. 1.1)²⁰.

Ese lugar preferente cobra sentido porque el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación «es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos»²¹.

En sus observaciones finales al término del examen del sexto informe periódico de Marruecos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante: PIDCP), el Comité de Derechos Humanos (en adelante: Comité DH) se siguió preocupando por la ausencia de progresos en la cuestión de la aplicación de la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. En consecuencia, recomendó a Marruecos «a) proseguir e intensificar la labor realizada como parte del proceso de negociación sobre el estatuto del Sahara Occidental, que se lleva a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, a fin de que el pueblo del Sahara Occidental pueda ejercer el derecho a la libre determinación; b) reforzar el proceso de consulta con el pueblo del Sahara Occidental para obtener su consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo y operaciones extractivas; y c) tomar las medidas necesarias para que el pueblo del Sahara Occidental pueda circular libremente y en condiciones de seguridad a ambos lados de la berma y continuar el programa de desminado a lo largo de esta e indemnizar a las víctimas»²².

20 Ambos Pactos reconocen también el derecho de todos los pueblos a «disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional» (Art. 1.2).

21 Así lo afirmó el Comité de Derechos Humanos en su observación general n° 12 [Derecho de libre determinación (artículo 1)], aprobada en su 21.º periodo de sesiones (1984), párr. 1.

22 Aprobadas por el Comité DH el 2 de noviembre de 2016. NACIONES UNIDAS, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Marruecos*, doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1º de diciembre de 2016, párr. 10.

Por lo que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante: PIDESC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante: Comité DESC) reiteró en sus observaciones finales al cuarto informe periódico de Marruecos²³, su preocupación por el hecho de que hasta ahora no haya ninguna solución respecto del derecho a la libre determinación del territorio no autónomo del Sahara Occidental. Además, preocupa al Comité DESC la situación precaria, a su regreso, de los refugiados saharauis desplazados a resultas del conflicto del Sahara Occidental, en particular las mujeres y los niños. También le preocupa que no siempre se haya permitido participar a los saharauis en la utilización y la explotación de los recursos naturales.

En consecuencia, el Comité DESC recomendó a Marruecos «encontrar una solución a la cuestión del derecho a la libre determinación del Sahara Occidental, conforme a lo previsto en el artículo 1 del PIDESC, que reconoce el derecho de los pueblos a establecer libremente su condición política y proveer asimismo su desarrollo económico, social y cultural». También recordó que los Estados «están obligados a promover el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos en los territorios no autónomos, y respetar este derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas».

Igualmente, recomendó a Marruecos que «adopte medidas para respetar los derechos de los refugiados saharauis a su regreso» y que garantice «el respeto del principio del consentimiento previo, libre e informado de los saharauis para que puedan ejercer su derecho a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con el artículo 25» del PIDESC²⁴.

Por su parte, la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas consideró en 2002 que, de conformidad con el Art. 73 de la Carta NU y con los principios jurídicos establecidos en la práctica de los Estados y las Naciones

23 Aprobadas por el Comité DESC el 8 de octubre de 2015. NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, *Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Marruecos*, doc. E/C.12/MAR/CO/4, de 22 de octubre de 2015, 11 p.

24 *Ibidem*, párr. 6.

Unidas, «las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos»²⁵.

Asimismo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) —al resolver un recurso de anulación de la Decisión 2012/497/UE del Consejo del 08.03.2012 relativa a un Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos en materia de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca— también se pronunció a favor del estatuto del Sahara Occidental como territorio sometido a dominación colonial y reconoció al Frente Polisario como su legítimo representante.

El fallo cobra enorme importancia para las legítimas reivindicaciones del pueblo saharauí. El TGUE admite que las instituciones de la Unión Europea disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a si procede, o no, celebrar un acuerdo con un Estado tercero aplicable a un territorio en disputa como es el Sahara Occidental. Sin embargo, previene sobre que «la protección de los derechos fundamentales de la población de tal territorio reviste una importancia particular y constituye (...) una cuestión que el Consejo debe examinar antes de la aprobación de semejante acuerdo». De manera que «si la Unión permite la exportación a sus Estados miembros de productos procedentes de ese otro país (...) fabricados u obtenidos en condiciones que no respeten los derechos fundamentales de la población del territorio del que provienen, puede fomentar indirectamente tales violaciones o beneficiarse de ellas», lo que es más relevante aún para «el caso de un territorio, como el Sahara Occidental, (...) administrado en la práctica por un Estado tercero (...), a la vez que no está incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas de dicho Estado tercero» que, por lo demás, «no tiene ningún mandato, ya sea concedido por la ONU o por cualquier otra instancia internacional para la administración

25 Opinión jurídica de 29 de enero de 2002, formulada por Hans Corel, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos. NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD, *Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico*, doc. S/2002/161, de 12 de febrero de 2002, p. 7, párr. 25.

de este territorio y está acreditado que no transmite a la ONU información relativa a dicho territorio prevista en el artículo 73, letra e), de la Carta de las Naciones Unidas».

Finalmente, entre los fundamentos para anular la Decisión antes citada, el Consejo de la UE debe tomar nota a futuro de la responsabilidad que le incumbe, en términos de Derecho internacional, y que le dicta el TGUE al decir que:

(...) habida cuenta (...) del hecho de que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental no es reconocida ni por la Unión y sus Estados miembros ni, más en general, por la ONU, así como de la falta de mandato internacional que pueda justificar la presencia marroquí en dicho territorio, el Consejo, en el marco del examen de todos los elementos pertinentes del presente asunto con vistas al ejercicio de su amplia facultad de apreciación referente a la celebración o no de un acuerdo con (...) Marruecos que pudiera aplicarse también al Sahara Occidental, debía asegurarse directamente de que no existieran indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sahara Occidental bajo control marroquí que pudiera realizarse en detrimento de sus habitantes y menoscabar sus derechos fundamentales. No podía limitarse a considerar que le corresponde al Reino de Marruecos asegurarse de que no se produzca una explotación de esa naturaleza²⁶.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado más recientemente y con carácter prejudicial sobre la validez del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Rei-

26 Apartados 227, 231 a 233 y 241 de la Sentencia de la Sala octava del TGUE de 10 de diciembre de 2015 (Asunto T-512/12, *Frente Polisario contra Consejo de la Unión Europea*). Sobre este fallo del TGUE, *vid.* SOROETA LICERAS, Juan, «La sentencia de 10 de diciembre de 2015 del Tribunal General de la Unión Europea (T-512/12)», *Revista General de Derecho Europeo*, 38, enero de 2016. Del mismo autor, «El derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y/u ocupación extranjera a vivir en seguridad y a su libre determinación», *in* FALEH PÉREZ (C.) & VILLÁN DURÁN (C.) (directores), *El derecho humano a la paz y la (in)seguridad humana. Contribuciones atlánticas*. Lueca, AEDIDH, 2017, pp. 59-76. Y «La jurisprudencia del TJUE en relación con la legalidad de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental o el dogma de la inmaculada legalidad de la acción exterior de la Unión Europea y sus consecuencias», *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 46, octubre de 2018.

no de Marruecos, aprobado y aplicado en virtud de dos Reglamentos y una Decisión del Consejo de la UE (de 2006 y 2013). Lo ha hecho en el marco de litigios planteados entre la *Western Sahara Campaign UK* y autoridades del Reino Unido (la Administración Fiscal y Aduanera, por una parte, y el Ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, por la otra). Este último fallo, de 27 de febrero de 2018, no tiene tampoco una importancia menor para el pueblo saharauí. Entre otros extremos, la justicia británica pretendía conocer, al plantear las cuestiones prejudiciales, si el hecho de que el Acuerdo de Colaboración y el Protocolo de 2013 permitieran la explotación de los recursos procedentes de las aguas adyacentes al territorio saharauí, comportaba la ineficacia del Reglamento n.º 764/2006, de la Decisión 2013/785 y del Reglamento n.º 1270/2013.

La Gran Sala del TJUE descalificó las pretensiones de Marruecos al afirmar que «incluir el territorio del Sahara Occidental en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación conculcaría determinadas normas de Derecho internacional general que son de aplicación a las relaciones de la Unión con el Reino de Marruecos, como son el principio de libre determinación —que se reitera en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas— y el principio de efecto relativo de los tratados».

Además, interpretando el art. 11 del Acuerdo de Colaboración —que dispone su aplicabilidad «en el territorio de Marruecos y en las aguas bajo jurisdicción marroquí»— la Gran Sala señala que: a) «el territorio del Sahara Occidental no está comprendido en el concepto de ‘territorio de Marruecos’»; b) «las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí que es objeto (...) del Acuerdo de Colaboración»; y c) que en lo tocante a la expresión «aguas bajo soberanía del Reino de Marruecos» que aparece en el art. 2.a) del Acuerdo cuestionado, «la UE no ha de ser partícipe de la intención que pudiera tener el Reino de Marruecos de subsumir bajo esa denominación las aguas en cuestión en ese mismo ámbito de aplicación». Estas conclusiones no se desvirtúan porque el Protocolo de 2013 utilice la expresión «zona de pesca marroquí», que «no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental»²⁷.

27 Apartados 63, 64, 69, 71, 79 de la Sentencia del TJ en el asunto C-266/16, relativo

Cabe, pues, esperar que en adelante la UE y, en particular, el Consejo de la UE, respeten con todo su rigor las normas imperativas del DI, entre las que destaca el principio fundamental de libre determinación de los pueblos y sus corolarios, que forman parte del *ius cogens* internacional y protegen el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación.

2. Derechos económicos, sociales y culturales

En 2016 nos ocupamos con detalle de la aplicación del PIDESC por Marruecos y las recomendaciones que el Comité DESC le dirigió al término del examen del cuarto informe periódico²⁸. En esta ocasión nos limitaremos a actualizar los aspectos más significativos.

Berma

El Comité DESC mostró preocupación por el hecho de que la berma, fortificada con minas antipersonales, construida por Marruecos entre la zona del territorio del Sahara Occidental bajo su control y el resto del territorio, impida a los saharauis disfrutar plenamente de los derechos que los asisten en virtud del PIDESC.

Por lo que el Comité DESC recomendó a Marruecos «que adopte medidas adecuadas para que los saharauis puedan acceder a sus territorios y recursos naturales y reunirse con sus familias»; igualmente, «que dé celeridad a su programa de desminado de la berma»; y que, en su próximo informe periódico, «facilite información detallada sobre el disfrute por los saharauis de todos los derechos consagrados» en el PIDESC²⁹.

a la petición de Decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Queen's Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo), Reino Unido], recibida por el TJ el 13 de mayo de 2016.

28 Vid. FALEH PÉREZ (C.) & VILLÁN DURÁN (C.): «La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado», in VVAA, *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia*. Zaragoza, Pregunta Ediciones, 2016, 366 p., at 147-234, especialmente 153-169. Disponible en http://observatorioaragonessahara.org/docs/libros/Sahara_Occidental_Cuarenta_a_construyendo_resistencia.pdf.

29 NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, *Observa-*

Discriminación

El Comité DESC también mostró preocupación por «la falta de una ley completa contra la discriminación que prohíba todas las formas de discriminación en el disfrute de los derechos enunciados» en el PIDESC; y por «las disparidades entre las zonas rurales y las zonas urbanas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales que afectan de manera más significativa a las personas y los grupos más marginados y vulnerables».

Por tanto, el Comité DESC recomendó a Marruecos que «apruebe y aplique una ley completa contra la discriminación, que prohíba de manera general toda forma de discriminación, directa e indirecta, y que disponga la aplicación de medidas especiales de carácter temporal para los grupos desfavorecidos o marginados»; que «adopte todas las medidas necesarias para corregir las disparidades regionales que impiden que toda la población disfrute en igualdad de condiciones de los derechos económicos, sociales y culturales»; y que garantice a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como los saharauis, que «puedan disfrutar de los derechos reconocidos en el Pacto, en particular el acceso al empleo, los servicios sociales, la atención de la salud y la educación»³⁰.

Igualdad entre el hombre y la mujer y prácticas nocivas contra la mujer

El Comité DH celebró en 2016 el reconocimiento del principio de igualdad en la Constitución marroquí de 2011, pero sigue preocupado por: a) la subsistencia de disposiciones legislativas que discriminan a la mujer, en particular con respecto al régimen matrimonial (dado que la legislación sigue permitiendo la poligamia), al divorcio, a la custodia de los hijos y a la tutela legal, a la sucesión y a la transmisión de la nacionalidad a un cónyuge extranjero; b) el elevado número de matrimonios polígamos; y c) el aumento de los matrimonios precoces (arts. 2, 3, 23, 24 y 26 PIDCP).

Por tanto, el Comité DH recomendó a Marruecos: a) derogar o modificar todas las disposiciones que discriminan a la mujer a fin de dar ple-

ciones finales sobre el cuarto informe periódico de Marruecos, doc. E/C.12/MAR/CO/4, cit., párr. 8.

³⁰ *Ibidem*, párr. 14.

no efecto al principio de igualdad consagrado en la Constitución; b) adoptar las medidas adecuadas para reducir la incidencia de la poligamia con miras a lograr su desaparición; y c) revisar las disposiciones legales que permiten hacer excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio³¹.

Discriminación y violencia por motivo de orientación sexual y de identidad de género

El Comité DH expresó en 2016 su preocupación por la tipificación como delito de la homosexualidad, sancionada con una pena de cárcel que puede alcanzar los tres años, y por las detenciones efectuadas en ese contexto. También expresó preocupación por los casos de denuncias de incitación al odio, discriminación y violencia contra personas por causa de su orientación sexual o su identidad de género (arts. 2, 9 y 26 PIDCP).

En consecuencia, el Comité DH recomendó a Marruecos: a) derogar el artículo 489 del Código Penal a fin de que la homosexualidad y las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo dejen de estar tipificadas como delito; b) poner en libertad a todas las personas que estén detenidas por el mero hecho de haber mantenido relaciones sexuales libre y mutuamente consentidas; y c) poner fin a la estigmatización social de la homosexualidad y a la incitación al odio, la discriminación y la violencia contra personas por causa de su orientación sexual o identidad de género, real o percibida³².

Pobreza

El Comité DESC constató que la pobreza sigue afectando particularmente a las mujeres, los niños, los amazigh, los saharauis, las personas de edad, las personas con discapacidad y las personas que viven en las zonas rurales. Tampoco hay una repartición adecuada ni una distribución equitativa de los recursos.

31 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párrs. 13-14.

32 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párrs. 11-12.

Por tanto, señaló que Marruecos debe aplicar «una estrategia de reducción de la pobreza basada en los derechos humanos, encaminada específicamente a las necesidades de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, asignando recursos financieros suficientes y demás recursos para su aplicación y velando por la repartición equitativa de esos recursos entre las personas afectadas por la pobreza»³³.

Derechos culturales

El Comité DESC observa el reconocimiento constitucional del tamazigh como idioma oficial, pero lamenta que aún no se haya aprobado el proyecto de ley orgánica para dar efecto a ese reconocimiento ni se enseñe el idioma tamazigh en todos los niveles educativos. También es insuficiente la promoción del idioma y la cultura saharauis hasaníes.

Se recomienda que Marruecos apruebe cuanto antes «el proyecto de ley orgánica de reconocimiento del idioma tamazigh como uno de los idiomas oficiales del Estado y que redoble sus esfuerzos por ofrecer enseñanza primaria, secundaria y universitaria en tamazigh»; «garantizar que los amazigh y los saharauis disfruten plenamente y sin trabas de su derecho a participar en la vida cultural»; «proteger la diversidad cultural y permitir a los amazigh y los saharauis preservar, promover, expresar y difundir su identidad, su historia, su cultura, su idioma, sus tradiciones y sus costumbres»; y «el acceso de todos a la cultura y la ciencia, además del acceso a Internet, en particular entre las personas con discapacidad y los grupos más desfavorecidos de la población»³⁴.

En términos similares, el Comité DH celebró en 2016 el reconocimiento oficial del idioma tamazigh en la Constitución marroquí, pero lamentó que no se haya aprobado todavía un proyecto de ley orgánica para la aplicación de este reconocimiento. También le preocupan las dificultades que tienen los amazigh para recibir enseñanza en su idioma, utilizar su idioma en los procedimientos judiciales y administrativos o registrar nombres propios amazigh (arts. 2, 26 y 27 PIDCP).

33 *Ibidem*, nota 29, párr. 42.

34 Doc. E/C.12/MAR/CO/4, cit., párr. 50.

Por lo que Marruecos debe acelerar sus esfuerzos con miras a adoptar en breve una ley orgánica sobre el idioma tamazigh a fin de promover el acceso de los amazigh a la enseñanza en su idioma y permitir la utilización del idioma tamazigh en los procedimientos judiciales y administrativos, así como el registro de nombres propios amazigh³⁵.

3. Derechos civiles y políticos

Violencia contra la mujer

El Comité DH celebró la derogación en 2014 del párrafo 2 del artículo 475 del Código Penal que permitía abandonar las acusaciones contra el autor de la violación de una menor si este contraía matrimonio con la víctima. Sin embargo, el Comité DH sigue estando preocupado por: a) la prevalencia de la violencia contra la mujer; b) el bajo porcentaje de denuncias y enjuiciamientos de autores de actos de violencia, debido, sobre todo, a la falta de medidas de protección y de estructuras de acogida y al hecho de que las víctimas que denuncian una violación corren el riesgo de ser enjuiciadas por la tipificación como delito de las relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas entre adultos; c) el alcance limitado de la disposición penal que tipifica como delito el acoso sexual; y d) el hecho de que las reformas legislativas que se están efectuando mantengan ciertas disposiciones discriminatorias, como la previsión de circunstancias atenuantes en casos de «delitos de honor» (arts. 3, 6, 7 y 17 del PIDCP).

En consecuencia, el Comité DH recomendó en 2016 a Marruecos: a) enmendar rápidamente su legislación nacional para garantizar una protección adecuada de las mujeres contra la violencia y el acoso sexual; b) facilitar la presentación de denuncias por violencia, asegurándose de que los casos de violencia contra la mujer sean investigados a fondo, de que los autores sean enjuiciados y condenados y de que las víctimas tengan acceso a recursos útiles y no sean enjuiciadas por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales; y c) garantizar la atención jurídica, médica y psicológica a las víctimas de violencia doméstica.

35 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1º de diciembre de 2016, cit, párrs. 49-50.

ca y sexual, y mejorar los servicios de las estructuras de acogida y los mecanismos de atención a las víctimas³⁶.

Lucha contra el terrorismo

El Comité DH sigue preocupado en 2016 por el carácter amplio e impreciso de los actos constitutivos de terrorismo previstos en el Código Penal y por la introducción, en 2015, de nuevas infracciones que adolecen de imprecisión. Le preocupan las informaciones según las cuales estos cargos se hicieron valer indebidamente contra periodistas que cumplían su deber de informar y el hecho de que la imprecisión, en lo relativo a las infracciones, tenga un efecto disuasorio respecto del ejercicio de otros derechos contemplados en el Pacto, como la libertad de expresión. Al Comité DH le preocupa también el período excesivamente largo de detención policial —doce días, sin posibilidad de consultar a un abogado hasta después de transcurridos seis días— en las infracciones vinculadas al terrorismo (arts. 9, 14 y 19 PIDCP).

Por tanto, Marruecos debe revisar las disposiciones del Código Penal relativas al terrorismo, definir las infracciones vinculadas al terrorismo en función de su objetivo y definir también la naturaleza de estos actos con precisión suficiente, procurando que ese instrumento legislativo no imponga restricciones injustificadas al ejercicio de los derechos consagrados en el Pacto. Asimismo, Marruecos debe reducir la duración inicial de la detención policial a un máximo de 48 horas, también en los casos relacionados con el terrorismo, y permitir el acceso a un abogado desde el comienzo de la detención³⁷.

Pena de muerte

El Comité DH acogió en 2016 con satisfacción la moratoria *de facto* de las ejecuciones desde 1993, la reducción en 2014 del número de delitos castigados con la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, así como la reducción prevista en el proyecto de Código Penal. No obstante, lamenta

36 *Ibidem*, párrs. 15-16.

37 *Ibidem*, párrs. 17-18.

que dicho proyecto contemple tres categorías nuevas de delitos castigados con esa pena (art. 6 PIDCP).

Por tanto, Marruecos debe proseguir el debate nacional en curso sobre la abolición de la pena de muerte y considerar la posibilidad de formalizar la moratoria *de facto* en vigor. Debe, además, considerar la posibilidad de adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte³⁸.

Interrupciones voluntarias del embarazo

El Comité DH constató en 2016 el número inquietante de abortos clandestinos en Marruecos, que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres, y sigue preocupado por las condiciones extremadamente restrictivas en que una mujer puede acceder legalmente a una interrupción voluntaria de su embarazo en Marruecos, así como por las severas sanciones penales impuestas en los casos de aborto clandestino. El Comité DH observa que el proyecto de revisión del Código Penal prevé un mayor número de excepciones a la prohibición general del aborto, pero no deja de preocuparle la introducción de condiciones excesivas, como la presentación de un atestado de incoación de procedimiento judicial en caso de violación o incesto (arts. 3, 6, 7 y 17 PIDCP).

Por tanto, Marruecos debe acelerar la revisión de su legislación para introducir otras excepciones a la prohibición de abortar, en particular cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto o cuando el feto presenta malformaciones mortales, y procurar que las mujeres no se vean obligadas, de resultas de las restricciones en la legislación, a recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida y su salud. Marruecos debe asimismo procurar garantizar un acceso efectivo al aborto legal, en particular suprimiendo las estrictas condiciones previstas en el proyecto de ley. También debe promover y garantizar el acceso a métodos contraceptivos y a educación y servicios de salud sexual y reproductiva³⁹.

38 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párrs. 19-20.

39 *Ibidem*, párrs. 21-22.

Tortura y malos tratos

En nuestro estudio de 2016 dimos detallada cuenta de la práctica desarrollada por el Comité CT y otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos sobre Marruecos⁴⁰. En esta oportunidad ofrecemos una actualización de las informaciones recogidas en materia de tortura y malos tratos.

El Comité CT mostró preocupación por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de policía, los funcionarios de prisiones y, más particularmente, los agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, reconocidos actualmente como agentes de la policía judicial, cuando se priva a las personas de las salvaguardias jurídicas fundamentales, como el derecho de acceso a un abogado, en particular contra las personas que, según se sospecha, pertenecen a redes terroristas o son partidarias de la independencia del Sahara Occidental o durante los interrogatorios con el objeto de extraer confesiones a los sospechosos de actos de terrorismo.

En consecuencia, Marruecos debe «investigar los actos de tortura y enjuiciar y sancionar a sus autores». También debe velar por que «los miembros de las fuerzas del orden no utilicen la tortura, en particular reafirmando claramente la prohibición absoluta de la tortura y condenando públicamente la práctica de la tortura, en especial por la policía, por los funcionarios de prisiones y por los miembros de la Dirección de Vigilancia del Territorio, y haciendo saber claramente que toda persona que cometa tales actos, que sea cómplice de ellos o que participe en ellos, será considerada personalmente responsable ante la ley, será objeto de enjuiciamiento penal y será sancionada con las penas pertinentes»⁴¹.

En su informe de visita a Marruecos de 2012, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura constató que «persiste la práctica de los tratos crueles en las causas penales ordi-

40 Vid. FALEH PÉREZ (C.) & VILLÁN DURÁN (C.): «La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado», in VVAA, *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia*. Zaragoza, Pregunta Ediciones, 2016, cit., at 170-200.

41 NACIONES UNIDAS, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención de Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Marruecos*, doc. CAT/C/MAR/CO/4, cit., párr. 10.

narias y que, cuando se producen acontecimientos con repercusiones importantes, como actos que se perciben como una amenaza para la seguridad nacional, acciones terroristas o grandes manifestaciones, aumenta paralelamente el número de actos de tortura y malos tratos durante el proceso de detención e ingreso en prisión. Aunque parece que los malos tratos a detenidos se infligen básicamente en el período inicial de la detención, también se han detectado situaciones de malos tratos en las etapas posteriores de privación de libertad»⁴².

Acontecimientos relativos al Sahara Occidental

El Comité CT está preocupado por las denuncias recibidas sobre la situación imperante en el Sahara Occidental, donde, al parecer, las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad marroquíes someten a las personas sospechosas a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, a encarcelamientos en régimen de incomunicación y en lugares secretos, a torturas y malos tratos, a la extracción de confesiones mediante la tortura, a desapariciones forzadas y al uso excesivo de la fuerza.

El Comité CT recuerda una vez más que, de conformidad con la Convención, «no se puede invocar ninguna circunstancia excepcional, cualquiera que esta sea, para justificar la tortura en el territorio sometido a la jurisdicción del Estado parte, y que las medidas de mantenimiento del orden y los procedimientos de instrucción penal y de investigación deben ponerse en práctica respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos, así como los procedimientos judiciales y las salvaguardias fundamentales en vigor» en Marruecos. Además, debe «anunciar una política que pueda traducirse en resultados mensurables desde el punto de vista de la eliminación de los actos de tortura y de los malos tratos cometidos por agentes del Estado. El Estado parte debe reforzar las medidas adoptadas para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz todas las denuncias de tortura y de malos tratos infligidos a prisioneros y a detenidos, y en todos los demás casos»⁴³.

42 *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Adición (Misión a Marruecos)*. Doc. A/HRC/22/53/Add.2, de 30 de abril de 2013, p. 1.

43 Doc. CAT/C/MAR/CO/4, cit. párr. 2.

El campamento de Gdeim Iziken

Inquietan muy particularmente al Comité CT los acontecimientos relacionados con la evacuación del campamento de Gdeim Iziken en noviembre de 2010, en el curso de la cual varias personas resultaron muertas, entre ellas agentes de las fuerzas del orden, y cientos de otras personas fueron detenidas. La gran mayoría de las personas detenidas han sido posteriormente puestas en libertad y están en espera de ser procesadas. No obstante, esos procesos se celebrarán ante tribunales militares, en tanto que los interesados son civiles. Además, no se ha iniciado ninguna investigación imparcial y eficaz para aclarar los acontecimientos y determinar las posibles responsabilidades en el seno de las fuerzas del orden.

Por tanto, Marruecos debe «reforzar las medidas adoptadas para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz y rápida todos los actos de violencia y las muertes ocurridas en el contexto del desmantelamiento del campamento de Gdeim Iziken, y para enjuiciar a los responsables de tales actos». Y «debe modificar su legislación para que todos los civiles sean juzgados exclusivamente por jurisdicciones civiles»⁴⁴.

Detención y encarcelamiento secretos en relación con asuntos de seguridad

Según el Comité CT, en los asuntos vinculados al terrorismo no siempre se respetan en la práctica los procedimientos judiciales por los que se rigen la detención, los interrogatorios y el encarcelamiento. También le inquietan las denuncias sobre el sistema al que se recurre repetidamente con arreglo al cual, según parece, agentes vestidos de paisano que no se identifican claramente detienen a los sospechosos. Luego se los traslada para someterlos a interrogatorio y se los recluye en lugares de encarcelamiento secretos, lo que en la práctica equivale a un régimen de incomunicación. Los sospechosos son objeto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sin quedar oficialmente registrados. Se los mantiene en esas condiciones durante varias semanas, sin permitirles comparecer ante un juez y sin control de parte de las autoridades oficiales.

44 *Ibidem*, párr. 13.

No se informa a la familia sobre su detención, sus movimientos, ni el lugar de encarcelamiento hasta el momento en que se los traslada a la comisaría para que firmen las confesiones obtenidas mediante tortura. Solo entonces quedan oficialmente registrados e integrados en el procedimiento judicial regular con fechas y datos falsificados de hecho.

También se han establecido lugares de detención secretos en el seno mismo de ciertos establecimientos de detención oficiales, que no son objeto de ninguna vigilancia ni inspección de parte de órganos independientes. Por último, según denuncias recibidas, se ha construido una nueva prisión secreta en los alrededores de Ain Aouda, cerca de la capital, Rabat, a fin de mantener encarcelados en ella a los sospechosos relacionados con movimientos terroristas.

En consecuencia, Marruecos debe velar por que «toda persona detenida y encarcelada se beneficie de los procedimientos judiciales en vigor y por que se respeten las salvaguardias fundamentales consagradas por el derecho positivo, como el acceso del detenido a un abogado y a un médico independiente, su derecho a que se informe a los miembros de su familia en cuanto a su detención y su lugar de encarcelamiento, y su derecho a comparecer ante un juez».

Además, debe tomar medidas para que «los registros, actas y demás documentos oficiales relativos a las detenciones y a los encarcelamientos se lleven con el mayor rigor y para que todos los datos relativos a la detención y al encarcelamiento queden consignados en esos documentos y sean confirmados tanto por los agentes de la policía judicial como por el interesado. El Estado parte debe velar por que se investiguen a fondo y de manera imparcial, eficaz y rápida todas las denuncias de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como por que se enjuicie a los posibles responsables».

Por último, Marruecos debe velar por que «nadie sea mantenido en un centro de detención secreto que esté de hecho bajo su control efectivo», puesto que «el encarcelamiento de personas en tales condiciones constituye en sí mismo una violación de la Convención». Por tanto, se debe «iniciar una investigación seria, imparcial y eficaz sobre la existencia de estos lugares de detención. Todos los centros de detención deben estar sujetos a un sistema regular de control y vigilancia»⁴⁵.

45 *Ibidem*, párr. 15.

Enjuiciamiento de los autores de actos de torturas y de malos tratos

El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura concluyó en su informe de misión a Marruecos de 2012 que «no se realizan investigaciones rápidas y exhaustivas de todos los casos de tortura y malos tratos, no se enjuicia a los autores y tampoco se ofrecen recursos efectivos y medios de reparación adecuados, como servicios de rehabilitación, para todas las víctimas de la tortura y los malos tratos. En ese contexto, destaca el hecho de que debe revisarse y modificarse urgentemente el sistema marroquí de medicina forense, ya que el sistema actual no garantiza la detección, documentación y evaluación forense correcta de cualquier presunta situación de tortura y malos tratos. Según el Relator Especial, esa podría ser una de las causas por las que no se aplica la norma de invalidación en relación con las pruebas obtenidas mediante tortura»⁴⁶.

Según el Comité CT, no se ha condenado a ningún responsable de un acto de tortura con arreglo al artículo 231-1 del Código Penal. Los agentes de policía son, en el mejor de los casos, procesados por violencia o por lesiones y no por el delito de tortura. Las sanciones administrativas y disciplinarias impuestas a los agentes de que se trata no parecen ser proporcionales a la gravedad de los actos cometidos. Las denuncias de tortura, aunque son numerosas y frecuentes, raras veces dan lugar a investigaciones y a procesamientos. Parece haberse instaurado un clima de impunidad al no haberse adoptado verdaderas medidas disciplinarias ni haberse incoado enjuiciamientos penales serios contra los agentes del Estado acusados de la comisión de actos previstos en la Convención, en particular contra los autores de las violaciones graves y masivas de los derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999.

Por tanto, Marruecos debe velar por que «todas las denuncias de tortura y de malos tratos sean rápidamente objeto de una instrucción penal eficaz e imparcial y que sus autores sean procesados y castigados con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, como lo exige el artículo 4 de la Convención». Además, «debe modificar su legislación para que dis-

46 *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, Juan E. Méndez. Adición (Misión a Marruecos), doc. A/HRC/22/53/Add.2, cit., pp. 1-2.

ponga expresamente que no se puede invocar la orden de un superior o de una autoridad pública para justificar la tortura». También debe velar por que, en la práctica, «los denunciantes y los testigos estén protegidos contra todo maltrato y todo acto de intimidación relacionado con su denuncia o con su testimonio»⁴⁷.

Confesiones obtenidas mediante coacción

El sistema de instrucción penal en Marruecos admite la confesión como forma sumamente corriente de prueba a los efectos del procesamiento y la condena de una persona. La confesión sirve de base de numerosas condenas penales, incluso en casos de terrorismo, lo que crea condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos tratos contra el sospechoso.

En una queja de 2014, el Comité CT constató violación de los arts. 2.1, 11, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura. En consecuencia, Marruecos debe abrir «una investigación imparcial y exhaustiva de las denuncias del autor. Esa investigación debe incluir la realización de exámenes médicos que se ajusten a las directrices del Protocolo de Estambul»⁴⁸.

En términos generales, el Comité CT recomendó a Marruecos tomar todas las medidas necesarias para que «las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de las confesiones del inculpa-do, en particular en los casos en que este se retracta de sus confesiones durante el juicio, y para que las declaraciones que se hayan hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso del procedimiento, excepto contra personas acusadas de tortura, conforme a lo dispuesto en la Convención». Además, Marruecos debe «examinar las condenas penales pronunciadas exclusivamente sobre la base de confesiones, a fin de determinar los casos en que la condena se funda en confesiones

47 NACIONES UNIDAS, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Marruecos*, doc. CAT/C/MAR/CO/4, cit., párr. 16.

48 Comité CT, caso *Ali Aarrass c. Marruecos*, decisión de 19 de mayo de 2014, doc. CAT/C/52/D/477/2011, de 24 de junio de 2014, párrs. 11-12.

obtenidas mediante tortura o malos tratos»; y tomar «todas las medidas correctivas apropiadas», así como informar al Comité CT de sus conclusiones⁴⁹.

Condiciones de detención

Sigue preocupando al Comité CT que las condiciones de detención existentes en la mayoría de las prisiones sigan siendo alarmantes, en particular por lo que se refiere al hacinamiento, a los malos tratos y a las sanciones disciplinarias, incluida la imposición del régimen de incomunicación durante períodos prolongados, a las condiciones sanitarias, al aprovisionamiento de alimentos y al acceso a los servicios médicos. Tales condiciones han llevado a ciertos detenidos a declararse en huelga de hambre, y a otros a rebelarse y a participar en movimientos de protesta violentamente reprimidos por las fuerzas del orden.

A fin de que las condiciones de detención en todo el territorio marroquí sean conformes a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas⁵⁰, Marruecos debe proseguir sus iniciativas de «construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y de renovación de los antiguos, y seguir incrementando los recursos asignados al funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, en particular por lo que se refiere a la alimentación y a los servicios médicos». Para luchar contra el hacinamiento en las prisiones, debido en gran parte a que la mitad de los detenidos en las prisiones marroquíes están allí a título preventivo, Marruecos «debe modificar su legislación a fin de que se puedan adoptar medidas distintas de la detención preventiva de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)⁵¹. En tal sentido, podría establecer un sistema de fianzas y de recurso más frecuente a la imposición de penas no privativas de libertad en el caso de las infracciones menos graves»⁵².

49 Doc. CAT/C/MAR/CO/4, *cit.*, párr. 17.

50 Resoluciones del Consejo Económico y Social 663C (XXIV), de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.

51 Resolución 45/110 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1990.

52 Doc. CAT/C/MAR/CO/4, *cit.*, párr. 19.

Por su parte, el Comité DH siguió preocupado por los informes sobre las malas condiciones de encarcelamiento en las prisiones, en especial la insuficiencia de cuidados médicos, la falta de programas educativos de reinserción y la falta de lugares de visita. Por tanto, Marruecos debe «adequar las condiciones de encarcelamiento a lo dispuesto en el artículo 10» del PIDCP y «establecer penas sustitutivas»⁵³.

Por último, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura del Consejo de Derechos Humanos, constató durante su visita a Marruecos en 2012 que, en la mayoría de las prisiones, las condiciones siguen siendo alarmantes debido al hacinamiento, los casos de malos tratos y medidas disciplinarias abusivas, las condiciones insalubres, una alimentación insuficiente y el acceso limitado a atención médica⁵⁴.

La Institución de Equidad y Reconciliación y la cuestión de la reparación

El Comité CT tomó nota de la información proporcionada por Marruecos sobre el considerable volumen de trabajo realizado entre 2003 y 2005 por el mecanismo de justicia de transición, a saber, la Institución de Equidad y Reconciliación, sobre las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Marruecos entre 1956 y 1999. Estas investigaciones permitieron aclarar un gran número de esas violaciones, dilucidando en particular numerosos casos de desapariciones forzadas, y posibilitaron el otorgamiento de distintos tipos de reparación a numerosas víctimas.

Pero no se han investigado las violaciones cometidas en el Sahara Occidental, por lo que ciertos casos de desaparición forzada no han quedado resueltos al finalizar los trabajos de la Institución en 2005. Además, los trabajos de la Institución pueden haber llevado a la impunidad de hecho de los autores de violaciones de la Convención contra la Tortura cometidas en el curso de ese período, ya que hasta la fecha ninguno de ellos ha sido procesado. Por último, no todas las víctimas ni todas las familias de víctimas han recibido una indemnización y no todas las indemnizaciones pagadas han sido equitativas, suficientes o efectivas.

53 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párr. 30.

54 *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, Juan E. Méndez. Adición (*Misión a Marruecos*), doc. A/HRC/22/53/Add.2, *cit.*, p. 1-2.

Por tanto, Marruecos debe disponer que «el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que fue designado para finalizar los trabajos de la Institución de Equidad y Reconciliación, prosiga su labor para dilucidar los casos de desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre 1956 y 1999 que continúan sin aclarar, en particular los relativos al Sahara Occidental». También debe «dar a las víctimas de la tortura y de malos tratos una reparación consistente en una indemnización equitativa y suficiente» y en una rehabilitación tan completa como sea posible. A tal efecto, la legislación nacional debe prever «el derecho de las víctimas de la tortura a ser indemnizadas de manera equitativa y adecuada por el perjuicio sufrido»⁵⁵.

Los niños del Sahara Occidental

El Comité de los Derechos del Niño lamentó la falta de información en el informe de Marruecos sobre las medidas adoptadas para aplicar su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.211, párr. 57)⁵⁶ sobre la situación de los niños que viven en el Sahara Occidental.

Por consiguiente, el Comité de los Derechos del Niño instó en 2014 a Marruecos «a respetar y proteger los derechos de todos los niños que viven en el Sahara Occidental y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones de sus derechos». El Estado debe «proporcionar información más detallada sobre esta cuestión en su próximo informe periódico»⁵⁷.

Por su parte, el Comité DH constató en 2016 la persistencia de la explotación económica de los niños, en particular como trabajadores domésticos o agrícolas (arts. 8 y 24 PIDCP).

55 Doc. CAT/C/MAR/CO/4, cit. párr. 29.

56 En sus anteriores observaciones finales, de 6 de junio de 2003, relativas al segundo informe periódico de Marruecos, el Comité de los Derechos del Niño señaló lo siguiente: «57. A la luz del artículo 38 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas practicables a fin de asegurar que la plena protección y cuidado de los niños afectados por el conflicto armado se lleva a cabo en el Sahara Occidental». NACIONES UNIDAS, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención. observaciones finales: Marruecos*, doc. CRC/C/15/Add.211, de 10 de julio de 2003, p. 14.

57 Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño a los informes periódicos tercero y cuarto de Marruecos, de 19 de septiembre de 2014. Doc. CRC/C/MAR/CO/3-4, de 14 de octubre de 2014, párr. 73.

Por lo que Marruecos debe aplicar rigurosamente las disposiciones legales relativas al trabajo infantil y a la explotación de los niños con miras a eliminar esas prácticas, seguir sensibilizando a la población y reforzar los mecanismos de vigilancia⁵⁸.

Desapariciones forzadas

Como ya afirmamos en nuestro estudio de 2016⁵⁹, conforme al DIDH las desapariciones forzadas o involuntarias resultan de que «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley»⁶⁰.

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (en adelante: GTDFI) fue creado en 1980 por la extinta Comisión de Derechos Humanos. Hoy auxilia al Consejo de Derechos Humanos en la investigación de las desapariciones forzadas. En el periodo comprendido entre 1980 y 2014 registró 294 casos en el Sahara Occidental ocupado, de los que 60 están pendientes de examen y 213 han sido aclarados, habiéndose

58 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, cit, párrs. 47-48.

59 Vid. FALEH PÉREZ (C.) & VILLÁN DURÁN (C.): «La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado», in VVAA, *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia*. Zaragoza, Pregunta Ediciones, 2016, cit., at 203-214.

60 Párr. 3 del preámbulo de la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (res. AG 47/133 de 18 de diciembre de 1992). La *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (ratificada por Marruecos en 2013) recoge, en su Art. 2, un concepto casi idéntico: «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley». Además, su «práctica generalizada o sistemática... constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable...» (Art. 5).

interrumpido el examen de otros 21 casos, conforme a lo previsto en los métodos de trabajo del propio GTDFI⁶¹.

Sin embargo, otras fuentes atribuyen a las fuerzas de seguridad marroquíes la desaparición de una cifra cercana a las mil personas en el Sahara Occidental ocupado, especialmente en el periodo comprendido entre 1975 y 1977, muchas de las cuales sufrieron reclusión clandestina hasta por 16 años antes de recobrar su libertad. No obstante, unos 400 casos afectarían a personas cuya suerte aún no ha sido desvelada⁶².

En el informe relativo a una visita de la *Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme* (FIDH) a Marruecos del 24 al 30 de junio de 2000, que se concentró sobre todo en la cuestión de las desapariciones forzadas, cifró en torno a las 1.500 personas desaparecidas⁶³.

61 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/27/49, de 4 de agosto de 2014, p. 31. Conforme a los métodos de trabajo del GTDFI, un caso de desaparición forzada o involuntaria «se considera esclarecido cuando se determina claramente la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y se transmite información detallada como resultado de una investigación realizada por el Estado, averiguaciones de ONG, misiones de determinación de los hechos del Grupo [...] o de personal de derechos humanos de las Naciones Unidas o de cualquier otra organización internacional que opere sobre el terreno, o labores de búsqueda realizadas por la familia, con independencia de que la persona esté viva o muerta. En esas circunstancias, se aplicará la norma de los seis meses enunciada en el párrafo 25 del presente documento». En virtud de esta norma de los seis meses, «cualquier respuesta de un Estado que contenga información clara y detallada sobre la suerte o el paradero de una persona desaparecida será transmitida a la fuente. Si la fuente no responde en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se comunicó la respuesta del Estado, o si pone en duda la información del Estado por motivos que el Grupo [...] no considera razonables, el caso se considerará esclarecido y, en consecuencia, se clasificará bajo el título 'Casos esclarecidos por la respuesta del Estado' en el resumen estadístico del informe anual. Si la fuente cuestiona la información [...] por motivos razonables, se informará al Estado de este hecho y se lo invitará a que formule observaciones al respecto». (Métodos de trabajos revisados de 7 de febrero de 2014). NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, *Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias* (Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias), doc. A/HRC/WGEID/102/2, de 2 de mayo de 2014, 11 p.

62 MARTIN BERISTAIN, C. y ETXEBERRIA GABILONDO, F., *Voces del Desierto: La resistencia frente al olvido*, Instituto Hegoa, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2014, p. 17.

63 «En ce qui concerne plus particulièrement les disparus issus de l'ancien Sahara Espagnol, il ressort des informations reçues de sources dignes de foi et des témoins rencontrés

La desaparición forzada de saharauis comenzó en 1975, a partir de la invasión y posterior anexión del territorio no autónomo por Marruecos, y continuó hasta principios de la década de los años noventa. En efecto, desde el mes de noviembre de 1975 las fuerzas marroquíes se hicieron con el control del territorio y una gran parte de la población comenzó su éxodo, al tiempo que se iniciaba la represión y persecución de los saharauis que huían recurriendo a los bombardeos, el pillaje, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas⁶⁴. Las víctimas de las desapariciones cometidas por militares, policías y gendarmería marroquíes (vestidos con uniforme o de paisano) no fueron únicamente prisioneros capturados en el curso de los combates y simpatizantes reales o presuntos del Frente Polisario o de la independencia del Sahara Occidental, sino también mujeres, ancianos y niños que tenían vínculos familiares con oponentes a la administración marroquí del territorio saharauí⁶⁵. Amnistía Internacional informó en 1991 que unos 260 saharauis fueron liberados tras haber permanecido detenidos y desaparecidos en centros clandestinos por periodos comprendidos entre 3 y 16 años. Obviamente, esta ONG recomendó a Marruecos la compensación y rehabilitación a las víctimas y expresó su preocupación por la ausencia de investigaciones⁶⁶.

Junto con el control militar y la huida masiva de la población, las desapariciones forzadas fueron utilizadas para imponer el silencio en el Sahara Occidental durante décadas, provocando la parálisis y el terror en la población y bloqueando los intentos por obtener información y encontrar a los parientes desaparecidos⁶⁷. En unos pocos casos la desaparición fue tempo-

que le chiffre de 1500 personnes disparues est probablement proche de la réalité». FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME: *Mission internationale d'enquête. Les disparitions forcées au Maroc: répondre aux exigences de vérité et de justice*, Rapport n.º 298, FIDH, noviembre 2000, p. 9.

64 MARTIN BERISTAIN, C. y GONZÁLEZ HIDALGO, E., *El oasis de la memoria. Memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental*, Universidad el País Vasco, Instituto Hegoa, Donostia-San Sebastián, 2012, tomo I, p. 74.

65 AMNESTY INTERNATIONAL, *Assez de demi-mesures. Faire face aux disparitions forcées au Maroc et au Sahara Occidental* (doc. MDE 29/005/2009), Amnesty International, 2009, p. 2.

66 AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Marruecos. Continúan las detenciones, las «desapariciones» y las restricciones de las libertades de expresión y movimiento en el Sahara Occidental* (doc. MDE29/03/93/s), Amnistía Internacional, febrero de 1993, pp. 2 y 5.

67 MARTIN BERISTAIN, C. y GONZÁLEZ HIDALGO, E., *El oasis de la memoria...*, cit., tomo I, p. 87.

ral y culminó con la detención legalizada y la incoación de procedimientos judiciales contra las víctimas, tras un periodo más o menos largo en el que las autoridades marroquíes negaron a sus familiares y representantes toda información sobre las personas detenidas. El objetivo de esta primera modalidad fue esencialmente represivo y de ocultación de información y pruebas de tortura. Fueron más generalizadas las detenciones en régimen de incomunicación, sin ninguna garantía legal o judicial, practicadas con la finalidad de hacer que las víctimas desaparecieran y sembrar el terror entre la población. Detenidas en el desierto o en las ciudades a plena luz del día por policías, militares o gendarmes, la mayor parte de las víctimas fueron trasladadas a centros de detención secreta negando las autoridades toda información sobre su paradero. En ambos casos, las desapariciones respondieron al mismo patrón que comienza con una detención arbitraria seguida de la negación de los hechos, ausencia de información a las familias, reclusión clandestina y atribución del hecho a causas ajenas a las autoridades en el intento de excluir toda responsabilidad de los agentes y fuerzas de ocupación⁶⁸.

En 1999, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos creado en 1990 (y sustituido desde 2011 por el Consejo Nacional de Derechos Humanos) recomendó al Rey Mohammed VI la creación de un mecanismo para indemnizar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Cuatro años más tarde, un decreto real estableció la Instancia Equidad y Reconciliación (en adelante: IER), organismo que realizó una investigación relativa a las violaciones de derechos humanos cometidas desde la independencia del país hasta 1999, incluidas las desapariciones forzadas. Aplicando una metodología que excluía todo enfoque acusatorio y de determinación de responsabilidades, aunque privilegiando las audiencias públicas y los testimonios de las víctimas, en su informe emitido en 2005 y publicado al año siguiente, la IER consideró esclarecidos un total de 742 casos de desaparición forzada, mientras que otros 66 casos debían seguir siendo investigados por reunir los elementos constitutivos de la desaparición forzada. En 89 de los casos esclarecidos, la IER determinó que las víctimas habían fallecido mientras se encontraban secuestradas en Tazmamart (31), Agdez (32), Kal'at Mgouna (16), Tagounite (8), Gourrama

68 *Ibidem*, pp. 22-224, 231 y 235-236.

(1) y Mansour Ad-Dahbi (1). Informó además que pudo determinar las sepulturas e identidades de 11 personas fallecidas en el curso de combates armados entre 1961 y 1964; otras 325 personas perdieron la vida como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza en revueltas y manifestaciones que tuvieron lugar en Casablanca y Fez entre en 1965 y 1990; y que «en el contexto del conflicto en las provincias del sur» —fórmula oficial marroquí para referirse al Sahara Occidental ocupado— pudo clarificar la suerte de 211 desaparecidos⁶⁹.

Sin embargo, la fórmula empleada por Marruecos con la creación de la IER y la atribución del seguimiento de sus recomendaciones al Consejo Consultivo antes mencionado, ha sido objeto de severas críticas porque —sin perjuicio de que al pueblo saharauí se le impida ejercer su derecho a la autodeterminación— son notorias las deficiencias en el reconocimiento de los derechos de las víctimas debido a que esos mecanismos

se dirigieron a otorgar indemnizaciones a las víctimas marroquíes de desaparición forzada, detención arbitraria y exilio en el extranjero y, de forma más limitada, a víctimas de desaparición forzada saharauis, sin ningún reconocimiento para las personas refugiadas en Argelia. Tampoco se han dado avances en la investigación de la verdad de los hechos, los responsables, la justicia o el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación moral teniendo en cuenta las demandas de las víctimas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. [...]

[...] Por otro lado, muchas de las víctimas entrevistadas rechazan ese concepto de reconciliación, señalando que nada de su situación ha cambiado, que continúan estando en la pobreza, la marginación social y económica, sin poder expresarse y sufriendo detenciones y torturas cada vez que tratan de mo-

69 «Dans le contexte du conflit dans les provinces du sud, les investigations de l'IER ont permis de clarifier le sort de 211 personnes présumées disparues. 144 d'entre elles sont décédées durant ou à la suite d'accrochages armés. Pour 40 d'entre elles, les identités, les lieux de décès et d'inhumation, ont été déterminés. Pour 88 autres, si l'identité a pu être déterminée et le lieu de décès localisé, les lieux de sépulture ne sont pas encore connus. 12 personnes décédées n'ont pu être identifiées, alors que 4 autres, blessées, arrêtées et hospitalisées sont décédées dans les hôpitaux et ont été enterrées dans des cimetières localisés. Enfin, 67 personnes présumées disparues ont été reconduites à Tindouf en Algérie par l'intermédiaire du Comité International de la Croix Rouge (CICR) en date du 31 octobre 1996». Fuente: http://www.ier.ma/article.php?id_article=1496.

vilizarse o expresar sus demandas públicamente. Para hablar de equidad y de reconciliación se necesita dar a conocer la suerte y el paradero de los desaparecidos, desmilitarizar el conflicto, reconocer sus responsabilidades, someter a la justicia a los responsables de graves crímenes de guerra y contra los derechos humanos, así como comprometerse en la reparación y en la prevención de las violaciones. Bajo la coacción que muchos victimarios siguen ejerciendo en el Sahara Occidental, no puede hablarse de reconciliación⁷⁰.

Por su parte, el GTDFI, en el informe posterior a la visita que tres de sus miembros realizaron a Marruecos en 2009, si bien saludó los aspectos positivos del trabajo de la IER y sus efectos «catárticos» para las víctimas que participaron en las audiciones y relataron sus experiencias traumáticas, llamó la atención sobre las serias restricciones del mandato de la IER y los resultados de su ejecución.

En efecto, al relatar su historia públicamente, las víctimas no podían nombrar a los criminales o responsables, pudiendo referirse solamente a los lugares de sufrimiento y las autoridades que les habían maltratado. Su verdad debía constreñirse a la victimización y excluir toda acusación.

Además, las audiencias en El Aaiún fueron canceladas y algunos de los casos que la IER consideró esclarecidos no cumplían los parámetros previstos a tal fin en los métodos de trabajo del GTDFI, puesto que no se dieron precisiones en cuanto a la suerte de las personas desaparecidas, las circunstancias de su desaparición, ni los nombres de los lugares de detención y de inhumación si la víctima fue inhumada.

En particular, la identificación de las víctimas enterradas requiere la realización de análisis de ADN por médicos forenses independientes y no puede basarse en los testimonios del personal penitenciario.

Pero, sobre todo, el GTDFI recibió alegaciones de trato discriminatorio hacia las víctimas saharauis, cuyas demandas ante la IER fueron indebidamente rechazadas o inadmitidas por esta instancia y constató además las insuficiencias del mecanismo de la IER derivadas de la exclusión de las persecuciones judiciales a los responsables para privilegiar el enfoque de la reconciliación.

70 MARTIN BERISTAIN, C. y GONZÁLEZ HIDALGO, E., *El oasis de la memoria...*, cit., tomo I, pp. 40 y 42.

De ahí que el GTDFI enfatizara la importancia del derecho a la justicia en aras de combatir la impunidad; incluso si la mayor parte de la sociedad expresara su voluntad de perdonar a los responsables, por cuanto el Estado tiene la obligación internacional de impedir la impunidad de los autores de crímenes tan odiosos, lo que ocurre no solo cuando existen leyes de amnistía, sino también cuando *de facto* la situación favorece la impunidad absoluta de los responsables.

Un rasgo manifiesto del clima de impunidad resulta del hecho de que los autores de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos continúen desempeñando funciones oficiales. Por eso Marruecos debería adoptar todas las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, para acabar con la impunidad y asegurar que las desapariciones forzadas no se repetirán⁷¹.

Amnistía Internacional fue también muy crítica con los trabajos de la IER⁷², que siguen sin abocar a cambios significativos para los derechos de

71 Cfr. NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, *Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Additif: Mission au Maroc*, doc. A/HRC/13/31/Add.1, du 9 février 2010, pp. 9, 10, 13, 16, 17 (párrs. 36, 39, 43, 53, 77-80 y 83).

72 «[...] il est très préoccupant de constater que l'IER, au lieu de se pencher sur l'ampleur particulière des violations subies par les Sahraouis, ait renforcé leur sentiment de marginalisation. Ainsi, aucune audience publique permettant aux victimes d'évoquer leurs souffrances n'a été organisée au Sahara occidental, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions, où de telles audiences ont été retransmises à la télévision. Le rapport final de l'IER fournissait très peu d'informations sur les disparitions forcées et les autres atteintes aux droits humains subies par des Sahraouis. Il ne reconnaissait même pas que le Sahara occidental avait souffert de manière disproportionnée, comme le montre son exclusion du programme de réparations collectives destiné aux zones particulièrement touchées par les violences pendant les « années de plomb ». L'IER n'a pas non plus réussi à améliorer la communication avec les victimes, leurs familles et les organisations de la société civile au Sahara occidental, ni à rétablir leur confiance, ce manque de confiance étant lui-même une des conséquences des violences commises dans cette région par les autorités marocaines.[...] Afin de montrer qu'il a véritablement l'intention d'améliorer la situation des droits humains [...] au Sahara occidental, il doit présenter des excuses publiques pour les violations commises par le gouvernement marocain. Il contribuerait ainsi à rétablir la dignité des victimes et leur confiance dans les autorités marocaines qui s'amenuise dans ce contexte de promesses non tenues, quatre ans après son discours du 6 janvier 2006 qui marquait la fin des travaux de l'IER. Si les autorités ne montrent pas une réelle volonté politique de tenir les promesses faites par l'IER et le CCDH, tous les progrès réalisés jusqu'à présent risquent d'être réduits à néant. Si toute la vérité n'est pas

las víctimas, según revela su último informe anual, debido a que persiste la falta de rendición de cuentas⁷³ y a las numerosas deficiencias detectadas dos años atrás, que le permitieron calificar la justicia transicional marroquí como «inconclusa»⁷⁴.

El Comité DH también subrayó las deficiencias de Marruecos en el cumplimiento de las obligaciones que tiene como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al aprobar en 2004 sus observaciones finales referidas al quinto informe periódico de Marruecos. En el plano de la interpretación más general que producen sus observaciones generales, también en 2004 el Comité DH se refirió a la importancia que tiene el sometimiento de los responsables de desapariciones forzadas a la justicia para la realización del derecho a un recurso efectivo contemplado en el art. 2.3 del PIDCP y, por ende, para evitar la impunidad y la repetición de crímenes tan graves⁷⁵.

révélée, si les responsables d'atteintes aux droits humains ne sont pas amenés à rendre des comptes et si des garanties ne sont pas mises en place pour empêcher la récurrence de tels actes, les discours exprimant un véritable désir de faire face au passé [...] semblent vides de sens. Pour éviter le risque que le processus engagé par la création de l'IER ne soit perçu comme un exercice de relations publiques destiné à améliorer l'image du Maroc et à calmer les victimes et leurs proches avec des indemnités et d'autres avantages, il est indispensable de remédier immédiatement aux insuffisances et aux lacunes du travail de l'IER et du suivi de son action». AMNESTY INTERNATIONAL, *Des promesses non tenues. L'Instance Équité et Réconciliation et le suivi de ses travaux* (extraits) (doc. MDE 29/001/2010), Amnesty International Publications, 2010, pp. 4 y 5.

73 «Pese al avance en las reformas judiciales, las autoridades no progresaron en la aplicación de otras recomendaciones clave de la Comisión de Equidad y Reconciliación, relacionadas con la reforma del sector de la seguridad y la adopción de una estrategia nacional para combatir la impunidad. Se seguía negando justicia a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1956 y 1999, y varios casos de desaparición forzada seguían pendientes de resolución». AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Informe 2014/15. La situación de los derechos humanos en el mundo*, Amnesty International, 2015, p. 295.

74 Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Marruecos y Sahara Occidental: Nuevas revelaciones sobre casos de desaparición de saharauis ponen de relieve el déficit de verdad y justicia*, doc. AI MDE 29/011/2013, de 12 de septiembre de 2013, 3 p.

75 «15. El párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efectiva a los derechos del Pacto, los Estados Partes garanticen que toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para reclamar esos derechos. [...] El Comité atribuye importancia al establecimiento por los Estados Partes de mecanismos judiciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones de violaciones de los derechos con arreglo

Posteriormente, en 2011, el Comité CT también destacó las insuficiencias de los trabajos de la IER en los planos del derecho a la justicia y la verdad:

Marruecos debe dar pasos serios y creíbles para terminar de una vez con la práctica de las desapariciones forzadas y honrar sus compromisos internacionales. No es suficiente con lo hecho hasta ahora, ni basta con el

al derecho interno. [...] Se requieren en particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades adecuadas, pueden contribuir a este fin. La falta de realización por un Estado Parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto. [...].

16. El párrafo 3 del artículo 2 requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. [...].

18. Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia [...] revelan violaciones de determinados derechos del Pacto, los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podría de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular, con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, como [...] la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6 del PIDCP). En realidad, el problema de la impunidad con relación a esas violaciones, asunto que causa una constante preocupación al Comité, puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil, esas violaciones del Pacto son crímenes de lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7). En consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo, los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas amnistías (véase la Observación general N° 20 (44)) y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. Además, ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas [...] queden inmunes de responsabilidad jurídica. [...]». Observación general 31 (2004) del Comité de Derechos Humanos: la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto. NACIONES UNIDAS, *Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos*. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9, cit., pp. 290-295.

reconocimiento constitucional de que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de extrema gravedad⁷⁶. Estas desapariciones en los territorios saharauis ocupados deben acabar y la reparación debe ser completa y efectiva también para las víctimas saharauis, lo que incluye su derecho a la verdad y a obtener justicia. Marruecos ha de poner fin a todas las desapariciones forzadas o involuntarias, incluidas aquellas de carácter temporal, a las que se sigue recurriendo por tiempo limitado, antes de oficializar la detención de **saharauis** y dar a conocer el centro de detención en que se encuentra una persona privada de su libertad. Pero esto no es suficiente si, además, no se pone término también a las detenciones arbitrarias, pues una cosa y la otra atentan contra el derecho a la libertad y a la seguridad personales y en ocasiones, contra el derecho a la vida⁷⁷.

Por último, en 2016, el Comité DH continuó manifestando preocupación por los casos de desapariciones forzadas que siguen sin esclarecerse en Marruecos y en el Sahara Occidental. Al Comité DH le preocupa también que los responsables de esas desapariciones todavía no hayan sido identificados, juzgados y sancionados (arts. 2, 6, 9, 7 y 16 PIDCP).

Por lo que Marruecos debe proseguir y acelerar sus esfuerzos para esclarecer todos los casos de desapariciones forzadas, también los relacionados con el Sahara Occidental, y realizar sin demora investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de esas desapariciones⁷⁸.

76 En la Constitución del Reino de Marruecos, de 1 de julio de 2001, se proclama que las desapariciones forzadas son, junto con las detenciones arbitrarias o en secreto, crímenes de la mayor gravedad (art. 23: «La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité»). Dahir n.º 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, *Bulletin Officiel*, n.º 5964 bis - 28 chaabane 1432 (30-7-2011).

77 Como recordó en 2014 el Comité DH, «las formas extremas de reclusión arbitraria que constituyen por sí mismas una amenaza para la vida, en particular la desaparición forzada, vulneran los derechos a la libertad personal y a la seguridad personal, así como el derecho a la protección de la vida». NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación general n.º 35. Artículo 9 (Libertad y seguridad personales)*, doc. CCPR/C/GC/35, 16 de diciembre de 2014, p. 17, párr. 55.

78 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.* párrs. 27-28.

Privación arbitraria de la libertad personal

Como ya pusimos de relieve en nuestro estudio de 2016⁷⁹, no es fácil en la práctica disociar la desaparición forzada y la privación arbitraria de la libertad. Los hechos muestran lo estrechamente vinculadas que se encuentran la una y la otra. En realidad, si recordamos el concepto de desaparición forzada en DIDH, esta es consecuencia de una privación de libertad personal que sustrae a la víctima de la protección de la ley. Esta es la práctica general y la situación en el Sahara Occidental ocupado no se separa de la misma⁸⁰. Además, tales prácticas propician la comisión de otros abusos, como la ejecución sumaria, la tortura, los malos tratos o las restricciones y deficiencias en materia del derecho a un recurso efectivo, que también sufre habitualmente la víctima de la desaparición forzada.

En sus observaciones finales referidas al segundo informe periódico que Marruecos presentó ante el Comité DH, este expresó en 1990 su preocupación a causa de «las detenciones arbitrarias, las desapariciones, las condiciones de detención, la existencia de prisiones no reconocidas, la duración a veces excesiva del período de detención, los problemas relativos a la independencia de los jueces y a la aplicación de ciertos aspectos del artículo 14 del Pacto, en particular la preparación de la defensa y la carga de la prueba, la represión de actividades políticas y culturales en las universidades y otras restricciones en la esfera de la libertad de expresión, como no permitir la crítica de las instituciones o de la monarquía marroquíes, el trato dado a los saharianos occidentales...»⁸¹.

Las posteriores observaciones finales del Comité DH, aprobadas en 1994 y referidas al tercer informe periódico del país, también dieron cuenta de su preocupación por que «aún no hayan sido objeto de investigación

79 Vid. FALEH PÉREZ (C.) & VILLÁN DURÁN (C.): «La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado», in VVAA, *Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia*. Zaragoza, Pregunta Ediciones, 2016, cit., at 214-224.

80 Acerca del vínculo entre las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cfr. especialmente los testimonios que figuran en MARTÍN BERISTAIN, C. y GONZÁLEZ HIDALGO, E., *El oasis de la memoria...*, cit. *supra*, tomo I, pp. 235 y ss.

81 NACIONES UNIDAS, *Informe del Comité de Derechos Humanos*, Asamblea General, Documentos Oficiales, Cuadragésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/47/40), Naciones Unidas, Nueva York, 1994, p. 17, párr. 77.

un gran número de casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones forzadas o involuntarias, torturas y detención arbitraria o ilegal cometidas por miembros de la policía o del ejército... Además, no se ha llevado ante la justicia a los culpables de tales actos ni se les ha castigado». De ahí que el Comité DH recomendase a las autoridades asegurarse que «no haya ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas o involuntarias, torturas, malos tratos y detenciones ilegales o en lugar desconocido, y de que se investigue cualquier caso de esta índole a fin de llevar ante la justicia a las personas sospechosas de haber cometido tales delitos o participado en ellos, sancionarlas si se las declara culpables, y dar la debida indemnización a las víctimas».

El Comité DH pidió también que «las medidas de detención administrativa y en régimen de incomunicación se apliquen sólo en casos muy limitados y excepcionales, y que se hagan plenamente efectivas las garantías relativas a la prisión preventiva estipuladas en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. Asimismo, deberían adoptarse medidas para mejorar las condiciones de detención y, en especial, para cerciorarse de que se aplican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y que los reglamentos y las directrices pertinentes se den a conocer a los reclusos, quienes deben tener acceso a ellos. Deberán aplicarse lo antes posible las medidas propuestas para reforzar la presunción de inocencia»⁸².

En las observaciones finales de 1999 (cuarto informe periódico) el Comité DH reiteró la preocupación expresada anteriormente porque «la duración máxima de la detención de un sospechoso antes de comparecer ante un juez puede llegar en algunos casos a 96 horas; de que el Fiscal General está facultado para prorrogar este período; y de que las personas detenidas pueden no tener acceso a un abogado durante ese tiempo. Al Comité le preocupa asimismo la duración de la prisión provisional». Por lo que pidió a Marruecos «velar por que sus leyes y procedimientos sean acordes con las garantías estipuladas en el artículo 9» PIDCP⁸³.

82 NACIONES UNIDAS, *Informe del Comité de Derechos Humanos*, Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo periodo de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/50/40), Naciones Unidas, Nueva York, 1996, vol. I, pp. 26 y 28, párrs. 109 y 119.

83 NACIONES UNIDAS, *Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos*. Marruecos, doc. CCPR/C/79/Add.113, 11 de noviembre de 1999, p. 4, párr. 17.

Detención policial y acceso a un abogado

En 2016, el Comité DH siguió mostrando preocupación por la duración excesivamente larga de la detención policial y el hecho de que solamente se autorice el acceso a un abogado en caso de prórroga de la duración de dicha detención, y por un máximo de 30 minutos (arts. 9 y 14 PIDCP).

En consecuencia, recomendó a Marruecos velar por que la reforma legislativa en curso fije el plazo normal de detención policial en 48 horas y garantice a todos los detenidos el acceso inmediato a un abogado desde el comienzo de la detención⁸⁴.

Las detenciones arbitrarias (o privaciones arbitrarias de la libertad) son un fenómeno sumamente preocupante y muy extendido en el mundo. Sin llegar a constituir un caso de desaparición forzada necesariamente, son, sin embargo, una práctica que repercute muy negativamente en uno de los derechos más preciados de toda persona: su libertad y seguridad personales. Y múltiples regímenes recurren a ella como forma de reprimir a la disidencia política, aunque se ha extendido hasta tal punto que se utiliza para fines muy diversos. En el caso del Sahara Occidental el fenómeno se agrava por cuanto los agentes de la ocupación marroquí han recurrido a ella para reprimir no solamente a los partidarios de la independencia sino también a sus familiares o amigos. Además, aunque han disminuido los casos nuevos de desaparición forzada, no sucede así con aquellas desapariciones forzadas que tienen carácter temporal y que tienen su inicio en la detención arbitraria de las víctimas.

En 1990, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suya una propuesta occidental tendente a crear un mecanismo extraconvencional de protección del derecho fundamental a la libertad personal, capaz de recibir denuncias e investigar casos individuales de privación arbitraria de la libertad⁸⁵. Esa iniciativa dio lugar a la creación del Grupo de

84 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párrs. 25-26.

85 En 1991, la extinta Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1991/42, por la que se crea el GTDA, con un mandato de 3 años, al cual asignó la misión de investigar con discreción, objetividad e independencia, «los casos de detención impuesta arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los Estados

Trabajo sobre la detención arbitraria (GTDA), compuesto por cinco personas expertas que, desde entonces, viene ejerciendo su mandato —que el Consejo DH renueva cada tres años— con un alto grado de responsabilidad, imparcialidad y eficacia. La importancia del mecanismo viene dada por su especialidad en el mandato que le ha sido atribuido: es el único órgano del sistema internacional (Naciones Unidas) que se ocupa exclusivamente de la privación arbitraria de la libertad personal. Para tal fin, el GTDA ha identificado en sus métodos de trabajo cinco categorías pertinentes para su mandato⁸⁶.

El mandato del GTDA se ha ido perfilando a lo largo del tiempo a través de sus dictámenes en los casos concretos de detención arbitraria que ha conocido, en sus informes anuales, en sus deliberaciones u observaciones generales, y en sus métodos de trabajo. Así, hoy se consideran dentro

interesados». Posteriormente, la resolución 1997/50 prorrogó el mandato del GTDA por otros 3 años introduciendo nuevos elementos al encomendarle «investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente, siempre que las instancias nacionales no hayan adoptado ninguna decisión definitiva en los mismos de conformidad con la legislación nacional, las normas internacionales pertinentes enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados de que se trate».

86 Se trata de las siguientes: «a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I); b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II); c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III); d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV); e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V)». Los métodos de trabajo pueden consultarse íntegramente en NACIONES UNIDAS, *Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria*, doc. A/HRC/30/69, 4 de agosto de 2015, 8 p.

de su mandato los casos de arresto domiciliario, medidas de reeducación por el trabajo, inmigrantes en centros de retención, internamiento en centros psiquiátricos, etc. La noción de detención debe ser entendida en sentido amplio, comprendiendo en ella los casos de arresto, detención (sea esta administrativa o judicial) y prisión, siempre que la situación personal de privación de libertad sea el fruto de una decisión o práctica estatal.

Hasta la fecha, el GTDA ha examinado tres denuncias de víctimas saharauis de detención arbitraria. Se trata de los casos Dihani c. Marruecos, Andala Cheikh Abilil *et al.* c. Marruecos y Saaba Bent Ahmed *et al.* c. Marruecos.

El primero de ellos derivó de un caso de desaparición forzada temporal, pues la víctima estuvo desaparecida —tres ser detenida por agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio— durante casi seis meses, sin que los familiares tuvieran noticia de su paradero. Acusado de pertenecer a una célula terrorista y planificar atentados, Dihani fue víctima de desaparición forzada y posterior detención arbitraria debido a su condición de saharauí defensor del derecho a la libre determinación de su pueblo. Sufrió además torturas y el GTDA se ocupó del fondo del asunto en su dictamen de 27 de agosto de 2013, en el que consideró probado que la víctima había sido detenida sin haberse exhibido orden de detención y que estuvo recluida en régimen de incomunicación. Además, en su respuesta, Marruecos no refutó las alegaciones de tortura y el GTDA destacó la omisión de su obligación de investigar de manera pronta e imparcial las alegaciones de tortura siempre que hubiere motivos razonables para creer que esos actos se hubieran cometido en territorios bajo su jurisdicción, tal y como le viene exigido por el art. 12 de la Convención contra la Tortura. En efecto, el GTDA expresó su preocupación señalando que «ese silencio resulta especialmente inquietante, dada la precisión y la coherencia de las denuncias formuladas». Concluyó así que «la detención y condena basadas en confesiones hechas bajo la tortura y en las simples acusaciones de un co-detenido, la falta de pruebas materiales o de otro tipo y [...] que no se haya procedido a investigar la veracidad de las confesiones, contravienen lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de [...] y los artículos 9 y 14 del Pacto [...] y se inscriben en la categoría III aplicable al examen de los casos presentados al Grupo [...]»⁸⁷.

En el caso *Andala Cheikh Abilil et al. c. Marruecos*, el GTDA se ocupó de la detención de varios jóvenes saharauis detenidos en 1996, en Boujador y El Hoseima, en el curso de una manifestación en la que repartían octavillas de apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática, cuya bandera enarbolaban. El GTDA consideró, en ausencia de toda respuesta gubernamental a la comunicación que le fuera transmitida, que la detención y posterior condena a penas comprendidas entre 18 meses y 8 años constituía, en realidad, una reacción de las autoridades marroquíes al ejercicio pacífico de la libertades que a toda persona reconocen tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) para expresar libremente sus opiniones y expresiones. Marruecos no justificó las acusaciones de que fueron objeto esos jóvenes y el GTDA señaló que «las condenas impuestas a estas personas se han dictado las más de las veces en juicios sumarios por intervenir en una manifestación cuando no hacían más que ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de opinión y de expresión ya que no se ha comunicado que recurrieran a la violencia». En consecuencia, concluyó afirmando la arbitrariedad de esas detenciones «por contravenir los artículos 9 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que es Parte el Reino de Marruecos y corresponder a la categoría II de los principios aplicables al examen de los casos»⁸⁸.

Un año antes, el 11 de mayo de 1995, un grupo de siete saharauis había sido detenido por organizar en El Aaiún una manifestación de apoyo al Frente Polisario en la que distribuyeron octavillas y se expresaron a favor de la independencia del Sahara Occidental. Fueron juzgados por estos hechos y por atentar contra la seguridad exterior y la unidad territorial del Estado. Tampoco recibió el GTDA en este caso respuesta gubernamental alguna a la comunicación que el Grupo le remitió. En la fecha en la que el GTDA adoptó su dictamen, prácticamente un año más tarde, los detenidos

87 Opinión n.º 19/2013 (*Mohamed Dihani c. Marruecos*), aprobada el 27 de agosto de 2013. Doc. A/HRC/WGAD/2013/19, de 14 de enero de 2014, 6 p.

88 Opinión n.º 39/1996 (*Andala Cheikh Abilil et al. c. Marruecos*), aprobada el 3 de diciembre de 1996. NACIONES UNIDAS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Adición* (Decisiones y opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria), doc. E/CN.4/1998/44/Add.1, de 3 de noviembre de 1997, pp. 7-9.

no habían podido comparecer ante un juez, ni se había formulado cargos contra ellos. El GTDA consideró que la detención de los saharauis contravenía «los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el párrafo 3 del artículo 9 y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que el Reino de Marruecos es Parte, y corresponder a la categoría III de los principios aplicables al examen de los casos». Además, el Grupo trasladó al Relator Especial sobre la tortura y al Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el caso de uno de los detenidos (Malaenin Ould Abdenabi), quien habría fallecido en prisión, mientras estaba detenido, a consecuencia de las torturas padecidas⁸⁹.

En su deliberación n.º 9 relativa a la definición y el alcance de la privación de libertad arbitraria en el derecho internacional consuetudinario, el GTDA puso de manifiesto que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad se encuentra reconocida en todos los principales instrumentos internacionales y regionales de promoción y protección de los derechos humanos y que su incorporación generalizada en los ordenamientos internos representa «una práctica casi universal de los Estados que pone de manifiesto la naturaleza consuetudinaria de la prohibición de la privación arbitraria de la libertad»⁹⁰. El GTDA afirmó además que las resoluciones de las Naciones Unidas —de alcance tanto particular como general— de las que se infiere la *opinio iuris* que ampara su carácter consuetudinario, «demuestran el consenso de que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad tiene carácter vinculante universal en virtud del derecho internacional consuetudinario».

Se refirió además al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por cuanto reconoce como crimen de lesa humanidad la «encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas funda-

89 Opinión n.º 4/1996 (*Saaba Bent Ahmed et al. c. Marruecos*), aprobada el 23 de mayo de 1996. NACIONES UNIDAS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Adición* (Decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria), doc. E/CN.4/1997/4/Add.1, de 29 de octubre de 1996, pp. 49-50.

90 Buena parte del carácter generalizado y universal de la prohibición lo encontramos en la propia Constitución de Marruecos de 2011, cuyo Art. 23, anteriormente transcrito, establece que «La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grand sévérité».

mentales de derecho internacional», cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (*cfr.* el párr. 1, apdo. e del art. 7).

El GTDA también señaló, ahondando en la inderogabilidad de la prohibición, que «la privación arbitraria de la libertad no puede ser nunca una medida necesaria o proporcionada, puesto que las consideraciones que un Estado podría invocar en virtud de una derogación ya han sido tenidas en cuenta en la propia norma de arbitrariedad. Así pues, un Estado no puede nunca alegar que una privación de libertad ilegal, injusta o impredecible es necesaria para la protección de un interés vital o proporcionada a tal fin»⁹¹.

Por consiguiente, no es exagerado afirmar que la población saharauí está expuesta sistemáticamente a la privación arbitraria de la libertad personal en los territorios ocupados. Son numerosos los casos, más allá de los que han sido denunciados ante el GTDA, que lo demuestran. En buena parte de ellos, la arbitrariedad de esas situaciones es posible porque se cuenta con el amparo que brinda un poder judicial que no aplica las garantías básicas que caracterizan su funcionamiento de forma auténticamente independiente y respetuosa del derecho a la justicia. Así ocurre en los casos que afectan al Sahara Occidental.

Las deficiencias en el ámbito de justicia han sido señaladas también por el GTDA. La detención y posterior condena de Mohamed Dihani fue precisamente inscrita por el GTDA en la categoría III de las aplicables al examen de los casos de detención arbitraria, categoría que comprende precisamente los casos de arbitrariedad derivada de la grave inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados.

Para ello, el Grupo tomó en consideración las observaciones finales formuladas por el Comité CT (relativas al cuarto informe periódico de Marruecos) y consideró que, «a tenor de esas observaciones, la detención y condena basadas en confesiones hechas bajo la tortura y en las simples acusaciones de un co-detenido, la falta de pruebas materiales o de otro

91 NACIONES UNIDAS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria*, doc. A/HRC/22/44, de 24 de diciembre de 2012, pp. 17-19, párrs. 42, 45 y 48.

tipo y el hecho de que no se haya procedido a investigar la veracidad de las confesiones, contravienen lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

En consecuencia, el GTDA reclamó a Marruecos la inmediata puesta en libertad de Dihani, además de una investigación independiente e imparcial de los actos de tortura de los que presuntamente fue objeto bajo detención policial, la revisión del enjuiciamiento y la reparación plena del daño sufrido⁹².

En el caso *Saaba Bent Ahmed et al c. Marruecos*, el dictamen del GTDA adscribió igualmente a la categoría III el caso de los cinco jóvenes saharauis detenidos y condenados por ejercer pacíficamente su derecho a expresar libremente su adhesión a la causa saharauí. Para el Grupo, la detención se había producido «en violación de los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal..., del párrafo 3 del artículo 9 y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ...relativos al derecho a un proceso imparcial»⁹³.

Los problemas o deficiencias de la justicia en Marruecos son ciertamente estructurales. Otras opiniones del GTDA, que sin embargo no afectan a personas saharauis, revelan la persistencia de tales deficiencias. En efecto, en otros dictámenes como el n.º 27/2001 (*Mustapha Adib c. Marruecos*) relativos a la detención arbitraria de marroquíes, el Grupo adscribió los casos de privación de libertad, al menos a la categoría III de las que el Grupo aplica a los casos que caen bajo su mandato⁹⁴. Esto es, de un total de diez

92 Opinión n.º 19/2013 (*Mohamed Dihani c. Marruecos*), cit., párrs. 35-36.

93 Opinión n.º 4/1996 (*Saaba Bent Ahmed et al. c. Marruecos*), cit., párr. 7. El GTDA observó que los detenidos no habían sido llevados en corto plazo ante un juez, y que no habían sido juzgados dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Además, señaló que la comunicación venía avalada por muchas organizaciones de derechos humanos que denunciaron que en mayo y junio de 1995 se habían llevado a cabo en El Aaiún varias detenciones similares por iguales motivos y que tales detenciones dieron lugar a procesos sumarios ante tribunales de excepción (como el Tribunal Permanente de las Reales Fuerzas Armadas), de los que resultaron penas de prisión de quince a veinte años. Como antes anotamos, Marruecos no respondió al pedido de observaciones que el GTDA le hizo llegar. *Ibidem*, párr. 6.

94 Cfr. las opiniones número n.º 27/2001 [*Mustapha Adib c. Marruecos*], de 12 de marzo de 2001], 35/2011 [*Mohamed Hassan Echerif el-Kettani c. Marruecos*], de 9 de enero de 2011], 40/2012 [*Mohamed Hajib c. Marruecos*], de 31 de agosto de 2012], 3/2013 [*Abdessamad Bettar c. Marruecos*], de 30 de abril de 2013], 25/2013 [*Ali Aarrass c. Marruecos*], de 28

casos examinados por el GTDA, este consideró que en siete de ellos la detención incurrió en arbitrariedad por vulnerar las garantías inherentes al derecho a un juicio justo. Lo que representa un elevado porcentaje si se tiene en cuenta que una de las denuncias fue archivada (tras la liberación del detenido) y un caso más está aún pendiente de examen.

Amnistía Internacional continúa constatando la persistencia de «la tortura y otros malos tratos bajo custodia a causa de la falta de salvaguardias y rendición de cuentas adecuadas, y de la aceptación por parte de los tribunales de confesiones obtenidas con tortura». Además, informa que «los tribunales ignoraban con frecuencia las quejas de los abogados defensores sobre incumplimiento del procedimiento penal y admitían confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en prisión preventiva. En algunos casos, los tribunales se negaron a permitir a los abogados defensores interrogar a testigos de cargo o presentar a testigos de descargo». La represión a los saharauis tampoco cesa: «activistas políticos, manifestantes, defensores de los derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación saharauis sufrían diversas restricciones que afectaban a su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y corrían riesgo de detención, tortura y otros malos tratos y enjuiciamiento. Las autoridades no permitían las protestas y dispersaban las concentraciones que se celebraban, a menudo usando fuerza excesiva»⁹⁵.

En el plano de los sistemas convencionales de protección de los derechos humanos, debemos remitirnos nuevamente a las observaciones finales que en 2004 adoptó el Comité DH establecido conforme al PIDCP. En ellas reclamó a Marruecos la investigación pronta e independiente de las denuncias de tortura y malos tratos y la imposición de sanciones en los ámbitos disciplinario y penal a los responsables; la modificación de la legislación y la práctica marroquíes para que los detenidos puedan tener acceso a un abogado desde el comienzo de la detención; y la adopción de «las medidas necesarias para garantizar la independencia y la imparcialidad de la magistratura», al objeto de cumplir el Art. 14.1 del PIDCP,

de agosto de 2013] y 54/2013 [(*Mustapha El Hasnaoui c. Marruecos*), de 13 de noviembre de 2013]. Las opiniones y decisiones del GTDA son accesibles en la siguiente dirección: <http://www.unwgadatabase.org>.

95 AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Informe 2014/15. La situación de los derechos humanos en el mundo*, cit., pp. 291, 292 y 294.

que proclama el derecho de toda persona «a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella»⁹⁶.

Por su parte, el Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos y otras ONG señalaron en un reciente informe que las disposiciones del Código procesal penal marroquí que prohíben admitir las confesiones obtenidas bajo tortura, no tienen sino un efecto muy débil sobre jueces y fiscales; y que, aunque ese mismo Código exige la realización de exámenes médicos e investigaciones independientes e inmediatas en caso de alegaciones de torturas, la mayor parte de los jueces y fiscales no respetan estas obligaciones⁹⁷.

También el Comité CT, al ocuparse de los acontecimientos referidos al Sahara Occidental, adoptó en 2011 unas observaciones finales muy críticas para Marruecos. Así, el Comité CT expresó su preocupación a causa de las detenciones arbitrarias y en lugares secretos; las que colocan al detenido en régimen de aislamiento; los casos de torturas y malos tratos; la utilización judicial de confesiones obtenidas mediante la tortura; las desapariciones forzadas; y el uso excesivo de la fuerza.

Además de recordar la naturaleza inderogable de la prohibición de la tortura, el Comité CT indicó a Marruecos que «los procedimientos de instrucción penal y de investigación deben ponerse en práctica respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos, así como los procedimientos judiciales y las salvaguardias fundamentales en vigor en el Estado parte». Marruecos no solo debe «prevenir los actos de tortura y los malos tratos», sino también «anunciar una política que pueda traducirse en resultados mensurables desde el punto de vista de la eliminación de los actos de tortura y de los malos tratos cometidos por agentes del Estado» e «investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz todas las de-

96 NACIONES UNIDAS, *Informe del Comité de Derechos Humanos*, 82.º (18 de octubre a 5 de noviembre de 2004), 83.º (14 de marzo a 1º de abril de 2005) y 84.º (11 a 29 de julio de 2005) períodos de sesiones, *cit.*, pp. 42 y 43 (párrs. 14, 16 y 19 de las observaciones finales del Comité DH adoptadas los días 25 y 26 de octubre de 2004).

97 ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS CENTER Y OTROS, *Observations et Points à Traiter Soumis à l'occasion de l'examen de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Royaume du Maroc*, 18 décembre 2015, p. 12.

nuncias de tortura y de malos tratos infligidos a prisioneros y a detenidos, y en todos los demás casos».

El Comité CT también mostró su alarma porque tribunales militares se encargaran de enjuiciar a civiles que participaron en las protestas pacíficas del campamento de Gdeim Iziken que tuvieron lugar en noviembre de 2010 y reclamó a Marruecos la modificación de su legislación al objeto de que «todos los civiles sean juzgados exclusivamente por jurisdicciones civiles».

Asimismo, como censuraron otros órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos, el Comité CT pidió a Marruecos que «en todos los casos de personas detenidas y encarceladas se sigan los procedimientos judiciales en vigor y... se respeten las salvaguardias fundamentales consagradas por el derecho positivo, como el acceso del detenido a un abogado y a un médico independiente, su derecho a que se informe a los miembros de su familia de su detención y su lugar de encarcelamiento, y su derecho a comparecer ante un juez».

A propósito de las confesiones obtenidas bajo coacción, el Comité CT exigió que «las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de las confesiones del inculpado, en particular en los casos en que este se retracta de sus confesiones durante el juicio, y... que las declaraciones que se hayan hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso del procedimiento». Por lo que invitó a Marruecos a examinar «las condenas penales pronunciadas exclusivamente sobre la base de confesiones, a fin de determinar los casos en que la condena se funda en confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos» y a adoptar, en consecuencia, «todas las medidas correctivas apropiadas»⁹⁸.

Buena prueba de que la reforma de la justicia sigue siendo una asignatura pendiente en Marruecos la encontramos en el informe presentado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos con motivo del examen por el Comité DH del sexto informe periódico del país. El propio Consejo propone medidas dirigidas a prevenir la tortura, reducir

98 Párrs. 12, 13, 15 y 17 de las observaciones finales adoptadas por el Comité CT los días 1 y 2 de noviembre de 2011 y relativas al cuarto informe periódico de Marruecos. NACIONES UNIDAS, Informe del Comité contra la Tortura, 47.º (31 de octubre a 25 de noviembre de 2011) y 48.º período de sesiones (7 de mayo a 1 de junio de 2012), Asamblea General, Documentos Oficiales, Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento n.º 44 (A/67/44), Naciones Unidas, Nueva York, 2012, pp. 71 a 74.

los riesgos de detención arbitraria, reforzar las garantías del derecho a la defensa, la necesidad de garantizar la independencia del Consejo Superior del Poder Judicial, así como propuestas referidas a los derechos y obligaciones de los magistrados y a la realización de su independencia. Además, se felicita el Consejo por la entrada en vigor, en julio de 2015, de la ley 13/108 de justicia militar que, al parecer, habría acogido las recomendaciones del Consejo en cuanto a la necesidad de poner fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares⁹⁹.

Por su parte, el Comité DH constató en 2016, al término del examen del sexto informe periódico de Marruecos sobre la aplicación del PIDCP, la persistencia de denuncias de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios públicos en Marruecos y en el Sahara Occidental, en particular contra personas sospechosas de terrorismo o de amenaza contra la seguridad o la integridad territorial del Estado. En particular, el Comité DH observó que: a) en la práctica, las confesiones obtenidas bajo coacción se utilizan como prueba ante los tribunales en algunas ocasiones, aunque esté prohibido por la ley; b) los jueces y los fiscales no siempre ordenan la realización de exámenes médicos o de investigaciones en casos de denuncias de torturas o de confesiones obtenidas por la fuerza; c) algunas veces las personas que denuncian torturas son objeto de intimidaciones, amenazas y procesos judiciales; y d) el número de procesos incoados y de condenas pronunciadas parece reducido en comparación con el número de denuncias efectuadas y la extensión de la práctica de la tortura y los malos tratos en el pasado (arts. 2, 7 y 14 PIDCP).

Por lo que Marruecos debe: a) tomar medidas enérgicas para erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y para investigar eficazmente, enjuiciar y castigar esos actos; b) llevar a cabo sin demora exámenes médicos respecto de todas las denuncias de torturas y malos tratos; c) velar por que, en la práctica, se apliquen de manera efectiva la prohibición de las confesiones obtenidas por la fuerza y la inadmisibilidad de los elementos probatorios conseguidos bajo tortura;

99 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME, *Contribution du Conseil national des droits de l'Homme du Royaume du Maroc (CNDH) au Comité des droits de l'Homme en vue de l'établissement de la liste des points à traiter (LOIs) par le Maroc préalablement à l'examen de son sixième rapport périodique*, février 2016, pp. 4-5, párrs. 17-20. Accesible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1034&Lang=en.

d) ofrecer recursos útiles y garantizar una reparación a las víctimas; y e) agilizar la aprobación de la ley que establece el mecanismo nacional de prevención de la tortura¹⁰⁰.

Derecho a un juicio imparcial e independencia de la justicia

En 2016 el Comité DH siguió constatando casos que denotan irregularidades en los procedimientos judiciales, como la utilización de confesiones obtenidas bajo coacción, la negativa a oír testimonios o a tener en cuenta elementos probatorios, y los casos de amenaza, intimidación o injerencia en el trabajo de abogados y jueces, así como la imposición de medidas disciplinarias arbitrarias o desproporcionadas.

Por lo que Marruecos debe en todos los casos: a) garantizar y proteger la plena independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que puedan ejercer las funciones judiciales sin presión o injerencia alguna; y b) asegurarse de que todos los procedimientos judiciales se llevan a cabo respetando plenamente las debidas garantías procesales previstas en el artículo 14 del PIDCP¹⁰¹.

Condiciones de reclusión

En 2016 el Comité DH reiteró que las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios de Marruecos y del Sahara Occidental son inadecuadas, debido principalmente al hacinamiento. También le preocupa que casi la mitad de los reclusos se encuentren en prisión preventiva (arts. 9 y 10 PIDCP).

Por tanto, recomendó a Marruecos intensificar los esfuerzos para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, entre otros medios estableciendo una política de utilización de penas sustitutivas de la privación de libertad¹⁰².

100 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit*, párrs. 23-24.

101 *Ibidem id.*, párrs. 33-34.

102 *Ibidem id.*, párrs. 29-30.

Encarcelamiento por incumplimiento de una obligación contractual

También en 2016 el Comité DH puso de relieve que la circular del Ministerio de Justicia y Libertades de 21 de octubre de 2015 prevé la ejecución personal para los deudores que no satisfagan sus deudas contractuales y no hayan presentado un certificado de indigencia o un atestado de exención de impuestos (art. 11 PIDCP).

Por lo que Marruecos debe revisar su legislación a fin de que el encarcelamiento no se utilice en ningún caso como medio de garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales¹⁰³.

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

En 2016 el Comité DH conoció la aplicación de restricciones en la práctica a religiones que no son la reconocida oficialmente. También le preocupan las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito las acciones contrarias a la religión musulmana y la incorporación de nuevas infracciones al proyecto de Código Penal que amplían aún más los límites impuestos a la libertad de religión o de creencias (arts. 18 y 19 PIDCP).

Por lo que Marruecos debe derogar toda disposición legislativa o práctica discriminatoria que atente contra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y asegurarse de que el proyecto de Código Penal que se está debatiendo sea plenamente conforme con el artículo 18 del PIDCP¹⁰⁴.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión está seriamente conculcado en todo Marruecos. Así, el nuevo proyecto de Código de Prensa sigue criminalizando «el atentar contra la religión islámica, el régimen monárquico y la integridad territorial».

Ali Anouzla

Las citadas «líneas rojas» fueron denunciadas por el periodista marroquí Ali Anouzla, quien definió al Sahara Occidental como «ocupado por

103 *Ibidem id.*, párrs. 31-32.

104 *Ibidem id.*, párrs. 39-40.

Marruecos» en unas declaraciones al diario alemán *Bild* realizadas en noviembre de 2015. Por ese motivo fue procesado, habiendo solicitado la fiscalía cinco años de prisión y una multa por «menoscabar la integridad territorial nacional».

La ONG Human Rights Watch (HRW) había pedido a las autoridades marroquíes retirar los cargos y al Parlamento marroquí introducir modificaciones en el proyecto de ley de prensa para abolir el «delito contra la integridad territorial». También Reporteros sin Fronteras (RSF) solicitó a la justicia marroquí desestimar el caso contra el periodista.

Anouzla es el responsable del diario digital *Lakome2*, abierto en agosto de 2015. Había sucedido al diario digital *Lakome*, fundado en 2010 y cerrado por las autoridades marroquíes hace dos años, cuando Anouzla se encontraba en prisión. Reporteros sin Fronteras (RSF) difundió un comunicado firmado por 14 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión en el que piden a las autoridades marroquíes la retirada de todos los cargos presentados contra Anouzla y el fin del proceso judicial iniciado en septiembre de 2013 contra él y su publicación digital *Lakome*.

Mouad Belghouate

Conforme a un llamamiento conjunto dirigido a Marruecos por cinco *procedimientos especiales* del Consejo de Derechos Humanos, se trata de un artista bloguero y rapero muy popular, que fue condenado el 4 de julio de 2014 a cuatro meses de prisión por haber ejercido su libertad de expresión artística y estar comprometido con el movimiento marroquí a favor de la democracia, criticando abiertamente la corrupción en el país y denunciando los abusos policiales. Se trata de la tercera condena que sufre desde 2011 en aplicación de procedimientos judiciales que no respetan el derecho a un proceso equitativo. Tales condenas están vinculadas al ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluida la expresión artística, y de su derecho a participar en la vida cultural, así como con su trabajo pacífico a favor de los derechos humanos en Marruecos¹⁰⁵.

105 Llamamiento conjunto de 3 de marzo de 2014. *Cfr. Communications report of Special Procedures*, doc. A/HRC/28/85, de 19 de febrero de 2015, p. 38.

Mahmoud El Haissan

Según un llamamiento conjunto dirigido a Marruecos por seis *procedimientos especiales* del Consejo de Derechos Humanos, se trata de un periodista de la cadena de televisión local saharauí RASD TV, que fue detenido el 4 de julio de 2014 sin mandato judicial e interrogado por agentes de la policía y de los servicios secretos de información marroquíes, que le exigieron que renunciara a sus actividades como periodista. En el curso del interrogatorio fue golpeado, humillado y obligado a firmar una confesión escrita bajo amenazas. Desde el 5 de julio de 2014 está en detención provisional, sin que se le hayan respetado las garantías judiciales y sin que se haya dado curso a sus quejas por tortura. Se cree que su detención se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión¹⁰⁶.

En 2016 el Comité DH celebró la aprobación de un nuevo Código de la Prensa en el que no figuran penas privativas de libertad por delitos de prensa. Le preocupa, no obstante, la introducción paralela de nuevas disposiciones en el Código Penal que prevén penas de encarcelamiento por actos percibidos como ofensas contra el islam o la monarquía o como actos que ponen en tela de juicio la integridad territorial. También le preocupan las informaciones de que periodistas y defensores de los derechos humanos han sido enjuiciados, o fueron amenazados de enjuiciamiento, sobre la base de estos cargos (arts. 9, 14 y 19 PIDCP).

Por lo tanto, Marruecos debe revisar todas las disposiciones pertinentes del Código Penal para ponerlas en conformidad con el artículo 19 del PIDCP, y velar por que las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de asociación sean acordes con las prescripciones estrictas del párrafo 3 del artículo 19¹⁰⁷.

Derecho a la libertad de reunión pacífica

El Comité DH observó en 2016 que, según la legislación marroquí, las reuniones en los lugares públicos deben notificarse anticipadamente, y la

106 Llamamiento conjunto de 30 de julio de 2014. Cfr. *Communications report of Special Procedures*, doc. A/HRC/28/85, de 19 de febrero de 2015, cit., p. 47.

107 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, cit., párrs. 43-44.

autorización tropieza a veces con obstáculos injustificados. También le preocupa el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para dispersar reuniones pacíficas no autorizadas, pese a la distribución, en octubre de 2015, de una circular del Ministerio de Justicia y Libertades en la que se precisaba que la intervención policial solo está justificada en los casos de concentración de gente armada y/o susceptible de perturbar el orden público (arts. 7, 9, 19 y 21 PIDCP).

En consecuencia, Marruecos debe garantizar que la ley relativa a las manifestaciones pacíficas se aplique de conformidad con lo dispuesto en el PIDCP, y que el ejercicio de este derecho no sea objeto de restricciones distintas de las autorizadas por el PIDCP. En este contexto, el Estado debe tomar en consideración las propuestas formuladas en noviembre de 2015 por el Consejo Nacional de Derechos Humanos respecto de las reuniones públicas¹⁰⁸.

Libertad de asociación y actividades de los defensores de los derechos humanos

En 2016 el Comité DH constató que en la práctica se deniega el derecho de registro a numerosas asociaciones. También seguía preocupado por las denuncias de restricciones desproporcionadas e injustificadas a las actividades de los defensores de los derechos humanos y por los obstáculos a la libertad de circulación de estos, en particular en el Sahara Occidental (arts. 12, 21 y 22 PIDCP).

En consecuencia, Marruecos debe adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de la libertad de asociación y a las prácticas que limiten este derecho más allá de las restricciones estrictas autorizadas por el párrafo 2 del artículo 22 del PIDCP. También debe asegurarse de que los defensores de los derechos humanos puedan actuar sin ninguna influencia indebida del Estado y sin temor a represalias o a restricciones injustificadas de sus actividades¹⁰⁹.

Solicitantes de asilo y refugiados

En 2016 el Comité DH lamentó que la operación de regularización

108 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.*, párrs. 45-46

109 *Ibidem*, párrs. 41-42.

efectuada en 2014 no haya permitido regularizar a numerosos refugiados, en particular sirios. También observó la persistencia de casos de detenciones arbitrarias de migrantes y las denuncias de utilización excesiva de la fuerza contra ellos y de participación de las fuerzas de seguridad marroquíes en operaciones de expulsión colectiva, en particular en las cercanías de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Además, constató la detención y el trato de niños migrantes y los obstáculos legales a la inscripción de los nacimientos, al reconocimiento de los matrimonios de los solicitantes de asilo y los refugiados y a la transmisión de la nacionalidad, que pueden tener como consecuencia la apatridia de los niños nacidos en el territorio marroquí (arts. 6, 7, 12, 23 y 24 PIDCP).

En consecuencia, recomendó a Marruecos: a) acelerar el proceso de revisión del marco jurídico que regula la migración y el asilo, para ponerlo en conformidad con las disposiciones del Pacto, incluida la aprobación del proyecto de ley núm. 26-14; b) continuar e intensificar los esfuerzos para regularizar la situación de las personas que necesitan una protección internacional, en particular los refugiados sirios, reconociéndoles un estatuto legal y facilitándoles tarjetas nacionales de refugiado, para garantizar su derecho a la no discriminación, incluido el acceso al mercado de trabajo formal; c) establecer procedimientos para determinar la condición de refugiado en los puntos de entrada en el país, incluidos los aeropuertos; d) poner fin a las detenciones colectivas y dejar de participar en operaciones de expulsión colectiva de migrantes, en particular las efectuadas en las cercanías de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla; e) evitar el recurso excesivo a la fuerza por parte de los agentes del orden y poner fin a esta práctica, reforzando en particular las actividades de formación a este respecto y los mecanismos de control y rendición de cuentas; y f) eliminar los obstáculos jurídicos a la inscripción de los nacimientos y al reconocimiento de los matrimonios entre refugiados y solicitantes de asilo, revisar el Código de Nacionalidad de 2007 para garantizar la transmisión de la nacionalidad a todos los niños nacidos en Marruecos, considerar la posibilidad de ratificar las Convenciones de 1954 y 1961 relativas a la apatridia y adoptar un marco jurídico para prevenir los casos de apatridia¹¹⁰.

110 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit.* párrs. 35-36.

Derecho a la vida privada e intervención de las comunicaciones privadas

En 2016 el Comité DH señaló ataques ilegales al derecho a la vida privada en las actividades de vigilancia de las fuerzas del orden y los servicios de información, especialmente contra periodistas, defensores de los derechos humanos y personas que el Gobierno considera opositores, en particular en el Sahara Occidental. Además, le preocupa la falta de claridad de las disposiciones legales vigentes que autorizan y regulan las actividades de vigilancia y la falta de control de estas actividades por una autoridad independiente (art. 17 PIDCP).

Por tanto, Marruecos debe adoptar todas las medidas necesarias para que sus actividades de vigilancia sean conformes con las obligaciones dimanantes del PIDCP, en particular del artículo 17, y para garantizar que toda injerencia en la vida privada se ajuste a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Asimismo, Marruecos debe establecer mecanismos de control independientes para prevenir los abusos¹¹¹.

4. El relator especial del Consejo de Derechos Humanos

Como hemos señalado en otro lugar¹¹², lo que hoy se conoce como sistema de *procedimientos especiales* del Consejo DH tuvo su origen en la resolución 1235 del ECOSOC de 1967, por la que este autorizó a la entonces Comisión DH a recibir quejas individuales que configurasen una *situación* que revelara la existencia de un cuadro persistente de violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos en un país o área regional concreta, donde persistieran políticas oficiales de dominación colonial, discriminación racial, segregación o *apartheid*.

En el marco de estas *situaciones*, la Comisión DH pudo recibir quejas individuales sin necesidad del agotamiento de los recursos internos, así como establecer órganos especiales de investigación de una *situación* sin el consentimiento del Estado interesado; su mandato fue rendir informes públicos a la Comisión DH.

111 Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, de 1 de diciembre de 2016, *cit*, párrs. 37-38.

112 Vid. VILLÁN DURÁN (C.) & FALEH PÉREZ (C.), *El sistema universal de protección de los derechos humanos. Su aplicación en España*. Madrid, Tecnos, 2017, 312 p., at 184-195.

Para ello, el consentimiento del Estado interesado no era tan decisivo como ocurría bajo el régimen convencional (tratados) de protección de derechos humanos, pues el establecimiento de un procedimiento especial se realiza mediante resolución aprobada por la antigua Comisión DH y desde 2006 por el Consejo DH, por mayoría simple de los Estados miembros. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de las comunicaciones individuales, se suavizan progresivamente, abandonándose la regla del agotamiento de los recursos internos. Por último, el derecho sustantivo aplicable son los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, subsidiariamente, en las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos en los que sea Parte el Estado interesado.

Con estas características nace el *Procedimiento 1235* de la Comisión DH, que se consolida en 1975 a raíz del cruento golpe de estado del general Pinochet en Chile, cuando la Comisión DH amplió su competencia al crear el Grupo de Trabajo *ad hoc* para investigar la situación de los derechos humanos en Chile —todos los reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos—. Desde entonces han sido numerosos los órganos especiales de investigación geográficos establecidos para estudiar situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos en determinados países, con independencia de que se trate o no de situaciones de dominación colonial o de discriminación racial.

A partir de 2007 el Consejo DH autorizó a todos sus *procedimientos especiales* a transmitir cartas de denuncias a los Estados, formular llamamientos urgentes a los Estados y realizar visitas *in loco*.

Los procedimientos geográficos del Consejo DH hoy son 14 y suelen ser unipersonales (expertos independientes o relatores especiales). Son establecidos generalmente por un año para estudiar la situación de los derechos humanos en un país o área regional concreta. Cada mandato es susceptible de renovación de año en año, a través de resoluciones específicas del Consejo DH.

Desde el punto de vista procesal, el sistema de *procedimientos especiales* ha permitido superar la rigidez de los procedimientos cuasi-judiciales establecidos en el ámbito convencional para recibir quejas individuales, que requieren del consentimiento del Estado para que tales procedimientos le sean oponibles, así como el previo agotamiento de los recursos internos para presentar la queja ante el órgano convencional competente.

Del mismo modo, al tratarse de órganos de investigación basados en la resolución 1235 del ECOSOC, son de carácter público en su constitución, en la rendición del respectivo informe ante el Consejo DH y la AG, en el debate del mismo y en la adopción de decisiones por parte del órgano político. Esta transparencia en sus métodos de trabajo hace posible la activa participación de las OSC/ONG y de las instituciones nacionales de derechos humanos en todas las fases del procedimiento.

Tanto la naturaleza como el mandato de los órganos especiales de investigación se han ido perfeccionando con el tiempo, de modo que al objetivo inicial de promoción general de los derechos humanos ante situaciones de quiebra generalizada de la legalidad constitucional y del estado de derecho, se ha añadido el de la protección de los derechos de la víctima individualizada objeto de la denuncia que se haya recibido.

Los informes que los distintos relatores o expertos presentan regularmente al Consejo DH y a la AG, son posteriormente tenidos en cuenta por la comunidad internacional como fuentes confiables de información. Así lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su dictamen de 9 de julio de 2004 sobre *la ilegalidad del muro construido por Israel en los territorios palestinos ocupados*, al basar una buena parte de su argumentación en los informes respectivos del Relator Especial y del Comité Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, así como en el informe de visita *in loco* del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. En efecto, tales informes permitieron a la CIJ concluir que la construcción del muro restringía ilegalmente la libertad de circulación de los habitantes de esos territorios, lo mismo que el ejercicio de los derechos al trabajo, la salud, la educación y a un nivel de vida suficiente, de esas personas.

En 2007 el Consejo DH aprobó un *código de conducta* para los titulares de mandatos de los *procedimientos especiales*¹¹³, en el que se reconoce que los titulares de mandatos son «expertos independientes de las Naciones Unidas» que ejercen sus funciones internacionales a título personal; disfrutan de las prerrogativas e inmunidades de la organización, pero «respetando plenamente la legislación» nacional del país en que cumplan su misión (art. 4)¹¹⁴.

113 Resolución 5/2 del Consejo DH, aprobada el 18 de junio de 2007.

114 Sobre la independencia de los titulares de mandatos, *vid.* RODLEY, N. S.: «On the responsibility of special rapporteurs», *The International Journal of Human Rights*, vol. 15, n.º 2, February 2011, pp. 319-337.

Además, los titulares de mandatos deberán evaluar las alegaciones que reciban con base en «las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas que guarden relación con su mandato y las convenciones internacionales en que sea parte el Estado de que se trate» (art. 6.c).

Todos los titulares de mandatos deberán actuar de manera imparcial y «sin ningún tipo de influencia»; centrarse en la realización de su mandato «con la veracidad, la lealtad y la independencia» exigidas; demostrar el más alto grado de «eficiencia, competencia e integridad»; no solicitar ni aceptar «instrucciones de ningún gobierno, particular u organización; abstenerse de utilizar sus cargos «para obtener beneficios personales» y no aceptar «honores, condecoraciones, favores, obsequios o remuneración» de cualquier fuente (art. 3).

En cuanto a las fuentes de información, los titulares de mandatos deberán preservar su confidencialidad si se pudiera derivar «perjuicio a las personas interesadas» y apoyarse en «hechos objetivos y fiables, basándose en normas de prueba que se ajusten al carácter no judicial» de sus informes. Por su parte, el Estado interesado tendrá la oportunidad de pronunciarse «sobre las evaluaciones hechas por los titulares de mandatos y de responder a las denuncias formuladas» contra ese Estado (art. 8). Para ello, el titular del mandato deberá proporcionar al Estado su informe antes de hacerlo público como documento oficial del Consejo DH (art. 13.c).

En 2011 el Consejo DH enfatizó que «la integridad y la independencia de los *procedimientos especiales* y los principios de cooperación, transparencia y responsabilidad son esenciales para asegurar un sistema sólido de procedimientos especiales que dé al Consejo DH mayor capacidad para afrontar la situación de los derechos humanos sobre el terreno»¹¹⁵. Pero también recordó que los procedimientos especiales «seguirán promoviendo el diálogo constructivo con los Estados», formulando recomendaciones orientadas a las necesidades de «asistencia técnica y fomento de la capacidad de los Estados en los informes temáticos y sobre misiones a los países que realicen»¹¹⁶. En cuanto a las INDH, se les concede el derecho a intervenir

115 Resolución 16/21 del Consejo DH, de 25 de marzo de 2011, anexo, párr. 24 (examen de la labor y del funcionamiento del Consejo). Fue aprobada por la AG en su resolución 65/281 sobre el resultado del examen.

116 *Ibidem*, párr. 25.

«inmediatamente después del país examinado en el diálogo interactivo que se celebre tras la presentación de los informes de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales sobre las misiones a los países»¹¹⁷.

El citado código de conducta reguló, entre otras cosas, los procedimientos de *denuncias individuales* —que, según se reitera, no requerirán el agotamiento previo de los recursos internos— (art. 9)¹¹⁸ y de *llamamientos urgentes* «en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas...» (art. 10). Ambos procedimientos se generalizaron a partir de entonces a todo el sistema de *procedimientos especiales*, tanto geográficos (14) como temáticos (46).

El mismo código de conducta reguló también las *visitas in loco* de los PE, cuya realización se supedita a obtener el consentimiento expreso del Estado interesado —aunque este hubiera suscrito una invitación permanente al sistema de PE temáticos—. Tales visitas se desarrollan conforme a un programa oficial y las modalidades de la visita que los PE acuerden con el Estado interesado (entrevistas con las autoridades nacionales competentes, libertad de movimiento, acceso a lugares de detención y entrevistas confidenciales con las personas seleccionadas por los expertos, garantía de no represalias, etc.), así como un programa privado que el PE y la secretaría concertarán con las ONG/OSC del país más relevantes, las víctimas de las violaciones, otros representantes de la sociedad civil, etc.) (art. 11)¹¹⁹.

Igualmente, el Consejo DH aprobó en 2007 las nuevas reglas que rigen desde entonces la selección y nombramiento de los titulares de mandatos de PE. En particular, podrán proponer candidatos a titulares de mandatos

117 *Ibidem id.*, párr. 28.

118 *Vid.* los informes conjuntos sobre «comunicaciones» (denuncias) y acciones urgentes enviadas por todos los PE a los Estados y las respuestas recibidas, en un documento que se presenta a cada período de sesiones del Consejo DH. El último publicado es el doc. A/HRC/39/27, de 30 de agosto de 2018, 16 p. Un listado de todos los documentos hasta ahora publicados está disponible en <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx>. Todas las comunicaciones enviadas por los PE y las respuestas de los Estados se encuentran en la Web de PE: <https://spcommreports.ohchr.org>.

119 En 2016 los PE realizaron 96 visitas a 65 Estados y territorios (A/HRC/34/347Add.1, de 31 de enero de 2017, pp. 3, 9-16 y 51). *Vid.* http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/34/Add.1.

de PE los gobiernos, los grupos regionales de Estados, las organizaciones internacionales, la OACNUDH, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros órganos de derechos humanos como las instituciones nacionales que cumplan los Principios de París¹²⁰. También se admiten candidaturas individuales, en cuyo caso los candidatos deberán presentar una solicitud y una breve carta de motivación. Un Grupo consultivo (representantes de cinco Estados) entrevistará a las personas candidatas incluidas en la lista final y formulará una propuesta al presidente, quien deberá justificar su decisión si altera el orden de prioridad que hubiera propuesto el Grupo consultivo¹²¹.

Los candidatos serán seleccionados sobre la base de su experiencia, independencia, imparcialidad, integridad y objetividad. Se debe evitar el nombramiento de personas que tengan cargos directivos en los gobiernos o parlamentos de sus países, e incluso en organizaciones que puedan producir «conflicto de intereses» con las responsabilidades inherentes al mandato.

En el proceso de selección se tendrá en cuenta también el equilibrio de género y la presencia de todos los sistemas jurídicos del mundo. Los titulares de mandatos no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben salario. Únicamente sus gastos de viaje y dietas son pagados por las Naciones Unidas.

En conclusión, la protección ejercida por los mecanismos extra-conventionales ya no es meramente política ni humanitaria, sino que entra de lleno en el terreno de lo jurídico, antesala de la futura exigencia de responsabilidad internacional a los Estados por violación de normas internacionales de derechos humanos. A este respecto, la Comisión DH aprobó en 2005 los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones*¹²². Tales principios han inspirado la progresiva exigencia de responsabilidad internacional que los PE reclaman a los Estados por

120 La prerrogativa de las INDH en esta materia se confirmó en la resolución 16/21 del Consejo DH, de 25 de marzo de 2011, anexo, párr. 22.a).

121 *Ibidem*, párrs. 22. c) y d).

122 Res. 2005/35, anexo, de la Comisión DH. Fue adoptada el 19 de abril de 2005 por 40 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones. Estos principios fueron confirmados por la AG en su res. 60/147, de 21 de marzo de 2006.

violaciones a los derechos humanos en el marco de sus respectivas competencias, en el entendimiento de que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a garantías de no repetición¹²³.

Sin embargo, durante sus primeros diez años de funcionamiento (2006-2016), el Consejo DH se ha manifestado cada vez más hostil al mantenimiento de los *mandatos geográficos*. Ya en 2007 desaparecieron los relativos a Cuba y Belarús sin ninguna explicación¹²⁴ y posteriormente el relativo a la R.D. de Congo. En octubre de 2018 solamente se contaba con catorce *mandatos geográficos*, sometidos a renovación anual eventual por el Consejo DH, a excepción del RE sobre territorios ocupados, cuyo mandato se terminará cuando cese la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. Su denominación varía de relator especial a experto independiente, según el grado de independencia que se desee conceder al experto.

No obstante, ante la parálisis manifiesta del Consejo de Seguridad, el Consejo DH ha dedicado 25 de sus períodos extraordinarios de sesiones a estudiar emergencias producidas en un país o región determinada, donde se habían denunciado violaciones masivas de los derechos humanos en contextos de conflicto armado. En varios casos (Libia, Côte d'Ivoire, Sudán/Darfur, Gaza, R.A. Siria, R.P.D. de Corea, Eritrea, Burundi, Sudán del Sur y Myanmar) el Consejo DH estableció *comisiones independientes de investigación*, compuestas de personas expertas, que informan al Consejo DH sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en esos países o regiones. La relativa a Siria deberá además preservar pruebas de crímenes internacionales contra los derechos humanos, «con miras a posibles enjuiciamientos penales o un proceso judicial en el futuro»¹²⁵.

123 Vid. en este sentido el informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Misión a España (2014). Doc. A/HRC/27/56/Add.1, de 22 de julio de 2014, 22 p. Disponible en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/27/56/Add.1. Vid. también, en materia de seguimiento, el comunicado de prensa de 19 de mayo de 2017 del mismo RE: <http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21641&LangID=S>

124 Resolución 5/1 del Consejo DH, de 18 de junio de 2007, Apéndices I (Mandatos renovados hasta que el Consejo DH pueda examinarlos con arreglo a su programa anual de trabajo) y II (Periodos de servicio de los titulares de mandatos).

125 Resolución S-19/1 del Consejo DH, de 1 de junio de 2012, párr. 8.

En ocasiones las *comisiones independientes de investigación* integraron en sus trabajos a los PE geográficos –relatores especiales– previamente nombrados por el Consejo DH (Eritrea, R.P.D. de Corea, R.A. Siria) y formularon recomendaciones para promover el procesamiento de personas sospechosas de tales violaciones, proponiendo incluso que la cuestión fuera llevada por el Consejo de Seguridad ante la Corte Penal Internacional con esos fines¹²⁶.

En definitiva, la politización que antaño se reprochó a la Comisión de DH y que se esgrimió como argumento decisivo para justificar su disolución en 2006, no ha hecho más que aumentar en el nuevo Consejo DH¹²⁷ —claramente dominado por los embajadores de sus 47 Estados miembros, entre ellos 13 africanos y 13 asiáticos—, lo que ha repercutido negativamente tanto en el desarrollo de los PE *geográficos*, como en la progresiva reducción del tiempo concedido a los representantes de la sociedad civil para participar de manera efectiva en los trabajos del Consejo DH.

Conclusiones

Cuarenta y tres años después de la ocupación militar ininterrumpida por Marruecos del territorio no autónomo del Sahara Occidental, el pue-

126 La res. 25/25 del Consejo DH, de 28 de marzo de 2014, recomendó a la AG que presente el informe de la comisión de investigación sobre la situación de los derechos humanos en R.P.D. de Corea al Consejo de Seguridad ante los numerosos crímenes de lesa humanidad denunciados, de los que deben responder los máximos responsables ante el «mecanismo internacional de justicia penal competente» (párr. 7). De modo similar, la res. 32/24 del Consejo DH, de 1 de julio de 2016, pidió a la AG que presente el informe de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea al Consejo de Seguridad para que los responsables de violaciones de los derechos humanos, incluidas las que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, rindan cuentas de sus acciones (párr. 17); también alentó a la Unión Africana a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos identificados por la comisión de investigación, incluidos los que puedan constituir crímenes de lesa humanidad (párr. 18).

127 Así lo confirmó el alto comisionado en su discurso de apertura del 36º periodo de sesiones del Consejo DH, de 11 de septiembre de 2017, en el que singularizó a 40 países que habitualmente rechazan cooperar con el alto comisionado o los *procedimientos especiales* del Consejo DH, alegando injerencia en sus asuntos internos. Doce de esos países eran miembros del Consejo DH. Ver <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22041&LangID=E>.

blo saharauí es víctima de una situación anacrónica que constituye la última situación colonial que persiste en el continente africano.

La clave de esa situación anacrónica se sitúa en la parálisis del Consejo de Seguridad. Su composición antidemocrática y el derecho de veto que en él se reservan las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ha constituido un terreno abonado en el que Marruecos ha encontrado las complicidades necesarias para llevar adelante su política de integración *de facto* del Sahara Occidental como una provincia más de su territorio nacional. En sus propósitos, Marruecos ha contado con el silencio cómplice de distintos gobiernos e instituciones, que han preferido orillar el Derecho internacional, mirar para otro lado, permitir y ser conniventes con hechos que contradicen las normas jurídicas internacionales.

Esa política de hechos consumados se realiza en flagrante violación de normas imperativas del Derecho internacional que protegen el derecho de los pueblos a su libre determinación, llenándolo de contenido y desarrollo.

Así lo han reconocido numerosas resoluciones de la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y del propio Consejo de Seguridad, según las cuales el pueblo saharauí tiene el derecho a determinar libremente su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural, mediante la celebración de un referéndum de libre determinación bajo la supervisión de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia rechazó las pretensiones anexionistas de Marruecos en su dictamen de 1975.

Hemos comprobado también que el TGUE y la Gran Sala del TJ de la UE han sido particularmente rigurosos en sus sentencias de 2015 y 2018, al poner freno *en Derecho* a la pretensión de Marruecos de encontrar cobijo jurídico para su ocupación y anexión *de facto*. Falta la voluntad política, pues el Derecho internacional no admite más excusas ni astucias para evitar su cumplimiento.

El Consejo de Seguridad debe adoptar las medidas coercitivas que sean necesarias para obligar a Marruecos a respetar el derecho del pueblo saharauí a su libre determinación sin más dilación. Los planes de arreglo político que se han sucedido desde 1991, propuestos por el secretario general de las Naciones Unidas y sus enviados personales, han fracasado ante la obstinación de Marruecos en su política de integración *de facto* del Sahara Occidental en su territorio nacional, rechazando de plano reconocer el derecho del pueblo saharauí a su libre determinación. La persistencia

de este *statu quo* solamente beneficia la política de hechos consumados de Marruecos. En cambio, perjudica seriamente la autoridad de la ONU, viola con impunidad normas imperativas del Derecho internacional y, sobre todo, prolonga el sufrimiento del pueblo saharauí, injustamente sometido a dominación colonial y ocupación militar extranjera, al expolio de sus recursos y riquezas naturales, y a violaciones sistemáticas y reiteradas de sus derechos humanos.

El secretario general ha reconocido en 2018 la necesidad de mantener una vigilancia independiente, imparcial, amplia y sostenida de la situación de los derechos humanos a fin de garantizar la protección de todos los habitantes del Sahara Occidental¹²⁸. En cambio, el Consejo de Seguridad en su resolución 2440 (2018) se abstuvo de conferir tales competencias a la MINURSO, limitándose a acoger la interacción que mantiene Marruecos con los procedimientos especiales temáticos del Consejo de Derechos Humanos.

Sin embargo, la continuada violación del derecho a la libre determinación durante cuarenta y tres años de ocupación militar marroquí, acarrea trágicas consecuencias en el disfrute de los derechos humanos internacionalmente reconocidos al pueblo saharauí. Como se pone de relieve en este trabajo, Marruecos es responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Sahara Occidental ocupado. Tales violaciones son flagrantes, graves, masivas y sistemáticas. Abarcan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho de libre determinación y el derecho al desarrollo del pueblo saharauí. La responsabilidad primordial por tales violaciones incumbe tanto a Marruecos (responsabilidad internacional del Estado) como a las autoridades y agentes de ocupación marroquí (responsabilidad internacional individual).

Pero otros actores incurren también en responsabilidad por acción u omisión. Una responsabilidad jurídico-política incumbe al Consejo de Seguridad, en particular a los miembros permanentes, pues como órgano principal de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y debe adoptar resolucio-

128 NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD, *La situación relativa al Sahara Occidental. Informe del Secretario General*, doc. S/2018/889, cit. *supra*, p. 17, párr. 89.

nes de obligado cumplimiento que contribuyan al respeto efectivo del derecho del pueblo saharauí a su libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de los saharauis.

Tienen también responsabilidad política y, en algunos casos, incluso jurídica, los Estados que contribuyen a sostener, de una u otra forma, las pretensiones de Marruecos. Hay que admitir que Marruecos incurre en lo que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) calificó, al concluir sus trabajos sobre responsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, como «violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional general».

Ante una violación de tales características, a la que el jurista italiano Roberto Ago y la CDI se refirieron en otro tiempo como «crimen internacional»¹²⁹, son dos, al menos, las consecuencias particulares según consideró la CDI al aprobar en 2001 el proyecto final de artículos en materia de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos: a) los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave de esas obligaciones; y b) ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una de esas obligaciones, ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación¹²⁹.

129 En su quinto informe sobre la responsabilidad de los Estados, siendo Relator especial de la CDI, Roberto Ago señaló que «sería útil, en el presente proyecto, aclarar que —independientemente del caso indiscutible de la obligación de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza en las relaciones internacionales— el incumplimiento de una obligación internacional relativa a una esfera determinada no puede considerarse un crimen internacional sino cuando la norma de que se derive la obligación en cuestión sea una norma de derecho internacional general aceptada y reconocida como esencial por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto (...)».

El quinto informe sobre la responsabilidad de los Estados, presentado por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial figura en NACIONES UNIDAS, *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1976, volumen I (Primera parte), doc. A/CN.4/SER.A/1976/Add.1 (Part 1), pp. 57-58 (párr. 151).

Así, en el proyectado artículo 18.3, se definía el crimen internacional como el «incumplimiento grave por un Estado de una obligación internacional establecida por una norma del derecho internacional general aceptada y reconocida como esencial por la comunidad internacional en su totalidad». Sin embargo, en el Informe de la CDI a la Asamblea General presentado en 1976, el art. 19 establecía que «el hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la

Hay que llamar la atención también sobre los actores económicos que desarrollan actividades empresariales beneficiándose de la explotación indebida o el expolio de las riquezas y los recursos naturales del territorio saharauí. Aunque, incluso en estos casos, realmente la responsabilidad recae sobre los Estados, que tienen obligaciones de alcance «extraterritorial». En este sentido, sin ánimo exhaustivo, debemos referirnos nuevamente al Comité DESC que en una observación general reiteró que los Estados partes en el PIDESC «deben adoptar las medidas necesarias para prevenir las vulneraciones de los derechos humanos en el extranjero [cometidas] por empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción (ya se hubieran constituido con arreglo a su legislación o tuvieran su sede social, administración central o domicilio comercial principal en el territorio nacional)»¹³⁰.

Más allá de lo anterior, queda la responsabilidad no solo jurídica¹³¹, sino además histórica y moral de España, que tampoco es irrelevante.

Finalmente, desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos, incumbe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomar medidas urgentes y eficaces para asegurar la protección

salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un crimen internacional». Y curiosamente el art. 19.3 ilustraba el concepto de crimen internacional que podía resultar, en particular de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, como la que prohíbe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial. NACIONES UNIDAS, *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1976, volumen II (Segunda parte), doc. A/CN.4/SER.A/1976/Add.I (Part 2), p. 73.

129 Arts. 40 y 41 del *Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos*, presentados por la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General y que figuran como anexo en la Res. 56/83 que esta última adoptó el 12 de diciembre de 2001.

130 NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales, doc. E/C.12/GC/24, 10 de agosto de 2017, p. 9, párr. 26.

131 Nos referimos a la que deriva de la Declaración de Principios que firmaron el 14 de noviembre de 1976 España, Marruecos y Mauritania (el conocido como *Acuerdo tripartito*), conforme a la cual España puso «término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora».

de los derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. Dada la inacción del Consejo de Seguridad, el Consejo de DH debe, actuando en el marco de sus competencias:

1.º Afirmar sin ambages el derecho del pueblo saharauí a su libre determinación, poniendo de relieve que la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado está profundamente condicionada por la ocupación militar ilegal de Marruecos. Además, no sólo Marruecos incurre en responsabilidad, sino también aquellos otros que, por acción u omisión, reconocen o contribuyen a las situaciones que resultan de la grave violación de derecho del pueblo saharauí a su libre determinación.

2.º Nombrar un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado, que deberá visitar el Territorio al menos dos veces al año e informar de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo DH, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. En el marco de su mandato, el Relator Especial deberá recibir y responder a las quejas individuales, transmitir las con urgencia a Marruecos para que proceda a su investigación y el castigo de los que resulten responsables, y recomendar la adopción urgente de medidas preventivas de las violaciones y de protección eficaz a las víctimas. Además, el Relator Especial deberá investigar las violaciones del derecho enunciado en el artículo 1 común a los dos Pactos de 1966 (PIDESC y PIDCP), relativo al derecho de todos los pueblos a su libre determinación.

3.º Mientras la MINURSO no asuma competencias en materia de derechos humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos debe ser instada por el Consejo DH a establecer en el Sahara Occidental ocupado una oficina permanente que, en estrecha cooperación con la MINURSO, se encargue de recoger y transmitir al Relator Especial toda información pertinente a su mandato. Adicionalmente, supervisará la aplicación de las recomendaciones que en su día emanen del Relator Especial.

Este libro se terminó de imprimir
el 27 de febrero de 2019,
cuando se cumplen cuarenta y tres años
del proclamamiento de la República Árabe Saharaui Democrática,
tras la retirada militar española del Sahara Occidental.

PREGUNTA
ediciones

Títulos publicados

Narrativa

Relatos

Chusa Garcés. *Las pérdidas rojas*

Begoña Abad. *Cuentos detrás de la puerta*

Chusa Garcés. *Amor, blanco roto*

Lourdes Aso Torralba. *Letras de tinta*

Baños de Panticosa. Premios Literarios

Victoria Trigo Bello, José Manuel Gómez Vega,
María Pilar Benítez Marco y Ángel María Gil Gallego

Laura Bordonaba Plou. *Sobreexposición*

Fernando Aínsa. *Desde el otro lado. Prosas concisas*

Buscando los orígenes de aquello

Irene Achón, María Jesús Artigas, Alberto Delmalo, Ana García,
Coral González, Anabel Hernández, Aitana Muñoz, María José Pardo,
Eva Pardos, Elisa Pérez, Manuel Pinos y Pilar Royo

Brioleta. Encuentro de escritoras aragonesas

Lourdes Aso Torralba, María Pilar Benítez Marco, Elena Gusano Galindo, Chusa Garcés,
Blanca Langa Hernández, Angélica Morales, Marta Navarro y Almudena Vidorreta

Roberto Malo. *Los señadores*

Ricardo Ramos Rodríguez. *Bilbilitanos en la historia*

Sergio Royo. *El dolor del cristal*

Laura Bordonaba Plou. *Polar*

La prueba final y otras historias cortas

Ganadores del Certamen de Cuentos y Relatos Breves Junto al Fogaril

Sergio Royo. *Viviendo en tiempo brutal*

Franz Kafka. *Contemplación*

José María Tamparillas. *Zaragoza turbia*

Novela

Roberto Malo. *El último concierto de David Salas*

Antonio Ventura. *Crónica de un deseo*

Clara Castán Ibarz. *Verde mar del norte*

Miguel Ángel Ortiz Albero. *Reconstrucción*
Mario de los Santos. *La brújula del universo*
Ricardo Ramos Rodríguez. *El eco entre la bruma*
Ricardo Ramos Rodríguez. *Las sombras del Imperio*
Mariano Pinós. *La movida que te salvó*
Laura Serrano. *Merecer la vida*
Antón Castro. *Cariñena*
Marta Armingol. *Los días blancos*
Fernando Rivarés. *Declive*

Poesía

Manuel M. Forega. *Litiasis*
William Blake. *Todas las religiones son una / No hay religión natural*
Begoña Abad. *Estoy poeta (o diferentes maneras de estar sobre la Tierra)*
AntiaéreA. *Encuentro poético en Zaragoza*
Carmen Camacho, Alicia García Núñez, Marta Navarro, Chus Pato, Inés Povar,
Miriam Reyes, Sandra Santana, Hermanas del Hambre (Elisa Berna y Charo de la Varga)
Elvira Lozano. *Todo estalla dicho*
Ángel Guinda. *La experiencia de la poesía*
AntiaéreA II. *Poesía encontrada en Zaragoza*
Ajo, Eva Antón Bravo, Zhivka Baltadzhieva, Isabel Bono, Javier Corcobado,
Cristina Járboles, Laia López Manrique, David Mayor, Carmen Ruiz Fleta
Begoña Abad. *Diez años de sol y edad (Antología 2006-2016)*
Javier Fajarnés Durán. *Alud*
Pablo Javier Pérez López. *Los países de piedra*
Juan Pablo Roa. *Existe algún lugar en donde nadie*
Raúl Herrero. *Te mataré mientras vivas (Coronación supersónica)*
Javier Fajarnés Durán. *La ciudad y el cuchillo*
Laurent Tailhade. *Vidrieras*
Antonio Orihuela. *El tiempo de las alambradas. Antología poética*
Lyn Coffin. *Esta vida verde. Antología poética*
Amador Palacios. *Las palabras son nocivas. Antología poética*
Ferruccio Brugnaro. *Las locuras ya no son locuras. Antología poética*
Begoña Abad. *El techo de los árboles*
José Verón Gormaz. *Satirólogo. Epigramas del siglo XXI*
Gerardo Vacana. *Caballo de mina*

Libro ilustrado

Antón Castro y Juan Tudela. *El dibujante de relatos*

Helena Santolaya. *La península de Cilemaga*

Sergio Algora y Óscar Sanmartín. *Marcianos*

Ensayo

Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia

Roberto Barral Blanco, Felipe Briones Vives, Ahmed Bujari, Ana Camacho, Carmelo Faleh Pérez, Nuria García Sanz, Javier A. González Vega, Luis Mangrané Cuevas, Manuel Ollé Sesé, Pepe Revert Calabuig, Raúl I. Rodríguez Magdaleno, Sara Ruiz Calvo, Carlos Ruiz Miguel, Leonardo Urrutia Segura, Carlos Villán Durán

Fernando Aínsa. *Residencia y tránsito de las letras en Aragón*

Luis Cantarero. *Diario de campo de un psicólogo en un club de fútbol*

Víctor Casanova Abós. *Marcelino. Muerte y vida de un payaso*

Carlos Garcés Manau. *Aragón en el sistema solar*

Paul Verlaine. *Los poetas malditos*

Amador Palacios. *Poetas y poéticas. Ensayos*

José María Azpíroz Pascual. *Del espejismo de la revolución a la venganza de la victoria. Guerra y posguerra en Barbastro y el Somontano (1936-1945)*

Nerín. *Memorias compartidas*. Varios autores. Edición de Rafael Latre Clemente

Sahara Occidental. Del abandono colonial a la construcción de un estado

Bahia Mahmud Awah, Ana Camacho, Carmelo Faleh Pérez, Javier A. González Vega, Pablo Jiménez, Manuel Ollé Sesé, Pepe Revert Calabuig, Ana Sebastián, Leonardo Urrutia Segura, Carlos Villán Durán

Infantil

La Dama, el Duende y el Rey. Tres leyendas aragonesas

Roberto Malo, José María Tamparillas, Daniel Tejero, David Guirao

En los últimos años, se ha sofisticado el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado del Sahara Occidental: el expolio se ha disfrazado de tratado internacional. La Unión Europea contradice las sentencias de sus más altos tribunales de justicia y, para blindar el despojo, renueva acuerdos declarados ilegales basándose en interpretaciones sofisticadas de juristas al dictado de políticos sin escrúpulos. De nuevo el intento de prescindir del Derecho Internacional que avala las pretensiones del Frente Polisario, único y legítimo representante del pueblo saharauí.

Este nuevo libro pretende servir de refuerzo teórico, académico, legal y periodístico con el que contribuir humildemente a que se resuelva un conflicto que lleva perpetuándose en el tiempo desde hace más de cuarenta años. Para que en lugar de un escenario de refugiados y represión podamos hablar de un territorio que, definitivamente, haya podido pronunciarse libremente sobre su destino y que la última colonia de África pase a ser un espacio político en el que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. En definitiva, un Sahara libre y en paz.

PREGUNTA
ediciones



Observatorio aragonés para el Sahara Occidental
مرصد اراقون من اجل الصحراء الغربية



Zaragoza
AYUNTAMIENTO

